

FAQ BDNS y SNPSAP 190+ Respuestas a Preguntas Frecuentes

abril 2025



Documentos BDNS

Este documento se licencia bajo condiciones Atribución-No Comercial-No Derivadas.



Contenido

INTRODUCCIÓN	9
1. CUESTIONES GENERALES	11
1.1 CONCEPTO DE SNPSAP	11
1.2 NORMATIVA DE LA BDNS [ACTUALIZADA 2025]	11
1.3 PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN [ACTUALIZADA 2025]	12
1.4 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES [ACTUALIZADA 2025]	14
1.5 NO PUBLICIDAD DE PAGOS, REINTEGROS Y DEVOLUCIONES	19
1.6 DOCUMENTACIÓN DE INICIACIÓN A LA BDNS	19
1.7 DERECHO DE RECTIFICACIÓN	20
1.8 POTESTAD CERTIFICANTE [ACTUALIZADA 2025]	20
1.9 INFORMACIÓN EN LENGUAS COOFICIALES	21
1.10 OBTENER AYUDA Y ASISTENCIA A USUARIOS CON DUDAS SOBRE LA BDNS	21
1.11 PREVISIÓN DEL ARTÍCULO 18.3 DE LA LGS	22
1.12 REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN OFRECIDA EN EL PORTAL SNPSAP [ACTUALIZADA 2025]	22
1.13 REGISTRO DE ALERTAS EN EL SNPSAP [NUEVA 2025]	23
2. FISCALIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL EN LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS	25
2.1 SUJECCIÓN DE LAS SUBVENCIONES AL IRPF U OTROS IMPUESTOS [ACTUALIZADA 2025]	25
2.2 RETENCIÓN FISCAL APLICADA A LAS SUBVENCIONES	26
2.3 SUBVENCIÓN Y CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	26
2.4 NO DEVOLUCIÓN DE CUOTA IRPF POR EXISTENCIA DE SUBVENCIONES NO DECLARADAS	27
2.5 SUBVENCIONES PARA PAGAR IMPUESTOS (IBI, IVTM, ETC.)	27
3. OBLIGACIONES DE LOS ORGANOS GESTORES	29
3.1 PLAZOS DE REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LA BDNS [ACTUALIZADA 2025]	29
3.2 OBLIGACIONES DE LOS “ÓRGANOS REMITENTES” [ACTUALIZADA 2025]	29
3.3 OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS	31
3.4 OBLIGACIONES DE LAS FUNDACIONES PÚBLICAS EN LA BDNS	33
3.5 OBLIGACIONES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS CON LA BDNS	33
3.6 OBLIGACIONES CON LA BDNS NO SIENDO CONVOCANTE NI CONCEDENTE	35
3.7 OBLIGACIONES CON LA BDNS NO SIENDO ÓRGANO CONVOCANTE PERO SÍ CONCEDENTE	35
3.8 OBLIGACIONES DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL - PROGRAMA LEADER	36
3.9 OBLIGACIONES DE LAS CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO	36
3.10 PLANES ESTRATÉGICOS DE SUBVENCIONES [ACTUALIZADA 2025]	37
3.11 OBLIGACIÓN DE CONSULTAR LA BDNS [ACTUALIZADA 2025]	39
3.12 CONSULTA DE LOS DATOS PERSONALES DEL BENEFICIARIO POR PARTE DE LOS ÓRGANOS CONCEDENTES	41
3.13 AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS [ACTUALIZADA 2025]	42
3.14 ¿PUEDEN LAS UNIVERSIDADES ACOGERSE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONVOCATORIAS “NO INTERMEDIADO”?	42
3.15 OBLIGACIÓN DE USO DE SERVICIOS WEB (WS) POR LOS DIARIOS OFICIALES	43

3.16 CONCEPTO DE DIR3 [ACTUALIZADA 2025]	43
3.17 RESPONSABILIDAD SOBRE LA CALIDAD DE LOS DATOS DE LA BDNS	44
4. CONSIDERACIÓN DE DETERMINADOS GASTOS COMO SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS	47
4.1 CONCEPTO DE “AYUDA PÚBLICA”	47
4.2 AYUDAS DE PAGO BÁSICO DE LA PAC	48
4.3 AYUDAS SOCIALES A FUNCIONARIOS O EMPLEADOS LABORALES	48
4.4 CUOTAS A ASOCIACIONES	49
4.5 CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS, FONDOS, Y PROGRAMAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL [ACTUALIZADA 2025]	49
4.6 SUBVENCIONES A CONCESIONARIOS Y CONTRATISTAS [ACTUALIZADA 2025]	50
4.7 USO GRATUITO DE PATRIMONIO MUNICIPAL	51
4.8 CESIÓN DE VIVIENDAS DE UN AYUNTAMIENTO EN COMODATO A FAMILIAS SIN RECURSOS	51
4.9 ENTREGAS A CUENTA DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LAS EELL	52
4.10 CONVENIOS ENTRE AYUNTAMIENTO Y FEDERACIÓN DEPORTIVA PARA LA CELEBRACIÓN DE UN EVENTO DEPORTIVO	53
4.11 CONVENIOS ENTRE AYUNTAMIENTO Y UN CLUB DEPORTIVO PARA LA PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO [NUEVA 2025]	54
4.12 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PRESTADOS POR CLUBS DEPORTIVOS [ACTUALIZADA 2025]	55
4.13 PREMIOS	56
4.14 SUBVENCIONES Y AYUDAS EN ESPECIE	58
4.15 AYUDAS COMPLEMENTARIAS A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA DE SALUD	58
4.16 AYUDAS EN APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA	59
4.17 SALARIO SOCIAL, RENTA MÍNIMA, AYUDAS DE EMERGENCIA, ETC.	60
4.18 EXENCIONES Y BONIFICACIONES A FAMILIAS NUMEROSAS	62
4.19 AYUDAS REINTEGRABLES A TUTELADOS DE ENTIDADES PÚBLICAS	63
4.20 PRESTACIONES ECONÓMICAS POR ACOGIMIENTO FAMILIAR	63
4.21 GASTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD COLABORADORA	65
4.22 FONDO NACIONAL DE ASISTENCIAL SOCIAL (LEY 45/1960)	65
4.23 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLÍTICOS	65
4.24 CONCIERTOS EDUCATIVOS – ENSEÑANZA OBLIGATORIA	66
4.25 CONCIERTOS SANITARIOS	67
4.26 SUBVENCIONES PARA LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA	67
4.27 PRESTACIONES FARMACÉUTICAS	68
4.28 BECAS DE UNA UNIVERSIDAD CON FINANCIACIÓN PRIVADA [NUEVA 2025]	69
4.29 BECAS DE UNA FUNDACIÓN PRIVADA ABSORBIDA POR UNA FUNDACIÓN PÚBLICA QUE HACE LOS PAGOS	69
4.30 BECAS DE MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO PARA DEPORTISTAS	70
4.31 BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES DESFAVORECIDOS	70
4.32 BECAS A ESTUDIANTES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL SUPERIOR DUAL EN EL PERIODO DE PRÁCTICAS	71
4.33 FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR Y DOCENTE DE UNIVERSIDADES	72
4.34 AYUDAS DEL PROGRAMA “SEVERO OCHOA” PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR	73
4.35 AYUDAS PARA LA RECUALIFICACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL	74
4.36 BECAS-DESCUENTO EN LA TASA DE MATRÍCULA DE UNA FUNDACIÓN PÚBLICA	74
4.37 CONVENIOS CON PARTICULARES	76
4.38 CONCURSOS DE PROYECTOS O IDEAS	77
4.39 CRÉDITOS CON DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE UNA CONFERENCIA SECTORIAL	77
4.40 ENCOMIENDAS DE GESTIÓN INSTRUMENTADAS A TRAVÉS DE CONVENIOS	78
4.41 INDEMNIZACIONES POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA FAUNA SALVAJE	78
4.42 PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES FINANCIADAS PARCIALMENTE POR EL FSE	80

4.43 AYUDAS PARA EL PAGO DEL IBI, IVTM, TASA DE BASURAS, ETC.....	81
4.44 TRANSFERENCIAS QUE EL AYUNTAMIENTO REALIZA A UNA ENTIDAD LOCAL MENOR	82
4.45 AYUDAS CONCEDIDAS POR EL PROGRAMA ERASMUS+	83
4.46 PROGRAMA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL [NUEVA 2025]	84
4.47 APORTACIONES DINERARIAS ENTRE DISTINTOS AGENTES DE UNA ADMINISTRACIÓN [NUEVA 2025]	85
5. SOBRE LAS CONVOCATORIAS.....	87
5.1 OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD DE LAS CONVOCATORIAS MEDIANTE LA BDNS.....	87
5.2 REQUISITOS FORMALES DE LAS CONVOCATORIAS	88
5.3 INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA EN LA BDNS	88
5.4 CONCEPTO DE “CONVOCATORIA” A EFECTOS DE LA BDNS	88
5.5 DATOS ESTRUCTURADOS DE LA CONVOCATORIA	89
5.6 CONCEPTO DE “REFERENCIA EXTERNA”	89
5.7 CONCEPTO DE “REGIÓN” – TABLAS NUTS	89
5.8 CONCEPTO DE “SECTOR ECONÓMICO” - TABLAS NACE [ACTUALIZADA 2025]	90
5.9 CONCEPTO DE “IMPACTO DE GÉNERO” [ACTUALIZADA 2025]	90
5.10 FUENTES DE FINANCIACIÓN DE CONVOCATORIAS [ACTUALIZADA 2025]	91
5.11 SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA	92
5.12 CONVOCATORIAS PERIÓDICAS DE SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA	93
5.13 LAS BASES REGULADORAS EN LA BDNS	94
5.14 BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA APROBADAS O PUBLICADAS SIMULTÁNEAMENTE EN LA BDNS.....	94
5.15 PLAZOS DE SOLICITUD RELATIVOS EN LA CONVOCATORIA [ACTUALIZADA 2025]	95
5.16 JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES	95
5.17 TEXTO DE LA CONVOCATORIA Y DEL EXTRACTO	96
5.18 FORMATOS DE LOS EXTRACTOS PARA DIARIOS OFICIALES	96
5.19 EXTRACTOS QUE NO LLEGAN A LOS DIARIOS OFICIALES O QUE SE ENVÍAN DOS VECES.....	97
5.20 CONTACTAR CON EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO	97
5.21 DIARIO OFICIAL DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO/EXTRACTO	98
5.22 GRATUIDAD DE LA PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO/EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA EN DIARIO OFICIAL.....	98
5.23 TIEMPOS DE PUBLICACIÓN DE EXTRACTOS DE CONVOCATORIAS EN DIARIOS OFICIALES	99
5.24 TIEMPOS DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN EL PORTAL DEL SNPSAP [ACTUALIZADA 2025]	99
5.25 ERRORES EN CONVOCATORIAS: REGIONES, INSTRUMENTOS, TIPO DE BENEFICIARIO, SECTORES ECONÓMICOS	100
5.26 EDICIÓN POSTERIOR DE LOS DATOS DE LA CONVOCATORIA	100
5.27 MULTILINGÜISMO.....	101
5.28 COGESTIÓN DE CONVOCATORIAS	101
5.29 MÚLTIPLES LÍNEAS DE SUBVENCIÓN EN UNA ÚNICA CONVOCATORIA [ACTUALIZADA 2025]	102
5.30 REVOCACIÓN O ANULACIÓN ADMINISTRATIVA DE UNA CONVOCATORIA	102
5.31 CONVOCATORIAS PLURIANUALES	103
5.32 ÓRGANOS CON RÉGIMENES DE PUBLICIDAD PROPIOS	103
5.33 AYUDAS PÚBLICAS NO SUJETAS A LA LGS (OTROS INSTRUMENTOS DE AYUDA).....	103
5.34 AGRUPACIÓN DE LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS DEL AÑO	104
5.35 DISTINTO NÚMERO DE CONVOCATORIAS EN EL PORTAL DE SNPSAP Y EN LA WEB APP BDNS	105
5.36 CONVOCATORIAS EN CASCADA: EL VOLCÁN DE LA PALMA	105
5.37 DECLARACIÓN DE CRÉDITOS DISPONIBLE Y DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA DE CRÉDITOS [NUEVA 2025]	106

6. SOBRE LAS CONCESIONES, PAGOS, DEVOLUCIONES Y REINTEGROS..... 109

6.1 CONCEPTO DE “CONCESIÓN”	109
6.2 CONCEPTO DE “DEVOLUCIÓN”	109
6.3 CONCEPTO DE “REINTEGRO” [ACTUALIZADA 2025]	109
6.4 CONCEPTO DE “PROYECTO” [ACTUALIZADA 2025]	110
6.5 CONCEPTO DE “PARTICIPANTE” O “PARTÍCIPE” EN UN PROYECTO [ACTUALIZADA 2025]	111
6.6 CONCEPTO DE “COSTE DE LA ACTIVIDAD”	112
6.7 CONCEPTO DE “AYUDA EQUIVALENTE” [ACTUALIZADA 2025]	112
6.8 CONCEPTO DE “CÓDIGO DE CONCESIÓN” [NUEVA 2025]	117
6.9 CONCEPTO DE “DISCRIMINADOR”	118
6.10 REGISTRO DE CONCESIONES PLURIANUALES [ACTUALIZADA 2025]	118
6.11 PAGOS DE GARANTÍAS [ACTUALIZADA 2025]	118
6.12 PRÓRROGAS DE BECAS	119
6.13 PUBLICIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN	119
6.14 UNA CONCESIÓN POR CADA INSTRUMENTO DE AYUDA	120
6.15 CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN POR EJECUCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL.....	120
6.16 MODIFICACIONES QUE INCREMENTAN LA CANTIDAD INICIAL CONCEDIDA.....	120
6.17 PÉRDIDAS DEL DERECHO AL COBRO Y RENUNCIAS [ACTUALIZADA 2025]	121
6.18 CESIONES DE CRÉDITO DE CONCESIONES DE SUBVENCIONES	122
6.19 PAGO DE SUBVENCIONES	123
6.20 PAGOS EN MONEDA EXTRANJERA	124
6.21 IMPORTE DEL REINTEGRO QUE HAY QUE REGISTRAR EN BDNS.....	124
6.22 CAUSAS DE REINTEGRO PREVISTAS EN LA NORMATIVA ESPECÍFICA	124
6.23 PROCEDIMIENTOS DE REINTEGRO TERMINADOS POR LA DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA [NUEVA 2025]	124
6.24 COMPROBACIÓN DE INGRESOS DE REINTEGROS DEBIDOS [ACTUALIZADA 2025]	125
6.25 DISTINTO NÚMERO DE CONCESIONES EN EL PORTAL DE SNPSAP Y EN LA APLICACIÓN BDNS	125

7. SOBRE INFRACCIONES, SANCIONES E INHABILITACIONES 127

7.1 CONCEPTO DE SANCIONES E INHABILITACIONES	127
7.2 OBLIGACIÓN DE REGISTRO DE SANCIONES E INHABILITACIONES	127
7.3 PUBLICIDAD DE INHABILITACIONES Y SANCIONES [ACTUALIZADA 2025]	128

8. SOBRE BENEFICIARIOS Y SUS DATOS PERSONALES 129

8.1 REGISTRO DE DATOS PERSONALES DE BENEFICIARIOS Y OTROS	129
8.2 IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EN LA BDNS	130
8.3 CONCEPTO DE “BENEFICIARIO” [ACTUALIZADA 2025]	135
8.4 SUCESIÓN DE BENEFICIARIOS [ACTUALIZADA 2025]	138
8.5 FALLECIMIENTO DEL BENEFICIARIO [NUEVA 2025]	140
8.6 REGISTRO DE BENEFICIARIOS EXTRANJEROS CON UN ÚNICO APELLIDO QUE ADQUIEREN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA ..	142
8.7 CAMBIO DE NOMBRE O APELLIDOS DE UNA PERSONA FÍSICA ESPAÑOLA QUE YA TIENE REGISTRADAS CONCESIONES	142
8.8. PUBLICIDAD DE DATOS PERSONALES EN AYUDAS AGRÍCOLAS [ACTUALIZADA 2025]	143
8.9 NIF REVOCADO POR LA AEAT.....	144

8.10 PLAZOS DE PAGO EN LAS OPERACIONES COMERCIALES DEL BENEFICIARIO [ACTUALIZADA 2025]	144
8.11 COMPROBACIÓN DEL NIF DE LOS BENEFICIARIOS [NUEVA 2025]	146
9. SOBRE LOS ÓRGANOS Y LOS USUARIOS DE LA BDNS	147
9.1 ¿QUÉ DEBO HACER PARA PEDIR EL ACCESO A LA BDNS?	147
9.2 ¿QUÉ ES UN ADMINISTRADOR INSTITUCIONAL? [ACTUALIZADA 2025]	147
9.3 DERECHOS DE CONSULTA A LA BDNS	147
9.4 LÍMITE DE USUARIOS EN BDNS	147
10. SOBRE LAS AYUDAS DE ESTADO Y DE MINIMIS	149
10.1 CONCEPTO DE “AYUDA DE ESTADO” (ADE) [ACTUALIZADA 2025]	149
10.2 ADE EXENTAS DE NOTIFICACIÓN (AUTORIZACIÓN) PREVIA [ACTUALIZADA 2025]	150
10.3 LAS AYUDAS DE MINIMIS, ¿SON CALIFICADAS COMO “AYUDAS DE ESTADO” EN LA BDNS? [ACTUALIZADA 2025]	151
10.4 NOTIFICACIÓN/AUTORIZACIÓN PREVIA DE UNA MEDIDA DE ADE [ACTUALIZADA 2025]	152
10.5 REGISTRO DE ADE QUE NO SON SUBVENCIONES EN BDNS [ACTUALIZADA 2025]	153
10.6 COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE MÁXIMO DE AYUDAS DE MINIMIS [ACTUALIZADA 2025]	153
10.7 CONCEPTO “ÚNICA EMPRESA” [NUEVA 2025]	156
10.8 NORMAS DE ACUMULACIÓN DE LAS AYUDAS DE MINIMIS [NUEVA 2025]	157
10.9 CERTIFICADO DE MINIMIS [ACTUALIZADA 2024]	159
10.10 AYUDAS A SERVICIOS DE INTERÉS ECONÓMICO GENERAL (SIEG) [ACTUALIZADA 2025]	161
10.11 PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DE ADE A TRAVÉS DE LA BDNS [ACTUALIZADA 2025]	163
10.12 CALIFICACIÓN DE ADE DE UNA CONVOCATORIA DESPUÉS DE REGISTRAR EN ELLA CONCESIONES	165
10.13 AYUDAS DECLARADAS INCOMPATIBLES Y REINTEGROS	165
10.14 LISTA DEGGENDORF	166
10.15 AYUDAS DE LAS “DIRECTRICES SOBRE AYUDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA 2014-2020”	166
10.16 PRINCIPIO DE “CONFIANZA LEGÍTIMA” EN AYUDAS DE ESTADO	166
10.17 AYUDAS QUE RECAEN EN MÁS DE UN BENEFICIARIO	168
10.18 EFECTO INCENTIVADOR DE LAS AYUDAS	168
10.19 OPERADORES ECONÓMICOS DE ÁMBITO Estrictamente LOCAL	169
10.20 CONTRATOS PÚBLICOS COMO AYUDA DE ESTADO	170
10.21 NOVACIÓN DE CONDICIONES EN INSTRUMENTOS DE AYUDA [ACTUALIZADA 2025]	171
10.22 AYUDAS A CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	171
10.23 AYUDAS DE ESTADO Y VIGENCIA DE REGLAMENTOS DE EXENCIÓN DE CATEGORÍA [NUEVA 2025]	172
10.24 RÉGIMEN TRANSITORIO DE LOS REGLAMENTOS DE MINIMIS [NUEVA 2025]	173
10.25 SOBRE EL CÓMPUTO DE LOS TRES AÑOS EN LOS REGLAMENTOS DE MINIMIS [NUEVA 2025]	174
10.28 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA [NUEVA 2025]	177
10.29 TOPES NACIONALES DE AYUDAS DE MINIMIS [NUEVA 2025]	179
11. AYUDAS Y SUBVENCIONES RELACIONADAS CON EL COVID 19	181
11.1 AVALES DE UNA SGR A PYMES FINANCIADOS POR CONVENIO POR LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA	181
11.2 AYUDAS DEL MARCO NACIONAL TEMPORAL	182
11.3 CÁLCULO DEL LÍMITE DE ACUMULACIÓN DE MINIMIS Y AYUDAS DEL MARCO TEMPORAL COVID-19	184
11.4 CADUCIDAD AVALES COVID	185

Introducción

Este es el documento de Respuestas a Preguntas Frecuentes sobre la BDNS y sobre el SNPSAP, elaborado por el Equipo de Administración y Custodia de la BDNS, que ofrece más de 180 respuestas a un conjunto de preguntas que han formulado los usuarios con relativa frecuencia.

Con él se pretende difundir el conocimiento necesario para operar mejor con la base de datos a través de sus diferentes interfaces, y aclarar conceptos relacionados con las subvenciones y ayudas, y su tratamiento en la BDNS.

Sus destinatarios naturales son los usuarios, tanto de negocio como técnico-informáticos, de los distintos órganos de las administraciones públicas que interactúan con la BDNS.

Es un documento de ayuda, que debe servir para “entender” la BDNS y la manera correcta de operar. **No es, en ningún caso, un documento doctrinal** que contenga interpretaciones jurídicas sobre las subvenciones y ayudas públicas. En determinadas respuestas, que pueden tener un componente jurídico variable, se da una respuesta general y abstracta, basándose en la experiencia del Equipo de Administración y Custodia y en la frecuencia de las situaciones observadas en la BDNS. Pero la respuesta no puede usarse en ningún caso como fuente sobre la que construir resoluciones o dictar actos.

Este documento se actualizará periódicamente, incorporando las nuevas preguntas y respuestas que sean de interés colectivo.

En esta edición **de marzo de 2025** se ha efectuado la actualización de los contenidos e incorporado nuevas respuestas a la vista de las consultas planteadas por los usuarios de la BDNS. La vigencia de las respuestas aquí incluidas debe considerarse con todas las cautelas, dado el carácter aluvial de las normativas españolas y europeas, y las constantes modificaciones reactivas a las que están sometidas. Las respuestas actualizadas, así como las nuevas incorporadas, se etiquetan en la tabla de contenidos y en su encabezamiento.

Igual que en ediciones anteriores, el documento permite enlazar directamente con otras fuentes de información vía web, enriqueciendo las búsquedas a través de una navegación hipertexto.

Este documento se licencia bajo condiciones **Atribución-No Comercial-No Derivadas** (CC BY-NC-ND). Esta licencia permite a los reutilizadores copiar y distribuir el material en cualquier medio o formato en forma **no adaptada**, sólo para **finés no comerciales** y siempre que se **cite al creador**). Puede consultar el contenido de esta licencia en <https://creativecommons.org/about/ccllicenses>.

Por último, rogamos a los usuarios y lectores de este FAQ que cualquier errata o problema, tanto con este documento como con la BDNS, sea puestos en conocimiento del Equipo de administración en bdns@igae.hacienda.gob.es.

1. CUESTIONES GENERALES

1.1 Concepto de SNPSAP

¿Qué es el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas? ¿Qué relación tiene con la BDNS? ¿Qué es InfoSubvenciones.es?

El Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas ([SNPSAP](#)) es el sitio web a través del cual se cumple el mandato legal de dar publicidad y transparencia a las convocatorias de subvenciones o ayudas públicas, concesiones de éstas e infracciones y sanciones derivadas de la [LGS](#). El sistema SNPSAP es accesible a través de distintas URLs, siendo la más sencilla www.infosubvenciones.es.

La BDNS es el sistema que está detrás (*backend*) y que se usa en el [SNPSAP](#) para cumplir sus fines. Así, una parte de la BDNS es de libre acceso público (www.infosubvenciones.es), mientras que el resto de elementos de información existentes en la BDNS se mantienen de acceso reservado, sólo accesibles a los órganos gestores de subvenciones, órganos remitentes y órganos de control en los términos previstos en la normativa vigente.

La funcionalidad del [SNPSAP](#) está orientada a satisfacer los fines de publicidad y transparencia de los datos de subvenciones y ayudas públicas impuestos por la [LGS](#) y por los Reglamentos Europeos.

Para entender mejor el portal público se pueden consultar los siguientes videos:

- [Búsqueda de convocatorias de subvenciones y ayudas públicas.](#)
- [Suscripción de alertas de convocatorias.](#)
- [Búsqueda de concesiones de subvenciones y ayudas públicas.](#)

1.2 Normativa de la BDNS [Actualizada 2025]

¿Qué normativa regula la BDNS?

El artículo 20 de la [LGS](#), de carácter básico, establece una base de datos nacional de subvenciones (BDNS) al servicio de todas las Administraciones Públicas y de la sociedad.

[El RD 130/2019 BDNS](#) desarrolla el alcance objetivo y subjetivo del deber de suministro de información a la BDNS, el contenido de la información a suministrar y los procedimientos habilitados al efecto, la tramitación de las convocatorias, la publicidad y cesión de la información, la administración de los datos y las responsabilidades de los que incumplan los deberes que se establecen.

La Intervención General de la Administración del Estado, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 20.10 de la [LGS](#), ha dictado las siguientes instrucciones:

- [Resolución de 15 de junio 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado](#), por la que se regula el proceso de registro y publicación de convocatorias en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas.
- [Resolución de 9 de diciembre de 2015 de la Intervención General de la Administración del Estado](#), por la que se regula el contenido y periodicidad de la información a suministrar a la nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones.
- [Resolución de 7 de diciembre de 2015 de la Intervención General de la Administración del Estado](#), por la que se regula el proceso de registro y acreditación de Órganos y Usuarios de la nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Además, distintos Reglamentos Europeos son de aplicación:

- [Reglamento \(UE\)/1408/2013 minimis AGRIC](#)

- [Reglamento \(EU\) 651/2014 GBER](#)
- [Reglamento \(EU\) 702/2014 ABER](#)
- [Reglamento \(EU\) 717/2014 minimis FISH](#)
- [Reglamento \(EU\) 2022/2472 AYUDAS COMPATIBLES AGRÍCOLA y FORESTAL](#)
- [Reglamento \(EU\) 2022/2473 AYUDAS COMPATIBLES PESCA](#)
- [Reglamento \(UE\) 2023/2831 general de minimis](#)
- [Reglamento \(UE\) 2023/2832 SIEG de minimis](#)

Toda la documentación es accesible en distintos repositorios, como en “Documentación de Ayuda” en la propia BDNS:



1.3 Publicidad de la información [Actualizada 2025]

¿Qué datos son públicos, accesibles para todos los ciudadanos?

El artículo 20 de la [LGS](#) establece los datos de la BDNS que serán publicados:

«Artículo 20. Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

1. La Base de Datos Nacional de Subvenciones tiene por finalidades promover la transparencia, servir como instrumento para la planificación de las políticas públicas, mejorar la gestión y colaborar en la lucha contra el fraude de subvenciones y ayudas públicas.

...

8. En aplicación de los principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la BDNS operará como Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. A tales efectos, y para garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer todas las subvenciones y ayudas públicas convocadas en cada momento y para contribuir a los principios de publicidad y transparencia, la Intervención General de la Administración del Estado publicará en su página web los siguientes contenidos:

a) las convocatorias de subvenciones y ayudas públicas; a tales efectos, en todas las convocatorias sujetas a esta ley, las administraciones concedentes comunicarán a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria y la información requerida por la Base de Datos. En el sector público estatal y local y en aquellas comunidades autónomas que no opten por prescindir de este procedimiento, la BDNS dará traslado al diario oficial correspondiente del extracto de la convocatoria, para su publicación, que tendrá carácter gratuito. La convocatoria de una subvención sin seguir el procedimiento indicado será causa de anulabilidad de la convocatoria.

Cuando una convocatoria contemple la concesión de subvenciones o ayudas públicas con diferentes regímenes jurídicos, se publicarán separadamente en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas tantas convocatorias como regímenes jurídicos se hayan previsto.

b) las subvenciones y demás ayudas públicas concedidas; para su publicación, las administraciones concedentes deberán remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones las subvenciones y demás ayudas públicas concedidas con indicación según cada caso, de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y objetivo o finalidad de la subvención con expresión de los distintos programas o proyectos subvencionados, así como las devoluciones o reintegros exigidos. Igualmente deberá informarse, cuando corresponda, sobre el compromiso asumido por los miembros contemplados en el apartado 2 y en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11. No serán publicadas las subvenciones concedidas cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, a la intimidad personal o familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y haya sido previsto en su normativa reguladora. El tratamiento de los datos de carácter personal se adecuará a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

c) La información que publiquen las entidades sin ánimo de lucro utilizando la BDNS como medio electrónico previsto en el segundo párrafo del artículo 5.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

...»

El citado artículo, que fue modificado por la Ley de Racionalización del Sector Público ([Ley 15/2014](#)), entró en vigor el 01-01-2016 según la disposición transitoria décima de esta Ley. La citada disposición prevé que, para el ámbito de la AGE y sus organismos y entidades vinculantes o dependientes, la BDNS dará publicidad a las subvenciones y ayudas públicas concedidas desde el 2014.

En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en la normativa, en el portal del [SNPSAP](#) se da publicidad a la siguiente información:

- Convocatorias registradas en la BDNS por cualquier órgano de cualquier administración, desde el 01-01-2016.
- Convocatorias registradas en la BDNS por cualquier órgano de cualquier administración con anterioridad al 01-01-2016, en la medida en que tengan registradas concesiones con fecha de concesión desde el 01-01-2016.
- Convocatorias registradas en la BDNS por cualquier órgano de la AGE con anterioridad al 01-01-2016, en la medida en que tengan registradas concesiones con fecha de concesión desde el 01-01-2014.
- Concesiones registradas por cualquier órgano con fecha de concesión desde 01-01-2016.
- Concesiones registradas por los órganos pertenecientes a la AGE con fecha de concesión desde el 01-01-2014.
- Concesiones de ayudas de Estado y de minimis durante 10 años.
- Concesiones a grandes beneficiarios (ayuda equivalente $\geq 100\,000\text{€}$ al año) y a partido políticos, de acuerdo con las condiciones generales.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 7.8 del [RD 130/2019](#), la información sobre concesiones permanecerá visible durante los 4 años siguientes al año en que se concedió, si los beneficiarios son personas jurídicas. En el caso de los beneficiarios sean personas físicas, la publicidad se reduce al año de su concesión y al siguiente.

Este criterio es aplicable a la totalidad de las subvenciones y ayudas públicas registradas, pero en el caso de que sean ayudas de Estado (AdE), o *de minimis*, se aplican los criterios establecidos en los Reglamentos europeos correspondientes (10 años de visibilidad).

¿Cómo puedo descargar los datos del portal público del SNPSAP?

El Sistema Nacional de Publicidad y Transparencia de Subvenciones y Ayudas Públicas (www.infosubvenciones.es) ofrece, desde junio de 2022, una vía de integración automatizada para el acceso y descarga de información relativa a todas las convocatorias de subvenciones y ayudas públicas, y desde noviembre de 2023 se ha extendido a todos los conjuntos de datos que se visualizan en el portal.

Este acceso y posibilidad de descarga de datos, es complementario de las capacidades de descarga en los formatos abiertos CSV, PDF y XLSX que se vienen ofreciendo desde 2014, y está sometido a las mismas condiciones de uso y reutilización de información que pueden (y deben) consultarse en el localizador <https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/avisolegal>.

Esta integración se ofrece mediante una interfaz API REST con descarga de archivos de datos en formato JSON. El acceso a esta API es público e irrestricto, al igual que el acceso manual al sitio web del SNPSAP, y mediante programación sencilla, por ejemplo, en Python JavaScript o lenguaje R, o utilizando accesos directos con herramientas ETL (por ejemplo PowerQuery), se accede fácilmente.

La documentación técnica para el acceso a esta API se encuentra en <https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/doc/swagger>.

1.4 Protección de datos personales [Actualizada 2025]

El contenido de las respuestas de este apartado se refiere exclusivamente a datos de personas físicas.

Desde el 1 de enero de 2016, que comenzó a operar plenamente la BDNS y el portal del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (www.infosubvenciones.es), el marco normativo de la protección de datos personales ha sufrido una importante evolución, principalmente por el impacto de:

- El [Reglamento UE 2016/679](#).
- La [Ley Orgánica 3/2018](#).
- La [L.O. 7/2021](#) y la [Directiva \(UE\) 2016/680](#) son de aplicación a la información sobre inhabilitaciones impuestas en condenas judiciales.

Este marco ha sido proyectado sobre la BDNS mediante el artículo 7 apartado 5 del [RD 130/2019](#).

En cualquier caso, hay que indicar que la publicidad en el [SNPSAP](#) de las subvenciones y ayudas públicas concedidas está totalmente amparada por la ley (art. 8.1.c [Ley 19/2013](#) y art. 20.8 [LGS](#)) y ha sido refrendada en múltiples ocasiones por la Agencia Española de Protección de Datos ([AEPD](#)), especialmente en el caso de subvenciones de concurrencia competitiva (ver [Informe AEPD 0178/2014](#) para el caso de becas; o [Resolución Expediente E/07183/2015](#) sobre subvenciones de concurrencia competitiva). En estos casos, prima el interés general sobre el particular a la hora de decidir sobre la publicación de las subvenciones y ayudas concedidas.

¿En qué supuestos no se deben publicar en el SNPSAP las subvenciones concedidas al beneficiario?

El artículo 20.8.b de la [LGS](#) establece que no serán publicadas las subvenciones concedidas cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, a la intimidad personal o familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la [Ley Orgánica 1/1982](#) y así haya sido previsto en su normativa reguladora.

Por su parte, el artículo 7.5 del [RD 130/2019 BDNS](#) establece que no se publicarán las subvenciones o ayudas públicas concedidas a personas físicas que se encuentren en una situación de protección especial que pueda verse agravada con la cesión o publicación de sus datos personales, o cuando la información contenida en la BDNS atendiendo al propio objeto de la convocatoria proporcione datos personales relativos a las categorías especiales de datos relacionadas en los artículos 9 y 10 del [Reglamento UE 2016/679](#).

Por tanto, no son públicas a través del [SNPSAP](#):

- A. Las subvenciones y ayudas públicas concedidas a personas físicas que se encuentren en una **situación de protección especial** (víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo, ...). No se registran en la BDNS y, por tanto, no se publican en el portal.
- B. Las subvenciones y ayudas públicas concedidas en convocatorias que por sus criterios de elegibilidad de beneficiarios pudieran mostrar información acerca de **categorías especiales de datos personales** (origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física; situación de condenas y medidas de seguridad conexas). No se publican en el portal, pero se deben registrar en la BDNS en cualquier caso.
- C. Las subvenciones y ayudas públicas concedidas cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, a la intimidad personal o familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la [Ley Orgánica 1/1982](#) y haya sido previsto en su normativa reguladora. No se publican en el portal, pero se deben registrar en BDNS en cualquier caso.

Es responsabilidad del órgano convocante identificar las convocatorias en las que concurren esta circunstancia.

Salvo en el supuesto A anterior, **la subvención o ayuda pública concedida debe registrarse igualmente en la BDNS**, marcando la casilla correspondiente en la convocatoria para evitar su publicación en el [SNPSAP](#) (*"Las concesiones de esta convocatoria deben permanecer ocultas en el SNPSAP por la aplicación de la normativa de protección de datos (LO 1/82, RGPD 2016/679 y LO 3/2018)"*).

Las concesiones de esta convocatoria deben permanecer ocultas en el SNPSAP por aplicación de la normativa de protección de datos personales (LO 1/82, RGPD 2016/679 y LO 3/2018)

¿Se deben registrar en la BDNS los datos personales de las personas que se encuentran en situación de protección especial?

No, no se registran en la BDNS los datos personales de las personas que se encuentran en situación de protección especial.

El [RD 130/2019 BDNS](#) prevé que el órgano concedente anonimice la información de las personas en situación de protección especial antes de su registro en BDNS. Mientras la IGAE no establezca las reglas de anonimización ni desarrolle los sistemas informáticos precisos, **no se registrarán en la BDNS los datos personales de quienes se encuentren en una situación de protección especial, ni la información de las subvenciones o ayudas públicas que se les ha concedido** (caso A de la respuesta anterior).

Si se advierte que alguna persona sujeta a protección especial aparece registrada en la BDNS, se deberá informar inmediatamente al órgano concedente para la eliminación de la información, incluyendo los datos personales del beneficiario.

En el futuro se empleará el protocolo previsto en la DA 7ª.2 de la [LOPD](#).

A una persona que tiene protección especial se le ha concedido una subvención para la sustitución de ventanas. ¿Cómo debo actuar para que no se publique la subvención?

Si la convocatoria estuviera dirigida específicamente a personas físicas que se encuentren en una situación de protección especial (víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo), en el momento de registrar la convocatoria habría que indicar que las concesiones no serán publicables, activando la siguiente casilla de verificación *"Las concesiones de esta convocatoria deben permanecer ocultas en el SNPSAP por la aplicación de la normativa de protección de datos (LO 1/82, RGPD 2016/679 y LO 3/2018)"*.

Las concesiones de esta convocatoria deben permanecer ocultas en el SNPSAP por aplicación de la normativa de protección de datos personales (LO 1/82, RGPD 2016/679 y LO 3/2018)

Pero si la convocatoria va dirigida a una pluralidad de potenciales beneficiarios y no a un grupo humano protegido, aun cuando uno de los beneficiarios está en situación de protección especial, **no se deberá activar la casilla de no publicación de las concesiones en el SNPSAP**.

En ambos casos, el órgano concedente se encargará de no registrar la información de las subvenciones concesiones a los beneficiarios en situación de protección especial (caso A de la respuesta anterior).

¿Tengo la obligación de suministrar la información de las subvenciones y ayudas concedidas a personas físicas? ¿Cómo indico que no se publiquen las concesiones?

Sí. Salvo que el beneficiario se encuentre en situación especial (caso A de las respuestas anteriores), las concesiones de subvenciones y ayudas públicas concedidas a personas físicas se deberán registrar en la BDNS.

Si la publicación en el [SNPSAP](#) de los beneficiarios de subvenciones de una convocatoria fuera contraria al derecho a la protección de los datos personales, por revelar información sobre datos especialmente protegidos (salud, origen étnico o racial, opiniones políticas, ...), o atentara contra el derecho al honor e intimidad personal o familiar, **en el registro de la convocatoria se hará constar esta circunstancia marcando la casilla "Las concesiones de esta convocatoria deben permanecer ocultas en el SNPSAP por la aplicación de la normativa de protección de datos (LO 1/82, RGPD 2016/679 y LO 3/2018)":**

Las concesiones de esta convocatoria deben permanecer ocultas en el SNPSAP por aplicación de la normativa de protección de datos personales (LO 1/82, RGPD 2016/679 y LO 3/2018)

Al marcar esta casilla, la información de las subvenciones y ayudas públicas concedidas a una persona física no se visualizará en el [SNPSAP](#).

A modo de ejemplo, esta casilla deberá activarse para las convocatorias dirigidas a personas con limitaciones de movilidad o alguna "diversidad funcional"; o que padezcan alguna enfermedad; o que se otorguen por su orientación sexual; o que ejerzan la prostitución; o que estén cumpliendo condena en algún establecimiento penitenciario.

Las subvenciones o ayudas públicas concedidas en virtud de la convocatoria **se registrarán en la BDNS, pero automáticamente se invisibilizarán en el [SNPSAP](#)**, al haber activado el filtro señalado.

Este mecanismo no afecta a las personas jurídicas. Aun cuando en una convocatoria se marque la opción de no publicar las concesiones, si los beneficiarios son personas jurídicas, las subvenciones o ayudas públicas que se les concedan siempre se **visualizarán en el [SNPSAP](#)**.

La convocatoria aprobada va dirigida a distintos grupos de beneficiarios; uno de ellos requiere la protección de los datos personales. ¿Cómo debo registrar la información en la BDNS?

Ante una convocatoria dirigida a varios grupos de personas físicas entre los que hay alguno caracterizado por requerir información incluida en alguna de las categorías especiales de datos personales (por ejemplo, una convocatoria conjunta para becas al transporte, comida y de educación especial), si el examen de las concesiones de esta convocatoria general no permite identificar a las personas que acceden a la subvención dentro del apartado protegido (en nuestro ejemplo, la lista completa de beneficiarios no permite identificar quiénes han accedido a la subvención por educación especial y quienes a la subvención al transporte y/o comida), la convocatoria se registrará en la BDNS **sin activar** la casilla de verificación "Las concesiones de esta convocatoria deben permanecer ocultas en el SNPSAP por la aplicación de la normativa de protección de datos (LO 1/82, RGPD 2016/679 y LO 3/2018)".

Las concesiones de esta convocatoria deben permanecer ocultas en el SNPSAP por aplicación de la normativa de protección de datos personales (LO 1/82, RGPD 2016/679 y LO 3/2018)

La razón es que en este caso no es posible identificar qué beneficiarios acceden a la subvención por ese atributo especial. Por tanto, todas las concesiones serán "publicables".

Las subvenciones concedidas a atletas paralímpicos ¿se publican en el SNPSAP?

Sí. En este caso hay que valorar que los atletas paralímpicos son públicamente conocidos y muchos de ellos gozan de una amplia cobertura en medios de comunicación deportivos y generalistas. El propio [Reglamento \(UE\) 2016/679](#) en su artículo 9.2.e) permite el tratamiento de los datos personales cuando el interesado los ha hecho manifiestamente públicos. Por tanto, no hay inconveniente en publicar las subvenciones que perciben.

¿El SNPSAP publica el nombre y apellidos del beneficiario y su DNI completo?

No. La DA 7ª.1 de la [LO 3/2018](#) establece que en la notificación de actos administrativos se identificará a los interesados por su nombre y apellidos, y 4 cifras de su DNI.

Aunque el portal del [SNPSAP](#), con carácter general, no “notifica” actos administrativos, en aras a la protección de los datos personales se ha optado por aplicar este precepto a la publicidad de las concesiones de subvenciones y ayudas públicas. Por tanto, el [SNPSAP](#) publica, además del nombre y apellido del beneficiario, su código de identidad aplicando el algoritmo de ocultación parcial de los dígitos establecido en la “[Orientación para la aplicación provisional de la disposición adicional séptima de la LOPDGDD](#)” emitida por la AEPD en marzo de 2019.

También se oculta parcialmente el número de identidad de la persona física en la publicación de las concesiones de Ayudas de Estado y Ayudas de *minimis*.

El proceso de ocultación de dígitos del código de identidad de los beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas es transparente para los órganos gestores que registran en la BDNS.

Los órganos obligados a registrar la información en la BDNS deben seguir informando de todos los datos identificativos del beneficiario que le son requeridos, incluido el documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente completo.

La convocatoria establece que la resolución de concesión de las subvenciones se publicará en el SNPSAP. ¿Debo adoptar alguna medida en materia de protección de datos personales?

Algunos órganos convocantes están indicando en la convocatoria que la publicación de las resoluciones de concesión se hará en la BDNS. Asimismo, otros incluyen en la BDNS las resoluciones de concesión para su visualización en el [SNPSAP](#). Estos documentos deberán seguir lo establecido en la DA 7ª.1 de la [LO 3/2018](#): se identificará a los interesados por su nombre y apellidos, y 4 cifras de su documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.

Para seleccionar los 4 dígitos se seguirán los criterios establecidos por el documento la “[Orientación para la aplicación provisional de la disposición adicional séptima de la LOPDGDD](#)”, emitido por la AEPD en marzo de 2019, que establece el algoritmo de ocultación parcial de los dígitos del número de identificativo de las personas físicas.

¿Qué medidas hay que adoptar para proteger la firma manuscrita que figura en el documento que adjunto a la convocatoria? ¿Y para la firma electrónica?

En el registro de una convocatoria se debe adjuntar el archivo pdf. o docx. que contenga el texto de la convocatoria, así como cualquier otro documento relacionado con la convocatoria (modelos de solicitud, anexos, ...) que se estime necesario publicar en el portal del [SNPSAP](#). Estos documentos pueden estar firmados, con firma manuscrita o electrónica.

Si el documento está rubricado con **firma manuscrita**, como ésta es un dato personal del firmante, deberá ser **ocultada**.

Si el documento está firmado con **firma electrónica** (práctica recomendada) y la imagen de la firma muestra nombre y apellidos y documento nacional de identidad del firmante, deberá ocultarse el DNI.

¿Hay que adoptar alguna medida relacionada con la protección de los datos personales en los documentos de los convenios que se adjuntan a la BDNS?

Sí. En los convenios que instrumentan las subvenciones aparecen el nombre y apellidos, y el DNI de quienes actúan como representantes de las partes firmantes. Se recomienda ocultar el DNI de las personas físicas firmantes.

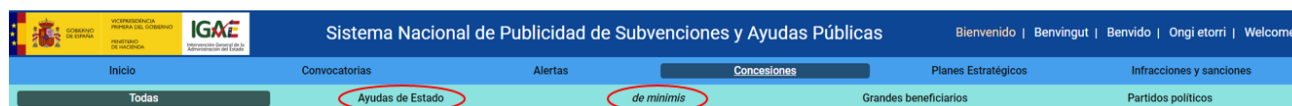
Asimismo, se deben adoptar las medidas oportunas comentadas en la pregunta anterior para ocultar las firmas manuscritas que figuren en el convenio y, en el caso de firmas electrónicas, ocultar el DNI del firmante si se muestra.

¿Cuánto tiempo permanece la publicación de las concesiones de subvenciones a personas físicas en el SNPSAP?

Con el fin de evitar la elaboración de perfiles personales a partir del conocimiento agrupado de las diferentes subvenciones percibidas por un mismo beneficiario, el [RD 130/2019](#) ha acortado el periodo de permanencia de la publicidad de las subvenciones y ayudas públicas concedidas a persona físicas en el [SNPSAP](#). La información sobre estas concesiones permanecerá publicada durante el año de concesión y el año siguiente, siendo retirada automáticamente por la propia BDNS transcurrido dicho plazo.

Por su parte, la publicidad de las subvenciones y ayudas públicas concedidas a personas jurídicas se mantendrá durante los 4 años naturales siguientes al año en que se concedió la subvención.

En el supuesto de que la ayuda concedida tenga la naturaleza de ayuda de Estado o ayuda de *minimis*, la publicidad de la concesión en el [SNPSAP](#) se mantendrá 10 años a partir de la fecha de concesión solo en las pestañas "Ayudas de Estado" y "de *minimis*".



¿Qué medidas de protección de los datos personales adopta la BDNS en la cesión de información?

La información de la BDNS tiene carácter reservado, si bien puede ser cedida para los objetivos contemplados en el artículo 20.5 de la [LGS](#).

Los cesionarios de la información sólo podrán acceder a los datos que deban conocer por razones del servicio, y deberán guardar sigilo riguroso y observar estricto secreto.

En el caso de otros cesionarios que no tengan acceso habilitado a la BDNS y deseen obtener de forma esporádica información contenida en la BDNS, deben solicitar la información al Administrador, que la cederá exclusivamente para los fines previstos en la [LGS](#) aplicando el principio de minimización de datos previsto en el [Reglamento \(UE\) 2016/679](#) (adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados).

Los datos de los beneficiarios y las concesiones ¿aparecen en Google o en otros buscadores de Internet?

No. La forma en la que se presenta los datos sobre concesiones a personas físicas en el portal del [SNPSAP](#) hace que estos no sean indexables por robots y buscadores como Google, Bing, Duck Duck Go, etc., lo que garantiza los derechos de todos: los de privacidad y los de transparencia.

Sin embargo, buscadores como Google están indexando los datos de los documentos que se adjuntan en la BDNS. Por este motivo, se recomienda que se extremen las medidas de protección de los datos personales en los documentos PDF que se suben a la BDNS.

¿A qué finalidad responde el hecho de registrar en la BDNS el domicilio de los beneficiarios?

La [Ley General de Subvenciones](#), en su artículo 20, establece los fines de la Base de Datos Nacional de Subvenciones:

«La Base de Datos Nacional de Subvenciones tiene por finalidades promover la transparencia, servir como instrumento para la planificación de las políticas públicas, mejorar la gestión y colaborar en la lucha contra el fraude de subvenciones y ayudas públicas».

En concreto, el domicilio del beneficiario de la subvención es una información muy útil a efectos de la lucha contra el fraude, tanto para los órganos que conceden subvenciones como para los órganos de control. La información que proporciona el domicilio, en determinadas circunstancias, puede ser una variable a tener en cuenta en un análisis de riesgo en la gestión de las subvenciones.

En cualquier caso, la información relativa al domicilio del beneficiario no es publicada en el portal del [SNPSAP](#). Esta información se custodia en la BDNS y tiene carácter reservado (artículo 20.5 de la [Ley General de Subvenciones](#)). Los usuarios que acceden a esta información en el ejercicio de sus funciones están obligados a guardar secreto. Asimismo, esta información no puede ser cedida o comunicada a terceros salvo en los supuestos expresamente tasados en la [LGS](#).

1.5 No publicidad de pagos, reintegros y devoluciones

¿Por qué hay que registrar pagos, devoluciones, reintegros, etc., si estos datos no se van a publicar en la web www.infosubvenciones.es?

Los datos públicos sirven a los fines de transparencia establecidos por normativa nacional ([Ley 19/2013](#)), europea (Reglamentos [EU 651/2014](#), [EU 2022/2472](#), [EU 2022/2473](#), [EU 1408/2013](#), [2023/2831](#) y [2023/2832](#)), autonómica u otra.

Los datos no públicos, entre ellos pagos, devoluciones, reintegros, etc., sirven a los fines de lucha contra el fraude, planificación de políticas públicas y mejora de la gestión de subvenciones establecidos en el artículo 20 de la [LGS](#).

Para el cumplimiento de estos fines hay que registrar los pagos en la BDNS aunque no son públicos en el portal del [SNPSAP](#).

1.6 Documentación de iniciación a la BDNS

Soy nuevo en la BDNS y veo que hay mucha documentación. ¿En qué orden debo leerla para comprenderla mejor?

Los siguientes documentos, por este orden, dan una buena visión conceptual de la BDNS:

1. Guía básica para entender la BDNS.
2. La concesión en la nueva BDNS.
3. Descripción de los mecanismos de publicidad de las convocatorias de subvenciones y ayudas públicas.

Estos documentos se encuentran en el [repositorio de documentación](#), agrupados en una carpeta llamada "Documentación de iniciación a la BDNS".

Posteriormente, puede profundizar en el contenido de la BDNS leyendo estos otros documentos que se encuentran en el mismo [repositorio de documentación](#):

1. Entidades de información para BDNS.
2. Catálogos de datos para BDNS.
3. Avanzando más, debe leer bien el Real Decreto y las Resoluciones que la regulan:
 - (1) El Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas (en adelante RD 130/2019 (BDNS)).
 - (2) Resolución 15 06 2020 IGAE BDNS registro y publicación de convocatorias.
 - (3) Resolución 7 12 2015 IGAE BDNS proceso de registro y acreditación.

(4) Resolución 9 12 2015 IGAE BDNS contenido y periodicidad

Finalmente, antes de registrar información en la BDNS recomendamos leer los manuales de registro de las distintas entidades de información: convocatoria, datos personales, sanciones, inhabilitaciones, concesiones, pagos y reintegros.

1.7 Derecho de rectificación

Soy un ciudadano y considero que hay errores en los datos publicados sobre mis concesiones en el portal del SNPSAP. ¿A quién debo dirigirme?

Si detecta que sus datos publicados en el [SNPSAP](#) son inexactos, debe ejercer su derecho de rectificación ante el órgano concedente de la subvención o ayuda pública ([artículo 9.3 del RD 130/2019](#)).

Él es el titular de los datos y dispone de la información precisa para pronunciarse sobre la inexactitud o el carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.

1.8 Potestad certificante [Actualizada 2025]

¿Puede la BDNS certificar que un ciudadano ha percibido o no una subvención?

La información de la BDNS tiene las finalidades previstas en el art. 20 de la Ley 38/2003 [LGS](#), entre las que no se incluye la de ser el soporte para certificar la situación de una persona respecto a las posibles subvenciones y ayudas recibidas.

La normativa prevé el registro de la información en la BDNS con unos plazos de registro. Por tanto, en un momento dado puede existir información que aún no se haya incorporado porque no ha vencido el plazo establecido para su remisión.

Además, no todos los órganos obligados están al corriente en el cumplimiento de la obligación de registros de información en la BDNS. Por tanto, en un momento dado puede existir información que debería estar registrada en la BDNS pero que aún no se ha registrado.

La BDNS no garantiza la permanencia en el tiempo de la información contenida en un momento dado. El procedimiento de registro permite la actualización e incluso la eliminación de información ya registrada con posterioridad. **La BDNS NO ES un sistema de información contable.** La información es algo vivo.

Si una persona no aparece registrada en la BDNS, la conclusión que debe obtenerse no es la de que ese beneficiario no ha recibido subvenciones, sino que esa persona no ha sido registrada en la BDNS por ningún órgano obligado.

No obstante, desde el 1 de enero de 2023, la BDNS emite electrónicamente certificados de las subvenciones y ayudas *de minimis* percibidas por los beneficiarios en los últimos tres años que constan en la BDNS, ya que de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1 del [RD 130/2019](#):

<<A efectos de dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad y transparencia en los términos previstos en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas y será el sitio web que, con carácter exhaustivo, publicará las ayudas de estado y ayudas de minimis a nivel nacional en cumplimiento de lo previsto en la normativa europea.>>

El epígrafe 10.4 de este FAQ ofrece más información sobre el procedimiento de solicitud y emisión de ese certificado.

Puede acceder a este servicio electrónico en:

<https://webpub2.igae.hacienda.gob.es/accesoremoto/frmExecAPP.aspx?code=BDNSCRT&TA=ANO>

1.9 Información en lenguas cooficiales

¿Por qué los órganos de administraciones públicas con lenguas cooficiales deben registrar la información en español?

Porque así lo establece el artículo 6.7 del [RD130/2019](#).

A continuación, se exponen las razones que justifican el registro de la información en español, sin perjuicio del uso de las lenguas cooficiales.

En primer lugar, los destinatarios del [SNPSAP](#) son todos los ciudadanos, y para que se cumpla el principio de transparencia la información debe ser comprensible para todos. La lengua común es el español. Todos los ciudadanos tienen la obligación de conocerla y el derecho a usarla. Si la información de aquellas regiones donde existen lenguas cooficiales se registrara solo en estas últimas, se estaría privando a los ciudadanos del resto de comunidades autónomas del conocimiento e información al que tienen inalienable derecho.

En segundo lugar, los usuarios de la BDNS están presentes en todas las administraciones públicas: local, autonómica y estatal. La lengua común constitucional de todos ellos es el español. Si solo se registrara en lenguas cooficiales, se estaría "oscureciendo" el contenido de una parte de la BDNS e imposibilitando el cumplimiento de sus fines (la lucha contra el fraude, la mejora de los procedimientos de gestión de subvenciones y ser instrumento para la planificación de políticas públicas).

Si no se dispone de la información en una lengua común, ¿cómo se implantaría la búsqueda de concurrencias, inhabilitaciones, situaciones de sobrefinanciación, control *de minimis*? Excluyendo al español, la BDNS sería ineficaz.

En tercer lugar, una parte de los datos de la BDNS ha de ser transferida a la Comisión Europea y esto obliga a utilizar uno de los 24 idiomas oficiales de la UE, pues son los únicos admitidos para el envío de información a la Comisión. El único idioma de los oficiales en España que a su vez es oficial en la UE es el español.

Para fortalecer el derecho de acceso a la información plurilingüe y garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos de las Comunidades Autónomas con lengua cooficial, la BDNS ofrece al órgano remitente la posibilidad de registrar el título de la convocatoria, el extracto de la convocatoria y los demás documentos tanto en español como en la lengua cooficial. En estos casos, el portal del [SNPSAP](#) publicará el título de la convocatoria, el extracto de la convocatoria y los documentos en ambas lenguas.

Por otra parte, la publicidad de las subvenciones en la BDNS y [SNPSAP](#) no excluye la publicidad por otros medios y en otras lenguas, si así fuera oportuno. Por ejemplo, un Ayuntamiento, en consideración a sus porcentajes de población inmigrante, puede publicitar las convocatorias y las concesiones a través de su sitio web (u otro) en otro idioma (por ejemplo, guaraní, árabe, rumano o uzbeko). Pero en la BDNS se tiene que registrar, cuando menos, en español.

1.10 Obtener ayuda y asistencia a usuarios con dudas sobre la BDNS

¿Cómo contacto para pedir más información o aclaraciones sobre la BDNS?

El Equipo de Administración y Custodia de la BDNS está accesible a través de la dirección electrónica bdns@igae.hacienda.gob.es. Habitualmente responde en menos de 24 horas, pero esto puede depender de cargas de trabajo variables.

No hay recursos para prestar atención telefónica. Para cuestiones exclusivamente informáticas puede contactar directamente con soportetecnicobdns@igae.hacienda.gob.es.

Periódicamente los Administradores Institucionales reciben directamente nuestras noticias o documentos de divulgación, nuevos o actualizados, para distribuir a su vez entre los usuarios de su ámbito. Pregunte a su Administrador Institucional por ellos.

1.11 Previsión del artículo 18.3 de la LGS

El artículo 18.3 de la LGS establece que “Los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de transparencia”. En el caso de que se haga uso de la previsión contenida en el artículo 5.4 de la citada Ley, la BDNS servirá de “medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad”. ¿A qué se refiere exactamente este precepto?

El artículo 3.b) de la [Ley de Transparencia](#) establece que las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando, al menos, el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros, están obligadas a publicar la información relativa a las subvenciones y ayudas públicas recibidas con indicación de su importe y objetivo o finalidad, siempre que el órgano concedente sea una Administración Pública..

Por su parte, el artículo 5.4 de la [Ley de Transparencia](#) permite que las **entidades sin ánimo de lucro** que persigan fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros puedan cumplir con esta obligación utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración Pública concedente.

Para dar una solución eficaz, el [RD 130/2019](#) dispone que esta obligación se entenderá cumplida cuando las subvenciones y ayudas públicas recibidas por la entidad aparezcan publicadas en el [SNPSAP](#). Si la información no está publicada en el [SNPSAP](#), la entidad beneficiaria debe instar a la Administración Pública concedente a la remisión de la información a la BDNS.

1.12 Reutilización de la información ofrecida en el portal SNPSAP [Actualizada 2025]

¿Por qué está limitada la descarga de concesiones en ficheros pdf, xls y csv a 1 000 registros de concesiones?

Actualmente, el portal SNPSAP muestra más de 16 millones de concesiones de subvenciones y ayudas públicas. El elevado volumen de datos a tratar ha obligado a establecer un límite de registros en la descarga de concesiones en ficheros PDF, XLSX o CSV para garantizar que dichas descargas sean eficaces y rápidas. Este límite, que responde a razones puramente técnicas, se ha fijado en 1 000 registros por descarga. Si se desea descargar el resultado de una consulta de concesiones que supera los 1 000 registros se deben descargar los registros de cada página, realizando tantas descargas como páginas contiene el resultado de la consulta. Es importante recordar a estos efectos que el [SNPSAP](#) permite configurar el número de registros que muestra cada página (10, 100, 500 o 1 000 registros por página).

¿Existe algún mecanismo de descarga masiva para superar el límite de los 1.000 registros?

El [SNPSAP](#) en su incansable intento de contribuir a la transparencia, difusión y reutilización de datos relacionados con las subvenciones y ayudas públicas, ofrece una API que permite hacer peticiones de descarga de la información de todos los conjuntos de datos que se visualizan en el portal. El interfaz API-REST en formato JSON y XML es público e irrestricto, al igual que el acceso manual al sitio web del SNPSAP.

A través de esta interfaz API-REST se pueden descargar sucesivas páginas de hasta 10 000 registros cada una.

Este acceso y posibilidad de descarga de datos es complementario de las capacidades actuales de descarga en los formatos abiertos CSV, PDF y XLSX que se viene ofreciendo desde 2014, y está sometido a las mismas condiciones de uso y reutilización de información, que pueden (y deben) consultarse en el localizador <https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/avisolegal>.

Puede obtener más información en la “Ayuda” del portal del SNPSAP (AYUDA – Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (PDF)). La documentación técnica Swagger para desarrolladores se encuentra permanentemente actualizada en: <https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/doc/swagger>.

¿Por qué no puedo descargar la base de datos completa?

La petición de la descarga de “una copia de la base de datos completa...”, podría ser inadmitida según el artículo 18.1.e) de la [Ley 19/2013](#), que contempla el caso de inadmisión cuando la solicitud tenga un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la Ley.

Esa petición incumpliría, probablemente, el principio de “minimización de datos” establecido en el artículo 5.1.c del [Reglamento UE 2016/679](#), pues cabe colegir que difícilmente sería precisa toda la información que obra en la BDNS para realizar cualquiera de las tareas previstas en el artículo 7.7 del [RD 130/2019](#), las únicas que habilitan para acceder y reutilizar la información que se proporciona a través del [SNPSAP](#).

Finalmente, conviene recordar que la información sobre subvenciones se recaba para cumplir los fines del artículo 20 de la [LGS](#) y, por esta razón, tiene carácter reservado.

Por tanto, la información de la BDNS debe ser cedida (tanto mediante publicidad activa como mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información) de forma restrictiva, cumpliendo siempre el principio de “limitación de la finalidad” contemplado en el artículo 5.1.b [Reglamento UE 2016/679](#), principio que se pondría en riesgo si se cediera la información de forma completa.

En consecuencia, se considera que el [SNPSAP](#) cumple adecuadamente con el deber de publicidad establecido en la [Ley 19/2013](#) y que por lo demás, el contenido de la BDNS tiene carácter reservado. Según lo indicado en los artículos 16 y 22.3 de la [Ley 19/2013](#) se permite el acceso parcial a la información en los términos en que se muestra en el [SNPSAP](#) y es posible denegar el suministro de la información mediante descarga de la totalidad de la información.

1.13 Registro de alertas en el SNPSAP [Nueva 2025]

A pesar de estar suscrito al servicio de alertas del SNPSAP no recibo correos de alerta avisándome de la publicación de convocatorias cuyo título contiene la palabra exacta que busco. ¿No funciona el servicio de alertas?

El [SNPSAP](#) permite configurar la suscripción de alertas de convocatorias para que informe de las convocatorias publicadas cuyo título contiene todas las palabras, alguna palabra o la frase exacta que se desea buscar.

La opción *Todas las palabras* realiza búsquedas de coincidencias parciales, de manera que le mostrará convocatorias en cuyo título figuran todas las palabras indicadas sin tener en consideración el orden. Por su parte, la opción *Alguna palabra* permite buscar convocatorias en cuyo título figura, al menos, alguna de las palabras indicadas. Por tanto, la coincidencia también es parcial. Sin embargo, la opción *Frase exacta* busca coincidencias totales tanto de la/s palabra/s exacta/s como del orden particular indicado.

Si bien la mayoría de los lenguajes de programación y buscadores de internet exigen que la sintaxis de la búsqueda de coincidencia total recoja entre comillas dobles (") la cadena de texto a buscar, la suscripción de alertas del SNPSAP no requiere esta sintaxis.

Si al configurar los criterios de la suscripción escribe entre comillas dobles (") la palabra o frase a buscar, por ejemplo *"vehículo eléctrico"*, únicamente se comunicarán de aquellas convocatorias cuyo título contiene *vehículo eléctrico* entre comillas (*"vehículo eléctrico"*) pero no informará de las convocatorias que tienen en su título *vehículo eléctrico* sin comillas.

Asimismo, si en el criterio de búsqueda se indican dos o más palabras, no hay que introducir comas (,) para separar las palabras. La separación entre las palabras a buscar se debe realizar con un espacio en blanco.

Por ejemplo, si se introduce en la caja de texto el texto a buscar **"música y danza"** (sin comillas), los resultados que se obtendrían serían los que se presentan en este cuadro:

	Respuesta positiva	Respuesta negativa
Todas las palabras	Subvenciones para la danza , la música y las artes. Subvenciones a las personas músicas y que danzan	Ayudas y subvenciones para la música Ayudas a músicos y danzarines
Alguna de las palabras	Subvenciones para la danza Subvenciones para la música y las artes. Subvenciones para las legumbres y el cereal Subvenciones a las personas músicas que además danzan	Subvenciones para el teatro
Frase exacta	Subvenciones para la música y danza	Subvenciones para la danza y la música

2. FISCALIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL EN LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS

2.1 Sujeción de las subvenciones al IRPF u otros impuestos **[Actualizada 2025]**

¿Están sujetas las subvenciones a IRPF u otros tributos?

Con carácter general, las subvenciones están sujetas al IRPF o al IS. No obstante, el art. 7 de la [Ley 35/2006 del IRPF](#) establece algunas excepciones, que se describen con mayor profundidad en el artículo 2 del [Reglamento del IRPF](#). La casuística de las subvenciones y las obligaciones fiscales relacionadas con ellas es prolífica, por lo que no se puede dar un criterio general. Consulte con la [AEAT](#) o con su departamento jurídico o fiscal los particulares de su subvención.

Se recomienda también consultar las respuestas de la [Dirección General de Tributos](#), donde se pueden consultar más de 600 respuestas a consultas sobre la materia.

El [Manual Práctico IRPF 2023](#) proporcionan ejemplos (no exhaustivos) de subvenciones sometidas al impuesto:

«Se calificarán como ganancia patrimonial las SUBVENCIONES:

a) Cuando su obtención está ligada a un elemento patrimonial no afecto a actividad económica.
Entre otras:

- Subvenciones por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual (casillas **[0299]** y **[0300]**)
- Subvenciones por la reparación de defectos estructurales en la vivienda habitual (casilla **[0300]**)
- Ayudas públicas para el pago del IBI (casilla **[0301]**)
- Ayudas públicas derivadas del Plan Renove de los bienes de los que se trate (electrodomésticos, calderas, ventanas, aire acondicionado etc.) (casilla **[0301]**)
- Ayudas públicas para la instalación de rampas, ascensores, aunque se instalen para mejorar la movilidad (casilla **[0301]**)
- Ayudas públicas a la adquisición de vehículos sostenibles (MOVES III 2023) cuando los beneficiarios son contribuyentes del IRPF que no realizan ninguna actividad económica (casilla **[0301]**)

Estas subvenciones públicas si bien están ligadas a un elemento patrimonial no derivan de su transmisión y, por tanto, deben ser incluidas en la declaración de IRPF en el apartado F1 dentro de "Otras ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales".

b) Cuando su obtención no está ligada a un elemento patrimonial, y no se califica como rendimiento del trabajo o de la actividad económica, por ejemplo:

- Ayudas públicas al alquiler (casilla **[0303]**)
- La "Ayuda de 200 euros a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio" (casilla **[0356]**), regulada en el artículo 74 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre
- El "Bono Social Térmico" (casilla **[0301]**)
- Bono Cultural Joven (casilla **[0323]**)
- Otros bonos culturales (casilla **[0304]**)
- Ayudas públicas a los titulares de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español destinadas a su conservación o rehabilitación. (casilla **[0266]**)

- *Ayudas públicas para la primera instalación de jóvenes agricultores previstas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural destinadas a la adquisición de una participación en el capital de empresas agrícolas. (casilla [0279])»*

2.2 Retención fiscal aplicada a las subvenciones

En nuestro organismo se practica retención sobre las subvenciones y ésta es comunicada a la AEAT a través del modelo 190. ¿Debemos, además, enviar la información de estas subvenciones a la BDNS?

Sí. Las obligaciones de comunicación de información en las leyes tributarias y en la legislación sobre subvenciones son distintas y atienden a distintos fines.

Cuando comunique los pagos a la BDNS debe hacer constar que éstos han sido sometidos a retención. Consulte el [Manual de concesiones, pagos, devoluciones y reintegros](#).

Registrar que el pago ha sido sometido a retención es información útil para la AEAT al permitirle no duplicar imputaciones de ingresos a los contribuyentes cuando la AEAT obtiene la información de la BDNS y de otras fuentes.

Cuando se registra un pago de subvención sometido a retención fiscal, el “importe del pago” ¿es el importe neto que percibe el beneficiario o el bruto sin restar la retención?

El importe a consignar en la BDNS es el **importe concedido**: pago bruto si hay un único pago o cada uno de los importes brutos pagados si hay pagos parciales de la subvención.

El importe retenido y el pago líquido no es un elemento de interés para la BDNS, por eso no se registra.

2.3 Subvención y cuotas a la Seguridad Social

Cuando se abona una beca, en el documento contable del pago se retiene la cuota a la Seguridad Social. El importe a registrar en la BDNS ¿incluye también los pagos a la Seguridad Social o solo el líquido que recibe el beneficiario?

El importe que se debe comunicar a la BDNS es el importe de la beca concedida. Si del importe de la beca se descuenta la parte correspondiente a la cuota obrera, en la BDNS se deberá incluir tanto el importe líquido pagado al becario como la cotización que corre a su cargo, pero no la cotización a cargo de la empresa.

El motivo es que el becario, que en razón de su actividad se encuentren comprendido en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social, tiene obligación de cotizar mediante el abono de la cuota obrera. Por su parte, el empresario tiene la obligación de cotizar por el becario (cuota patronal). El empresario, en el momento de hacer efectiva las retribuciones al becario, descuenta del importe de la beca concedida la aportación a la Seguridad Social que corresponde al becario (cuota obrera). **El importe a registrar en la BDNS incluirá el importe de la retribución líquida, de la cuota obrera y de la retención del IRPF** (ver respuesta [2.2 “Retención fiscal aplicada a las subvenciones”](#) de este documento) si procede.

La cuota patronal devengada por la relación laboral con el becario no puede ser considerada una subvención al becario. La cotización del empresario a la Seguridad Social por el becario contratado (cuota patronal) es una obligación impuesta al empresario por el [Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social](#) y por el [Reglamento General de Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social](#).

Uno de nuestros becarios se encuentra de baja y estamos abonándole la prestación de incapacidad temporal en régimen de pago delegado. El importe a registrar en la BDNS ¿corresponde al importe del pago delegado?

No. Durante el periodo en el que el becario se encuentra de baja médica está inhabilitado para llevar a cabo la actividad que motivó la concesión de la beca. Por tanto, en ese periodo no percibirá la beca sino la prestación económica de incapacidad temporal de la Seguridad Social, siempre y cuando reúna los requisitos exigidos para tener derecho a esta prestación económica.

La prestación por incapacidad temporal, en el caso consultado, es abonada por la entidad con la misma periodicidad que beca, en virtud de la colaboración obligatoria de las empresas en la gestión del Régimen General de la Seguridad Social, descontando del importe del subsidio la retención por IRPF si procede y las cuotas a la Seguridad Social. La entidad aplicará la compensación del pago delegado de la prestación de incapacidad temporal en la liquidación de cotizaciones sociales del mes siguiente. Por tanto, no estamos ante una beca sino ante una prestación económica de la Seguridad Social.

2.4 No devolución de cuota IRPF por existencia de subvenciones no declaradas

La Agencia Tributaria no devuelve el IRPF a un ciudadano porque dice que cobró una subvención que no ha declarado. En el borrador de la declaración de la renta figura una subvención que el contribuyente no ha percibido. ¿Qué se puede hacer?

La AEAT es un órgano cesionario de la BDNS: accede a los datos de la BDNS para el cumplimiento de sus fines. El ciudadano debe dirigirse a la AEAT para que identifique qué subvención le está imputando y quién fue el órgano concedente. De subsistir la discrepancia, el contribuyente deberá acudir al órgano presuntamente concedente para que le expidan certificación positiva o negativa.

2.5 Subvenciones para pagar impuestos (IBI, IVTM, etc.)

¿Son subvenciones las ayudas para pagar impuestos?

Si las ayudas se instrumentan a través de deducciones o bonificaciones fiscales dentro de los términos establecidos por las leyes tributarias, estas ayudas pueden ser calificadas como Ayudas de Estado, en su caso, instrumentalizadas a través de ventajas fiscales. [Ver el capítulo 10](#) sobre las Ayudas de Estado y *de minimis*.

¿Son legales las subvenciones para pagar el IBI?

No. En primer lugar, son una aberración económica, insostenible desde el punto de vista de la racionalidad que debe presidir la acción pública.

En segundo lugar, son ilegales, ya que suponen una quiebra del principio de reserva de ley en materia de beneficios fiscales puesto que estas subvenciones constituyen en realidad un beneficio fiscal no amparado por una norma con rango de ley. Así lo ha considerado el Tribunal Supremo en su sentencia de 19 de mayo de 2014 ([STS 1979/2014](#)).

Ver también respuesta 4.43 de este FAQ.

3. OBLIGACIONES DE LOS ORGANOS GESTORES

3.1 Plazos de registro de información en la BDNS [Actualizada 2025]

¿Cuáles son los plazos de remisión de la información en la BDNS?

Los plazos para el suministro de la información de subvenciones y ayudas públicas se regulan en el artículo 5.2 del [RD 130/2019](#).

En las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, **una vez aprobada la convocatoria** se debe registrar la información de la convocatoria, acompañada del texto de la convocatoria y de su extracto. La BDNS dará traslado al Diario Oficial correspondiente el extracto de la convocatoria para su publicación.

Si la Comunidad Autónoma ha prescindido de la intermediación de la BDNS para la publicación de la convocatoria, la información de la convocatoria, acompañada del texto de la misma, se debe registrar **una vez haya sido aprobada, y con antelación suficiente para que los interesados puedan presentar sus solicitudes en plazo**.

En las subvenciones o ayudas públicas de concesión directa, en las que no es preceptiva la convocatoria, y cuyos beneficiarios no se conocen **en el momento de aprobar la disposición reguladora**, la información a incluir en la BDNS se debe registrar inmediatamente después de publicar dicha disposición. Si los beneficiarios están determinados cuando se aprueba la disposición reguladora, como es el caso de las subvenciones nominativas, la información se debe suministrar a la BDNS en el **momento en que se concede la subvención**.

La restante información (concesiones, pagos, devoluciones, reintegros, sanciones, ...) se irá suministrando a medida que se vayan produciendo los hechos registrables; en cualquier caso, debe aportarse **antes de que finalice el mes siguiente al de su producción**.

Ahora bien, cuando se trata de concesiones *de minimis* hay que estar a lo dispuesto en el [Reglamento UE 2023/2831¹](#), que señala en su artículo 6.2 que «*Los Estados miembros consignarán la información que figura en el apartado 1 en el registro central sobre las ayudas de minimis concedidas por cualquier autoridad del Estado miembro en el plazo de veinte días hábiles a partir de la concesión de la ayuda. Esa información sobre las ayudas de minimis recibidas por intermediarios financieros que ejecuten regímenes de ayudas de minimis se consignará en el plazo de veinte días hábiles a partir de la recepción del informe indicado en el apartado 5. Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar la exactitud de los datos contenidos en el registro central*».

En los mismos términos se expresa el Reglamento 1408/2013 AGRI enmendado en 2024.

El **plazo máximo para el registro de las concesiones de minimis en la BDNS es de 20 días desde la fecha en que se dicta la resolución de concesión**.

3.2 Obligaciones de los “Órganos remitentes” [Actualizada 2025]

El Órgano Remitente es la Intervención del Ayuntamiento. ¿Es la Intervención la encargada de registrar la información en BDNS? ¿Puede el Órgano Obligado (si fuera distinto del Remitente) enviar la información, pero no hacerla pública hasta que el Órgano Remitente (Intervención) la revise y valide?

¹ Art. 6.2 del Reglamento (UE) 2023/2831, art. 6.2 del Reglamento (UE) 2023/2832 y art. 6.2 del Reglamento (UE) 1408/2013 (modificado por el Reglamento (UE) 2024/3118)

El artículo 20 de la [LGS](#) indica que en el ámbito local es responsable de suministrar la información correctamente «la Intervención u órgano que designe la propia Entidad Local».

Esta responsabilidad no implica necesariamente que la Intervención (o el órgano que se designe) deba “fiscalizar” o “validar” previamente cualquier información que se vaya a cargar en la BDNS (alternativamente puede instrumentar diseños de control a posteriori). Tampoco implica que tenga que ser necesariamente la Intervención la que registre los datos en la BDNS. El sistema informático BDNS permite que la Intervención Local –en concreto, el Administrador Institucional integrado orgánicamente en la Intervención– pueda designar usuarios con el perfil adecuado para registrar datos. Estos usuarios pueden pertenecer a la Intervención Local pero también pueden pertenecer a una Concejalía u otro órgano, organismo o entidad pública vinculado o dependiente del Ayuntamiento.

Lo que no posibilita a día de hoy la BDNS es que el Administrador Institucional (AI) pueda revisar y validar la información que está cargando un usuario autorizado antes de que éste la registre. Por esta razón, el AI deberá diseñar sistemas de control a posteriori, que permitan revisar si la información cargada en la BDNS es correcta. Esta solución es tanto más apropiada si se emplean los servicios web para la interconexión de los sistemas de gestión locales con la BDNS o si se utilizan cargas masivas usando plantillas Excel.

El control posterior (calidad, auditoría y análisis) es algo que la propia Entidad Local puede formalizar jurídicamente con sus propios instrumentos de auto organización.

De acuerdo con este esquema, el Administrador Institucional del Ayuntamiento, debería ejercer las siguientes competencias (lista no exhaustiva):

1. Vehicular toda la comunicación entre los usuarios y órganos de su ámbito con el Equipo de Administración y Custodia de la BDNS.
2. Preautorizar, modificar y cesar a usuarios de su ámbito.
3. Controlar la calidad de la información enviada por los Órganos Gestores de su ámbito, mediante la comprobación de los atributos de exhaustividad, precisión e integridad. Para ello podrá corregir la información editada por los órganos, o requerir a éstos formalmente su corrección. Sus capacidades, sin ser exhaustivos, son:
 - a. Detectar convocatorias que se han tramitado al margen de la BDNS.
 - b. Detectar convocatorias que habiendo transcurrido X tiempo desde que se registraron o se cerraron no tienen concesiones asociadas.
 - c. Detectar concesiones que habiendo transcurrido X tiempo desde que se registraron no tiene pagos asociadas.
 - d. Detectar convocatorias, concesiones, etc. incompletas.
4. Auditar los accesos de edición efectuados por los usuarios de su ámbito, a través de cualquier sistema, específicamente sobre la autorización, autenticación y trazabilidad de la edición de entidades de información que se efectúen por WS. Un desglose no exhaustivo de estas capacidades incluye:
 - a. Obtener un cuadro de las convocatorias de un(os) órgano(s) de su ámbito, entre fechas, con indicación de diversos atributos de estas, y fundamentalmente la identificación (nombre y órgano) del editor original y del último.
 - b. Para una convocatoria de su ámbito, obtener una lista de las entidades asociadas (concesiones, pagos, ...) y la identificación y adscripción del editor original y el último.
 - c. Para un usuario de su ámbito, obtener un listado de actividad entre fechas, con indicación de todas las ediciones realizadas e identificación de la entidad de información afectada.
 - d. Desde una transacción BDNS recibida por WS, poder hacer el rastreo hasta el usuario ejecutor, verificando su autorización y autenticación.
 - e. Desde una aplicación que se conecte WS con BDNS, poder cotejar todas las transacciones efectuadas en BDNS por un usuario o un grupo de estos.

5. Analizar la información de la BDNS en su ámbito. Sin ser exhaustivos, esto se puede concretar en las siguientes capacidades:
 - a. Poder examinar el grado de concurrencia entre convocatorias (porcentaje de beneficiarios que son los mismos).
 - b. Poder determinar, mediante un índice sintético, el grado de concentración económica de las concesiones (y pagos) en los beneficiarios de una convocatoria.
 - c. Poder obtener listados con subtotales de control, por órgano, beneficiario, periodo, etc.
6. Organizar y reorganizar los órganos gestores y cesionarios de su ámbito, adaptándolos a la estructura administrativa vigente en cada momento, gestionando el ciclo de vida de estos, y el ciclo de vida de las convocatorias de cada uno de ellos.

Es decir, el Órgano Remitente, donde está incardinado el Administrador Institucional, ejerce un **verdadero control interno y supervisa el sistema BDNS en su ámbito**.

¿Es cierto que nos pueden sancionar por no enviar información a la BDNS?

Sí. La [LGS](#) tipifica como infracción grave «La falta de suministro de información por parte de las administraciones, organismos y demás entidades obligados a suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones» (artículo 57.f [LGS](#)).

La sanción que corresponde a esta infracción es la imposición de una multa, previo apercibimiento, de 3.000,00€ que podrá reiterarse mensualmente hasta que se cumpla con la obligación (art. 62.3 [LGS](#))

Además, el [RD 130/2019](#) ha desarrollado el régimen de responsabilidad en el suministro de información a la BDNS, precisando los supuestos en los que se exigirá responsabilidades al órgano obligado, a saber:

- Si como consecuencia del incumplimiento de la obligación de suministrar información a la BDNS se concediera una subvención a un beneficiario incurso en una causa que, de haberse conocido, hubiese provocado la imposibilidad de obtener la condición de beneficiarios.
- Si como consecuencia del incumplimiento de la obligación de suministrar información a la BDNS se impidiera conocer la existencia de supuestos de incumplimiento de las reglas de financiación.
- Si como consecuencia del incumplimiento de la obligación de suministrar información a la BDNS se otorga la condición de entidad colaboradora a aquella persona incurso en alguna de las razones que impiden obtener tal condición.
- Si como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de suministro de información a la BDNS derivadas de normas del derecho de la Unión Europea, el Reino de España fuera sancionado por las instituciones europeas o condenado por tribunales internacionales o por órganos arbitrales.

A estos efectos conviene recordar que el plazo para el suministro de la información a incluir en la BDNS relativa a concesiones, pagos, devoluciones, reintegros, sanciones e infracciones finaliza el último día del mes natural siguiente al de su producción salvo en el caso de concesiones de ayudas *de minimis* cuya información debe registrarse en la BDNS en el plazo de 20 días a contar desde la fecha de concesión (**ver pregunta "3.1 Plazos de registro de información en BDNS" de este documento**).

3.3 Obligaciones de las Entidades colaboradoras

¿Qué son las Entidades colaboradoras? ¿Son entidades que se dedican a ser "colaboradores" de manera habitual o cualquier entidad puede ser en un determinado momento "entidad colaboradora"?

La participación de entidades colaboradoras en la gestión de subvenciones se establece de forma particularizada en algunos procedimientos de concesión de subvenciones. La mayoría de las subvenciones se gestionan sólo por la Administración concedente sin emplear una entidad colaboradora.

Pero hay procedimientos de concesión de subvenciones en los que sí participan entidades colaboradoras. El caso más habitual suele ser designar a un Organismo o una entidad pública que está en la órbita del Ministerio concedente. Tal Organismo se encarga de revisar las solicitudes y elevarlas al Ministerio para que conceda la subvención. Este Organismo se suele encarga también de efectuar los pagos a los beneficiarios y recibir las cuentas justificativas. En estos casos, se están aprovechando los medios y la mayor flexibilidad para los pagos que tienen estas instituciones respecto a un Ministerio (o equivalente en CCAA y EELL).

En general, se suele aprovechar que la entidad colaboradora tiene participación en el proceso en virtud de sus propias competencias y, de paso que ejerce su propia actividad, facilita a la Administración la concesión de la subvención que está ligada a esa actividad.

A partir de este modelo elemental, es cierto que la figura de la entidad colaboradora se puede ir complicando.

Por ejemplo, en el caso de las subvenciones al transporte de pasajeros insulares², el beneficiario es el pasajero y la compañía aérea actúa como entidad colaboradora. Así, en estas subvenciones hay tantas entidades colaboradoras como compañías aéreas que hacen el trayecto a las islas.

En este caso, las entidades colaboradoras son empresas privadas, opción que también se recoge en la LGS.

El Ayuntamiento actúa como entidad colaboradora de subvenciones de la Comunidad Autónoma. ¿Quién es el obligado a registrar los datos en la BDNS?

Las entidades colaboradoras, reguladas en el artículo 12 de la [LGS](#), no tienen la consideración ni de órganos obligados ni de órganos remitentes de la información a efectos de la BDNS. Por tanto, no se relacionan con la BDNS.

En el caso planteado, en el que la Comunidad Autónoma convoca y resuelve la concesión de subvenciones, es la Comunidad Autónoma, en su condición de órgano obligado, la que debe suministrar a la BDNS la información relativa a la convocatoria y a las subvenciones concedidas con sus diferentes entidades de información; concesión, pago, devolución, reintegro y sanción.

El Ayuntamiento, en su condición de entidad colaboradora, no se relaciona con la BDNS, aun cuando entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios en nombre y por cuenta del órgano concedente.

¿Cómo se registran los datos de entidades colaboradoras?, ¿son beneficiarios u órganos gestores?

Las entidades colaboradoras no son órganos gestores de las subvenciones. Sus actuaciones de colaboración en la gestión, realizadas en nombre y por cuenta de la Administración, son de carácter material o técnico, preparatorias o derivadas de actos administrativos dictados por la Administración convocante de las subvenciones.

La BDNS no distingue entre subvenciones gestionadas directamente por el órgano convocante y las subvenciones en cuya gestión participa una entidad colaboradora. Por tanto, no hay que registrar en la BDNS la información identificativa de la entidad colaboradora, salvo en aquellas Ayudas de Estado sujetas a los artículos 16 y 21) el [Reglamento \(UE\) 651/2014 de la Comisión](#), en las que se requerirá el nombre del intermediario financiero o, en su caso, entidad encargada para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia exigidas por la Unión Europea.

Ahora bien, si la colaboración en la gestión de las subvenciones se instrumenta en un convenio en el que se recoge una compensación económica a favor de la entidad colaboradora, la entidad colaboradora se registrará en la BDNS como beneficiaria de una subvención instrumental (**ver pregunta 4.21 Gastos de gestión de las entidades colaboradoras de este documento**).

² Son ayudas de carácter social para el transporte en favor de residentes en regiones alejadas, encuadradas dentro del régimen de ayudas otorgadas por los Estados, contenidas en los artículos 107, 108 y 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en el artículo 51 del Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

¿Cómo se registra la participación de la Comisión Fulbright en la gestión de las becas así denominadas, como entidad colaboradora o como beneficiaria?

Los beneficiarios de las becas Fulbright son los estudiantes becados. La Comisión Fulbright, organismo público binacional España – EEUU, actúa como entidad colaboradora.

El organismo binacional “Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América”, administra, participa en la gestión y paga las becas Fulbright en calidad de entidad colaboradora.

Únicamente, en el supuesto de que la Comisión perciba una compensación económica por los gastos de la gestión no instrumentada en un contrato de prestación de servicios, le será de aplicación el criterio establecido **en la respuesta 4.21 Gastos de gestión de las entidades colaboradoras de este documento**. En este caso, deberá registrarse una convocatoria instrumental para la concesión directa de la subvención a la Comisión.

3.4 Obligaciones de las Fundaciones públicas en la BDNS

Somos una fundación pública, ¿qué obligaciones tenemos?

El régimen de las subvenciones concedidas por las fundaciones públicas cambió en la reforma de la [LGS](#) de 2014. Así, la disposición adicional 16 de la citada Ley establece:

«Disposición adicional decimosexta. Fundaciones del sector público.

1. Las fundaciones del sector público únicamente podrán conceder subvenciones cuando así se autorice a la correspondiente fundación de forma expresa mediante acuerdo del Ministerio de adscripción u órgano equivalente de la Administración a la que la fundación esté adscrita y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.2.

La aprobación de las bases reguladoras, la autorización previa de la concesión, las funciones derivadas de la exigencia del reintegro y de la imposición de sanciones, así como las funciones de control y demás que comporten el ejercicio de potestades administrativas, serán ejercidas por la Administración Pública que financie en mayor proporción la subvención correspondiente; en caso de que no sea posible identificar tal Administración, las funciones serán ejercidas por la Administración que ejerza el Protectorado de la fundación.

En el sector público estatal, las funciones enunciadas en el párrafo anterior corresponderán al departamento ministerial del que dependa el órgano o entidad que financie en mayor proporción la subvención correspondiente y, si no es posible su identificación, al órgano o entidad que ejerza el Protectorado de la fundación».

En virtud de esta reforma, las Fundaciones están obligadas a suministrar a la BDNS la información de las subvenciones que convocan y conceden.

3.5 Obligaciones de las Sociedades mercantiles públicas con la BDNS

El Ayuntamiento de XXX tiene una sociedad pública, Deporte Municipal S.A., que concede ayudas a clubs deportivos. Al ser una sociedad anónima no tiene código DIR3. ¿Cómo lo resolvemos?

Deporte Municipal S.A. es una sociedad mercantil local, de carácter unipersonal, con la forma de sociedad anónima que se rige por sus estatutos y por lo previsto en el [Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital](#).

La [LGS](#) y su normativa de desarrollo, está orientada a regular subvenciones que se otorgan en el marco del derecho administrativo. Esto es así, porque las subvenciones suponen uno de los mecanismos con que cuenta la Administración para el fomento de determinadas actuaciones, incidiendo de forma directa en el ámbito del

sector privado. La potestad de conceder subvenciones se otorga a las entidades públicas para garantizar la igualdad de acceso de todos los ciudadanos y como garantía de la mejor promoción de los intereses públicos. Como contrapartida, la ley otorga a los poderes públicos unas potestades exorbitantes (el control financiero de subvenciones, la exigencia de reintegro o la imposición de sanciones) que están dentro de la órbita de las potestades públicas.

Por esta razón, la concesión de subvenciones debe circunscribirse al ámbito de las administraciones públicas como garantes de la correcta concesión y empleo de los fondos públicos. Cualquier otra solución puede ser considerada como una huida del derecho administrativo.

Bajo estos parámetros, las sociedades mercantiles no deberían conceder, ya no subvenciones, sino tampoco cualquier otra entrega dineraria sin contraprestación, pues en la lógica organizativa de una administración pública racional y moderna, dichas empresas son constituidas para entregar bienes en el mercado, no para ejercer funciones públicas.

Si, además, la sociedad mercantil financia sus actuaciones principalmente con fondos públicos, no cabe sino plantear la conveniencia de que las subvenciones sean concedidas por la Administración de tutela.

En el caso de subvenciones deportivas, si la financiación principal proviene del Ayuntamiento debería ser éste el que actuara como órgano concedente, utilizando a la sociedad mercantil, optativamente, como entidad colaboradora. Una solución así se ajusta a derecho, es mucho más respetuosa de los derechos de los ciudadanos, y es más razonable.

En cualquier caso, en tanto la sociedad mercantil local esté ejerciendo una potestad administrativa, la actividad de fomento, y ésta esté financiada con fondos públicos procedentes del Ayuntamiento, es un órgano obligado a remitir información a la BDNS en los mismos términos que los demás órganos.

Asimismo, señalar que al tratarse de una sociedad mercantil de la que es "entidad propietaria" el Ayuntamiento, Deporte Municipal S.A. está sujeta a las obligaciones de publicidad activa que establece la Ley [19/2013](#) (consultar art. 2.g). En aras a la transparencia y a garantizar una uniformidad en la publicación de la información relativa a subvenciones, es procedente que la información sobre las subvenciones concedidas por Deporte Municipal SA se registre en la BDNS.

Por este motivo, el artículo 3 del [RD 130/2019](#) extendió el ámbito subjetivo de la BDNS a todas las Administraciones públicas y a sus entidades vinculadas o dependientes, sea cual sea su naturaleza, pública o privada, siempre que concedan subvenciones o ayudas públicas.

Si la sociedad mercantil pública que concede las ayudas carece de código DIR3, debe solicitar un usuario proveedor en DIR3 mediante el [procedimiento de alta DIR3](#) establecido al efecto.

Somos una Sociedad Anónima del Sector Público, y por lo tanto no publicamos nuestros programas de ayudas en el Boletín Oficial del Estado. Nuestra Intervención, en la última auditoría, nos indicó que debíamos registrar las convocatorias y publicar las concesiones en la BDNS. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿con una convocatoria "a regularizar"?

La [Ley General de Subvenciones](#) distingue dos procedimientos de concesión de subvenciones:

- **Concurrencia competitiva**, que se define como el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los estos criterios.

Por tanto, 3 son los elementos definidores del concepto de concurrencia competitiva:

- Comparación de solicitudes en un único procedimiento.
- Establecimiento de un orden de prelación de las solicitudes de acuerdo con los criterios de valoración establecidos.
- Concesión de las subvenciones a las mejores solicitudes hasta que se agote el crédito disponible.

Estas convocatorias se tipifican en la BDNS como convocatorias canónicas y requieren de la publicación del extracto de la convocatoria en el diario oficial, con la intermediación de la BDNS, para que tenga eficacia jurídica.

- **Concesión directa**, que es aplicable únicamente en los supuestos previstos en la ley (art.22.2), y caracterizado por la no exigencia del cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia.

Si la Sociedad Anónima Pública concede las ayudas a través de un procedimiento de concurrencia competitiva, en los términos definidos anteriormente, deberá registrar una convocatoria canónica. Al no estar sujeta a la obligación de publicar el extracto de la convocatoria en el Diario Oficial, marcará la casilla "A regularizar".

Si las ayudas no se conceden en régimen de concurrencia competitiva, registrará una convocatoria instrumental.

3.6 Obligaciones con la BDNS no siendo convocante ni concedente

La Confederación Hidrográfica tiene un Convenio de Colaboración con la Universidad para la realización de prácticas académicas externas curriculares y proyectos de fin de carrera con tutores de la Confederación, que además otorga una bolsa o ayuda al estudio al becario. La CH no es convocante ni concedente de las ayudas (es la Universidad), limitando su participación a la tutoría y pago de la bolsa de estudio. ¿Qué obligaciones con la BDNS tiene la CH?

Este caso parece ser un convenio del artículo 5 de la [LGS](#) que se regulan por su propio régimen jurídico ajustándose a la [LGS](#). Si en el convenio no se ha estipulado nada al efecto, la convocatoria y la concesión las tendría que registrar la Universidad, que es la que acuerda estas dos fases. En cuanto a los pagos, la Confederación deberá informar de los pagos a la Universidad para que esta los registre en la BDNS.

Sería muy conveniente que esto estuviera fijado en el Convenio.

3.7 Obligaciones con la BDNS no siendo órgano convocante pero sí concedente

El Ministerio de Educación convoca unas ayudas mensuales para cubrir plazas de auxiliares de conversación, selecciona a los beneficiarios y resuelve unas ayudas con cargo a su presupuesto. A su vez, algunas Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas conceden con cargo a sus presupuestos ayudas de manutención, alojamiento y seguro sanitario a los auxiliares de conversación seleccionados por el Ministerio. ¿Cómo se registran estas ayudas en la BDNS?

El Ministerio registrará en la BDNS la convocatoria de las ayudas para cubrir plazas de auxiliares de conversación, como una convocatoria "canónica" al ser un procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Asimismo, registrará las concesiones que resuelva con cargo a su presupuesto.

Por lo que respecta a las ayudas de manutención, alojamiento y seguro sanitario de los auxiliares de conversación que concede la Comunidad Autónoma, son beneficiarios de estas ayudas los auxiliares de conversación destinados en centros españoles en España y en el exterior. Estos beneficiarios son seleccionados por el Ministerio y las Comunidad Autónoma acepta esta selección, de forma explícita o implícita.

Es la Comunidad Autónoma la que debe registrar en la BDNS las ayudas de manutención, alojamiento y seguro sanitario que concede a los auxiliares de conversación con cargo a su presupuesto, mediante el registro de una convocatoria de las denominadas "instrumentales".

3.8 Obligaciones de los Grupos de Acción Local - Programa LEADER

¿Qué obligaciones con la BDNS tienen estas entidades?

Los Grupos de Acción Local son asociaciones (asociaciones público-privadas de funcionamiento asambleario), u otras entidades sin ánimo de lucro encargadas de la gestión de la Estrategia de Desarrollo Local de un territorio concreto del medio rural, de conformidad con la reglamentación de la Unión Europea. En su organización están representados los intereses socioeconómicos locales públicos y privados, para garantizar la participación de todos los sectores en el diseño y desarrollo de la estrategia y en la gestión de los fondos Leader y de Desarrollo Local Participativo asignados al territorio.

Los GAL se financian a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), conformando el eje 4 de esta política, y desde 2014 ha evolucionado a "Desarrollo Local Participativo" (DLP) que puede ser aplicado no sólo a través del FEADER sino también a través del Fondo Europeo de Pesca (FEP), el Fondo Europeo de Desarrollo Territorial (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE).

En tanto en cuanto los GAL están ejerciendo una potestad administrativa; la actividad de fomento y ésta está financiada con fondos públicos procedentes de cualquier administración pública, son órganos obligados a remitir información a la BDNS en los mismos términos que los demás órganos.

Así, el [RD 130/2019](#) establece en su artículo 3.3 la obligación de suministrar la información a la BDNS aunque las subvenciones y demás ayudas públicas sean tramitadas a través de entidades colaboradoras, ya se trate de Administraciones públicas, entidades financieras, federaciones representativas de algún sector económico o grupo de interés, fundaciones públicas o cualquier entidad pública o privada sea cual sea su naturaleza jurídica.

3.9 Obligaciones de las corporaciones de Derecho Público

¿Deben informar las Cámaras de Comercio de las subvenciones que otorguen a sus miembros o a otros?

Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación son corporaciones de derecho público con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines

La [Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas](#) establece que "Las Corporaciones de Derecho Público se registrarán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley."

La [Ley 19/2013](#) de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno es de aplicación a las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a derecho administrativo.

En tanto en cuanto las Cámaras de Comercio estén ejerciendo una potestad administrativa (la actividad de fomento), y ésta esté financiada con fondos públicos (procedentes de cualquier administración pública), las cámaras de comercio son órganos obligados a remitir información a la BDNS en los mismos términos que los demás órganos.

Así, el [RD 130/2019](#) establece en su artículo 3.3. la obligación de suministrar la información a la BDNS aunque las subvenciones y demás ayudas públicas sean tramitadas a través de entidades colaboradoras, ya se trate de Administraciones públicas, entidades financieras, federaciones representativas de algún sector económico o grupo de interés, fundaciones públicas o cualquier entidad pública o privada sea cual sea su naturaleza jurídica.

¿Deben informar las Comunidades de Regantes de las subvenciones a sus usuarios o a otros?

El [Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas](#), en su artículo 81.1 establece que «Los usuarios del agua y otros bienes del dominio público hidráulico de una misma toma o concesión deberán constituirse en comunidades de usuarios». De conformidad con el artículo 82 estas comunidades de usuarios tienen el carácter de corporaciones de derecho público.

La [Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas](#) dice que «Las Corporaciones de Derecho Público se registrarán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley».

La [Ley 19/2013](#) de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno es de aplicación a las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a derecho administrativo.

En tanto en cuanto las Comunidades de Regantes estén ejerciendo una potestad administrativa (la actividad de fomento), y esta esté financiada con fondos públicos (procedentes de cualquier administración pública), las Comunidades de Regantes son órganos obligados a remitir información a la BDNS en los mismos términos que los demás órganos.

Así, el [RD 130/2019](#) establece en su artículo 3.3. la obligación de suministrar la información a la BDNS aunque las subvenciones y demás ayudas públicas sean tramitadas a través de entidades colaboradoras, ya se trate de Administraciones públicas, entidades financieras, federaciones representativas de algún sector económico o grupo de interés, fundaciones públicas o cualquier entidad pública o privada sea cual sea su naturaleza jurídica.

3.10 Planes estratégicos de subvenciones **[Actualizada 2025]**

¿Hay que registrar los Planes estratégicos de subvenciones en la BDNS?

El artículo 6 de la [Ley 19/2013](#) de transparencia contempla la publicación de los planes y programas plurianuales. En ejecución de tal previsión, el [RD 130/2019](#) modificó el artículo 13 del [RD 887/2006](#), para establecer que dicha publicación, en el caso de los planes estratégicos de subvenciones, se realice en el [SNPSAP](#).

El SNPSAP publicará el plan aprobado y sus actualizaciones, así como los informes sobre el grado de avance de la aplicación del plan y los resultados de la evaluación. En el ámbito de la Administración General del Estado también se publicarán los informes resumen emitidos por la IGAE como resultado del control realizado sobre la planificación estratégica.

Este **precepto no tiene carácter básico**, por lo que la publicación en el [SNPSAP](#) de los planes estratégicos de subvenciones (PES) únicamente es obligatoria en el ámbito de la Administración General del Estado. No obstante, en aras a la transparencia de la gestión de subvenciones se recomienda la publicación en el [SNPSAP](#) de todos los PES aprobados, con independencia de su ámbito subjetivo.

¿Quién y cómo se registran los planes estratégicos de subvenciones en la BDNS?

En el ámbito de la Administración General del Estado, el Equipo de Administración y Custodia de la BDNS registrará los planes estratégicos de subvenciones y sus actualizaciones en la BDNS para su publicación en el [SNPSAP](#), a petición del órgano competente.

En el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, la publicación de sus planes estratégicos en el [SNPSAP](#) requiere el registro de éstos en la BDNS por parte del órgano remitente de la Comunidad Autónoma o Entidad Local.

La publicación del plan estratégico de subvenciones en el Diario Oficial ¿se realiza a través de la BDNS?

No. Los planes estratégicos de subvenciones que se registran en la BDNS son objeto de publicación en el [Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas](#).

La BDNS no intermedia entre el Boletín Oficial correspondiente y el órgano concedente para la publicación del PES en dicho Boletín.

Las ayudas en especie ¿deben incluirse en el Plan estratégico de subvenciones? ¿Y las restantes ayudas públicas que no son subvenciones?

Las ayudas en especie están sujetas a la [Ley General de Subvenciones](#). Por tanto, deben estar incluidas en el Plan estratégico de subvenciones.

Respecto a las ayudas públicas que no tienen la naturaleza de subvenciones, aunque el artículo 8 de la [Ley General de Subvenciones](#) limita el ámbito subjetivo de los PES a las subvenciones, desde la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se defiende que el ámbito objetivo de los PES no se debe restringir al estricto concepto de subvención.

Tratándose de un instrumento de carácter programático, el Plan estratégico de subvenciones debe contemplar los procedimientos de concesión de las subvenciones contempladas en el artículo 2 de la Ley General de Subvenciones, así como de las demás entregas dinerarias sin contraprestación, avales y demás garantías, préstamos, aportaciones de financiación de riesgo, anticipos reembolsables y demás medidas de carácter financiero que supongan una ventaja económica a favor de sus beneficiarios y que se financien con cargo a fondos públicos.

Un convenio que instrumenta la concesión de una subvención con una vigencia de 4 años ¿debe incluirse solo en el PES vigente en el año de la concesión de la subvención o también en las actualizaciones posteriores del PES mientras esté vigente el convenio?

A efectos de seguimiento del PES y para evaluar el grado de consecución de los objetivos previstos con esa línea de subvención, se debe incluir en las actualizaciones del PES mientras el convenio esté vigente.

El PES tiene una vigencia, con carácter general, de 3 años. Por tanto, salvo causas debidamente justificadas en el PES que deriven de la especial naturaleza del sector afectado, el PES no tiene una vigencia anual.

A lo largo de la vigencia del PES, este está sometido a actualizaciones anuales motivadas fundamentalmente por las siguientes causas:

- Modificación del ámbito subjetivo del plan.
- Los Presupuestos inicialmente aprobados suponen una alteración respecto a los que se consideraron al elaborar el plan.
- La modificación de la planificación estratégica que orienta el plan.
- La decisión de suprimir o incorporar nuevas líneas de subvenciones o modificar las ya existentes. El hecho de que la subvención ya se haya concedido no da lugar a su supresión, si la actividad subvencionada aún se está realizando y está pendiente de pago.

Por tanto, la línea de subvención consistente en una subvención de concesión directa y plurianual se debe incluir en el PES vigente en el ejercicio que se concede la subvención, así como en las futuras actualizaciones anuales del PES. Mientras no finalicen los pagos y la actividad subvencionada, se debe seguir manteniendo esta línea de subvención en el PES para que sea objeto de seguimiento continuado.

En el PES, para cada línea de subvención hay que detallar una serie de aspectos. Algunos de estos aspectos permitirán identificar en años sucesivos que la línea de subvención ya ha sido concedida pero que la actividad subvencionada está aún realizándose y que aún está pendiente de su liquidación:

- El plazo necesario para su consecución.
- Los costes previsibles para su realización y las fuentes de financiación, detallando el origen y las anualidades.
- El Plan de acción, en el que se concretan los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el Plan, delimitando las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la concesión, el calendario de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las distintas Administraciones Públicas para su gestión.

La convocatoria de subvenciones no recogidas en el PES ¿implica la nulidad de pleno derecho del procedimiento de concesión de estas subvenciones?

En la sentencia del [Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012](#), en relación con la interpretación del artículo 8.1 de la Ley General de Subvenciones, se sentó la siguiente doctrina:

«De este precepto pueden obtenerse, sin esfuerzo dialéctico, dos conclusiones: el Plan Estratégico tiene carácter previo al establecimiento de cualquier subvención; y el precepto es imperativo y categórico. Consideramos que la dicción del precepto, exigiendo con carácter previo el Plan Estratégico, no es tangencial y no sistemático, como sostiene la sentencia de instancia, sino requisito esencial y previo a la regulación de la subvención, de tal forma que sí requiere una formalización o instrumentalización externa que, aunque no es exigible una determinada formalidad, sí una definición específica que pueda ser identificada».

En la sentencia del [Tribunal Supremo 1010/2021](#), relativa al recurso de casación 4939/2019 interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que desestimó la cuestión de ilegalidad de una ordenanza municipal de subvenciones no contempladas en el PES, el Tribunal Supremo concluyó que procedía declarar la nulidad de la Ordenanza, por motivos formales, al no acreditarse la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones municipales con carácter previo a la aprobación de la citada Ordenanza.

Así, el Tribunal Supremo no sólo mantiene el carácter esencial del Plan Estratégico de Subvenciones, cuya omisión proyecta la nulidad de pleno derecho sobre todo el procedimiento subvencional, y no sólo frente a determinados aspectos parciales que han de integrarlo, si no que añade, la posibilidad de hacer valer dicha omisión a través de la impugnación indirecta de un acto de aplicación de las bases reguladoras de la correspondiente línea subvencional, dado el carácter reglamentario de estas últimas.

Ahora bien, la [Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023](#) ha modificado el apartado 1 del artículo 8 de la LGS, que queda redactado como sigue:

«1. Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Las bases reguladoras de cada subvención harán referencia al Plan estratégico de subvenciones en el que se integran, señalando de qué modo contribuyen al logro de sus objetivos; en otro caso, deberá motivarse por qué es necesario establecer la nueva subvención, incluso aun no habiendo sido prevista en el Plan, y la forma en que afecta a su cumplimiento».

Este último párrafo contempla la posibilidad de aprobar bases reguladoras de líneas de subvenciones que inicialmente no estaban previstas en el PES, siempre que las propias bases contemplen las causas que justifican la concesión de estas subvenciones, así como la información de la subvención que sería recogida en el plan: objetivos, plazo necesario para su concesión, costes previsibles, ...

Estas subvenciones, no contempladas inicialmente en el plan, deben ser objeto de control y seguimiento, incorporando los resultados de su ejecución en los informes de seguimiento del PES y, en el caso de que se mantenga la línea de subvenciones en los siguientes años, en el PES actualizado.

3.11 Obligación de consultar la BDNS [Actualizada 2025]

¿Es obligatorio consultar la BDNS antes de efectuar concesiones (resolver convocatorias) de subvenciones y ayudas para ver concurrencias, inhabilitaciones, etc.?

No se puede decir que haya una obligación expresa, pero sí tácita, en la Ley española. De hecho, el [Tribunal de Cuentas](#) reprocha a los órganos fiscalizados que no consultan la BDNS en la gestión de sus procedimientos de concesión de subvenciones. Pero si existe esa obligación en la normativa europea.

Por otra parte, la BDNS se configura como el registro Central de Minimis a nivel nacional.

A este respecto, el [Reglamento UE 2023/2381](#) (general de minimis) establece en su artículo 6.4 «Los Estados miembros **solo concederán nuevas ayudas de minimis de conformidad con el presente Reglamento tras haber comprobado que las mismas no darán lugar a que el importe total de las ayudas de**

minimis concedidas a la empresa de que se trate sobrepase el límite máximo establecido en el artículo 3, apartado 2, del presente Reglamento y que se cumplen todas las condiciones establecidas en el mismo».

La única vía de llevar a cabo la comprobación anterior es a través de los mecanismos previstos en la BDNS.

La BDNS ofrece estas consultas a los organismos públicos en la plataforma de intermediación de datos [PID](#): consulta de inhabilitaciones, de concesiones y de concesiones de ayudas *de minimis*.

Para acceder a este servicio de consulta, los órganos obligados a suministrar información a la BDNS deberán solicitar autorización para acceder al servicio. En la página web del [Portal de la Administración Electrónica](#) se pueden descargar Catálogo de Servicios e Información de la Plataforma de Intermediación así como los formularios y procedimientos de autorización.

Asimismo, la BDNS ofrece la descarga de informes de concesiones de ayudas *de minimis* y el rastreo individual *de minimis*.

Finalmente, indicar que en la URL <https://bit.ly/3DfG1d3> puede encontrar una applet (Inspector *de minimis*) que permite comprobar las ayudas *de minimis* percibidas en los últimos tres años por los beneficiarios que se desean consultar.

Esta applet totaliza las ayudas *de minimis* percibidas por el consultado atendiendo al reglamento *de minimis* en virtud del cual se concedió la ayuda. Esta totalización permite verificar si la concesión de una nueva ayuda sobrepasa o no los límites máximos de ayudas percibidas en cualquier periodo de tres años establecido en los artículos 6.4 de los Reglamentos (UE) [2023/2831](#), [2023/2832](#) y [1408/2013](#) enmendado.

La applet también descarga las concesiones del [Reglamento \(UE\) 717/2014](#) (*minimis* de pesca y acuicultura) aunque la totalización la realiza por ayudas percibidas en los tres últimos años en lugar de los tres últimos ejercicios fiscales que señala este Reglamento (UE) *de minimis*.

Si el interesado aporta declaraciones juradas de no estar incurso en causa de inhabilitación y de las subvenciones o ayudas de minimis percibidas o certificado emitido por una Administración Pública ¿se podría prescindir de la consulta de sus datos en la BDNS?

La [Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas](#) admite que el interesado en un procedimiento administrativo aporte una declaración responsable de que cumple los requisitos exigidos para obtener el reconocimiento de un derecho.

Sin embargo, la presentación de las declaraciones responsables no limita las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.

Asimismo, si el interesado aporta certificaciones emitidas por otras Administraciones Públicas pudiera ocurrir que la información aportada no fuera completa, al no constar información de otras Administraciones Públicas con las que se ha relacionado el interesado.

Por tanto, es preciso consultar la BDNS para comprobar que la documentación aportada por el interesado responde a la realidad.

Ahora bien, los Reglamentos de *minimis* 2023/2831, 2023/2832 y 1408/2013 eximen al solicitante de presentar declaraciones responsables de las ayudas recibidas de esta categoría, por lo que es obligación de las administraciones públicas convocantes y concedentes el control de las condiciones de elegibilidad de los solicitantes.

En la URL <https://bit.ly/3DfG1d3> se encuentran una serie de applets de libre uso que permiten comprobar automáticamente sobre datos del portal del SNPSAP y de la BDNS las circunstancias anteriores, y además, a través de la Plataforma de Intermediación de Datos de las Administraciones públicas se pueden efectuar consultas a BDNS para comprobar esas circunstancias.

3.12 Consulta de los datos personales del beneficiario por parte de los órganos concedentes

¿Puede un ciudadano oponerse de forma expresa a que un órgano concedente efectúe la consulta de sus datos en la BDNS?

La BDNS tiene entre sus objetivos mejorar la gestión y colaborar en la lucha contra el fraude de subvenciones y ayudas públicas. La información que contiene tiene carácter reservado, si bien puede ser cedida, entre otros fines, para la lucha contra el fraude en la obtención de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos.

Por tanto, si el órgano concedente de subvenciones consulta los datos de una persona física en la BDNS con objeto de luchar contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones que gestiona, el ciudadano **NO** puede oponerse.

Es cierto que la [Ley Orgánica 3/2018](#) de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, regula el derecho de limitación del tratamiento y el derecho de oposición, remitiéndose en ambos casos a lo previsto en el [Reglamento UE 2016/679](#), de Protección de Datos, artículos 18 (derecho de limitación) y 21 y 22 (derecho de oposición).

Las condiciones, que según el [Reglamento UE 2016/679](#) se han de cumplir para que el interesado tenga **el derecho a la limitación del tratamiento de los datos**, se configuran en una doble vertiente:

- En la primera vertiente (condiciones del art 18.1. apartado a y d) cuando el interesado impugne la exactitud de los datos, durante el plazo que permita al responsable verificar la exactitud de estos, y cuando el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del art 21.1, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del afectado.

A este respecto hay que tener presente que la propia [LGS](#) establece que *«Se podrá denegar al interesado el derecho de acceso, rectificación y cancelación cuando el mismo obstaculice las actuaciones administrativas tendentes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de subvenciones y, en todo caso, cuando el afectado esté siendo objeto de actuaciones de comprobación o control»*.

Por tanto, aun cuando el interesado solicite a la Administración pública titular de los datos la rectificación u oposición de los mismos, la Administración actuante puede considerar oportuno mantener dichos datos en la BDNS mientras analiza la procedencia o no de su rectificación o supresión.

- En la segunda vertiente (condiciones del art 18.1. apartado b y c) el derecho de limitación se aplicará en los siguientes supuestos:
 - Cuando el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales, y solicite en su lugar la limitación de su uso.
 - Cuando el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o defensa de reclamaciones.

Ninguno de estos supuestos es de aplicación a la BDNS. El primero de ellos no opera porque el tratamiento de datos personales que realiza la BDNS está previsto en la [LGS](#) y, por tanto, no es un tratamiento de datos ilícito. El segundo de los supuestos tampoco es de aplicación porque los datos registrados en la BDNS son necesarios para los fines que la Ley atribuye a la BDNS.

Por otro lado, el art. 21 el [Reglamento UE 2016/679](#) establece que el interesado puede oponerse al tratamiento de sus datos personales (**derecho de oposición**) en los siguientes supuestos:

- Por motivos relacionados con su situación particular, el interesado puede oponerse en cualquier momento a que sus datos personales sean objeto de un tratamiento cuando esté basado en lo dispuesto en el art 6.1 del RGPD apartado e) y f), es decir, cuando sus datos son objeto de tratamiento para el cumplimiento de una misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos, o sea necesario para satisfacer los

intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o un tercero, incluyendo también la elaboración de perfiles.

El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Este supuesto no es de aplicación a la información recogida en la BDNS porque los motivos legítimos para el tratamiento de los datos personales por la BDNS (la transparencia de la gestión subvencional, la lucha contra el fraude, la mejora de la gestión, la planificación de políticas públicas de fomento, ...) prevalecen sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado.

- Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con la citada mercadotecnia.
- Cuando los datos personales se traten con fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, el interesado tendrá derecho, por motivos relacionados con su situación particular, a oponerse al tratamiento de datos personales que le conciernen, salvo que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada por razones de interés público.

Por lo que respecta a estos dos últimos supuestos, el tratamiento de los datos en la BDNS no tiene fines de mercadotecnia, investigación científica o histórica o fines estadísticos, por tanto, el interesado no puede oponerse al tratamiento de sus datos alegando alguna de estas causas.

¿El Ayuntamiento debería hacer constar en la instancia/solicitud de subvención que va a consultar la BDNS?

No es preciso que las bases reguladoras o la convocatoria recojan una advertencia sobre la consulta de los datos de los solicitantes en la BDNS, pues la [LGS](#) ya informa de ello. No obstante, como medida “proactiva” puede ser bastante eficaz.

3.13 Ayudas a la modernización de las infraestructuras turísticas [Actualizada 2025]

¿Quién tiene que registrar en la BDNS la información de las ayudas articuladas en el Real Decreto 1072/2021 por el que se regula el Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística?

El artículo 11.2 del [Real Decreto 1072/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula el Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística](#), establece que «3. Las convocatorias se efectuarán por cada una de las comunidades autónomas...». Por su parte, en su artículo 13.1 establece que: «1. Corresponde a las comunidades autónomas dictar y notificar resolución de concesión o denegación de las solicitudes de préstamos que se presenten en su ámbito territorial.».

Por tanto, son las CCAA las que deben registrar las convocatorias y concesiones de los préstamos con cargo al F.C.P.J. en su ámbito territorial.

3.14 ¿Pueden las Universidades acogerse al sistema de gestión de convocatorias “no intermediado”?

Dada la autonomía económica y financiera que la Ley Orgánica de Universidades garantiza a estas instituciones, ¿pueden acogerse al sistema no intermediado?

En el caso de que una Comunidad Autónoma optara por el sistema “no intermediado”, previsto en la DA 6ª de la Resolución de 15 de junio de 2020 de la IGAE, la decisión dependería de los términos en los que la Comunidad Autónoma a la que esté adscrita o de la que dependa la Universidad, adoptase el acuerdo para optar por el sistema no intermediado, y de cómo el acuerdo pudiera imponerse a la Universidad considerando su autonomía.

Lo que no puede, en ningún caso, una Universidad es optar por sí misma por el sistema no intermediado, cuando la Comunidad Autónoma se mantiene en el sistema intermediado.

3.15 Obligación de uso de servicios web (WS) por los Diarios Oficiales

¿Es obligatorio para los Diarios Oficiales conectarse a los servicios web de la BDNS?

Todos los Diarios Oficiales deben conectarse con la BDNS a través de servicios web. Si bien, dado que algunos Diarios Oficiales pueden no disponer de medios técnicos para efectuar esta conexión, la BDNS envía a la dirección electrónica que señale el Diario Oficial, el extracto de la convocatoria a publicar. Se recomienda la lectura de:

- Descripción de los mecanismos de publicidad de las convocatorias de subvenciones y ayudas públicas.pdf
- Servicios Web Boletín. Ficheros WSDL y XSD.zip
- Especificaciones_WS_Publicacion_Convocatorias.pdf
- [Resolución de 15 de junio de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado](#), por la que se regula el proceso de registro y publicación de convocatorias en el SNPSAP.

Todos estos documentos se encuentran en el [repositorio de documentación](#).

3.16 Concepto de DIR3 [Actualizada 2025]

¿Qué es el código DIR3?

El Artículo 9 del [Esquema Nacional de Interoperabilidad \(ENI\)](#) (Real Decreto 4/2010) estipula que las Administraciones públicas «...mantendrán una relación actualizada de sus órganos administrativos y oficinas de registro y atención al ciudadano, y sus relaciones entre ellos. Dichos órganos y oficinas se codificarán de forma unívoca y esta codificación se difundirá entre las Administraciones públicas».

Y añade además que «Cada Administración pública regulará la forma de creación y mantenimiento de este Inventario, que se enlazará e interoperará con el Inventario de la Administración General del Estado en las condiciones que se determinen por ambas partes y en el marco de lo previsto en el presente real decreto; en su caso, las Administraciones públicas podrán hacer uso del citado Inventario centralizado para la creación y mantenimiento de sus propios inventarios».

La Dirección General para el Impulso de la Administración Electrónica, con el fin de dar respuesta a los requisitos del ENI, puso en marcha el "Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas", conocido como [DIR3](#), para proporcionar un Inventario unificado y común a toda la Administración, que incluirá la relación de las unidades orgánicas y sus oficinas asociadas, y facilitará el mantenimiento distribuido y corresponsable de la información.

Aparte del mandato legal, y dado que BDNS interactúa con 4 niveles de administraciones públicas (local, autonómica, nacional y europea), es de sentido común que todas estas coordinen sus directorios de órganos y oficinas públicas. Y ese mecanismo de coordinación actualmente es [DIR3](#).

¿Quién asigna el código DIR3? ¿Dónde se puede consultar?

El Ministerio de Transmisión Digital, y las unidades responsables en las distintas Comunidades Autónomas.

Se puede consultar, para cualquier unidad administrativa, en:

<https://directorio3.redsara.es/directorioApp/actionPub/directorioApp/inicio.do>

¿Cómo se conforma el código, qué reglas sintácticas debe seguir?

El código, para ser válido en su sintaxis, debe cumplir la siguiente expresión regular:

`([AUIJO][0-9]|CC|G[EA]|E([AC]|[0-9])|L(A|[0-9]))[0-9]{7}`

Que significa los siguiente:

Primera parte `([AUIJO][0-9]|CC|G[EA]|E([AC]|[0-9])|L(A|[0-9]))`:

- `[AUIJO][0-9]`: Comienza con A, U, I, J ó O (letra o) seguido de un dígito (0-9).
- `CC`: Ó puede ser exactamente "CC".
- `G[EA]`: Ó comienza con G seguida de E o A.
- `E([AC]|[0-9])`: Ó comienza con E seguida de A, C o un dígito (0-9).
- `L(A|[0-9])`: Ó comienza con L seguida de A o un dígito (0-9).

Segunda parte `([0-9]{7})`:

- Después del prefijo inicial, debe haber exactamente 7 dígitos.

Ejemplos válidos:

- A01234567 (A seguido de un dígito y 7 dígitos más).
- CC1234567 (CC seguido de 7 dígitos).
- GE1234567 (GE seguido de 7 dígitos).
- EA1234567 (EA seguido de 7 dígitos).
- L01234567 (L0 seguido de 7 dígitos).

Ejemplos no válidos:

- B12345678 (B no está permitido en `[AUIJO]` ni en las otras opciones).
- A123456 (Faltan dígitos, solo tiene 6 después del prefijo).
- EA12B3456 (Contiene una letra B, solo se permiten dígitos en los últimos 7 caracteres).

3.17 Responsabilidad sobre la calidad de los datos de la BDNS

¿Quién es responsable de la calidad/veracidad de datos en el portal del SNPSAP y en la BDNS?

Los datos son propiedad del órgano gestor. Ante él deben ejercitar por los ciudadanos los derechos de rectificación.

Las competencias y responsabilidades que la ley asigna a la IGAE respecto a la BDNS quedan determinadas en el siguiente precepto: «La IGAE es el órgano responsable de la administración y custodia de la BDNS y adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y seguridad de la información» [20.3 LGS].

Las entidades obligadas a registrar información en la BDNS están enumeradas en 20.4 LGS. Dentro de esas entidades la misma disposición establece que «Serán responsables de suministrar la información de forma **exacta, completa, en plazo** y respetando el modo de envío establecido: a) En el sector público estatal, los **titulares** de los órganos, organismos y demás entidades que concedan las subvenciones y ayudas contempladas en la Base de Datos. b) En las Comunidades Autónomas, la **Intervención** General de la Comunidad Autónoma u órgano que designe la propia Comunidad Autónoma. c) En las Entidades Locales, la **Intervención** u órgano que designe la propia Entidad Local» [20.4 LGS].

Este precepto establece una responsabilidad por la calidad/veracidad de la información de la BDNS (titulares de órganos estatales, interventores generales de CCAAs y de EELL o quien hayan designado sus administraciones).

Además, el [RD 130/2019](#) dice que «Son responsables del suministro de la información a la BDNS los titulares de los órganos indicados en el artículo 20.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. **Los responsables del suministro de la información implantarán** las medidas que garanticen la integridad, autenticidad y exhaustividad de la información suministrada a la BDNS. En cada comunidad autónoma o en cada entidad local deberá designarse un único Administrador Institucional, que actuará como interlocutor con la Intervención General de la Administración del Estado, realizando las actuaciones de administración de la BDNS en su ámbito

y **controlando la implantación y aplicación de las medidas dirigidas a garantizar** el correcto suministro de información a la BDNS y el uso adecuado de su contenido» [10 RD 130/2019].

Nítidamente esta disposición desdobra las responsabilidades: una a nivel de diseño (titulares e interventores) y otra a nivel de ejecución del control de calidad (administradores institucionales).

¿Qué ocurre si hay fallos de exhaustividad, precisión, coherencia, puntualidad, ...en los datos de la BDNS?

En el caso de inhabilitaciones para la percepción de ayudas, y aplicable por analogía, a otros casos, por ejemplo, en *minimis*, el [RD 130/2019](#) prescribe «*Si como consecuencia del incumplimiento de la obligación prevista en el apartado anterior, se diera lugar a la concesión de una subvención a un beneficiario incurso en una causa que, de haberse conocido, hubiese provocado la imposibilidad de obtener la condición de beneficiario {...}, o se impidiera conocer a los órganos administrativos la existencia de supuestos de incumplimiento {...} responderá el órgano administrativo u organismo o entidad pública obligado al suministro de la información señalado en el apartado 1 del artículo 3, en los términos previstos en la legislación vigente...*» [10.2 [RD 130/2019](#)].

Además ese Real Decreto menciona explícitamente las responsabilidades antes sanciones por infracciones a normas de la UE «*Si como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de suministro de información a la BDNS derivadas de normas del derecho de la Unión Europea, **el Reino de España fuera sancionado** por las instituciones europeas, o condenado por tribunales internacionales o por órganos arbitrales, las Administraciones públicas y demás **entidades obligadas asumirán las responsabilidades** que se deriven de tal incumplimiento, en los términos previstos en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimientos del Derecho de la Unión Europea, dictado en desarrollo de la disposición adicional segunda de la citada ley*» [10.4 [RD 130/2019](#)].

Y cierra con «*La falta de suministro de información por parte de las Administraciones, organismos y demás entidades sujetas a esta obligación constituye una infracción administrativa contemplada en el artículo 57 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Su exigencia se realizará sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir las autoridades o los empleados públicos que hayan participado en su comisión*» [10.5 [RD 130/2019](#)].

Esa “falta de suministro” (omisión de registro) es equivalente, a los fines de la BDNS, a un suministro de pobre calidad, impreciso, incompleto, impuntual,

4. CONSIDERACIÓN DE DETERMINADOS GASTOS COMO SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS

NOTA: El análisis de la naturaleza de los gastos y, por ello, de la decisión de su registro a la BDNS, corresponde al órgano competente para la gestión de los créditos. En caso de que la normativa aplicable de lugar a dudas respecto a su consideración como subvenciones y ayudas públicas o no, serán los servicios jurídicos del propio órgano quienes deban evacuar informe sobre este tema.

4.1 Concepto de “ayuda pública”

La BDNS, además de las subvenciones, también publica otras ayudas públicas. Independientemente de la denominación utilizada. ¿Qué requisitos debe reunir una figura para ser considerada ayuda pública y estar incluida en el ámbito objetivo de la BDNS?

El ordenamiento jurídico nacional carece de una definición específica y singularizada del concepto de “ayuda pública”, a pesar de que diversas normas aluden a este concepto. Así, la [Ley 19/2013](#) de transparencia establece en su artículo 8.1.c la obligación de hacer públicas «Las subvenciones y **ayudas públicas** concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios».

Al día de hoy, la concreción más precisa del concepto de “ayuda pública” en el derecho positivo español se encuentra en el artículo 2 del [RD 130/2019](#), donde, junto con las subvenciones y entregas dinerarias sin contraprestación, se recogen una serie de figuras que otorgan ventajas económicas a favor de sus beneficiarios y se financian con cargo a fondos públicos. Estas figuras, que el citado Real Decreto encuadra dentro del concepto de “ayuda pública”, se recogen en la BDNS

Las dificultades estructurales para una correcta determinación de los elementos constitutivos de este tipo de relación jurídica impiden ofrecer una definición específica de “ayuda pública”. Además, la aplicación de este concepto, en ocasiones exige apreciaciones de carácter técnico o evaluaciones económicas complejas.

A modo de ejemplo, la vacuna de la gripe que se dispensa de forma gratuita podría ser considerada “ayuda pública”, pero por su naturaleza de servicio recogido en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud queda excluida de este concepto. O las ayudas en forma de subsidios salariales para los empleados a fin de evitar las reducciones de plantilla entrarían en la esfera de las “ayudas estatales” si se circunscriben a determinados sectores, regiones o tipos de empresas.

Los motivos expuestos aconsejan que la delimitación del concepto “ayuda pública” sea enumerativa, como ha hecho el artículo 2 del [Real Decreto 130/2019](#), esto es:

«Artículo 2. Ámbito objetivo de la BDNS.

1. La BDNS contendrá información sobre todas las **subvenciones** y las siguientes ayudas públicas:

- a) Las **entregas dinerarias sin contraprestación** contempladas en el artículo 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
- b) Las **ayudas en especie** contempladas en la disposición adicional quinta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
- c) Los **avales y demás garantías, préstamos, aportaciones de financiación de riesgo, anticipos reembolsables** y demás medidas de carácter financiero que supongan una ventaja económica a favor de sus beneficiarios, salvo cuando vayan dirigidos a las Administraciones públicas contempladas en el artículo 3.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

- d) Los **beneficios fiscales y los beneficios en las cotizaciones a la Seguridad Social** que tengan la consideración de ayuda de estado por implicar una ventaja económica de carácter selectivo, siempre que superen los umbrales mínimos exigidos por las normas comunitarias.
- e) Las subvenciones y demás ayudas a partidos políticos.
- f) Cualquier otra ayuda de carácter no fiscal que sea considerada, a efectos del derecho de la Unión Europea, como ayuda estatal de acuerdo con lo previsto en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y las normas que lo desarrollen».

4.2 Ayudas de pago básico de la PAC

¿Es obligatorio registrar la información del pago básico PAC en la BDNS?

El régimen de pago básico, que sustituye al anterior régimen de pago único, se integra dentro de los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la PAC.

Por estar financiadas con fondos de la Unión Europea, en virtud del art. 6 de la [LGS](#), a estas ayudas les es de aplicación, con carácter supletorio, el procedimiento de concesión y control de subvenciones de la citada ley.

Así, estas ayudas están sujetas al principio de publicidad de la [LGS](#).

¿Quién es el órgano obligado a registrar la información en la BDNS en este caso?

La aplicación de los fondos europeos agrícolas en España se lleva a cabo conforme a la distribución de competencias entre las distintas administraciones públicas (Administración General del Estado y Comunidades Autónomas) prevista en la normativa.

Esta distribución competencial ha dado lugar a la configuración del sistema español de gestión de fondos europeos agrícolas compuesto por el FEAGA y los organismos pagadores de las comunidades autónomas, donde corresponde al FEAGA las funciones de coordinación y las de representación de España ante los órganos europeos encargados de la financiación de la PAC, y a los organismos pagadores de las Comunidades Autónomas las funciones de gestión y pago de las ayudas en las que son competentes.

El [Real Decreto 130/2019](#) ha derogado las disposiciones adicionales tercera y cuarta del Reglamento de la [LGS](#) que establecían que el suministro de la información a la BDNS correspondía al Fondo Español de Garantía Agraria respecto a las ayudas concedidas con cargo a la Sección Garantía del FEAGA o a los fondos que le sustituyan, y a las Autoridades de Pago respecto a las ayudas recibidas de la Unión Europea relativas a Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión. Asimismo, el [RD 130/2019](#) derogó la [Resolución de 13 de enero de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado](#), por la que se establecían las condiciones de envío de la información de subvenciones y ayudas públicas procedente del Fondo Español de Garantía Agraria.

Por ello, esas ayudas están sujetas al régimen general de suministro de información a la BDNS, siendo los organismos pagadores de las Comunidades Autónomas los obligados a registrar en la BDNS la información sobre la convocatoria y las ayudas concedidas.

4.3 Ayudas sociales a funcionarios o empleados laborales

¿Son subvenciones las ayudas de acción social y los anticipos reembolsables que se conceden a los funcionarios o empleados públicos?

No. Las ayudas por Acción Social y los anticipos no reembolsables concedidos al personal de las administraciones públicas no son subvenciones ni ayudas públicas. Estas “ayudas” entran dentro del ámbito retributivo del personal y tienen el tratamiento fiscal y presupuestario propio de las retribuciones al trabajo.

¿Son subvenciones las ayudas sociales por estudio de hijos o tratamientos médicos que se otorgan a los funcionarios de la Comunidad Autónoma?

No. Las ayudas o mejoras sociales recogidas en un Acuerdo de la CCAA con sus propios funcionarios o en un Convenio Colectivo, se consideran gastos de personal y no subvenciones. Estas “ayudas” tienen el tratamiento fiscal y presupuestario de los gastos de personal.

4.4 Cuotas a asociaciones

¿Son subvenciones las cuotas de socio que el Ayuntamiento paga a la Asociación para la Defensa del Arte Rupestre o a la Asociación para el Desarrollo de la Física Teórica?

No. Las cuotas cuyo pago resulte obligatorio, por su condición de socio, según lo indicado en el art. 22 de la [Ley Orgánica 1/2002](#), reguladora del Derecho de Asociación, no son subvenciones.

¿Son subvenciones las cuotas que el Ayuntamiento paga a la FEMP?

No. Según la Disposición adicional quinta de la [Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local](#) «Las entidades locales pueden constituir asociaciones, de ámbito estatal o autonómico, para la protección y promoción de sus intereses comunes, a las que se les aplicará su normativa específica y, en lo no previsto en él, la legislación del Estado en materia de asociaciones...». Las cuotas satisfechas a las entidades a las que hace mención no son subvenciones al estar expresamente excluidas del ámbito de aplicación de la [LGS](#), en su artículo 2.3.

4.5 Contribuciones a organismos, fondos, y programas de carácter internacional [Actualizada 2025]

Si las contribuciones a organismos internacionales no son subvenciones ¿por qué se deben registrar en la BDNS?

La disposición adicional única del [Real Decreto 130/2019](#) establece la obligación de registrar en la BDNS la información de las contribuciones obligatorias, voluntarias y de todas aquellas aportaciones económicas efectuadas por las Administraciones públicas a organismos, programas, fondos o entidades de carácter internacional.

La finalidad de recopilar esta información en la BDNS es la de contribuir a la de coordinación de las políticas de cooperación internacional (art. 20.2 de la [LGS](#)).

¿Cómo se registra en la BDNS una contribución internacional?

El procedimiento de aprobación de las contribuciones internacionales carece del acto administrativo de convocatoria, por lo que el registro de las contribuciones en la BDNS solo se puede realizar como una convocatoria instrumental. Al seleccionar el tipo de convocatoria instrumental se habilita la casilla de verificación **¿Es contribución, cuota o aportación a organismos, fondos o entidades internacionales DAU del RD 130/2019?** Es esencial que en el registro de la contribución se marque esta casilla. Esta casilla informa al consultante de la BDNS de que la información no corresponde a una subvención o ayuda pública sino a una contribución, obligatoria o voluntaria, o aportación económica efectuada a organismos, programas, fondos o entidades de carácter internacional.

Por otra parte, al no tratarse de subvenciones y ayudas públicas, su registro presenta las siguientes peculiaridades:

- Documento de la convocatoria en español: Es aconsejable que los documentos que se suban a la BDNS se encuentren en castellano, al ser una base de datos de ámbito nacional.
- Campo URL de las BBRR: La cumplimentación de este campo es obligatoria. Su finalidad es mostrar al consultante la base legal en virtud de la cual se acuerda la contribución internacional. A modo de ejemplo, si la contribución está prevista nominativamente en los Presupuestos, se puede indicar la URL

de los presupuestos. Si la autorización de la contribución se acordó por Consejo de Ministros se puede recoger la URL del acuerdo de la reunión de Consejo de Ministros que se publica en la página web de la Moncloa. Asimismo, se puede registrar la URL de la página del organismo que recibe la contribución en la que se publica que España es un miembro del organismo.

- Finalidad: Se recomienda seleccionar la opción "Otras actuaciones de carácter económico".
- Sectores económicos de impacto: Si clicas sobre la casilla que indica la flecha en la siguiente imagen, se seleccionarán todos los sectores económicos:

¿En qué sección de la BDNS podría buscarse la información de las contribuciones obligatorias, voluntarias y de todas aquellas aportaciones económicas efectuadas por las Administraciones públicas a organismos, programas, fondos o entidades de carácter internacional ha de suministrarse a la BDNS (DA del RD 130/2009)?

Para obtener esa información es preciso acceder a la consulta de convocatorias, marcar la casilla de verificación contribución internacional y, al ejecutar la búsqueda, se mostrarán todas las "convocatorias instrumentales" que recogen estas contribuciones. Desde las convocatorias se puede acceder directamente a los datos de las concesiones, donde aparecerán también los beneficiarios.

En el Informe de Convocatorias Instrumentales, del módulo Informes, de la aplicación web BDNS, permite obtener esa información.

4.6 Subvenciones a concesionarios y contratistas [Actualizada 2025]

¿Hay que registrar en BDNS las subvenciones a concesionarios y contratistas del artículo 265.2 de la Ley de Contratos del Sector Público?

La [Ley 9/2017](#) de Contratos del Sector Público contempla varios tipos de aportaciones públicas para la financiación de un contrato, distinguiendo dos grupos de aportaciones: las que financian la construcción (art. 266) y las que financian la explotación (art. 268). En este segundo grupo se citan expresamente las "subvenciones", pero no se define su objeto o su forma de cálculo. La doctrina viene señalando que tales subvenciones se establecen para compensar el importe deficitario de las tarifas o precios públicos que abonan los usuarios, y que son fijadas por el órgano de contratación.

Si las subvenciones han sido establecidas en el contrato de concesión según este modelo, tales subvenciones suponen una ayuda a favor de los usuarios, y **deben ser registradas en la BDNS**.

En cuanto al régimen de publicidad de la "convocatoria" en la BDNS, sería aplicable el procedimiento de "convocatoria instrumental", que rige para las subvenciones en las que no se promueve un procedimiento de concurrencia competitiva.

En cuanto a las concesiones, es probable que se desconozca a los beneficiarios de la subvención (los usuarios de la obra) por lo **que la información se rendirá de forma acumulada, aplicando al concesionario** (en esta solución se sigue el criterio que promueve la DG COMP de la Comisión Europea en cuanto a la rendición de información acerca de subvenciones en las que participa un intermediario y se desconoce el desglose por beneficiarios finales).

A las consideraciones anteriores cabe añadir, por completar el modelo, la doctrina del Tribunal Supremo que, al analizar el régimen de tributación de las aportaciones contempladas en los artículos 254 y 268 de la [Ley 9/2017](#), establece una diferenciación: mientras que las primeras son calificadas como pago anticipado del coste de las obras (por tanto, vinculadas a la idea de contraprestación y excluidas del ámbito de las subvenciones), las segundas se califican como propias subvenciones ([STS de 16 de febrero de 2016; recurso de casación 197/2014](#)).

En conclusión, las subvenciones a concesionarios de servicios públicos para **cubrir déficit de explotación** se deben registrar en la BDNS.

El Ayuntamiento ha adjudicado un contrato de prestación del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros en autobús de un municipio. En el citado contrato se establece que, con finalidad de cubrir el déficit, y, mensualmente, el contratista recibirá un pago por parte del Ayuntamiento acorde a la diferencia entre el coste de prestación del servicio y los ingresos reales obtenidos por el mismo. ¿Esta aportación del Ayuntamiento tiene naturaleza de subvención? De ser así, ¿se debe registrar en la BDNS?

Sí. Las subvenciones para cubrir el déficit de explotación de la actividad general de transporte del concesionario tienen la naturaleza de subvenciones y se debe registrar en la BDNS.

4.7 Uso gratuito de patrimonio municipal

El Instituto Municipal de Deportes tiene un polideportivo. En el reglamento de uso de las instalaciones se contempla la potestad del Presidente del Instituto para conceder determinados usos de instalaciones a clubs deportivos, sin coste para ellos (usos gratuitos). ¿Deben tratarse en la BDNS como ayudas en especie?

No. Los usos gratuitos de esas instalaciones, mientras se ajusten a lo establecido en la [Ley 33/2003](#), de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, especialmente a lo estipulado en el artículo 92, **no son subvenciones**, y no deben registrarse en la BDNS.

4.8 Cesión de viviendas de un ayuntamiento en comodato a familias sin recursos

Un Ayuntamiento tiene cedidas en comodato varias viviendas de su propiedad a familias sin recursos. Por otro lado, otras viviendas de su propiedad las ceden a Asociaciones que se encargan de dar cabida por las noches a personas sin hogar. ¿Son subvenciones los dos casos contemplados?

No. Los negocios sobre los que versa la consulta no responden a entregas dinerarias sin contraprestación, pues en ellos se presta o cede el uso de un bien inmueble. Tampoco responden a ayudas en especie, pues el bien inmueble cuyo uso se presta o cede no ha sido adquirido con la finalidad exclusiva de entregárselo al tercero.

Estamos ante negocios patrimoniales, que de conformidad con la Disposición adicional quinta de la [LGS](#) se rigen por la legislación patrimonial.

El comodato es un préstamo de uso esencialmente gratuito que no transfiere la propiedad sino el uso de la cosa durante un cierto tiempo y para una finalidad determinada, y que produce la obligación de restituirla. Esta figura está regulada en el [Código Civil](#) (artículo 1470 y 1741).

Hay que acudir a la [Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas](#) y su Reglamento de desarrollo ([Real Decreto 1373/2009](#)) para estudiar y analizar esta figura y su posible aplicación en el ámbito local.

El apartado 1 del artículo 145(1) de la [Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas](#) establece que «*los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado cuya afectación o explotación no se juzgue previsible podrán ser cedidos gratuitamente, para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su competencia, a comunidades autónomas, entidades locales, fundaciones públicas o asociaciones declaradas de utilidad pública*».

Por su parte, el [Real Decreto 1373/2009](#), establece en su artículo 134(1):

«1. El uso de los bienes o derechos patrimoniales de la Administración General del Estado podrá ser cedido para fines de utilidad pública o interés social a las personas jurídicas señaladas en los apartados 1 y 2 del artículo 145 de la Ley, por un plazo de tiempo determinado.»

Por otro lado, el [Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales](#) no contiene regulación alguna sobre la figura de cesión de uso de bienes inmuebles a personas físicas, si bien, en el apartado 2 del artículo 109 se establece que *«los bienes inmuebles patrimoniales no podrán cederse gratuitamente sino a entidades o instituciones públicas para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, así como a las instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro»*.

De los preceptos señalados se deduce que la premisa necesaria para poder llevar a cabo la cesión de uso del inmueble del Ayuntamiento es que su destinatario sea una entidad o institución pública o institución privada de interés público sin ánimo de lucro. Cuestión ésta que no se cumple, cuando la cesión de uso del bien inmueble se realiza a favor en una persona física, vecino del Ayuntamiento, que se encuentra en una situación de necesidad económica o exclusión social.

Ahora bien, el artículo 25 de la [Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen establece que el Municipio](#) ejercerá en todo caso como competencias propias, entre otras, la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, servicio que deben prestar los Municipios con población superior a 20.000 habitantes (artículo 26 de LRBRL).

Atendiendo a esta obligación, los Servicios Social del Ayuntamiento pueden ofrecer el Programa de Alojamientos Provisional que tenga por finalidad *«facilitar el acceso de la ciudadanía del Ayuntamiento a un alojamiento temporal en las viviendas municipales adscritas al Servicio de Acción Social, como instrumento para el desarrollo de intervenciones dirigidas a la promoción e inserción socio-laboral de las personas que componen dicha unidad familiar»*, mediante un contrato de comodato.

Por tanto, este contrato se rige por su legislación específica en materia de servicios sociales, el Código Civil y supletoriamente por la normativa patrimonial.

En consecuencia, ni el contrato de comodato de una vivienda municipal a favor de familias sin recursos ni la cesión de una vivienda a una Asociación que se encarga de dar cabida por las noches a indomiciliados tienen la naturaleza de subvención y, por tanto, **no tienen que registrarse en la BDNS**.

4.9 Entregas a cuenta de la recaudación tributaria de las EELL

¿Son subvenciones los anticipos de la recaudación de los tributos delegados por las entidades locales en virtud de los previsto en el art. 7.1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo? ¿Deben registrarse en la BDNS?

No. Los anticipos de la recaudación **no tienen la consideración de subvenciones** tal y como las define la [LGS](#) en su artículo 2.1, ya que no tienen por finalidad el fomento de una actividad de utilidad pública o de interés social. Su finalidad es acercar la financiación de las entidades locales a la recaudación real de los ingresos cuya gestión recaudatoria ha sido delegada.

La financiación que obtienen las entidades locales que han delegado sus competencias recaudatorias está constituida por las entregas a cuenta de cada uno de los tributos delegados y la liquidación definitiva que corresponda.

Tanto los anticipos de la recaudación como la liquidación definitiva de la misma son mecanismos ordinarios de las relaciones financieras que se derivan de la aplicación del régimen de financiación de las entidades locales y **no tienen naturaleza de ayudas**.

En consecuencia, los anticipos de la recaudación de los tributos delegados por las entidades locales **no deben registrarse en la BDNS**.

4.10 Convenios entre Ayuntamiento y Federación deportiva para la celebración de un evento deportivo

En el convenio el Ayuntamiento se compromete a pagar determinados gastos para la celebración de un evento deportivo. ¿Deben registrarse en la BDNS?

El convenio consultado tiene por objeto la celebración de un encuentro deportivo, un espectáculo o evento de semejantes características. El interés del Ayuntamiento en la celebración de este evento motiva que realice una aportación económica a favor del organizador o asuma el compromiso de pago de determinados gastos necesarios para su celebración.

Para determinar si la aportación económica comprometida por el Ayuntamiento tiene la naturaleza jurídica de subvenciones es preciso verificar si concurren los requisitos que establece el artículo 2 de la [LGS](#).

La primera nota definitoria del concepto de subvención es que se produzca una atribución patrimonial. La subvención es un acto jurídico a través del cual la Administración concedente proporciona a un tercero un beneficio económico con el fin de que este desarrolle una determinada actividad considerada de interés general.

En el supuesto analizado, el Ayuntamiento asume el pago de un gasto propio del evento (pago de la ambulancia medicalizada, adquisición de los trofeos, etc.), recibiendo el organizador del evento un beneficio económico.

El segundo elemento propio de una subvención es que la aportación se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios, sin perjuicio de que las cantidades otorgadas en concepto de subvención estén vinculadas al cumplimiento de un fin y de las obligaciones instituidas que han sido libremente aceptadas por el beneficiario.

En este caso, el Ayuntamiento no recibe ningún bien o servicio a cambio de su aportación, sino que realiza una aportación patrimonial gratuita. El compromiso del organizador del evento es celebrar dicho evento, pero no se compromete a entregar ningún bien ni prestar ningún servicio al Ayuntamiento.

La tercera característica de toda subvención es que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

Con la firma del convenio, el organizador del evento se compromete a organizar y celebrar dicho evento.

Finalmente, en toda subvención el objetivo del proyecto, acción, conducta o situación financiada debe ser el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

Sin duda, para el Ayuntamiento la celebración del evento tiene un interés general, de lo contrario no formalizaría el convenio.

Por otro lado, al convenio según lo previsto en el artículo 2.3.b) del [Reglamento de la LGS](#) le es de aplicación el Reglamento y la [LGS](#):

«Los convenios de colaboración por los que los sujetos previstos en el artículo 3 de la Ley, asumen la obligación de financiar, en todo o en parte, una actividad ya realizada o a realizar por personas sujetas a derecho privado y cuyo resultado, material o inmaterial, resulte de propiedad y utilización exclusiva del sujeto de derecho privado».

Por lo expuesto, el objeto del convenio disfruta de la naturaleza jurídica de subvención y la información correspondiente sí hay que registrarla en la BDNS.

4.11 Convenios entre Ayuntamiento y un club deportivo para la promoción del municipio **[Nueva 2025]**

El Ayuntamiento formaliza un convenio de colaboración con un club deportivo del municipio para el fomento del deporte. El Ayuntamiento se compromete a realizar una aportación económica y el club a difundir la participación del Ayuntamiento en las actividades del club. ¿Esta aportación es una subvención?

La [Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público](#) establece en su artículo 48.7 que «cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa autonómica de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable».

El artículo 2 de la [LGS](#) define la subvención como toda entrega dineraria sin contraprestación, sujeta a la realización de la actividad que se pretende fomentar y que tiene por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

Para determinar si el convenio de colaboración formaliza una subvención o no, es preciso analizar el objeto del convenio y las condiciones establecidas en él:

- Se estará ante una subvención si el Ayuntamiento, en el ejercicio de su potestad de fomento, concede una subvención para financiar la actividad deportiva del club, considerada de utilidad pública o interés social. Por tanto, el objeto del convenio no es financiar la publicidad del municipio.

En este caso, la subvención concedida está sometida a los requisitos, obligaciones y procedimientos que establece la [LGS](#): el beneficiario se compromete a realizar la actividad subvencionada, la actividad propia del club, en los términos establecidos por el Ayuntamiento y a justificar la aplicación de los fondos recibidos, de manera que resulta esencial el destino dado a dichos fondos, todo ello sin perjuicio de la publicidad a la que está obligado el beneficiario, en aplicación del artículo 18.4 de la [LGS](#). Por tanto, lo esencial del convenio no es la promoción y difusión del municipio sino la actividad deportiva del club.

- No se tratará de una subvención si el club deportivo, en el desarrollo normal de su actividad, se compromete exclusivamente a realizar actuaciones de promoción y difusión del municipio en los términos convenidos con el Ayuntamiento.

En este caso, prevalece interés publicitario. El Ayuntamiento no pretende el fomento de una actividad de interés público al financiar al club deportivo, sino obtener del club la colaboración publicitaria comprometida. Por su parte, el club se beneficia de la aportación económica recibida del Ayuntamiento por la difusión publicitaria del municipio.

El convenio de colaboración contempla prestaciones propias del contrato de patrocinio publicitario. De conformidad con el artículo 47.1 de la [Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público](#), los convenios no pueden tener por objeto prestaciones propias de los contratos. Por tanto, se debería haber formalizado un contrato de patrocinio definido en el artículo 22 de la [Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad](#) como «...aquél por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador».

4.12 Gestión de los servicios municipales prestados por clubs deportivos [Actualizada 2025]

¿Se trata de un contrato o de una subvención?

El esquema para la prestación de un servicio de promoción del deporte municipal es el siguiente:

- **Gestión directa.** La Administración presta el servicio, normalmente con medios propios, asumiendo el riesgo y ventura de la actividad y ejerciendo de modo exclusivo todos los poderes de decisión y de gestión (artículos 41 y 68.1 del [Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales](#)).

La gestión directa de los servicios comprenderá las siguientes formas

- Gestión por la Corporación
- Gestión directa por personificación interpuesta:
 - Fundación pública del servicio.
 - Sociedad privada, municipal o provincial.
- **Gestión indirecta.** La Administración encomienda la prestación a un tercero, que aporta todos o parte de los medios necesarios, trasladándole el riesgo y ventura y los poderes de decisión sobre el servicio; sin perjuicio de ostentar siempre los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha del servicio público (artículos 126.1 y 127.1.2ª del [Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales](#)).
 - Gestión contractual:
 - Concesión de servicio. La Administración traslada al adjudicatario el riesgo y ventura de la gestión del servicio.
 - Contrato de servicios. No hay transferencia del riesgo operacional al contratista.
 - Gestión no contractual:
 - Concierto social. Se encomienda la prestación de un servicio a una organización ya existente que preste ese servicio. La remuneración del operador puede realizarse mediante la participación de este en el margen del servicio o bien mediante la entrega de una **subvención**.
 - Gestión delegada. La administración y el empresario participan en los resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato.
 - Otra modalidad prevista en las normas autonómicas

Siendo los productores del servicio los clubes deportivos del municipio, cabe pensar que la concurrencia se restringe. Al respecto conviene indicar que la falta de concurrencia no es un elemento delimitador entre el ámbito contractual y el ámbito de las subvenciones públicas.

Por el contrario, la delimitación de una figura y otra (la delimitación de un contrato y una subvención) se alcanza tras el conocimiento de las relaciones jurídicas y de las responsabilidades que se adquieren por una u otra vía.

La [LCSP](#) admite en su exposición de motivos todas las soluciones posibles:

«...los poderes públicos siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos determinadas categorías de servicios, en concreto los servicios que se conocen como servicios a las personas, como ciertos servicios sociales, sanitarios, incluyendo los farmacéuticos, y educativos u organizar los mismos de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todos los operadores económicos que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, siempre que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación».

Es decir, la [LCSP](#) contempla no sólo el régimen contractual, sino también la gestión directa de los servicios o la gestión indirecta, mediante la financiación de los servicios –léase subvenciones–.

Probablemente la forma más sencilla de decidir si el Ayuntamiento desea optar por el contrato o por la subvención pase por centrar el análisis en las siguientes cuestiones:

- En el caso de contratos, el Ayuntamiento tiene que asumir como propia la provisión del servicio (arts. 284 y 312 de la [LCSP](#)). Esta asunción comporta el potencial riesgo de responsabilidades, incluso en el caso de contratos de concesión de servicios (ver art. 285.1.c [LCSP](#)). Por el contrario, en una subvención, el riesgo derivado de la prestación del servicio corre en su totalidad por cuenta del beneficiario que percibe la subvención.
- En el caso de un contrato, el precio debe cubrir el coste y un potencial beneficio mercantil, mientras que el caso de subvenciones el importe puede ser fijado de forma libre por el Ayuntamiento siempre y cuando no supere el coste del servicio (se prescinde del análisis de cuotas u otros ingresos procedentes de los usuarios de los servicios).

A partir de estas consideraciones, y dado que nos encontramos ante servicios que no son de prestación obligatoria para el Ayuntamiento, parece recomendable a los intereses del Ayuntamiento el optar por la figura de la subvención, debiéndose registrar en la BDNS.

4.13 Premios

¿Cuál es el tratamiento que hay que dar a los premios en la BDNS?

Salvo los premios contemplados en el art. 4.a de la [LGS](#) (los otorgados sin previa solicitud del interesado), el resto de premios (DA 10ª) en los que hay una solicitud del interesado se rigen por la [LGS](#) y, consecuentemente, su convocatoria deberá publicarse por el conducto establecido en la [LGS](#), así como las concesiones de premios y pagos que de ella deriven.

Ahora bien, si los premios no tienen contenido económico, son meramente honoríficos, no es obligatorio informar a la BDNS, ni tampoco si el premio es un pequeño recuerdo, una medalla, un bien de valor reducido que representa un testimonio de reconocimiento, pero nada más.

En cualquier caso, es muy recomendable consultar el artículo doctrinal publicado en la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica “[El agujero negro de los premios literarios municipales](#)” de Miguel José Izu Belloso (<https://doi.org/10.24965/real.i15.10876>).

Además del importe del premio, se paga el billete de avión y los gastos de alojamiento y manutención al premiado para que acuda a la ceremonia de entrega. ¿Cuál es el importe de la subvención?

No se puede dar una solución única. Si en las bases reguladoras y/o en la convocatoria se preveía que los gastos de desplazamiento y de alojamiento del premiado formarían parte del premio, estos gastos se habrán de incluir como parte de la subvención e imputarse al Capítulo 4 (no obstante, antes de adoptar esta solución es conveniente consultar el art. 3 del [Reglamento del IRPF](#) y la [Orden EHA/3525/2008](#) a efectos de examinar las implicaciones tributarias para el premiado).

Pero lo más frecuente es que el transporte del premiado corra a cargo de la entidad convocante. En este caso también hay soluciones diversas:

- A. Se imputa al Capítulo 4 (ver por ejemplo [Resolución de 6 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los premios del XXVIII Certamen "Jóvenes Investigadores" para 2015](#), del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)
- B. Se imputa al Capítulo 2 (ver por ejemplo [Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca el XI Concurso](#)

[Nacional de Teatro Clásico Grecolatino en las enseñanzas no universitarias correspondiente al curso escolar 2015-2016, también del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes](#)).

Las bases reguladoras pueden optar por una solución u otra. A partir de la solución que se adopte, el importe del premio a registrar en la BDNS contendrá la cuantía total (en el caso de la primera solución), o la cuantía del premio sin gastos de desplazamiento, si se ha adoptado cualquiera de las soluciones recogidas en el segundo epígrafe.

Se conceden unos premios en los que hay una posible contraprestación, porque el órgano convocante se queda todos los derechos de explotación de las obras premiadas (literarias, artísticas, etc.). ¿Son de naturaleza subvencional o contractual? ¿Se deben registrar la convocatoria y concesiones en BDNS?

Para determinar si estos premios tienen naturaleza de subvenciones o son la contraprestación por la adquisición de los derechos de las obras premiadas hay que atender a la finalidad última del premio.

Si las bases reguladoras de los premios establecen como objetivo de la convocatoria propiciar la creación artística y literaria o el conocimiento y divulgación de las actividades desarrolladas por la Administración Pública convocante a través de las obras premiadas, es indudable que el objeto de la convocatoria es el fomento de una actividad de utilidad pública o de interés social. Pero para alcanzar este objetivo, el órgano convocante precisa llevar a cabo la reproducción, distribución y/o comunicación pública de dichas obras, para lo cual necesita disponer de los derechos de explotación.

Pero no por ello el premio es la contraprestación por la adquisición de los derechos de explotación de las obras. La realización de la obra y su cesión son condiciones impuestas al beneficiario para la obtención del premio. Estas obligaciones son aceptadas libremente por el premiado y resultan necesarias para poder dar a conocer y divulgar la obra.

Si la concesión del premio fuera considerada una contraprestación por la cesión de los derechos de explotación, estaríamos ante la adquisición de una obra de arte ya existente, siendo un negocio jurídico contractual. En este sentido la [Junta Consultiva de Contratación en su informe 45/09, de 1 de febrero de 2010](#) establece que *"la adquisición de una obra artística, debe considerarse como un contrato de suministro sujeto a la legislación de contratos públicos, si bien por su carácter puede ser objeto de adquisición por procedimiento negociado sin publicidad al amparo de lo dispuesto en el artículo 154.d) antes citado en relación con el 161.1 ambos de la Ley de Contratos del Sector Público."*

Ahora bien, el artículo 16 de la [Ley 9/2017](#), de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece que el contrato de suministro tiene como objeto *"la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles."*

Por tanto, si la finalidad del premio hubiera sido "adquirir las obras", estaríamos ante una contratación pública (art. 25 de la [Ley 9/2017](#)), admitiendo a licitación a todos aquellos que desearan presentar obras artísticas a concurso. En este caso, el **precio** pasaría a ser un elemento variable y ajustable en virtud de la calidad de la obra artística adquirida.

Asimismo, para determinar si el premio es el precio por la adquisición de los derechos de explotación de la obra es preciso acudir al artículo 102 de la [Ley 9/2017](#) que establece en su apartado primero que: *«Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado»*. Asimismo, el apartado 3 de dicho artículo determina que *«Los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados»*. En el caso planteado, el precio por la adquisición de los derechos de explotación de la obra no es cierto, su fijación no se ha realizado atendiendo al precio de mercado, y está condicionado al premio

que se obtenga. Al no existir una relación entre el importe del premio y el valor de mercado de la obra adquirida, el "premio" no puede ser identificado con el "precio".

Por otra parte, sin dejar de reconocer el valor artístico que puedan alcanzar algunas de las obras premiadas, es lógico pensar que, en la mayoría de los casos, las piezas tendrán un valor inferior al del premio (al menos, a juicio de su autor, pues de otra manera las vendería directamente en el mercado). Para estos casos, el valor de venta de la obra será inferior al del premio, habiendo claramente una entrega dineraria sin contraprestación por el valor del premio que excede al valor de la obra artística.

Finalmente, en cuanto a las consideraciones acerca de si la obra, después de adquirida, es explotada con mayor o menor rentabilidad, no deja de ser consecuencia del valor añadido que aporta la Administración Pública convocante a la obra cuyos derechos de explotación ha adquirido, sin que su aprovechamiento posterior pueda ser directamente equiparado con el valor inicial de la obra en el momento de su adquisición.

Si la Administración Pública adquiere estas obras artísticas a partir de la convocatoria de unos premios y no mediante un procedimiento de contratación, es porque considera que está ante una relación jurídica en la que prevalece el interés por promover un determinado fin público (la potenciación de la cultura), que resulta prioritario respecto a la adquisición de las obras premiadas, que se considera accesoria de la finalidad principal.

Por lo expuesto, cuando estos premios tengan como finalidad principal el fomento de una actividad de utilidad pública o interés o de promoción de una finalidad pública social y no la adquisición de un bien, su naturaleza será subvencional y no contractual.

4.14 Subvenciones y ayudas en especie

¿Hay que registrar las ayudas en especie en la BDNS? ¿cómo se cuantifica el importe de la ayuda? y ¿cuál es la fecha de pago?

De conformidad con el [RD 130/2019](#), deben registrarse en la BDNS las ayudas que consistan en la entrega de bienes, derechos o servicios cuya adquisición se realice con la finalidad exclusiva de entregarlos a un tercero.

En estas ayudas, el importe de la subvención concedida será el precio de adquisición de los bienes, derechos o servicios objeto de la ayuda.

La **fecha de pago** será la fecha en la que se entregan de dichos bienes, derechos o servicios.

¿Qué "Instrumento de ayuda" hay que registrar en las ayudas en especie en la BDNS?

Las ayudas en especie están sujetas a la [LGS](#) y a su [Reglamento de desarrollo](#), cuando lo entregado haya sido adquirido con la finalidad exclusiva de ser entregado a un tercero y siempre que la ayuda reúnan los elementos definitorios de toda subvención (a), b) y c) del artículo 2.1 de la [LGS](#).

Por tanto, al tratarse de subvenciones, aunque sean en especie, deben figurar recogidas en el instrumento de ayuda "Subvención y entrega dineraria sin contraprestación".

4.15 Ayudas complementarias a las prestaciones del sistema de salud

La Comunidad Autónoma concede ayudas a los pacientes para desplazamientos y alojamiento, para que puedan afrontar los gastos de tratamiento fuera de la Comunidad o bien en otra población distinta a la de su vecindad. ¿Estas ayudas se deben registrar en la BDNS?

No. La Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud contempla dos tipos de aportaciones para gastos de desplazamiento: transporte sanitario asistido y el transporte sanitario no asistido.

El transporte sanitario no asistido es el indicado para el traslado especial de enfermos o accidentados que no requieren asistencia técnico-sanitaria en ruta, mientras que el transporte sanitario asistido es el requerido para trasladar enfermos o accidentados que requieren asistencia técnico-sanitaria en ruta. Ambos servicios están

incluidos en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, son servicios sanitarios y no tienen la consideración de subvenciones.

Por lo que respecta a los gastos de alojamiento, la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud únicamente contempla la alimentación según la dieta prescrita y los servicios hoteleros básicos directamente relacionados con la propia hospitalización. Por tanto, si el alojamiento y la manutención no hospitalaria no están incluidos en la cartera de servicios complementaria específica de la Comunidad Autónoma, la financiación de estos gastos por parte de la Administración Pública tendrá la consideración de ayuda pública y deberán registrarse en la BDNS.

La Comunidad Autónoma concede ayudas para prótesis, que se abonan para abaratar su coste de y se consideran ayudas en especie. ¿Se deben registrar en la BDNS?

En cuanto a las ayudas a prótesis, hay que estar a lo dispuesto en la Cartera de servicios comunes de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud y en la cartera de servicio complementaria de la Comunidad Autónoma, para determinar si son servicios sanitarios o no, teniendo presente los importes máximos de financiación y los límites de aportación establecidos, de conformidad con la disposición transitoria única y la disposición derogatoria única del [Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, por el que se regula la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud y se fijan las bases para el establecimiento de los importes máximos de financiación en prestación ortoprotésica](#).

Si no estuvieran incluidas en estas carteras, las ayudas a la adquisición de prótesis **sí deben** registrarse en la BDNS como subvenciones.

4.16 Ayudas en aplicación de la Ley de Dependencia

Las prestaciones de la Ley de Dependencia ¿tienen la naturaleza de subvenciones?

A partir de la entrada en vigor de la [Ley 39/2006](#), de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, la exclusión que se hace en la letra 2.4.c de la [LGS](#) a las prestaciones a favor de los minusválidos, debe considerarse ampliada a todas las prestaciones contempladas a favor de las personas en situación de dependencia que vienen enumeradas en el artículo 14 de la citada ley.

Sin embargo, mantienen la consideración de subvenciones las ayudas económicas para facilitar la autonomía personal que se recogen en la disposición adicional tercera de la [Ley 39/2006](#), destinadas a apoyar a la persona con ayudas técnicas o a facilitar la accesibilidad y adaptaciones en el hogar, que tendrán la consideración de subvenciones tal y como se indica en el citado precepto.

La [Ley 39/2006](#) se aprobó con posterioridad a la entrada en vigor de la [LGS](#) y, por tanto, su contenido no pudo ser contemplado en el apartado 4 del artículo 2.c que establece expresamente que no tienen carácter de subvenciones las prestaciones a favor de los minusválidos.

Sin embargo, las prestaciones de atención a la dependencia pueden considerarse referidas en la letra 4.c), cuando se hace mención a las prestaciones a minusválidos.

Tal conclusión se alcanza a través del siguiente razonamiento:

1º. La disposición adicional octava de la [Ley 39/2006](#) señala que *"las referencias que en los textos normativos se efectúan a 'minusválidos' y a 'personas con minusvalía', se entenderán realizadas a 'personas con discapacidad'*. Así pues, la letra 2.4.c de la [LGS](#) cabe entenderla referida a 'personas con discapacidad'.

2º. La [Ley 39/2006](#) hace referencia no sólo a "personas con discapacidad", sino también a las "personas en situación de dependencia", concepto más amplio que comprende también a las personas que están en tal situación por razones derivadas de la edad y de enfermedad (ver art. 2.2).

3º. La cuestión a plantear sería si las prestaciones que se efectúan a estos otros dos grupos de personas (dependientes por edad o enfermedad) también han de ser asimilados a las "personas con discapacidad" a

efectos de su exclusión en la letra 2.4.c de la [LGS](#), cuestión a la que debe darse respuesta positiva, a partir de la exposición de motivos de la [Ley 39/2006](#), en la que se motiva la ampliación de la cobertura prestacional a estos grupos *"por la correlación existente entre la edad y las situaciones de discapacidad"*, realidad a la que *"debe añadirse la dependencia por razones de enfermedad y otras causas de discapacidad"*.

4º. Por otra parte, el artículo 31 de la Ley [39/2006](#) identifica expresamente como prestaciones de análoga naturaleza y finalidad a las prestaciones de atención a la dependencia las siguientes prestaciones de la Seguridad Social:

- el complemento de gran invalidez (artículo 196 del [TRLGSS](#)).
- el complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 75% (artículo 353.c del [TRLGSS](#)).
- el complemento de necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no contributiva (artículo 364.6 del [TRLSS](#)).

5º. Finalmente, el [Real Decreto 1051/2013](#), de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia establecidas en la Ley 39/2006, establece en su artículo 20 que el reintegro del importe de estas prestaciones se regirá por lo previsto en la [Ley 47/2003](#), de 26 de noviembre, General Presupuestaria separándose expresamente del régimen de reintegro que corresponde a las subvenciones y que se contempla en la Ley 38/2003, [LGS](#).

4.17 Salario social, renta mínima, ayudas de emergencia, etc.

¿Son subvenciones las ayudas de emergencia social otorgadas por el Ayuntamiento?

Con la salvedad de que hay que examinar la normativa particular de sus bases o convocatoria, se puede decir con carácter general que **Sí** son subvenciones, se articulen en pagos en metálico, subvenciones en especie o mediante pagos a los proveedores de productos o servicios.

¿Constituyen o no subvenciones según la LGS las ayudas de renta social, renta mínima de inserción, etc.? ¿Se deben registrar en la BDNS?

Mediante esta denominación u otras similares ("**salario social**", rentas mínimas de inserción social, planes de emergencia social, o ayudas análogas de asistencia social) se hace referencia a las ayudas reconocidas por las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales con carácter **subsidiario** a las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.

En este punto, el referente lo constituye el art 2.4 de la [LGS](#):

«4. No tienen carácter de subvenciones los siguientes supuestos:

- a) Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social.
- b) Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no residentes en España, en los términos establecidos en su normativa reguladora.
- c) También quedarán excluidas, en la medida en que resulten asimilables al régimen de prestaciones no contributivas del Sistema de Seguridad Social, las prestaciones asistenciales y los subsidios económicos a favor de españoles no residentes en España, así como las prestaciones a favor de los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana y de los minusválidos.
- d) Las prestaciones a favor de los afectados por el síndrome tóxico y las ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C reguladas en la [Ley 14/2002](#), de 5 de junio.
- e) Las prestaciones derivadas del sistema de clases pasivas del Estado, pensiones de guerra y otras pensiones y prestaciones por razón de actos de terrorismo.
- f) Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial.

...»

De acuerdo con el art.2.4.a) de la [LGS](#), no se consideran subvenciones las prestaciones incluidas en el Sistema de la Seguridad Social, cuestión para cuya delimitación será necesario recurrir al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado mediante [Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre](#) (TRLGSS) en donde se contemplan las prestaciones recogidas dentro del Sistema.

Así pues, el Sistema de Seguridad Social, **ámbito estricto** al que se refiere la letra 2.4.a) de la [LGS](#) está delimitado por su propia normativa, sin que la LGS haya fijado la aplicación de ningún régimen analógico que permita extender la excepción a otras figuras externas a tal régimen.

Las figuras externas al Sistema de Seguridad Social tienen naturaleza de subvenciones y precisamente a partir de esta naturaleza es por lo que el Tribunal Constitucional en su reciente [STC 100/2017](#) ha establecido que la competencia de gestión del Plan PREPARA corresponde a las comunidades autónomas. O, en otras palabras, las prestaciones que el artículo 2.4.a de la [LGS](#) excluye de su ámbito de aplicación son las que integran el Sistema de Seguridad Social, que es, dentro de ámbito de la acción social, competencia del Estado, mientras que las competencias en materia de asistencia social que despliegan las CCAA, al ser externas al Sistema de Seguridad Social, entran dentro del ámbito conceptual de subvenciones y precisamente por ello, el TC les confiere la competencia para su concesión (para tener una idea general del modelo ver [STC 239/2002](#)).

Para continuar el análisis, cabe la posibilidad de plantearse si la Renta Social u otras figuras analógicas puede estar incluida en el apartado 4.c) del artículo 2, que señala:

«También quedarán excluidas, en la medida en que resulten asimilables al régimen de prestaciones no contributivas del Sistema de Seguridad Social, las prestaciones asistenciales y los subsidios económicos a favor de españoles no residentes en España, así como las prestaciones a favor de los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana y de los minusválidos».

De acuerdo con este precepto, no se consideran subvenciones las prestaciones asistenciales y los subsidios económicos a favor de españoles no residentes en España que resulten asimilables al régimen de prestaciones no contributivas del Sistema de la Seguridad Social.

A este respecto cabe indicar que no puede hacerse una interpretación extensiva del término “prestaciones asistenciales” de la letra 2.4.c de la [LGS](#), sino que tal expresión aparece circunscrita a las prestaciones asistenciales que reciban los españoles no residentes en España; esta interpretación se desprende de la propia dicción del párrafo y de la estructura del apartado, que se refiere en su letra a) a las prestaciones propias del Sistema de la Seguridad Social, y en sus letras b), c), d), e) y f) hace referencia a prestaciones análogas dirigidas a colectivos concretos de beneficiarios (emigrantes, afectados por el VIH, personas con discapacidad, afectados por el síndrome tóxico o con hemofilia u otros pensionistas).

Si la Ley hubiera querido exceptuar todas las prestaciones asimilables, lo hubiera hecho en la letra a) con carácter general; pero tal asimilación hubiera generado una gran inseguridad jurídica al hacer pasar a todas las prestaciones asistenciales, que constituyen uno de los bloques naturales del régimen general subvencionador, por el análisis de su “asimilación” al régimen de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.

Difícilmente puede encontrarse asimilación entre dos materias que, por definición, son excluyentes: el Tribunal Constitucional, con motivo de la delimitación del reparto de competencias en materia de asistencia social, ha tenido ocasión de señalar que ([STC 36/2012, de 15 de marzo, FJ 4](#)):

«Atendiendo a las pautas de algunos instrumentos internacionales como la Carta social europea, la asistencia social, en sentido abstracto, abarca a una técnica de protección situada extramuros del sistema de la Seguridad Social, con caracteres propios, que la separan de otras afines o próximas a ella. Se trata de un mecanismo protector de situaciones de necesidad específicas, sentidas por grupos de población a los que no alcanza el sistema de Seguridad Social y que opera mediante técnicas distintas de las propias de ésta ...»

Como se ve, la asistencia social se coloca “extramuros” del Sistema de la Seguridad Social; por tanto, al tratarse de materias excluyentes, difícilmente puede encontrarse la asimilación entre la Renta Social Municipal y las prestaciones de la Seguridad Social. Por el contrario, la Ley sólo admite tal asimilación en referencia a los colectivos a los que expresamente se refiere en las letras b), c), d), e) y f) de su apartado 2.4.

En consecuencia, las rentas sociales u otras figuras análogas creadas por las Comunidades autónomas o por las Entidades locales, que quedan fuera del Sistema de Seguridad Social aunque se deban coordinar con él (art. 6 TRLGSS), exceden del ámbito de la excepción contemplada en la letra 2.4.a de la [LGS](#) y **deben considerarse subvenciones a los efectos de esta ley**, y por tanto su información debe ser registrada en la BDNS, por aplicación directa de la [LGS](#).

Ratifica este criterio la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 21/2019, de 14 de febrero ([STC 21/2019](#)), que declara la **inconstitucionalidad y nulidad del inciso «y carecen de la consideración de subvenciones públicas»** del artículo 3 de la Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del sistema público de servicios social y con el acceso a la vivienda en la CA de Aragón.

Es conveniente añadir un análisis final y es el que supone la verificación de si estas ayudas cumplen los requisitos del artículo 2.1 de la [LGS](#). En algunos textos se ha venido señalando que estas ayudas no cumplen los requisitos de las letras b y c, de las que se interpreta que sólo hacen referencia a proyectos o actividades “por hacer”.

Esta visión tan restrictiva no puede acogerse, pues los propios párrafos recogen expresamente como ámbito de subvención la entrega dineraria con motivo de la “*conurrencia de una situación*” que es el caso presente, para el que la ley establece que el interesado sólo tiene que acreditar que cumple los requisitos y, a partir de esa condición, es cuando se le otorga la subvención sin necesidad de justificación posterior (ver art. 30.7 de la [LGS](#)).

Por lo tanto, todas aquellas “ayudas” que no se otorgan “por hacer”, sino “por ser” o “estar en situación de”, son subvenciones de pleno derecho.

¿Se deben registrar en BDNS los complementos económicos para garantizar la dignidad de las personas perceptoras de pensiones no contributivas tanto de jubilación como de invalidez?

Nuevamente la letra 2.4.a) de la [LGS](#), que excluye del ámbito de aplicación de la Ley General de Subvenciones «*las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social*», constituye el referente para determinar si estas prestaciones económicas están incluidas en el ámbito de aplicación de la LGS.

[El Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social](#) contempla entre las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva y la pensión de invalidez no contributiva. La cuantía de estas prestaciones se fija anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, o por la regla establecida en el artículo 364 del [TRLGSS](#) en el supuesto de que en una misma unidad económica concorra más de un beneficiario con derecho a pensión de esta misma naturaleza, pero la Ley no contempla complementos a sus pensiones no contributivas.

Por tanto, el complemento económico para perceptores de pensión no contributiva, tanto de jubilación como de invalidez, que conceden las Comunidades Autónomas, no está incluido en el ámbito del Sistema de la Seguridad Social y, por tanto, no está sujeto a la excepción contemplada en la en artículo 2.4.a) de la [LGS](#).

4.18 Exenciones y bonificaciones a familias numerosas

¿Hay que registrar en la BDNS la información de las exenciones y bonificaciones en las tasas o precios públicos en el ámbito educativo para los estudiantes pertenecientes a familias numerosas?

El artículo 12 de la [Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas](#) establece la exención del 100 por ciento de las tasas o precios públicos que se apliquen a los derechos de matriculación y examen a los miembros de las familias numerosas clasificadas en la categoría especial y una bonificación del 50 por ciento para los de categoría general.

Para determinar si estas exenciones y bonificaciones deben registrarse en la BDNS es preciso analizar su naturaleza.

Los artículos 6 y 24 de la [Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios públicos del Estado](#), definen respectivamente los conceptos de tasas y precios públicos:

- Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.
- Los precios públicos son las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.

Tanto la tasa como el precio público arrancan de un mismo supuesto de hecho: el Ente público entrega directamente ciertos bienes o presta ciertos servicios por los que obtiene a cambio un ingreso. En ambos casos son ingresos públicos, pero mientras que en el precio la relación que se establece es contractual y voluntaria para quien lo paga, en la tasa aparece la nota de coactividad propia del tributo y, consecuentemente, las exigencias propias del principio constitucional de legalidad para su creación y aplicación.

La exención de la tasa, de acuerdo con el artículo 22 de la [Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria](#), responde a aquel supuesto en que habiéndose realizado el hecho imponible, la ley exime del cumplimiento de la obligación tributaria.

La bonificación es la reducción o minoración del precio público a pagar.

Tanto los beneficios que suponen para la familia numerosa la exención o bonificación de las tasas de matriculación y examen, como la reducción del precio público por la prestación de servicios quedan excluidos de la definición de subvenciones, porque estas figuras no producen un desplazamiento de fondos, sino simplemente una minoración de las cantidades a ingresar en las Haciendas Públicas. Adicionalmente, indicar que estas figuras tienen su propio régimen legal, que resulta más restrictivo en cuanto a su establecimiento que en el de las subvenciones.

Por otro lado, a estas bonificaciones no le es aplicable lo previsto en el artículo 2.1.d) del [RD130/2019 \(BDNS\)](#) ya que en este apartado se incluyen las ayudas públicas que tengan la consideración de ayudas de estado, condición que no se cumple en las exenciones y bonificaciones a familias numerosas.

4.19 Ayudas reintegrables a tutelados de entidades públicas

¿Hay que registrar la información de las ayudas reintegrables concedidas a tutelados de entidades públicas para personas con discapacidades psíquicas o físicas, demencias degenerativas u otras enfermedades mentales en la BDNS?

No, no hay que registrarlas. Estas ayudas no revisten de una de las notas propias de toda subvención: fomentar una actividad de utilidad pública o interés social, porque la finalidad última de estas ayudas es cumplir con la obligación del tutor de procurar alimentos a su tutelado (artículo 269 del [Código Civil](#)).

4.20 Prestaciones económicas por acogimiento familiar

Las prestaciones económicas para los gastos de manutención de los menores acogidos ¿tienen la naturaleza de subvenciones?

El acogimiento familiar es aquella medida de protección por la que se otorga la guarda de un menor a una persona o familia que asume las obligaciones señaladas expresamente en el artículo 173 del [Código Civil](#), siempre que no fuese posible la permanencia del menor en su propia familia de origen.

Las normativas autonómicas reconocen el derecho de las personas acogedoras a percibir una prestación económica que contribuya a hacer frente a los gastos de mantenimiento de los menores acogidos. Pero esta compensación no constituye una contraprestación por el cobijo, sino que se concede con la finalidad de fomentar una conducta voluntaria de indudable interés social. La prestación económica que percibe el acogedor pretende incentivar el acogimiento familiar como medida de protección del menor, facilitando a las familias acogedoras sus obligaciones de atención a los menores a su cargo, lo que contribuye al incremento del número de familias que se ofrecen para un acogimiento y, de esta manera, poder aumentar el conjunto de menores que acceden a esta medida de protección.

A efectos de determinar si estas prestaciones económicas son o no subvenciones según la [LGS](#) es preciso remitir al análisis del apartado 4 del artículo 2 para concluir que difícilmente puede encontrarse asimilación entre las prestaciones por acogimiento y las prestaciones de la Seguridad Social, al ser dos materias que, por definición, son excluyentes ([STC 36/2012, de 15 de marzo, FJ 4](#)).

Por otra parte, la exposición de motivos de la [LGS](#) justifica la exclusión de su ámbito de aplicación de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social y prestaciones análogas en que «...*tienen un fundamento constitucional propio y una legislación específica, no homologable con la normativa reguladora de las subvenciones*».

Las prestaciones familiares del Sistema de la Seguridad Social y las prestaciones económicas para gastos de manutención de menores acogidos tienen un nexo común; la protección económica de la familia (art. 39 de la [Constitución](#)), pero no comparten el mismo fundamento constitucional.

El mandato constitucional en virtud del cual se configuran las prestaciones familiares de la Seguridad Social responde a la protección económica de la familia (artículo 39.1 [CE](#)), mientras que el acogimiento familiar, en virtud del cual se conceden los gastos de manutención de los menores acogidos, tiene su fundamento constitucional en la protección del menor (artículos 39.2 y 39.4 [CE](#)) y no en la protección de la familia que le acoge.

Por su parte, la acción protectora a favor de la familia que ofrece el Sistema de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, regulada en el Capítulo I del Título VI del [TRLGSS](#) y en el [Real Decreto 1335/2005](#), de 11 de noviembre, no contempla una prestación específica a favor del acogimiento familiar, si bien en la asignación económica por hijo a cargo equipara el acogimiento familiar permanente y la guarda con fines de adopción a la filiación, ampliando la protección a estos supuestos.

Por tanto, las prestaciones familiares de la Seguridad Social y las prestaciones por acogimiento familiar tampoco comparten el mismo régimen jurídico.

La legislación autonómica de acogimiento familiar reconoce, con carácter general, la naturaleza de subvenciones a las prestaciones de acogimiento. Por tanto, no se puede argumentar la exclusión de estas prestaciones del ámbito de aplicación de la [LGS](#) sobre la base de que su legislación específica no es «*homologable con la normativa reguladora de las subvenciones*».

Finalmente, cabe señalar que el artículo 20.1 de la [Ley Orgánica 1/1996](#) contempla la posibilidad de que el acogimiento en familia ajena sea especializado, «...*entendiendo por tal el que se desarrolla en una familia en la que alguno de sus miembros dispone de cualificación, experiencia y formación específica para desempeñar esta función respecto de menores con necesidades o circunstancias especiales con plena disponibilidad y percibiendo por ello la correspondiente compensación económica, sin suponer en ningún caso una relación laboral*». Esta característica de las prestaciones de acogimiento lo aleja de las prestaciones económicas de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social.

Por lo expuesto, las prestaciones económicas para gastos de manutención de los menores acogidos ni por su regulación específica ni por la [LGS](#) pueden ser excluidas del concepto de subvención. Por tanto, la información relativa a dichas subvenciones **debe ser registrada en la BDNS** en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley General de Subvenciones.

4.21 Gastos de gestión de la entidad colaboradora

La Comunidad Autónoma tiene unas subvenciones que se otorgan con la intermediación de una entidad colaboradora. El crédito presupuestario de 100.000,00 € recoge la subvención y los gastos de gestión de la entidad colaboradora (10.000,00 €). ¿Qué importe debe figurar en la convocatoria, 100.000,00 € o 90.000,00 €?

La [LGS](#) establece dos formas de regular las relaciones con las entidades colaboradoras: por convenio y por contrato. Dadas las características que concurren en cada una de estas figuras, se puede señalar que en caso de que la relación deba regularse mediante contrato, su cuantía no se recogerá en la BDNS mientras que sí se registrará si se efectúa mediante convenio.

En este último caso, deberá registrarse la colaboración instrumentada en el convenio mediante una convocatoria instrumental.

4.22 Fondo Nacional de Asistencial Social (Ley 45/1960)

¿Hay que registrar en la BDNS la información de las ayudas a ancianos y a enfermos e inválidos incapacitados para el trabajo del Fondo Nacional de Asistencial Social creado por Ley 45/1960?

El Fondo Nacional de Asistencia Social se estableció en España al amparo de la [Ley 45/1960, de 21 de julio](#).

Los cambios experimentados en el ordenamiento jurídico español desde entonces hicieron necesarias actualizaciones del procedimiento de concesión de las ayudas del Fondo Nacional de Asistencia Social a ancianos y enfermos o inválidos incapacitados para el trabajo. La última actualización del procedimiento en la concesión de estos auxilios se produjo con el [Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio](#), en cuyo artículo Noveno establece que estas ayudas son personales e intransferibles y se conceden con carácter alimenticio, no pudiendo ser objeto de embargo o retención de ninguna clase, ni darse en garantía de ninguna obligación.

En virtud de los reales decretos sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a las Comunidades Autónomas, se transfirieron estos servicios de concesión y gestión de las ayudas periódicas individualizadas a ancianos y enfermos o inválidos previstas en el Real Decreto 2620/1981. Así, las Comunidades Autónomas pasaron a gestionar estas ayudas.

Al crearse, por la [Ley 26/1990](#), las prestaciones de la Seguridad Social de "modalidad no contributiva", el legislador buscó que éstas sustituyeran a las anteriores prestaciones de asistencia social.

Por su parte, el [Real Decreto-ley 5/1992, de 21 de julio, de Medidas Presupuestarias Urgentes](#) suprimió las pensiones asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de junio y en el Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio, salvo las reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor del mismo Real Decreto-Ley, cuyos beneficiarios continúan percibiendo estas pensiones en los términos y condiciones que se preveían en su legislación específica.

Por lo tanto, las ayudas del Fondo Nacional de Asistencia Social a ancianos y a enfermos o inválidos incapacitados para el trabajo concedidas en virtud del Real Decreto 2620/1981, que a día de hoy subsistan se deben considerar **asimilables a las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social** y, por tanto, su información **no debe registrarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones**.

4.23 Subvenciones a partidos políticos

¿Hay que registrar las subvenciones a los partidos políticos en la BDNS?

Sí, el [RD 130/2019](#) incluye a las subvenciones y demás ayudas a partidos políticos en el ámbito objetivo de la BDNS.

La [Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos](#), modificó la disposición final segunda de la [Ley Orgánica 8/2007](#), de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, estableciendo que la [LGS](#) tiene carácter supletorio.

Por otra parte, el artículo 3.9 de la citada Ley Orgánica 8/2007, señala que las subvenciones y ayudas deben hacerse públicas de conformidad con lo dispuesto en la [Ley 19/2013 de transparencia](#). Por tanto, las subvenciones y ayudas a partidos políticos deben ser registradas en la BDNS y publicadas en el [SNPSAP](#).

Sobre la base de la interpretación anterior, por aplicación del artículo 127 y sucesivos de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, se incluyen tanto las subvenciones ordinarias a los partidos políticos como las subvenciones por gastos electorales y de seguridad.

¿Hay que registrar en la BDNS las asignaciones a grupos políticos municipales previstas en el art. 73 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)?

La [Ley Orgánica 8/2007](#) es de aplicación a la financiación de los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores. En consecuencia, la aplicación supletoria de la [LGS](#) es extensiva a las subvenciones que recibe un grupo político municipal y, por tanto, **Sí** que hay que registrar las asignaciones a los grupos políticos municipales en la BDNS.

A estos efectos se considerará que, aun cuando el Grupo Municipal carezca de personalidad jurídica, percibe la dotación económica para el desarrollo de su actividad "interna corporis". Por ello, en su registro en la BDNS como beneficiario debe ser identificado con el tipo de beneficiario "*Personas jurídicas que no desarrollan actividad económica*".

4.24 Conciertos educativos – enseñanza obligatoria

La financiación de los conciertos educativos ¿tiene la consideración de subvención? ¿hay que registrar esta información en la BDNS?

La educación es un derecho constitucional que se ejerce mediante la institución del servicio público de educación. Este servicio público, de provisión pública, se instrumenta mediante la producción pública o privada (enseñanza concertada) del mismo. Es decir, que se está en una relación cuasicontractual de aprovisionamiento de servicios para posibilitar el ejercicio de un derecho.

En esta relación hay una clara contraprestación, lo que aleja toda posibilidad de considerar la financiación a la enseñanza concertada como "subvención".

La [Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación \(LOE\)](#) señala que «la prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados». Por tanto, la educación, con independencia de que sea impartida en centros públicos o privados, es un servicio público.

Por su parte, el [Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos](#) considera, en su artículo 34, la existencia de una contraprestación por la concertación con los centros de los servicios educativos:

«1. La Administración abonará mensualmente los salarios al profesorado de los centros concertados como pago delegado y en nombre de la entidad titular del centro.

2. Las cantidades correspondientes a los restantes gastos de funcionamiento de los centros se abonará por la Administración a los titulares de los mismos cada trimestre.

3. Ambos conceptos de gasto tendrán jurídicamente la concepción de contraprestación por los servicios educativos concertados con los centros».

Por lo expuesto, al no tratarse de una afectación de fondos públicos sin contraprestación, los conciertos educativos no tienen la consideración de subvenciones, como ninguna de las compensaciones que deban abonar las administraciones públicas para cubrir el coste de los servicios que, de acuerdo con los artículos 27.4 y 119

de la [Constitución Española](#) deben ser prestados obligatoria y gratuitamente por la Administración. En consecuencia, **no hay que registrar esa información en la BDNS.**

4.25 Conciertos sanitarios

¿Son subvenciones los pagos que se realizan a entidades sanitarias privadas (asistencias quirúrgicas, pruebas diagnósticas, etc.) por la Consejería de Sanidad?

No. Los conciertos sanitarios, regulados en el artículo 90 de la [Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad](#), son contratos de concesión de servicios en virtud de la Disposición adicional trigésima cuarta [Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público](#), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las [Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014](#), o contratos de servicios.

Este criterio fue ya establecido por la [Junta Consultiva de Contratación en su informe 37/95, de 24 de octubre de 1995](#). "[Naturaleza jurídica de los contratos que celebra el Instituto Nacional de la Salud para las prestaciones sanitarias a los beneficiarios de la Seguridad Social, como contratos de gestión de servicios públicos](#)".

Por tanto, se está ante contratos administrativos y no ante subvenciones. No se deben registrar en BDNS.

4.26 Subvenciones para la asistencia jurídica gratuita

¿Es una subvención la financiación que reciben los colegios profesionales de abogados o procuradores por el servicio de asistencia jurídica gratuita?

Se trata de un servicio que tiene que ser prestado con carácter obligatorio por las Administraciones Públicas competentes, en virtud del mandato constitucional establecido en el artículo 119 de la [Constitución](#).

La normativa, desarrollada en la [Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita](#) y el [RD 141/2021](#) de desarrollo, reguló el sistema de financiación del servicio, calificando como "subvención" las dotaciones presupuestarias para la «*implantación, atención y funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y de Procuradores*» (art. 37 Ley 1/1996).

Aunque este concepto de "subvención" es ontológicamente distinto del establecido por la [LGS](#), y en el fondo lo que se está produciendo es una transacción bilateral de aprovisionamiento de medios para prestar un servicio público, puesto que lo establece una ley, y en tanto esta ([Ley 1/1996](#)) esté vigente, hay que considerar que es una subvención.

En consecuencia, cabe entender que el objeto de la "subvención" es la prestación del citado servicio y que las entidades beneficiarias son los Colegios Profesionales y los Consejos Generales, según el art. 45.5 del [RD 141/2021](#). Las cantidades recibidas se dedican a financiar costes del propio Colegio (servicios de guardia, gastos de funcionamiento, etc.) y a retribuir a los abogados y procuradores, cuyas percepciones se califican como "indemnizaciones" (art. 30 [Ley 1/1996](#)) o "retribuciones" (art. 43 [RD 141/2021](#)).

El Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, por el que se regula la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad, recoge que los Colegios son entidades colaboradoras en la gestión de subvenciones. Este Decreto, al igual que el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, en su Título III que también reconoce tal condición de los Colegios. ¿Estos colegios profesionales son beneficiarios o son entidades colaboradoras?

El art. 46.2 del Reglamento de asistencia jurídica gratuita califica a los Consejos Generales y a los Colegios como "entidades colaboradoras" para la gestión de la subvención, calificación que suscita una razonable duda

acerca de cómo, o a quién, hay que atribuir la “subvención” a los efectos de su registro en la BDNS, pues tampoco encaja esta figura fácilmente con el concepto de “entidad colaboradora” de la LGS.

A los efectos del registro de estas subvenciones en la BDNS, lo correcto es que se registren identificando como beneficiarios a los Consejos Generales y a los Colegios, por la cuantía que perciban para sufragar los gastos en los que incurran. Ahora bien, cuando no sea posible separar el importe de las cuantías dirigidas a financiar las “indemnizaciones” o “retribuciones” de los abogados y procuradores, de los costes incurridos por los otros conceptos para el sostenimiento del servicio, se debe registrar la subvención por el importe total entregado a los Colegios.

Reiterar que tal y como se indica en el art. 3.5 del RD 130/2019, el registro de esta información en el modo descrito en los párrafos anteriores no alterará la posición jurídica de cada entidad según el régimen configurado en esta subvención.

¿Son subvenciones las cantidades que perciben los abogados/procuradores que operan en este servicio?

No. El propio [Real Decreto 141/2021](#) la califica de “retribución” (art 43) y posteriormente de “indemnización” (art 44). No reúne ninguno de los requisitos del art. 2 de la LGS, y es la contrapartida de una transacción bilateral entre el abogado/procurador y el colegio profesional.

Por lo tanto, por esta transacción no procede el registro de ninguna información en BDNS.

¿Es una subvención en especie el servicio de asistencia jurídica gratuita que perciben los ciudadanos?

No. Es un servicio público, prestado por las administraciones públicas para la efectiva satisfacción del derecho previsto en el artículo 119 de la [Constitución Española](#), que establece que la justicia será gratuita, cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, y desarrollado por la [Ley 1/1996](#).

Los ciudadanos no son calificados por la normativa como beneficiarios de una subvención, sino como “beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita” (art. 14.1 y otros del [Real Decreto 141/2021](#)). De hecho, estos ciudadanos no están sujetos a las obligaciones previstas en la Ley General de Subvenciones respecto a la realización de la actividad o a su justificación. Son “destinatarios” o “usuarios” del servicio, pero no beneficiarios de una subvención.

Tampoco se puede establecer que los ciudadanos perciben una “entrega en especie” de las previstas en la DA 5ª LGS, porque las Administraciones no “adquieren” un servicio para prestarlo al ciudadano, sino que, tal y como se establece en la normativa, el servicio prestado se financia con la subvención que percibe el colegio profesional.

Por lo tanto, no procede el registro de ninguna información en BDNS por el servicio percibido por el ciudadano.

4.27 Prestaciones farmacéuticas

¿Hay que registrar la información de las prestaciones farmacéuticas a los ciudadanos por el Sistema Nacional de Salud en la BDNS?

De conformidad con el [Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización](#), las prestaciones farmacéuticas forman parte de la cartera básica de los servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos [Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad](#). Dicho Sistema integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que son responsabilidad

de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la salud recogido en el artículo 43 de la [Constitución Española](#).

Por tanto, las prestaciones sanitarias de salud pública, atención primaria, atención especializada, atención de urgencia, prestación farmacéutica, ortoprotésica, de productos dietéticos y de transporte sanitario incluidos en la cartera de servicios comunes del SNS tienen la condición de servicio público: no tienen naturaleza de subvenciones y por tanto **no procede su registro en la BDNS**.

4.28 Becas de una Universidad con financiación privada [Nueva 2025]

¿Es necesario registrar en la BDNS las becas de una Universidad con financiación privada en virtud de colaboración empresarial en actividades de interés general?

Sí. El convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general está regulado en el artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo:

«1. Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, a los efectos previstos en esta Ley, aquel por el cual las entidades a que se refiere el artículo 16, a cambio de una ayuda económica para la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento del objeto o finalidad específica de la entidad, ya sea dineraria, en especie o consista en una prestación de servicios realizada en el ejercicio de la actividad económica propia del colaborador, se comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades. Esta difusión podrá ser realizada, asimismo, por el colaborador».

En virtud de este convenio, la Universidad, a cambio de la ayuda económica acordada con el Banco X para financiar la concesión de becas al estudio, se compromete por escrito a difundir, por cualquier medio, la participación del banco X en la concesión de estas becas.

Sin perjuicio de que la entidad privada, en su condición de entidad empresarial colaboradora, puede convenir con la Universidad las condiciones de concesión de estas becas, la realidad es que la Universidad es la que realiza la actividad administrativa para la que es competente: la gestión del procedimiento de concesión de becas. Por tanto, a la Universidad le corresponde aprobar la convocatoria de las becas de estudio, valorar las solicitudes, dictar las resoluciones de concesión, efectuar el pago de las becas y, en su caso, iniciar los procedimientos de reintegro.

Sin perjuicio de que el procedimiento de concesión de las becas gestionado la Universidad este financiado por una empresa, este procedimiento está sometido a la [Ley General de Subvenciones](#), al igual que los restantes procedimientos de concesión de subvenciones que tramita la Universidad y, por tanto, la información relativa a la convocatoria, concesiones, pagos y, en su caso, devoluciones o reintegros se debe registrar en la BDNS.

4.29 Becas de una Fundación privada absorbida por una Fundación pública que hace los pagos

¿Hay que registrarlas estas becas en la BDNS?

Los regímenes transitorios en materia de subvenciones suelen tomar como fecha de referencia la de la concesión (tanto en la normativa nacional como en la europea). Ahora bien, hay dos aspectos que conducen a registrar estas becas en la BDNS, aunque se hayan concedido con antelación:

- Uno de los fines de la BDNS es la cesión de información a la AEAT a efectos tributarios: la normativa tributaria (IRPF) toma como fecha de referencia para la imputación, la fecha de cobro. Así pues, para que la información tributaria sea completa hay que registrar estas subvenciones en la BDNS porque su

pago se realiza en 2019, año en el que deberán imputar sus destinatarios la beca percibida (si es que no está exenta).

- La Fundación pública está obligada a suministrar información de sus subvenciones, de modo que proporcionaría una imagen incompleta si omitiera estas becas. Por otra parte, cabe plantear la posibilidad de que esas becas pudieran seguir otorgándose en el futuro, de modo que es conveniente dar publicidad a la serie completa de subvenciones desde un primer momento.

En consecuencia, en aplicación del art. 2.4 [RD 130/2019](#) (posibilidad de incorporar cualquier otra información en la BDNS que contribuya al cumplimiento de sus fines), se debe incluir en la BDNS la información correspondiente a estas becas.

4.30 Becas de manutención y alojamiento para deportistas

¿Hay que registrar en la BDNS la información de estas becas de estancia en residencias deportivas propiedad de las administraciones públicas?

En estas becas, los deportistas becados reciben los servicios de alojamiento y manutención, pero no reciben una cantidad dineraria.

La Disposición adicional quinta de la [LGS](#) establece el principio general de que las entregas a título gratuito de bienes y derechos se rijan por la legislación patrimonial.

No obstante, puntualiza que si la ayuda consiste en la entrega de bienes, derechos o servicios cuya adquisición se ha realizado con la finalidad exclusiva de entregarlos a un tercero, estará sujeta a la [LGS](#) en los términos que reglamentariamente se establezcan, siéndole de aplicación el principio de transparencia y el régimen de publicidad previsto a través de la BDNS.

Por tanto, en el caso de estas becas, si no se adquiere un servicio con la finalidad exclusiva de entregárselo al deportista, sino que los servicios de manutención y alojamiento es un servicio propio de las instalaciones de la Administración Pública, no concurren las condiciones establecidas en la DA 5ª de la [LGS](#) y no hay que incluir esta prestación en la BDNS.

4.31 Becas y ayudas a estudiantes desfavorecidos

¿Hay que registrar la información de las ayudas de comedor, transporte escolar, bono infantil, etc. en la BDNS?

Sí, hay que registrarlas. El artículo 27 de la [Constitución Española](#) reconoce el derecho a la educación y obliga a los poderes públicos a garantizar este derecho.

Para dar cumplimiento a este mandato constitucional existe el Sistema Educativo Español, definido por la [Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#) como el conjunto de Administraciones educativas, profesionales de la educación y otros agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación de servicios para el ejercicio del derecho a la educación en España, y los titulares de este derecho, así como el conjunto de relaciones, estructuras, medidas y acciones que se implementan para prestarlo.

De conformidad con el artículo 3 de la citada Ley, las enseñanzas que ofrece este sistema educativo, mediante la prestación de servicios, son las siguientes:

- a. Educación infantil.
- b. Educación primaria.
- c. Educación secundaria obligatoria.
- d. Bachillerato.

- e. Formación profesional.
- f. Enseñanzas de idiomas.
- g. Enseñanzas artísticas.
- h. Enseñanzas deportivas.
- i. Educación de personas adultas.
- j. Enseñanza universitaria.

La propia Ley establece un régimen de becas y ayudas al estudio dirigido a los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables, para garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación. Estas ayudas no forman parte de los servicios públicos dirigidos a garantizar el derecho a la educación (los servicios de enseñanza). Estas becas y ayudas al estudio **son subvenciones**, al reunir los elementos característicos de estas:

- La entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
- La entrega está sujeta a la realización de una actividad, el ejercicio del derecho a la educación.
- La conducta financiada tiene por objeto la promoción de una finalidad pública, garantizar la igualdad de las personas en el ejercicio del derecho a la educación.

4.32 Becas a estudiantes técnicos de Formación Profesional Superior dual en el periodo de prácticas

¿Existe obligación de registrarlas en la BDNS?

La Orden 2195/2017, de 15 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de la Formación Profesional dual del sistema educativo de la Comunidad de Madrid, establece que la empresa que colabore con la formación dual se comprometerá, entre otros aspectos, a «*Conceder al alumnado de formación profesional dual, durante el período en que reciba formación en la empresa, una beca cuya cuantía mensual correrá a cargo de la empresa en su totalidad...*».

La beca tiene naturaleza de subvención, al reunir los elementos definitorios que establece la [LGS](#):

- La entrega se realiza sin contraprestación directa de los beneficiarios. El alumno recibe la beca, pero no realiza una actividad laboral a favor de la empresa. Su actividad tiene como finalidad formarse.
- La entrega está sujeta a la realización de una actividad; la participación del alumno en un conjunto de acciones formativas que tienen por objeto su cualificación profesional.
- La formación financiada tiene por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública la cualificación profesional de las personas, armonizando los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los centros educativos y los centros de trabajo ([Ley Orgánica 2/2006](#), de 3 de mayo, de Educación).

Por tanto, estas becas deben registrarse en la BDNS.

Ahora bien, como la selección de estudiantes la realizan los institutos de Formación Profesional, no hay un procedimiento de concurrencia competitiva. Por ello, deben registrar la financiación de la formación como una convocatoria "instrumental".

A la hora de registrar las concesiones, se recuerda que el importe correspondiente a la cuota empresarial a la Seguridad Social por el alumno becado no forma parte del importe de la subvención.

4.33 Fomento de la investigación y formación del personal investigador y docente de Universidades

¿Hay que registrar en la BDNS las ayudas para cubrir costes de movilidad del personal propio de la universidad con objeto de fomentar la actividad investigadora, fijadas conforme al RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón de servicio?

El [Real Decreto 462/2002, sobre indemnizaciones por razón del servicio](#) establece que darán origen a indemnización o compensación los supuestos siguientes:

- Comisiones de servicio con derecho a indemnización.
- Desplazamientos dentro del término municipal por razón de servicio.
- Traslados de residencia.
- Asistencias por concurrencia a Consejos de Administración u Órganos Colegiados, por participación en tribunales de oposiciones y concursos y por la colaboración en centros de formación y perfeccionamiento del personal de las Administraciones públicas.

En estos supuestos, el personal se ve obligado a desplazarse para llevar a cabo su actividad laboral, por ello tiene derecho a la compensación de los gastos incurridos como consecuencia de dicho desplazamiento. Esta compensación que recibe el trabajador no tiene la consideración de subvención.

Sin embargo, en las ayudas a la movilidad del personal docente e investigador el desplazamiento está motivado por razones ajenas a la realización de las funciones propias del puesto de trabajo y, en consecuencia, no se puede considerar que estas ayudas por movilidad tienen naturaleza de indemnizaciones por razones de servicio.

Estas ayudas tienen la naturaleza de subvenciones al cumplir los elementos característicos del art 2.1 Ley 38/2003, de 17 de noviembre [LGS](#):

- Las ayudas a la movilidad se conceden sin contraprestación directa de los beneficiarios.
- La entrega está afecta a un fin; la realización de una actividad subvencionada, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido en el marco legal propio para el otorgamiento de la subvención.
- La actividad subvencionada tiene como finalidad el fomento de la investigación y formación del personal docente.

¿Hay que registrar en la BDNS las ayudas para financiar la constitución y consolidación de grupos de investigación para fortalecer líneas de investigación?

Estas ayudas reúnen los elementos diferenciadores de una subvención recogidos en el art 2.1 de la [LGS](#) y en consecuencia **si deben registrarse en la BDNS**.

Por lo que respecta al tratamiento de la información relativa a la concesión de estas ayudas, el artículo 11 de la [LGS](#) establece la posibilidad de que puedan acceder a la condición de beneficiario, cuando así se prevea en las bases reguladoras, las agrupaciones de personas físicas que carezcan de personalidad jurídica. Para estos casos, la Ley precisa que deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. Asimismo, exige la designación de un representante con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.

A la hora de registrar la concesión de la subvención en la BDNS en primer lugar se debe dar de alta los datos personales de cada uno de los investigadores del grupo. A continuación, se deberá registrar la concesión de la subvención en virtud de la resolución de concesión debiendo figurar como beneficiario el representante de la agrupación. Además, se deberá registrar mediante la entidad de información "**Proyecto**" la información relativa a cada uno de los integrantes del grupo (beneficiarios) y la financiación que reciben.

4.34 Ayudas del Programa “Severo Ochoa” para la formación de personal investigador

La Comunidad Autónoma ha aprobado unas ayudas predoctorales del Programa “Severo Ochoa” para la formación del personal investigador en las que el beneficiario queda vinculado mediante un contrato laboral a los centros de adscripción. ¿Cómo se registran estas ayudas en la BDNS?

Estas ayudas se fundamentan en el Estatuto del personal investigador en formación y en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Estas ayudas se instrumentan mediante la financiación de los costes salariales y patronales correspondientes a los contratos, y se abonan a los centros de adscripción que son quienes retribuyen a los beneficiarios.

Los sistemas de información establecidos en la Administración Pública pueden llevar al cómputo duplicado de las mismas percepciones al contribuyente en la imputación de rentas del IRPF, por un lado, al declarar el centro las retribuciones en la AEAT, como retribuciones laborales, y por otro lado al registrar las concesiones y pagos de las ayudas al beneficiario, como subvenciones.

Este problema se verá aún acrecentado en la medida en que se ponga en marcha el reciente el [Estatuto del personal investigador en formación](#) que elimina la situación de becario e impone durante todo el tiempo del predoctorado la necesidad de formalizar una relación laboral.

Para evitar el problema descrito, se sugiere a las autoridades concedentes de las ayudas **que en el registro en la BDNS en imputen estas ayudas a los centros de adscripción**, por las siguientes razones:

- Se evita el riesgo descrito de imputar al mismo beneficiario la misma renta en dos formas diferentes (ayuda y retribución laboral).
- Se supera el problema que implica que la cuota empresarial de la Seguridad Social se pueda estar imputando erróneamente al investigador.
- La acumulación de todas las ayudas en el centro de adscripción permitirá verificar la correcta aplicación de fondos procedentes de diferentes fuentes de financiación destinados a desarrollar los mismos proyectos de investigación.
- Finalmente, se da sentido a la consideración que se recogía en la exposición de motivos del RD 63/2006 que, al distinguir entre personal investigador “de beca” y personal investigador “de contrato”, indicaba:

«En efecto, el distinto régimen jurídico que se establece respecto al personal investigador en formación obedece a la distinta naturaleza y características de la actividad que realiza el personal «de beca» y el personal «de contrato». Por ello, la exclusión del personal investigador en formación «de beca» del régimen jurídico laboral se hace sólo con carácter declarativo, por cuanto que la nota esencial y diferencial que concurre es su primordial finalidad de facilitar el estudio y formación del becario, sin que conlleve ninguna aportación al centro, organismo o universidad de adscripción, aquí no concurren, por tanto, todos los elementos exigidos para el nacimiento de una relación laboral. Al contrario, cuando el personal investigador ya tiene acreditada administrativamente una formación avanzada, a través del correspondiente Diploma de Estudios Avanzados o del documento administrativo que lo sustituya, la actividad de dicho personal investigador aprovecha, fundamentalmente, al centro, organismo o universidad de adscripción, concurriendo los elementos definitorios de una relación laboral de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores. Elementos de la relación laboral que, obviamente, están presentes cuando se trata de personal investigador doctor».

Este criterio se adopta al amparo de lo previsto en el art. 3.5 del [RD 130/2019](#). En ningún caso la imputación de la ayuda al centro de adscripción en la BDNS alterará la posición jurídica de cada sujeto según se haya configurado en las bases reguladoras y en la convocatoria de la subvención.

4.35 Ayudas para la recualificación del sistema universitario español

Las ayudas destinadas a la financiación de los costes laborales del personal investigador para la recualificación del sistema universitario español reguladas en el Real Decreto 289/2021, de 20 de abril ¿se registran en la BDNS?

El Real Decreto 289/2021 tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones, con carácter plurianual, a universidades públicas para la recualificación del sistema universitario español.

Para ello, las universidades beneficiarias destinarán las subvenciones otorgadas mediante ese real decreto a financiar las siguientes ayudas:

- Ayudas Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores.
- Ayudas para la recualificación del profesorado universitario funcionario o contratado.
- Ayudas María Zambrano para la atracción de talento internacional.

La concesión de estas ayudas por parte de una Universidad supone la formalización de un contrato laboral con el personal investigador.

El **contrato predoctoral** previsto en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, cuando se suscribe entre el personal investigador predoctoral en formación y las entidades públicas recogidas en el artículo 20.2 de dicha ley, o las privadas a que se refiere la disposición adicional primera de la misma, es una **relación laboral** y no tiene naturaleza de subvenciones.

Tampoco tienen naturaleza de subvenciones las siguientes modalidades de contratos laborales de investigación:

- Contrato de acceso de personal investigador doctor (art. 22 Ley 14/2011).
- Contrato de investigador distinguido (art. 23 Ley 14/2011).
- Contrato de actividades científico-técnicas (nuevo art. 23 bis Ley 14/2011).

En estos contratos, **la retribución que percibe el investigador es la contraprestación por su trabajo**, que aprovecha, fundamentalmente, el centro, organismo o universidad de adscripción, sin perjuicio de que en la realización este trabajo el personal investigador obtenga un elevado nivel de perfeccionamiento y especialización profesional.

Al no ser subvenciones, no tienen que registrarse en la BDNS.

Ahora bien, la Orden UNI/551/2021 de 26 de mayo, por la que se conceden las subvenciones previstas en el Real Decreto 289/2021, de 20 de abril **establece, entre las obligaciones impuestas a las universidades públicas beneficiarias de estas subvenciones, la de registrar y publicar las ayudas que concedan en la BDNS.**

Por tanto, a pesar de que el contrato del personal investigador predoctoral, del investigador doctor o del investigador distinguido es una relación laboral, **la citada Orden lo tipifica como una ayuda cuya concesión debe registrarse en la BDNS.**

4.36 Becas-descuento en la tasa de matrícula de una fundación pública

¿Se encuadran en el régimen tarifario o en el ámbito de las subvenciones?

Los descuentos o bonificaciones que forman parte de la estructura tarifaria de los servicios de formación y que se acuerdan dentro del proceso de determinación de los precios, quedan fuera del ámbito del régimen subvencionador. Por el contrario, las becas otorgadas por la fundación, incluso aunque se calculen a partir de los precios determinados en la citada estructura tarifaria y se detraigan al facturar el precio, deben calificarse como subvenciones.

Para establecer la naturaleza de estos descuentos hay que tener presente las siguientes cuestiones:

1º. Régimen de publicidad y transparencia de las fundaciones públicas.

Dicho régimen se contempla en la [Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno](#).

Su artículo 2 incluye dentro del ámbito subjetivo de la Ley a las fundaciones públicas (art. 2.1.h).

El artículo 8.1.c señala que estas entidades tienen que publicar, entre otros contenidos, las subvenciones y ayudas públicas concedidas.

La [LGS](#) se modificó en 2014 para dar respuesta a la obligación de publicidad de las subvenciones y ayudas públicas mediante la BDNS (art. 20.8)

En consecuencia, las fundaciones públicas están sometidas al deber de publicidad activa respecto a las subvenciones y ayudas públicas y esa obligación debe ser ejercida a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

2º. La siguiente cuestión que hay que plantearse es si las becas por las que se consulta tienen la naturaleza de subvenciones o ayudas públicas, pues éste es el ámbito al que se refiere el art. 8.1.c) de la [Ley 19/2013](#).

2ºA). El concepto de subvención se recoge en el artículo 2.1 de la [LGS](#). Este artículo establece una serie de requisitos de entre los que consideraremos en este momento la condición de "disposición dineraria".

La disposición dineraria no se circunscribe única y exclusivamente a una salida de dinero o una transferencia positiva de fondos, sino que tal disposición se puede instrumentar también mediante la compensación de pagos, cuando el acreedor y el deudor se confunden en la misma persona.

Ahora bien, es necesario avanzar acerca de si esa compensación, además de referirse a la misma persona, afecta también al mismo crédito, es decir, si procede de la misma relación jurídica o, por el contrario, trae causa en motivos diferentes.

En este sentido, nos encontramos ante dos situaciones:

- A. Descuentos o bonificaciones que forman parte de una única configuración tarifaria.
- B. Compensaciones que derivan de consideraciones externas al propio establecimiento de las tarifas.

En el primer caso, es durante el proceso de aprobación de las tarifas o precios, cuando se introducen consideraciones particulares, que se aplicarán en aquellos casos en que concurran las circunstancias previstas. Por ejemplo, si se establece ya desde un comienzo que todos los alumnos procedentes de una misma empresa abonarán una tarifa reducida, o bien, si se reconoce una rebaja a los alumnos de familias numerosas: la valoración de tales descuentos y su razonabilidad se realizará bajo el paradigma de la sostenibilidad de los servicios, y la previsión de sus costes será tenida en cuenta a la hora de determinar las tarifas generales.

En el segundo caso, nos encontramos ante una situación superpuesta a unas tarifas previamente establecidas, que obedece a circunstancias ajenas a la propia determinación de las tarifas. Por ejemplo, la convocatoria de unas becas a favor de un número máximo de alumnos. En este caso, la valoración o el análisis sobre la bondad de estas becas se deberá hacer no ya desde un punto de vista mercantil o tarifario, sino atendiendo a las razones de utilidad pública o interés social y a la eficacia que se logre en el fomento de las actuaciones que se pretendan impulsar.

Esta diferenciación de matiz ha sido también empleada por el Tribunal Supremo al comparar las bonificaciones tributarias y la concesión de subvenciones para sufragar esos mismos tributos.

Así, la [STS de 14 de noviembre de 2012 \(Rec. de casación 697/2010\)](#) se remite a la STS de 16 de diciembre de 1994, en la que ya se distinguía entre beneficios estrictamente tributarios y "aquellos beneficios que sólo guardan con el Impuesto una simple relación de referencia funcional, es decir, que se establecen u operan en función del Impuesto, pero sin integrarse, de suyo, en su propia estructura, resultando así marginales al mismo, como elementos extrínsecos que actúan desde fuera de su ámbito, por más que, último término, puedan redundar, en favor del sujeto pasivo, eliminando o atenuando desde un punto de vista meramente económico el gravamen impositivo que, en principio y bajo la perspectiva estrictamente fiscal, no deja de alcanzarle".

Trasladado este mismo modelo al ámbito de los precios privados, nos encontramos igualmente ante dos supuestos, que configuran sendas soluciones diferentes. En el primer caso, cuando la rebaja o la bonificación se efectúa durante el proceso de fijación de los precios, atendiendo prioritariamente a la sostenibilidad económica del servicio y considerando los efectos económicos de estas bonificaciones para la determinación final de los precios, entonces nos encontramos dentro del ámbito de los precios privados, cuya fijación seguirá los procesos establecidos dentro de la Fundación para la aprobación de los precios. En el segundo caso, cuando lo que se acuerde sea la concesión de unas becas que se materializan en un descuento de los precios generales, pero que se superponen a los precios previamente establecidos, nos encontraremos dentro del ámbito de las subvenciones, en el marco del régimen contemplado en la DA 16ª [LGS](#), y **deben registrarse en la BDNS**.

4.37 Convenios con particulares

¿Los Convenios que se suscriben con particulares, son subvenciones o son contratos?

Es un uso muy habitual en las administraciones públicas la utilización del convenio para encubrir otras figuras jurídicas que subyacen en el fondo del negocio jurídico (fundamentalmente contratos), por ello, la [Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público](#) (LRJSP) establece que “*Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos*” de lo contrario, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público.

La IGAE se ha pronunciado varias veces sobre el régimen aplicable a determinados Convenios, señalando que hay que atender a la verdadera naturaleza jurídica del gasto, cualquiera que sea la forma o denominación que las partes den al instrumento jurídico del que nace la obligación económica para la Administración.

La propia [LRJSP](#) permite que el convenio instrumente una subvención, si bien exige el cumplimiento de la [LGS](#) y, en su caso, de la normativa autonómica de desarrollo que resulte aplicable.

Cuando la [LGS](#) se ocupa de los convenios en el ámbito de la actividad de fomento, lo hace considerando como partes a la Administración concedente y al tercero beneficiario o entidad colaboradora. Así, los convenios son el instrumento habitual para canalizar las subvenciones directas y para regular los derechos y obligaciones de las entidades colaboradoras.

Es el artículo 2.3 del [Reglamento de la LGS](#), precepto de carácter básico, el que clarifica si un convenio está o no sujeto a la [LGS](#), partiendo siempre del concepto legal de subvención. El citado artículo establece que están incluidos en el ámbito de aplicación de la [LGS](#) los convenios de colaboración celebrados entre Administraciones Públicas, en los que únicamente la Administración Pública beneficiaria ostenta competencias propias de ejecución, consistiendo la obligación de la Administración Pública concedente de la subvención en la realización de una aportación dineraria a favor de la otra parte del convenio, con la finalidad de financiar una actividad propia de la Administración que recibe los fondos.

También incluye en el ámbito de aplicación de la Ley los convenios de colaboración por los que la Administración asume la obligación de financiar, en todo o en parte, una actividad ya realizada o a realizar por personas sujetas a derecho privado y cuyo resultado, material o inmaterial, resulte de propiedad y utilización exclusiva de dicho sujeto.

Por lo tanto, un Convenio está en el ámbito subvencional cuando:

- Se celebra entre dos administraciones públicas, y la concedente financia actividades propias de la beneficiaria.
- Se celebra entre una administración pública y un ente privado, y la actividad financiada resulta de propiedad y uso exclusivo del ente privado.

De dicho precepto se deduce, a sensu contrario que, no tendrán la consideración de subvenciones los convenios celebrados con entidades públicas cuando la que hace la entrega de los fondos ostenta competencias de ejecución sobre la materia objeto del convenio, ni los convenios con entes de derecho privado cuando el resultado de la actuación no sea de propiedad o utilización exclusiva del privado.

En estos últimos casos se está ante **relaciones de naturaleza contractual**, y esos aprovisionamientos o provisiones deben encauzarse a través de los mecanismos previstos en [la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público](#).

Puede ser interesante que el lector consulte los siguientes artículos:

- Felio J. Bauzá Martorell - Convenios con particulares: límites entre contrato, convenio y subvención ([aquí](#))
- Carme Sibina Vida - Delimitación entre contrato, convenio y subvención ([aquí](#)).

Se ha suscrito un convenio entre el Ayuntamiento y la ONG “Barrenderos sin fronteras”, para la limpieza de los viales del municipio. ¿Se debe registrar en BDNS?

Tal convenio es en su naturaleza una relación jurídica contractual de aprovisionamiento, y como tal debe ser encauzada a través de la normativa de contratos. **No se está ante una subvención, sino ante un contrato.** No se debe registrar en la BDNS, pero debe cumplir todos los requisitos de la [Ley 9/2017](#).

4.38 Concursos de proyectos o ideas

¿Hay que registrar en la BDNS la información de Concursos de proyectos o ideas con primas de participación o pagos a los participantes?

De acuerdo con las Directivas comunitarias, el artículo 183.1 de la [Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público](#) dispone que «*son concursos de proyectos los procedimientos encaminados a la obtención de planos o proyectos, principalmente en los campos de la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería y el procesamiento de datos, a través de una selección que, tras la correspondiente licitación, se encomiende a un jurado*», y añade en su apartado 2 que «*Las normas de la presente sección se aplicarán a los concursos de proyectos que respondan a uno de los tipos siguientes:*

- a) *Concursos de proyectos organizados en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato de servicios, en los que eventualmente se podrán conceder premios o pagos.*

El contrato de servicios que resulte del concurso de proyectos además también podrá tener por objeto la dirección facultativa de las obras correspondientes, siempre y cuando así se indique en el anuncio de licitación del concurso.

- b) *Concursos de proyectos con premios o pagos a los participantes».*

Así, en el concurso de proyectos, la Administración Pública licita un “concurso de ideas” desvinculado en principio de un posterior contrato de servicios, estimulando la participación a través de primas o pagos a los participantes. Lo que la Administración pretende con el concurso de proyectos es, en suma, conseguir la mejor idea o proyecto, que dará lugar, en su caso, a la elaboración del proyecto propiamente dicho a través de un posterior contrato de servicios, primando en esa fase previa del concurso de proyectos un componente de ideación, de originalidad estética, técnica o funcional cuya valoración, sobre la base del anonimato de los participantes, se encomienda a un jurado especializado integrado por personas físicas independientes.

Por tanto, el concurso de proyecto con primas de participación o pagos a los participantes es un procedimiento especial para la adjudicación de un servicio cuyo objeto es la elaboración de planos o redacción de proyectos. Así pues, el fondo del negocio jurídico es la contratación administración y no la concesión de una subvención y, en consecuencia, **no están sujetos a la obligación de registro en la BDNS, al no ser subvenciones ni ayudas públicas.**

4.39 Créditos con distribución territorial de una Conferencia Sectorial

¿Hay que registrar la información de los créditos con distribución territorial a favor de las CCAA

aprobados por la Conferencia Sectorial a los que se refiere el art. 86 de la Ley General Presupuestaria en la BDNS?

El artículo 2.4.b) del [RD 887/2006](#) de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre [LGS](#) excluye del ámbito de aplicación de la Ley "...la canalización de las subvenciones gestionadas a que se refiere el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria". Por tanto, la distribución territorial a favor de las Comunidades Autónomas de los créditos aprobados por la Conferencia Sectorial **no debe ser registrada en la BDNS**, salvo que esta distribución se canalice mediante la concesión de subvenciones.

4.40 Encomiendas de gestión instrumentadas a través de convenios

¿Existe obligación de registrar las encomiendas de gestión en la BDNS?

La encomienda de gestión realizada de conformidad con el artículo 11 de la [Ley 40/2015](#), de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público puede instrumentarse mediante convenio, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.3.b de la misma Ley.

En este sentido hay que indicar que el artículo 2.3 del Reglamento de la [LGS](#), precepto de carácter básico, establece que será de aplicación la ([LGS](#)) y su Reglamento a:

«a) Los convenios de colaboración celebrados entre Administraciones Públicas, en los que únicamente la Administración Pública beneficiaria ostenta competencias propias de ejecución sobre la materia, consistiendo la obligación de la Administración Pública concedente de la subvención en la realización de una aportación dineraria a favor de la otra u otras partes del convenio, con la finalidad de financiar el ejercicio de tareas, inversiones, programas o cualquier actividad que entre dentro del ámbito de las competencias propias de la Administración Pública destinataria de los fondos.

No obstante, constituyen una excepción a lo señalado en el párrafo anterior las aportaciones dinerarias que tengan por objeto financiar actividades cuya realización obligatoria por el beneficiario de la subvención venga impuesta por una ley estatal o autonómica, según cual sea la Administración Pública concedente».

En consecuencia, los convenios que instrumentan las encomiendas de gestión no se pueden encuadrar en los convenios a los que les es de aplicación la [LGS](#), atendiendo al primer párrafo del artículo 2.3.a) del [Reglamento de la LGS](#), y por tanto **no existe la obligación de registrarlos en la BDNS**.

4.41 Indemnizaciones por los daños causados por la fauna salvaje

¿Existe obligación de registrar en la BDNS las indemnizaciones por los daños causados por la fauna salvaje protegida?

Para determinar si estas indemnizaciones por los daños causados por la fauna salvaje protegida tienen o no la naturaleza de subvenciones es preciso conocer la finalidad de estas.

Entrando en el régimen general de responsabilidad, el artículo 33.3 [Constitución Española](#) dispone que «*nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes*». Asimismo, el artículo 106.2 de la [CE](#) dispone que los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Dicho derecho está actualmente desarrollado en los artículos 32 y siguientes de la [Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público](#) y en el [Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que regula los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial](#).

La abundante Jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia ha señalado como requisitos imprescindibles para poder declarar la responsabilidad patrimonial de una Administración Pública, los siguientes:

- la existencia de una lesión sufrida por el particular en sus bienes o derechos que sea antijurídica, esto es, que no tenga obligación de soportar, y que sea real y efectiva, individualizable, en relación a una persona o grupo de personas, y susceptible de valoración económica. En este sentido, la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 15 de marzo de 2011([STSJ M 309/2016](#)), haciéndose eco de la jurisprudencia de la propia Sala precisa que *"no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa"*.
- que la lesión sea imputable a la Administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público, entendido este como toda actuación, gestión, actividad, o tarea propia de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasividad
- que exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, sin que concurra fuerza mayor. Conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2007 ([STS 2278/2010](#)), *"la viabilidad de la responsabilidad patrimonial de la administración exige la antijuridicidad del resultado o lesión siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido"*.

En las indemnizaciones por los daños provocados por la fauna salvaje existe un vínculo causal entre los daños sufridos por el particular y la actividad normativa de la Administración. La Administración Pública, al dispensar protección a determinadas especies de animales por la concurrencia de un interés público relevante como es el interés medio-ambiental en la conservación y protección de la especie, imposibilita cualquier acción del particular para evitar los daños, que en consecuencia se reputan antijurídicos, pues no existe norma que le obligue a soportar dichos perjuicios de forma individualizada cuando los beneficios de la protección de la fauna salvaje alcanza a toda la sociedad. No puede, por tanto, excluirse el régimen general de responsabilidad patrimonial del artículo 32 de la Ley 40/2015. En estos términos se ha pronunciado el Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de marzo de 2013 ([STS 3819/2019](#)).

Mención especial merece la sentencia de 11 de febrero de 2020 del Tribunal Supremo ([STS 171/2020](#)) que tiene su origen en un recurso contencioso-administrativo presentado por un ganadero contra la desestimación de su reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños causados en su explotación ganadera por los ataques de los lobos. La Comunidad Autónoma había desestimado su reclamación porque el reclamante ya había sido indemnizado por los daños causados por el lobo a su ganadería mediante las ayudas concedidas para paliar las pérdidas económicas ocasionadas por los ataques de la fauna silvestre. El demandante considera que estas ayudas son insuficientes para indemnizarle el daño provocado.

La sentencia viene a interpretar el artículo 54.6 de la Ley 42/2007, 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que establece:

«Sin perjuicio de los pagos compensatorios que en su caso pudieren establecerse por razones de conservación, con carácter general, las Administraciones públicas no son responsables de los daños ocasionados por las especies de fauna silvestre, excepto en los supuestos establecidos en la normativa sectorial específica».

Según la sentencia «... cuando se trata de especies animales que gozan de singular protección, por la concurrencia de un interés público relevante como es el medioambiental para la conservación y protección de la especie, ello determina que los particulares no puedan adoptar sus propias medidas, pues corresponde a la Administración adoptar aquellas más adecuadas para la conservación del "canis lupus" en esa zona. Y en estas circunstancias, determinadas por la normativa sectorial específica y concretada en la especie animal causante del daño, la actuación administrativa se sujeta a la responsabilidad patrimonial por los daños producidos en cuanto no exista un deber de soportarlos y concurren los demás requisitos exigidos al efecto».

En esta sentencia el Tribunal Supremo sienta doctrina sobre la concurrencia de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas ante daños a explotaciones ganaderas ocasionados por especies salvajes, en

concreto por el lobo, animal que ostenta una especial protección sustentado en el interés público medioambiental en el que se enmarca y su relevancia para la conservación y protección de la especie.

Frente a la regla general de falta de responsabilidad de las Administraciones públicas por los daños causados por la fauna silvestre, reconoce la excepción a esta regla cuando una norma sectorial establece una protección especial a alguna especie. En este caso se está ante una actividad administrativa sujeta a previsiones concretas y determinadas, y cuyo desarrollo, en la medida en que incida de manera perjudicial en la situación patrimonial del administrado, constituye título suficiente para entender que concurre uno de los elementos de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas: la imputación del daño a una actividad de la misma, en cuanto no le venga impuesto el deber de soportar dicho daño al particular.

Por tanto, si hay una norma sectorial que establece una protección especial para la especie que ha causado el daño, las compensaciones económicas concedidas se enmarcan en ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración pública y no en el ámbito subvencional.

Ahora bien, si estas compensaciones económicas por los daños a explotaciones ganaderas ocasionados por las especies salvajes protegidas están sujetas al régimen de ayudas *de minimis* o al régimen de ayudas de estado, sí deben registrarse en la BDNS.

Las [Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020 \(2014/C 204/01\)](#), prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2022, expone las condiciones y los criterios para que las ayudas al sector agrícola para compensar los daños causados por animales protegidos sean consideradas compatibles con el mercado interior.

¿Y las indemnizaciones por el sacrificio de ganado en campañas de saneamiento?

En cuanto a las ayudas derivadas de los programas de erradicación de enfermedades de los animales, hay que destacar que la finalidad de estos programas es la de realizar una actuación preventiva y de erradicación con fines de salud pública, que el [artículo 43.2 de la Constitución Española](#) encomienda a los Poderes públicos. Si estos programas provocan un perjuicio para el ganadero afectado, éste tendrá derecho a la correspondiente indemnización establecida reglamentariamente, como manifestación del principio de indemnidad que para el caso de sacrificio patrimonial por causa de utilidad pública establece el [art. 33.3 de la CE](#) (Sentencia del Tribunal Supremo 1293/2016 de 2 junio).

Por tanto, la propia normativa reguladora reconoce el carácter indemnizatorio de las aportaciones económicas que realiza la Administración por el sacrificio de animales.

Ahora bien, si estas compensaciones económicas por los daños a explotaciones ganaderas por el sacrificio de animales impuesto por los programas de prevención, control y erradicación de enfermedades están sujetas al régimen de ayudas *de minimis* o al régimen de ayudas de estado, sí deben registrarse en la BDNS.

En consecuencia, en ambos casos estamos ante indemnizaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y su información **no debe ser recogida en la BDNS salvo que la compensación económica tenga la consideración de ayuda *de minimis* o ayuda de estado en el marco jurídico europeo.**

4.42 Publicidad de las subvenciones financiadas parcialmente por el FSE

¿Existe obligación de registrar en la BDNS las subvenciones cofinanciadas por el FSE?

Las subvenciones concedidas con financiación total o parcial de fondos europeos son subvenciones en tanto cumplan los requisitos del art 2 y 3 de la [LGS](#) y, en consecuencia, estarán sujetas a la citada Ley.

No obstante, el artículo 6 reconoce la supremacía de la normativa comunitaria, siendo la normativa nacional aplicable con carácter supletorio (art. 6.2 [LGS](#)).

En apoyo de este criterio cabe citar las siguientes sentencias del Tribunal Supremo:

- Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2014 ([STS 2595/2014](#)): aplica supletoriamente el procedimiento de control.
- Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2015 ([STS 3646/2012](#)): aplica supletoriamente el procedimiento de reintegro.
- Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2010 ([STS 7069/2010](#)): aplica supletoriamente el procedimiento de control.

La [LGS](#) establece en su artículo 23.2 que, en el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, la convocatoria debe publicarse en la BDNS y un extracto de la misma en el diario oficial competente. Asimismo, el artículo 20.8 establece que la BDNS operará como sistema nacional de publicidad de las subvenciones, dando publicidad a las convocatorias de subvenciones y a las subvenciones concedidas; para su publicación, las administraciones concedentes. Estos preceptos se aplican supletoriamente a las subvenciones financiadas total o parcialmente con fondos europeos, al omitir la normativa comunitaria la publicidad de la convocatoria y de las concesiones de subvenciones.

Así, las disposiciones adicionales 3ª y 4ª del [Reglamento de la LGS](#) contenían la previsión de remisión de la información sobre subvenciones financiadas con fondos europeos a la BDNS, si bien establecía que la información sería suministrada por el FEGA y por las autoridades de pago. El [RD130/2019](#) ha derogado expresamente las citadas disposiciones. Por tanto, las subvenciones financiadas con fondos europeos están sujetas al procedimiento general de registro de información a la BDNS: la información será aportada por los órganos concedentes.

Aun cuando el [Reglamento \(UE\) 1303/2013](#), de 17 de diciembre de 2013 contempla el régimen de registro de estas ayudas en un sistema especial, este hecho no impide ni exceptúa el registro de las mismas operaciones en la BDNS, tal y como ocurre en múltiples áreas de fomento.

Las finalidades de unos sistemas u otros justifican el mantenimiento de cada uno de ellos. En el caso de la BDNS, una de sus finalidades radica en "*garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer todas las subvenciones convocadas en cada momento...* (art. 20.8 [LGS](#))"; pero su finalidad no se limita al ámbito de la publicidad, sino que además, sirve para otros muchos fines; merece destacarse por su importancia, el de la lucha contra el fraude de subvenciones, cuyo instrumento principal consiste en el conocimiento de todas las ayudas percibidas por cada beneficiario; o el fraude fiscal, que se combate mediante la colaboración de la BDNS con la Administración tributaria en virtud de la previsión contenida en el art. 20.5.c.

En definitiva, el hecho de que determinados ámbitos subvencionadores cuenten con sistemas de información propios, **no exceptúa el deber de registro en la BDNS**.

4.43 Ayudas para el pago del IBI, IVTM, tasa de basuras, etc.

¿Se pueden convocar subvenciones como ayuda económica para pagar el Impuesto sobre Bienes inmuebles (IBI)?

El Tribunal Supremo ha declarado la ilegalidad de ese tipo de subvenciones.

Los elementos esenciales de un tributo son aquellos a través de los que se determina el importe de la cuota líquida y el obligado a pagarla. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Artículo 9.1) dice que «*No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los **expresamente previstos en las normas con rango de ley** o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales*». Y el Tribunal Constitucional determinó (STC 37/1981 y STC 102/2005) que «*si bien la reserva de ley en materia tributaria ha sido establecida por la Constitución de manera flexible, tal reserva cubre los criterios o principios con arreglo a los cuales se ha de regir la materia tributaria, y concretamente la creación ex novo del tributo y la determinación de los elementos esenciales o configuradores del mismo*».

Además, en el artículo 60 de la mencionada Ley dice "El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en esta ley", fijando las bonificaciones obligatorias y potestativas, respectivamente, en los artículos 73 y 74.

La Ley establece el rango de discrecionalidad que el ayuntamiento puede ejercer en sus propios tributos. Y ese rango se rompe en este caso mediante un mecanismo subvencional. En definitiva, es una alteración de un elemento básico del tributo, para el cual no tiene competencia el Ayuntamiento (principio de reserva de ley).

Además, se transforma un *tributo directo de carácter real* en un tributo de naturaleza personal, considerando circunstancias personales (monoparentalidad, edad, etc.) para determinar la cuota tributaria.

El efecto jurídico real de estas subvenciones, lo determinó el Tribunal Supremo en la **STS 1979/2014**:

«...partiendo del respeto a la autonomía local y a la posibilidad legal de que los Ayuntamientos apliquen en las Ordenanzas fiscales beneficios potestativos, éstos se fijarán con respeto a las previsiones legales del TRLHL y de la Ley General Tributaria (arts. 9.1 y 12.2TRLHL), debiendo fijar las cuotas del IBI conforme a lo dispuesto legalmente (art. 15.2 TRLHL), lo que nos lleva a sentar que las reducciones que se realicen en las cuotas impositivas deberán regirse por las determinaciones legales (art. 71 TRLHL)».... «en lugar de utilizar el peculiar sistema de subvenciones, ajenas en su naturaleza jurídica y fines al ámbito fiscal...»

Puede consultar como fuente doctrinal sobre este particular el artículo "Las subvenciones como beneficio fiscal encubierto", Beatriz Moreno Serrano, El Consultor de los Ayuntamientos, especial marzo 2019, página 160 y ss., Editorial Wolters Kluwert.

4.44 Transferencias que el Ayuntamiento realiza a una entidad local menor

¿Son subvenciones?

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local modificó sustancialmente el régimen de las entidades locales autónomas: de ser sujetos de derechos y obligaciones con plena capacidad para el ejercicio de sus atribuciones han pasado a tener la consideración de órganos de gestión desconcentrada.

Así, la Ley 27/2013 incluyó un nuevo artículo 24 bis en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, con la siguiente redacción:

«Artículo 24 bis.

1. *Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán los entes de ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes».*

Si bien, el apartado primero de la Disposición transitoria cuarta de la Ley 27/2013 ha permitido mantener a las entidades locales autónomas que ya existían y aquellas cuyo procedimiento de creación se hubiese iniciado antes del 1 de enero de 2013, el nivel de descentralización del que se encontraban dotadas:

«1. Las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio existentes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley mantendrán su personalidad jurídica y la condición de Entidad Local.»

Ante este nuevo marco jurídico, la Junta de Andalucía aprobó el Decreto 156/2021, de 4 de mayo, por el que se regulan las Entidades Locales Autónomas de Andalucía.

Este Real Decreto establece en el apartado 3 del artículo 28 que:

«3. Los municipios en cuyo término existan entidades locales autónomas deberán consignar anualmente en sus presupuestos una asignación económica destinada a nutrir el de estas, conforme a los criterios a que se refiere el artículo 116.3.b) de la Ley 5/2010, de 11 de junio. En cualquier caso, dicho sistema de financiación tendrá una vigencia de cinco años y deberá ser actualizado en cada ejercicio presupuestario. Por acuerdo entre el municipio matriz y la entidad local autónoma se establecerá el método de pago de la

transferencia anual, que en caso de falta de acuerdo se dividirá en doce mensualidades iguales, con la total liquidación al final de cada año».

El artículo 116.3.b) de la Ley 5/2010, en virtud del cual se consigna estas asignaciones económicas, regula el sistema de financiación basado en criterios de participación de las entidades locales en los tributos del municipio.

Por tanto, **estas transferencias que el Ayuntamiento realiza a la entidad local menor no tienen naturaleza de subvenciones**, tal y como las define la LGS en su artículo 2.1. Estas transferencias son un mecanismo ordinario de las relaciones financieras que se derivan de la aplicación del régimen de financiación de las entidades locales.

4.45 Ayudas concedidas por el programa Erasmus+

¿Son subvenciones?

Erasmus+ es el programa de acción de la UE para apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte, para el período del marco financiero plurianual 2021-2027.

Administrar el programa Erasmus+ la Comisión Europea, la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) y una serie de agencias nacionales en los países del programa y algunos países asociados.

La ejecución del programa Erasmus+ en los ámbitos **de educación, formación y juventud** se lleva cabo mediante **gestión indirecta**, lo que significa que la Comisión Europea confía las tareas de ejecución presupuestaria a las agencias nacionales, sin perjuicio de que la Comisión apruebe y publique la convocatoria de las propuestas. Este enfoque se justifica por la conveniencia de acercar Erasmus+ todo lo posible a sus beneficiarios y adaptarse a los diversos sistemas educativos, de formación y relativos a la juventud nacionales.

Las agencias nacionales **promueven y ejecutan el Programa a escala nacional** y actúan como vínculos entre la Comisión Europea y las organizaciones participantes a escala local, regional y nacional. Se encargan, entre otras funciones, de administrar un proceso justo y transparente de selección de las solicitudes de proyectos que se van a financiar en su país.

En España son dos las organizaciones designadas como agencias nacionales para la gestión coordinada del programa Erasmus+:

- El Servicio Español para la internacionalización de la Educación (SEPIE), Organismo Autónomo dependiente del Ministerio de Universidades, encargado de la gestión del programa Erasmus + en el ámbito de la educación y la formación.
- El Instituto de la Juventud (INJUVE) en colaboración con los organismos de juventud de las comunidades y ciudades autónomas y el Consejo de la Juventud de España (CJE) conforman la Agencia Nacional Española (ANE), encargada de la gestión del capítulo de Juventud del programa europeo Erasmus+.

Las acciones del ámbito de deportes y las acciones centralizadas de otros ámbitos son gestionadas de forma directa por la Comisión Europea a través de la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura (EACEA).

Aquellas acciones Erasmus+ gestionadas de forma indirecta por una agencia nacional (SEPIE o ANE-INJUVE), deben ser registradas en la BDNS en virtud del artículo 6 de la LGS:

«Artículo 6. Régimen jurídico de las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea.

- 1. Las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea se regirán por las normas comunitarias aplicables en cada caso y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquéllas.*
- 2. Los procedimientos de concesión y de control de las subvenciones regulados en esta ley tendrán carácter supletorio respecto de las normas de aplicación directa a las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea».*

Por otra parte, salvo que exista cofinanciación nacional, no existe obligación de registrar las acciones del programa Erasmus+ gestionadas directamente por la Comisión Europea.

¿Quién debe registrar en la BDNS las subvenciones financiadas por el programa Erasmus+?

Las agencias nacionales para la gestión coordinada del programa Erasmus+ (SEPIE e ANE-INJUVE) están obligadas a registrar en la BDNS la información relativa las ayudas concedidas a los proyectos seleccionados.

Como es la Comisión Europea la que aprueba y publica la convocatoria de propuestas sobre la base del Reglamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2021, por el que se establece «Erasmus+», la agencia nacional registrará en la BDNS una **convocatoria instrumental** adjuntando la convocatoria de propuestas Erasmus+ publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea como documento de la convocatoria. A esta convocatoria se asociará la información relativa a las subvenciones concedidas a los beneficiarios. De conformidad con la Guía del Programa Erasmus+, los beneficiarios de una subvención Erasmus+ son las organizaciones participantes cuyas solicitudes de proyecto han sido seleccionadas. Asimismo, deberá registrar el pago o pagos de cada subvención concedida.

En el registro de la convocatoria, al identificar el fondo europeo que financia las subvenciones se debe seleccionar la opción "FGI – FONDOS DE GESTIÓN INDIRECTA (art. 58.1.c Rgto. UE Nº 966/2012) que figura en el desplegable de "Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o Fondos UE":

Si las subvenciones a conceder están cofinanciadas con fondos nacionales, se hará constar esta circunstancia. El importe al que asciende la financiación nacional se registrará en las "Fuentes de financiación":

¿Quién debe registrar en la BDNS los participantes de las acciones de movilidad del programa Erasmus+?

La entidad pública o privada que recibe la financiación con cargo al programa Erasmus+ deberá registrar en la BDNS las becas Erasmus+ que conceden. Si el procedimiento de selección de los participantes en las acciones de movilidad del programa Erasmus+ (alumnos, estudiantes, estudiantes en prácticas, jóvenes, aprendices adultos, personal de educación de personas adultas, ...) es abierto y en concurrencia competitiva, se registrará una convocatoria canónica. En caso contrario se registrará una convocatoria instrumental.

4.46 Programa de Cooperación Económica Municipal [Nueva 2025]

Las líneas de ayudas concedidas por las Diputaciones Provinciales en ejecución de los planes de cooperación municipal ¿se deben registrar en la BDNS?

Los artículos 31 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establecen la presencia de las Diputaciones Provinciales como una administración territorial cuya acción pública principal es la asistencia y cooperación con los municipios.

Esta acción propia y principal determina, a su vez, que el régimen jurídico de la cooperación económica sea el que se establezca en las leyes de régimen local, aplicando de forma supletoria la Ley General de Subvenciones, al reconocer ésta en su disposición adicional octava la especialidad del ejercicio de acción pública de la cooperación como propia, que va a impregnar el sistema o procedimiento de apoyo económico a los Ayuntamientos.

Esta disposición adicional octava de la Ley General de Subvenciones fue introducida por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad en cuyo preámbulo justificaba esta decisión en los siguientes términos:

«Finalmente, el capítulo tercero introduce mejoras en los trámites administrativos al excluir del ámbito de aplicación de la Ley General de Subvenciones la actividad subvencional de las Diputaciones Provinciales. De esta forma se evitan trámites innecesarios que no aportan valor añadido y generan altos costes de

transacción, partiendo de que la actividad de cooperación desarrollada por las Diputaciones Provinciales respecto a los municipios responde a una naturaleza diferente, orientada a garantizar unos parámetros de igualdad de todos los ciudadanos en el disfrute de los servicios públicos, al mismo tiempo que tiene un carácter obligatorio e irrenunciable».

Así, la excepcionalidad de la cooperación económica permite que el procedimiento de concesión de estas ayudas específicas, la justificación de las ayudas percibidas y el control de estas se articule en los propios planes de cooperación (art. 36.2 b) de la LBRL).

Ahora bien, esta excepcionalidad de la cooperación económica no alcanza a la publicidad de las subvenciones que se conceden en ejecución de los planes de cooperación.

El artículo 8.c de la [Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno](#) establece la obligación de hacer públicas «Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios».

En aplicación a este principio, la BDNS opera como Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (artículo 20.8 de la [Ley General de Subvenciones](#)). Para ello, la BDNS contiene información sobre todas las subvenciones y las ayudas públicas concedidas que se relacionan en el artículo 2.1 del [Real Decreto 130/2019](#), de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

En la medida en que las aportaciones contempladas en el plan de cooperación tienen la naturaleza de subvención, aun cuando la [Ley General de Subvenciones](#) se aplique supletoriamente, su información debe ser suministrada a la BDNS y son objeto de publicación en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (www.infosubvenciones.es).

4.47 Aportaciones dinerarias entre distintos agentes de una Administración [Nueva 2025]

Las aportaciones dinerarias realizadas por una Comunidad Autónoma a entidades adscritas a esa Comunidad para financiar actuaciones concretas en el marco de sus competencias y que no se encuentran en el ámbito de la Ley General de Subvenciones ¿deben registrarse en BDNS?

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 de la [Ley General de Subvenciones](#), están excluidas del ámbito de su aplicación las aportaciones dinerarias que se realizan entre los distintos agentes de una Administración cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenecen, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria pública.

Por tanto, tres son los requisitos que deben cumplir estas aportaciones para quedar excluidas del ámbito de aplicación de la LGS:

- Que las aportaciones dinerarias se realicen entre agentes de una Administración en cuyos presupuestos se integran.

En este sentido, se entiende que un "agente de una Administración" es toda aquella entidad o ente con capacidad de obrar perteneciente a dicha Administración: Organismos autónomos y demás entes públicos dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma así como las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, se exige que la entidad concedente y la beneficiaria de la aportación integren sus presupuestos en los presupuestos de la Administración a la que pertenecen.

- La aportación dineraria debe destinarse a financiar globalmente la actividad del destinatario de la misma o bien una actuación concreta. Ambos conceptos, financiación global y financiación concreta, se encuentran definidos en la propia normativa subvencional. Así por financiación global habrá de entenderse lo que al respecto establece el artículo 2.2 del [Reglamento General de Subvenciones](#). Por su parte, respecto a lo que se entiende por financiación concreta, sería de aplicación lo establecido en el artículo 2.1 b) de la propia [Ley General de Subvenciones](#) «*Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, ...*».
- La aportación dineraria no resulta de una convocatoria pública. Este requisito implica que si la aportación dineraria se realiza en el ámbito de una convocatoria pública realizada de acuerdo con la [Ley General de Subvenciones](#), dicha aportación tendrá la consideración de subvención y, en consecuencia, le será de aplicación la citada Ley. En este caso la información relativa a la conexión de la ayuda se registrará en la BDNS. Por contra, cuando la aportación dineraria se realice al margen de cualquier convocatoria pública, siempre y cuando se cumplan los dos requisitos anteriormente analizados, no estaremos ante una subvención y por tanto su entrega no estará sujeta a los preceptos de [la Ley 38/2003](#).

Estas aportaciones dinerarias, al estar excluidas de la [Ley General de Subvenciones](#), no están sujetas a la obligación de suministro de información a la BDNS.

Ahora bien, la circunstancia de que no se aplique la [Ley General de Subvenciones](#) a estas aportaciones dinerarias no implica la exclusión de lo dispuesto en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Si alguna de estas aportaciones dinerarias tiene la naturaleza de ayudas estatales hay que suministrar la información a la BDNS.

5. SOBRE LAS CONVOCATORIAS

5.1 Obligación de publicidad de las convocatorias mediante la BDNS

¿Es optativa o es obligatoria la publicación de los anuncio/extracts de las convocatorias en el Diario Oficial (Estado, CC.AA, Provincia)?

La publicación de los extractos de las convocatorias de subvenciones y ayudas en el diario oficial es obligatoria, sin perjuicio de las medidas de difusión de la convocatoria que decida adoptar el órgano convocante. La publicación del extracto de la convocatoria en el diario oficial se realizará con la intermediación de la BDNS salvo en aquellas Comunidades Autónomas que hayan optado por prescindir de esta intermediación.

El régimen de publicidad de las convocatorias de subvenciones y ayudas públicas experimentó un cambio espectacular con la entrada en vigor del artículo 20.8.a) de la [LGS](#), en su nueva redacción dada por la [Ley 15/2014](#), de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.

En virtud del citado precepto, la convocatoria de subvenciones se publica en el [SNPSAP](#), previo registro del texto de la convocatoria y de la información requerida en la BDNS. De esta manera se garantiza la difusión generalizada de información a todos los potenciales solicitantes, mediante la publicación en un único repositorio de todas las convocatorias que son ofertadas en cada momento por las diferentes administraciones públicas.

Asimismo, la BDNS sirve de intermediaria entre el órgano convocante y el diario oficial, dejando reposar la eficacia de la convocatoria en la publicación de su extracto/anuncio en el correspondiente diario oficial, en referencia a lo establecido en el artículo 39.2 de la [LPACAP](#).

No obstante, la [Sentencia 33/2018, de 12 de abril de 2018 \(BOE 22 de mayo de 2018\)](#) declaró la inconstitucionalidad de los términos «por conducto de la base de datos nacional de subvenciones» del artículo 17.3 de la [LGS](#) y el inciso «La base de datos nacional de subvenciones dará traslado al diario oficial correspondiente del extracto de la convocatoria, para su publicación, que tendrá carácter gratuito» del artículo 20.8.a) de la misma Ley, que no serán de aplicación a las Comunidades autónomas, sin perjuicio de su aplicación a las demás Administraciones sujetas a esta Ley.

A la vista de este pronunciamiento, el [RD 130/2019](#) ha recogido en el artículo 6.3 la posibilidad de que las comunidades autónomas que opten por prescindir de la intermediación de la BDNS en la publicación del extracto de la convocatoria de subvenciones en su diario oficial, registren en la BDNS únicamente la información de la convocatoria acompañada del texto de la misma, una vez que ésta haya sido aprobada y con antelación suficiente para que los interesados puedan presentar sus solicitudes dentro del plazo establecido.

Esos otros medios de difusión pública mencionados en la respuesta anterior ¿pueden incluir también el propio Diario oficial donde se publica el extracto o, por el contrario, debe entenderse que la publicación del extracto prohíbe implícitamente la publicación de la convocatoria completa en ese diario oficial?

Uno de los principios básicos que soportan todo el entramado jurídico de las subvenciones y ayudas es el principio de TRANSPARENCIA. Ni la [LGS](#) ni las Resoluciones de la IGAE restringen la publicidad. Solo imponen que, como mínimo, las convocatorias se deben tramitar de una determinada manera, para que se les pueda dar el adecuado tratamiento de TRANSPARENCIA, y se asegure su validez jurídica mediante la publicación del extracto.

A partir de ahí, cada convocante es muy libre de **maximizar la publicidad** (maximizando así también la transparencia) por todos los medios, entre los que se encuentra, por supuesto, el D.O. si así lo desea y encaja dentro de su marco normativo particular.

5.2 Requisitos formales de las Convocatorias

¿Qué requisitos de firma deben cumplir el documento de la convocatoria para ser registradas en la BDNS?

En el momento actual no se ha establecido ningún requisito especial de firma en el documento de la convocatoria para ser registrado. La BDNS sólo precisa que el documento que contiene el texto de las convocatorias se reciba en formato PDF, aunque resulta siempre preferible que estén firmadas electrónicamente.

Como la firma manuscrita es un dato personal y la firma electrónica incorpora el nombre y apellidos y DNI del firmante, se recomienda adoptar las medidas de protección de datos que se recogen en el [apartado 1.4](#) de este documento.

¿Qué requisitos de forma deben tener los extractos de convocatoria al ser registradas en la BDNS para su envío a Diarios Oficiales?

En el ámbito de la Administración General del Estado y de los órganos que publican sus actos a través del BOE, existe una Guía de estilo editada por la IGAE y el BOE: [Guía de Estilo para extractos de convocatoria de subvenciones](#). Para evitar demoras y retrasos se aconseja seguir la guía de estilo. El resto de las administraciones públicas pueden seguir también esta guía, si lo consideran de utilidad.

5.3 Información sobre la Convocatoria en la BDNS

¿A qué tipo de información sobre la convocatoria se tiene acceso en la BDNS?

La BDNS contiene tanto el documento de la convocatoria como aquella documentación adicional que el órgano gestor decida registrar: formularios de solicitudes, instrucciones de cumplimentación, anexos, etc. El portal del [SNPSAP](#) publicará además de los datos estructurados registrados en la BDNS, los documentos que ha adjuntado el órgano convocante en la convocatoria.

5.4 Concepto de “Convocatoria” a efectos de la BDNS

La BDNS y el SNPSAP (www.infosubvenciones.gob.es) deben dar un tratamiento homogéneo en materia de publicidad y transparencia a todas las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con independencia de marco jurídico que regula los procedimientos de concesión. Para ello, utilizan la entidad de información CONVOCATORIA que no necesariamente coincide con el acto administrativo de llamada a los potenciales beneficiarios para presentar sus solicitudes.

Así, a los efectos del registro en la BDNS de la entidad de información CONVOCATORIA y su consulta en el [SNPSAP](#), se tipifican las convocatorias en dos figuras:

- **Convocatoria instrumental.** Es una entidad de información que se registra en la BDNS en aquellas subvenciones o ayudas públicas en las que no es preceptivo el acto administrativo de convocatoria. A través de la convocatoria instrumental se incorpora la información estructurada necesaria para dar cumplimiento de las obligaciones de publicidad de las subvenciones y ayudas públicas (régimen jurídico que habilita la concesión de la subvención o ayuda pública, el crédito disponible, las fuentes de financiación, la finalidad).

La BDNS necesita generar una convocatoria instrumental, aunque el procedimiento de concesión no conste de una convocatoria jurídica, para engranar al órgano concedente con la concesión de la subvención o ayuda.

- **Convocatoria canónica.** Es una entidad de información utilizada en la BDNS para registrar aquellos procedimientos de concesión de subvenciones o ayudas públicas que se inician con la aprobación del

acto administrativo de convocatoria y que invita a los potenciales beneficiarios a que soliciten una subvención o ayuda pública.

La convocatoria canónica sigue los esquemas especiales de publicidad establecidos en la [LGS](#): la convocatoria se publica en el SNPSAP y su extracto se publica en el diario oficial correspondiente.

La [Resolución de 15 de junio de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro y publicación de convocatorias en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas](#), las define de la siguiente manera:

«1. *Convocatoria canónica: Acto administrativo del órgano competente por el que se inicia el procedimiento para la concesión de subvenciones o ayudas públicas y que invita a los potenciales beneficiarios a que soliciten una subvención o ayuda pública.*

2. *Convocatoria instrumental: Entidad de información que se registra en la BDNS en aquellas subvenciones o ayudas públicas en las que no sea preceptivo el acto administrativo de convocatoria, a los efectos de permitir incorporar la información estructurada necesaria para la BDNS».*

5.5 Datos estructurados de la convocatoria

Si se envía el texto de la convocatoria y su extracto/anuncio ¿hay que suministrar más datos?

Sí. Junto con el documento que contiene el texto de la convocatoria y su extracto/anuncio es obligatorio registrar una serie de datos estructurados que básicamente se refieren a la identificación de las bases reguladoras, publicidad, periodo de solicitud, condición de ayudas de estado, financiación y otros aspectos para su tipificación económica y administrativa, de manera que sea posible para los ciudadanos posteriormente efectuar una búsqueda de aquellas que tengan interés para ellos.

5.6 Concepto de “Referencia externa”

¿Qué es la “referencia externa” que aparece en las convocatorias y en las concesiones?

El elemento de datos “referencia externa” que aparece en la entidad de información CONVOCATORIA de la BDNS es un elemento opcional que el gestor de subvenciones puede (o no) utilizar como forma de enlazar lógicamente sus datos con los datos de la BDNS. Es un mecanismo de **interoperabilidad** entre la BDNS y los sistemas de gestión de subvenciones del órgano gestor.

El uso de este artificio es necesario ya que la BDNS emplea mecanismos de identificación (códigos) de convocatorias, concesiones, pagos, etc., que generalmente son distintos que los sistemas de gestión de los órganos gestores de subvenciones. La existencia de una referencia externa posibilita el mantenimiento del enlace lógico, y se facilita a los órganos la adecuada gestión y control de sus envíos de información.

5.7 Concepto de “Región” – Tablas NUTS

¿Qué son, y por qué se usan las tablas NUTS?

El concepto “Región” en la BDNS hace referencia a las regiones de impacto de las subvenciones o ayudas convocadas. Responde a la Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) que es la serie de demarcaciones territoriales utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos, aunque por su amplitud se han suprimido los niveles NUTS 3 y, para reflejar la realidad de las subvenciones y ayudas públicas se han incorporado regiones no contempladas en NUTS: XXX Regiones o países no europeos, no contemplados en NUTS y XXXX Todo el mundo.

El uso de las [tablas NUTS](#) es básico para los datos que se deben mostrar por transparencia o enviar a los órganos competentes de la UE. Por tanto, para las ayudas de Estado es preciso que la región se especifique en el nivel 2.

5.8 Concepto de “Sector económico” - Tablas NACE [Actualizada 2025]

¿Qué son y por qué se utilizan las tablas NACE?

El concepto “Sector económico” en la BDNS hace referencia a los sectores económicos de impacto: los sectores de actividad económica beneficiados por la subvención o la ayuda pública.

La lista que ofrece la BDNS responde a la Nomenclatura estadística de actividades económicas de la Comunidad Europea (NACE), que es el sistema de clasificación de las actividades económicas usado en la Unión Europea para la organización y el registro de datos en el marco del Eurostat. Por su amplitud se ha suprimido el nivel “Clase”.

El listado de los sectores económicos se puede consultar tanto en la página de Eurostat como del INE.

Ante posibles dudas en la selección del sector se recomienda consultar la estructura [CNAE 2025](#) así como la lectura del [Documento explicativo de la CNAE-2025](#) publicado por el INE.

Aunque la tabla se desarrolla al nivel “clase” (5 dígitos), los Reglamentos de la Comisión [EU 651/2014](#), [EU 2022/2472](#) y [EU 2022/2473](#) sólo obligan a registrar la información al nivel “grupo” (1 letra y 3 dígitos), siendo éste el nivel de desarrollo establecido en la BDNS.

Para registrar el sector económico de un beneficiario en BDNS, o los sectores a los que va dirigida una convocatoria, se deben establecer estos a nivel de grupo (la estructura de árbol es Sección/División/Grupo/Clase). BDNS trabaja a nivel “grupo” por imperativo legal de los Reglamentos europeos.

¿Cuál es la correspondencia entre las tablas CNAE y las NACE?

La correspondencia entre las tablas NACE Rev. 2.1 con CNAE-2025 se puede localizar en el siguiente enlace:

https://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cnae25/Correspondencias_NACE_Rev_2_1_CNAE25.xlsx

En unas becas escolares a menores de edad, que se pagan a los padres, no se puede saber el sector económico de éstos, ni tan siquiera si realizan actividad económica o no. ¿Qué se puede hacer?

Hay un gran bloque de subvenciones que no son a “actividades económicas” propiamente. Son fundamentalmente las ayudas a personas físicas por razones sociales. Para estas subvenciones no hay que declarar la actividad económica del perceptor, si es que desarrolla alguna actividad económica, sino el sector económico finalista de la subvención.

Es recomendable consultar las actividades de las Secciones P, Q, R, S, T y U. A modo de ejemplo, en una beca a un menor cuyos progenitores regentan una empresa de construcción, el sector a declarar será **“98.1 Actividades de los hogares como productores de bienes para uso propio”**. La misma beca, a otro menor cuyos padres son funcionarios, llevará la misma clasificación.

5.9 Concepto de “Impacto de género” [Actualizada 2025]

No entendemos la valoración de los impactos de género en las convocatorias de subvenciones.

La interpretación de los posibles impactos de género se debe hacer atendiendo a lo previsto en el art 35 de la [Ley Orgánica 3/2007](#), para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el ámbito de la Administración General del Estado también en el [Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo](#).

Puede ser ilustrativo consultar la [guía metodológica](#) que desarrolla ese último Real Decreto:

https://funcionpublica.digital.gob.es/dam/es/portalsefp/gobernanza-publica/simplificacion/impacto-normativo/guia_metodologica_ain.pdf

5.10 Fuentes de financiación de convocatorias [Actualizada 2025]

En el caso de las subvenciones y ayudas financiadas con fondos de los presupuestos de las Universidades Públicas ¿qué valor hay que elegir en el dato “Fuente de financiación”?

La BDNS recoge la información relativa a las subvenciones y ayudas públicas convocadas y concedidas tanto por la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración local, como por el sector público institucional al que se refiere el artículo 2 de la [Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público](#).

Para dar cumplimiento a la obligación de transparencia de la gestión subvencional, la BDNS debe dar un tratamiento homogéneo a la información en ella registrada, con independencia de la forma y naturaleza jurídica del órgano propietario de la información. Por ello, no siempre es posible recoger las peculiaridades de todos y cada uno de los Órganos Obligados.

El caso de las subvenciones y ayudas públicas financiadas con fondos de los presupuestos de las Universidades Públicas se ve afectado por esta limitación.

Siendo conocedores de la autonomía económica y financiera de las Universidades que se extiende a la elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos, parecería razonable que el desplegable del campo **Fuentes de financiación** recogiera una opción tipo “Presupuesto de la Universidad”.

Pero ello obligaría a incorporar opciones particularizadas para aquellas entidades de derecho público o privado vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas que también gozasen de autonomía en materia presupuestaria. La personalización de todas y cada una de las distintas entidades de información recogidas en la BDNS impediría el tratamiento homogéneo de la información e iría en perjuicio de la transparencia de la gestión de subvenciones y ayudas públicas.

Teniendo presente la obligación de publicar las ayudas concedidas, impuesta no sólo por el ordenamiento jurídico nacional sino también por la Unión Europea, el criterio a seguir para determinar la fuente de financiación va a ser la clasificación por subsectores a efectos de la contabilidad nacional, (pueden consultar esta información en el Inventario de entidades pertenecientes al sector de las Administraciones Públicas):

<https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/BasesDatos/invente/paginas/inicio.aspx>

Por ello, si la Universidad figura en el inventario clasificada en el Subsector Administración Regional (S.1312), se debe seleccionar “Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas”.

Y si a mi entidad no le es aplicable la regla establecida en el apartado anterior ¿qué valor hay que elegir en el campo Fuente de financiación?

En este caso, se selecciona como fuente de financiación el valor “Otra financiación”.

¿Y si la financiación procede de fondos de otros países?

Existe un valor específico para indicarlo: “Fondos de otros países”.

¿Y si la financiación procede de fondos privados?

En este caso, se selecciona como fuente de financiación el valor “Otra financiación”.

En el desplegable del campo “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o Fondos UE” no figura el Fondo Europeo que financia la convocatoria ¿Cómo puedo registrar la convocatoria?

Los programas financiados por el presupuesto de la UE pueden gestionarse de tres maneras diferentes:

- Gestión directa: la Comisión Europea gestiona directamente la financiación de la UE
- Gestión compartida: la Comisión Europea y las autoridades nacionales gestionan conjuntamente la financiación
- Gestión indirecta: organizaciones asociadas u otras administraciones de dentro o fuera de la UE Gestionan la financiación.

Si el programa financiado por la Unión Europea es de gestión indirecta y el Fondo UE no figura en el desplegable se deberá seleccionar la opción "*Fondos de gestión indirecta (art. 58.1.c Rgto. UE Nº 966/2012)*".

5.11 Subvenciones de concesión directa

¿Se publica la convocatoria en las subvenciones de concesión directa y nominativas?

A pesar de que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones sea el régimen de concurrencia, la [LGS](#) contempla tres supuestos en los cuales la convocatoria no es preceptiva:

- Las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales (art. 22.2.a de la [LGS](#)).
- Las subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal (art. 22.2.b de la [LGS](#)).
- Excepcionalmente, aquellas subvenciones en las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten la convocatoria pública (art. 22.2.c de la [LGS](#))

Con carácter general, la concesión de estas subvenciones o ayudas públicas se realiza de forma directa sin que el procedimiento de concesión requiera la aprobación de una convocatoria, la posterior valoración y la selección de los beneficiarios.

Para poder incorporar en la BDNS la información estructurada necesaria para dar cumplimiento de las obligaciones de publicidad de estas subvenciones y ayudas públicas concedidas, es preciso registrar una convocatoria instrumental. Esta convocatoria no sigue el régimen especial de publicidad de la convocatoria previsto en la [LGS](#), por tanto, no hay extracto de la convocatoria que se publique en Diario Oficial.

No obstante, la información de la convocatoria instrumental se publicitará en el [SNPSAP](#).

Por otra parte, hay que tener presente que en algunas de estas subvenciones en régimen de concesión directa las bases reguladoras establecen que las solicitudes se tendrán que presentar durante unos periodos que se determinarán en el futuro. En estos casos, es preciso publicitar el plazo de presentación de solicitudes, en concreto la fecha de inicio y fin de presentación de solicitudes, de lo contrario no se podría rechazar ninguna solicitud por extemporánea. La apertura de cada plazo de presentación de solicitudes debe registrarse en la BDNS como una convocatoria canónica. La convocatoria se publicará en la [SNPSAP](#) y un extracto de la misma en el diario oficial correspondiente. La publicación del extracto de la convocatoria en el diario oficial determinará la eficacia jurídica de la misma.

Finalmente, es posible que la norma reguladora de una subvención de concesión directa establezca la necesidad de convocar la subvención, como acto diferenciado que marca el inicio del procedimiento de concesión. En estos supuestos, aun tratándose de subvenciones de concesión directa, el procedimiento de concesión de subvenciones dispone de una convocatoria. Por tanto, se registrará en la BDNS como una convocatoria canónica. El extracto de la convocatoria se publicará en el diario oficial y la BDNS dará publicidad a la convocatoria a través del [SNPSAP](#).

Ver [Manual BDNS de convocatorias](#).

¿Cómo se registran las subvenciones de concesión directa si no hay técnicamente una "convocatoria"?

En este caso nos encontramos ante una "convocatoria instrumental". Siempre deben remitirse los datos estructurados de la entidad "convocatoria" pero, ante la ausencia de convocatoria, no procede enviar el texto de la convocatoria y su extracto. En estos casos se adjuntará como documento de la convocatoria la resolución de concesión, el convenio, el Real Decreto que establece las normas especiales reguladoras, la Ley que establece la concesión de la subvención, ...

Respecto al momento en que hay que registrar esa información será, para las subvenciones o ayudas dirigida a destinatarios indeterminados cuando se haya publicado la disposición reguladora. Si las subvenciones o ayudas públicas van dirigidas a destinatarios determinados se debe registrar la convocatoria instrumental cuando se concedan las subvenciones y se registren en la BDNS.

Respecto al resto de entidades de la BDNS concesión, pago, etc. no existe ninguna particularidad por lo que deberá reflejarse la información en los mismos términos que las subvenciones y ayudas en concurrencia competitiva. Ver [Manual BDNS de convocatorias](#).

En el caso de convocatorias instrumentales ¿qué debo adjuntar en el campo Documento de la convocatoria?

En el procedimiento de concesión de las subvenciones y ayudas públicas que se registran a través de una "convocatoria instrumental" no es preceptiva la convocatoria. Por tanto, ante la ausencia de convocatoria, se recomienda adjuntar en este campo el presupuesto que prevé la concesión de la subvención nominativa, la resolución de concesión, el convenio, o, en el caso de las subvenciones de concesión directa del artículo 22.2.c) de la LGS, el Real Decreto que establece las normas especiales reguladoras de la subvención.

¿Por qué se distingue "Tipo de convocatoria" de "Procedimiento de concesión" en la BDNS?

Dar acomodo en un sistema de información a las distintas posibilidades jurídicas abiertas en la LGS para la tramitación de subvenciones y ayudas exige hacer una distinción entre esos dos elementos de datos.

La convocatoria es una "entidad de información" en BDNS. El "Tipo de convocatoria" y el "Procedimiento de concesión" son dos elementos de datos (atributos) de la entidad de información "Convocatoria". Bajo estas consideraciones el siguiente cuadro servirá para interpretar mejor las respuestas dadas a todas las anteriores preguntas:

TIPO DE CONVOCATORIA	PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN	
	CONCURRENCIA COMPETITIVA	SIN CONCURRENCIA
CANÓNICA	Caso general LGS Convocatorias de órganos que se rigen por el Derecho privado y cuyas subvenciones no se otorgan en ejercicio de potestades administrativas.	Parte de los casos 22.2.c de la LGS
INSTRUMENTAL	No es posible	Casos 22.2.a y 22.2.b de la LGS, y parte de los casos 22.2.c

5.12 Convocatorias periódicas de subvenciones de concesión directa

El Ministerio tiene unas ayudas de concesión directa, reguladas por unas bases de vigencia indefinida, publicadas en el BOE. El plazo de presentación de solicitudes debe fijarse cada año. ¿Debe remitirse la convocatoria anualmente a la BDNS con su extracto para la remisión al BOE?

Si hay que publicitar un plazo de presentación de solicitudes que no está concretado en las BBRR, es necesario registrar la convocatoria y el extracto. El motivo es porque la eficacia de la convocatoria la marca la publicación en el diario oficial. Así que hay que publicitar en el Diario Oficial las fechas de inicio y de fin de presentación de solicitudes a efectos, por ejemplo, de rechazar solicitudes presentadas fuera de plazo).

Estamos tramitando 2 órdenes de convocatoria con bases aprobadas por Real Decreto, dichas órdenes no solo convocan, sino que además aprueban bases complementarias para el ejercicio 2025 (completan determinados aspectos a los Reales Decretos). Dichas convocatorias al tener bases, ¿deben publicarse en el BOE a la vez que el extracto?

Lo deseable es publicar las BBRR o sus modificaciones, desarrollos, o cualquier contenido del art. 17 [LGS](#) que no tenga cabida en el contenido de la convocatoria como cualquier otra disposición normativa de carácter general, y, aparte, publicar las convocatorias y los extractos siguiendo lo previsto en el art. 20.

No obstante, si el órgano convocante decide publicar simultáneamente la modificación de las BBRR y la convocatoria recomendamos la lectura de la respuesta **5.15 ¿Cuál es el procedimiento para el envío de la información a la BDNS cuando las bases reguladoras y la convocatoria se aprueban y/o publican simultáneamente?** de este capítulo.

5.13 Las bases reguladoras en la BDNS

¿La publicación de las bases reguladoras se debe realizar a través de la BDNS?

No, las bases reguladoras deben publicarse en el boletín oficial correspondiente sin mediación de la BDNS.

Los artículos 9.2 y 17.3 de la [LGS](#) indican claramente el carácter normativo de las bases reguladoras.

Asimismo, de conformidad con la doctrina del Tribunal Supremo, las bases reguladoras deben ser calificadas de disposición de carácter general, al concurrir en ellas las notas definitorias propias de una norma reglamentaria, a saber:

- Tienen como finalidad regular una pluralidad indefinida de cumplimientos, particularmente los derivados de las futuras convocatorias que puedan acordarse.
- Representan una innovación del ordenamiento, pues no se limitan a reproducir lo reglamentado en otra disposición previa y no sólo se refieren a aspectos puramente procedimentales u organizativos.
- Tienen una vocación de perdurabilidad en el tiempo, al estar destinados a regular de modo permanente determinadas situaciones o el efecto de ciertos actos, obedeciendo al principio de "no consunción".

Aun cuando las disposiciones que regulan y establecen las bases para la concesión de subvenciones no tengan perdurabilidad en el tiempo, la doctrina del Tribunal Supremo reconoce que, a pesar de *ser "...disposiciones coyunturales, que no tienen voluntad de incorporarse al Ordenamiento, y por tanto, no cabe reconocerles el carácter de disposiciones de carácter general..."*, tienen *"...carácter de híbrido, entre una norma jurídica propiamente dicha y un acto dirigido a una pluralidad indeterminada de sujetos..."*, estando incluidas en el título preliminar del Código Civil (De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia).

La [Constitución](#), en su art. 9.3, garantiza el principio de la publicidad de las normas.

En virtud de este precepto, en el ámbito estatal, las bases reguladoras son objeto de publicación en el "Boletín Oficial del Estado", en el ámbito autonómico en el Boletín de la Comunidad Autónoma y en el ámbito local, las ordenanzas por las que se aprueban las bases reguladoras se publican en el Boletín Oficial de la Provincia.

Tanto la [LGS](#) como el [RD 130/2019](#), establecen un nuevo sistema especial para la publicación de las convocatorias de subvenciones, pero mantienen el régimen de publicidad de las bases reguladoras.

5.14 Bases reguladoras y convocatoria aprobadas o publicadas simultáneamente en la BDNS

¿Cuál es el procedimiento para el envío de la información a la BDNS cuando las bases reguladoras y la convocatoria se aprueban y/o publican simultáneamente?

Cuando los órganos convocantes sujetos a la intermediación de la BDNS opten por aprobar y/o publicar simultáneamente las bases reguladoras y la convocatoria, el registro de la convocatoria debe hacerse con carácter previo a la publicación simultánea de las BBRR y la convocatoria.

Para ello, se deberá cumplimentar los datos requeridos en el formulario de la entidad de información Convocatoria, adjuntando como documento de la convocatoria las bases reguladoras y convocatoria aprobadas simultáneamente o en su caso, el documento de la convocatoria y el documento de las bases reguladoras, y cumplimentar el formulario del extracto de la convocatoria con indicación del boletín oficial en el que se debe publicar dicho extracto.

Al no haberse publicado todavía las bases reguladoras en el diario oficial correspondiente, en el campo URL español de las bases reguladoras se indicará "Pendiente de publicación". Una vez publicadas las bases reguladoras y la convocatoria en el Boletín Oficial, se modificará este campo para registrar la URL de la publicación.

La publicación del extracto en el boletín oficial dota de eficacia jurídica a la convocatoria. Para evitar la inseguridad jurídica que supone la publicación simultánea de las bases reguladoras y la convocatoria, por una parte y la publicación del extracto de la convocatoria por otra, se recomienda al órgano convocante que se coordine con el boletín oficial para hacer coincidir ambas publicaciones en el mismo día. En todo caso, es recomendable que en el texto de la convocatoria se indique claramente que la eficacia jurídica está condicionada a la publicación del extracto en el boletín oficial.

Si el órgano convocante no está sujeto a la intermediación de la BDNS para la publicación de la convocatoria, deberá registrar la información a incluir en la BDNS acompañada del texto de las bases reguladoras conjuntas con la convocatoria, una vez que ésta haya sido aprobada y con antelación suficiente para que los interesados puedan presentar sus solicitudes dentro del plazo establecido.

5.15 Plazos de solicitud relativos en la convocatoria [Actualizada 2025]

¿Qué fecha se ha de considerar como inicio del plazo de presentación de solicitudes: la de la publicación en el portal del SNPSAP o la de publicación del extracto en el Diario Oficial?

La eficacia de la convocatoria la proporciona la publicación de su extracto/anuncio en el Diario Oficial. En las convocatorias en las que el plazo de presentación de solicitudes viene condicionado por la eficacia de la convocatoria, para determinar el plazo de presentación de solicitudes se tendrá en cuenta la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Diario Oficial y no la fecha de publicación de la convocatoria en el [SNPSAP](#).

Es muy recomendable, a efectos de la transparencia ciudadana, emplear **fechas de solicitud absolutas**, no relativas a un día de publicación del extracto. Hoy en día, los Diarios Oficiales no tienen los cuellos de botella de publicación del pasado, ya que son ediciones electrónicas, y el coste de publicar un diario con 50 páginas o con 500 es prácticamente el mismo, no como cuando se hacía en papel. Los Diarios son bastante diligentes, y es posible planificar fechas absolutas en vez de relativas.

5.16 Justificación de subvenciones

¿Hay que aportar datos de la justificación de subvenciones?

No existe obligación de aportar datos de justificación, más allá del momento para su justificación y el fin del plazo previsto, en la entidad de información Convocatoria.

Para registrar una convocatoria hay que dar una fecha de fin de justificación. En nuestro caso no es posible saber la fecha cierta, pues esta está condicionada al fin del proyecto (el plazo de justificación tras la fecha de finalización sería de 3 meses). ¿Qué plazo se debe indicar? ¿Es

modificable posteriormente en caso de equivocación?

En estos casos se puede consignar una fecha provisional, puesto que es un campo obligatorio, y cuando se conozca la fecha cierta, actualizar el registro. No existe ningún problema en actualizar esa información.

5.17 Texto de la convocatoria y del extracto

¿Qué diferencia hay entre el texto de la convocatoria y el texto del extracto?

Al regular la tramitación de la convocatoria, el [Real Decreto 130/2019](#) establece que «...deberá registrarse la información a incluir en la BDNS por los medios electrónicos que ésta proporcione, acompañada del texto de la convocatoria y de su extracto».

El texto de la convocatoria se registrará en la BDNS adjuntando un archivo PDF que contenga el texto completo de la convocatoria, tal y como ha sido aprobada por el órgano competente. Este archivo será publicado en el [SNPSAP](#).

En cuanto al texto del extracto de la convocatoria, este no es más que un resumen de los aspectos más significativos de la convocatoria: finalidad de la convocatoria, beneficiarios, bases reguladoras, plazo de presentación, solicitudes, ... La finalidad de la publicación de la convocatoria en extracto es ofrecer un resumen de esta, remitiendo al [SNPSAP](#) para conocer el contenido íntegro del mismo.

El extracto se registra mediante el formulario denominado **Publicación del extracto en Diario Oficial** que contiene los siguientes campos a cumplimentar:

- Diario oficial de publicación.
- Título del extracto.
- Texto del extracto.
- Fecha del pie de firma.
- Lugar del pie de firma.
- Nombre y cargo del pie de firma

Para entender convenientemente el registro de la convocatoria en la BDNS le recomendamos la lectura del [Manual BDNS de convocatorias](#).

5.18 Formatos de los extractos para Diarios Oficiales

¿Por qué razón los extractos de las convocatorias se envían a los DD.OO. en formato XML y no en otro formato más legible o fácilmente manipulable como PDF, Word, TXT, etc.?

El formato XML-Extensible Markup Language (formalmente ISO/IEC 29500-1:2012 Information technology—Document description and processing languages—Office Open XML File Formats) está recogido en la Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la [Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares](#), como estándar abierto de las cadenas de interoperabilidad “Modelos e integración de datos” y “Accesibilidad multicanal, integrada y segura.”

Dentro de los distintos formatos que cumplen con los principios y normas establecidos en el [Esquema Nacional de Interoperabilidad](#), el formato XML es óptimo, ya que manteniendo un *payload* mínimo permite incorporar metadatos y formato automáticamente reconocibles por los sistemas automatizados, sin necesidad de edición manual posterior.

Por otra parte, el envío de un mensaje de correo con un archivo XML es una solución provisional para aquellos Diarios Oficiales que no han adaptado sus sistemas para una conexión vía servicios web. Parece de sentido común que con independencia de que el método de comunicación sea el provisional de correo electrónico, o el definitivo de servicios web, el archivo comunicado sea el mismo.

Los archivos también se envían en formato TXT.

5.19 Extractos que no llegan a los Diarios Oficiales o que se envían dos veces

Se registró una convocatoria hace una semana y se ordenó la publicación de extracto/anuncio en el DO. Sin embargo, no ha llegado al DO, donde dicen no saber nada. ¿Qué ha podido pasar?

El texto del extracto debe estar compuesto exclusivamente por caracteres ASCII alfanuméricos (letras, números, signos de puntuación), sin incluir tablas ni caracteres especiales. En ocasiones, sobre todo cuando se utiliza el "copiar y pegar" o "cortar y pegar" en un documento PDF u otro formato, se pegan caracteres ocultos, extraños, que no son visibles en la caja de texto. Esto puede originar un error en BDNS que paraliza el proceso de envío.

Para evitar este problema, se debe tener la seguridad de que el texto es puro ASCII. Una forma de conseguir esto es, antes de copiar y pegar, coger el documento original del que se va a copiar, y hacer una copia ASCII. Para ello, por ejemplo, en MS Word ir a Archivo->Guardar como->Texto sin formato (*.TXT). Efectuado esto, ya podemos copiar y pegar sin problemas.

En cualquier caso, si el extracto presenta caracteres especiales que impiden su envío al Diario Oficial, el equipo de la BDNS se pondrá en contacto con el Administrador Institucional para informarle de esta incidencia.

Registramos una convocatoria canónica hace seis meses cuyo extracto se publicó sin problemas en el D.O. Pero hoy, seis meses después, el DO ha vuelto a publicar el extracto. Hemos llamado y dicen que se la BDNS había enviado el extracto para su publicación. ¿Qué está pasando?

Ha podido ocurrir un de los tres supuestos siguientes, que el Administrador Institucional puede comprobar por sí mismo mediante la funcionalidad **Auditoría/Auditoría** de entidades que se ofrece en el menú de BDNS:

- Un usuario con perfil de edición de ese órgano ha registrado un nuevo extracto/anuncio, y ha ordenado su publicación.
- Un usuario de ese órgano, desde una aplicación propia del órgano, que conecte con BDNS vía servicios web, ha creado un nuevo extracto, y ha ordenado su publicación.
- Un usuario de ese órgano, desde una aplicación propia del órgano, que conecte con BDNS vía servicios web, ha modificado la convocatoria, guardando los cambios y ordenando su comunicación a la BDNS.

La generación de un nuevo extracto se produce porque el servicio web de convocatoria que está utilizando el órgano solicitante tiene un error en su diseño. Si en la petición de modificación de la convocatoria figura un extracto, la BDNS interpreta que es un nuevo extracto que hay que publicar. Así se indica en el documento [Descripción de los servicios web \(WS\) a utilizar para el registro de datos en la BDNS:](#)

«MODIFICACION:

...

Extracto: En convocatorias dependientes de órganos intermediados se crea un nuevo extracto y se envía automáticamente al Diario Oficial indicado para su publicación. Un extracto enviado al Diario Oficial no se puede modificar ni eliminar, por lo tanto, si en un mensaje de modificación se incluye un extracto, se entiende que es un nuevo extracto que hay que publicar.

...»

En este caso, deberá revisarse el diseño del servicio web de convocatoria para que en las comunicaciones de modificaciones de la convocatoria no se incluya el extracto ya comunicado.

5.20 Contactar con el Boletín Oficial del Estado

Tenemos una incidencia con la publicación de un extracto anuncio de una convocatoria. ¿cómo podemos contactar con el BOE?

Los teléfonos del BOE, para parar publicaciones y solucionar todo tipo de incidencias son:

- Anuncios del BOE: 91 111 40 00
- Otro: 91 111 42 39

5.21 Diario oficial de publicación del anuncio/extracto

¿Se puede elegir el Diario Oficial en el que publicar el extracto de una convocatoria?

Esto depende de las regulaciones administrativas propias del órgano convocante y de la administración pública en la cual esté incardinado. Por eso, es el propio órgano convocante quien, al enviar a la BDNS la convocatoria, tiene que especificar el Diario Oficial en el que debe y quiere publicar el extracto de la convocatoria.

¿Por qué no puedo elegir publicar el extracto de la convocatoria en el BOE si el artículo 23 de la LGS dice “La convocatoria deberá publicarse en la BDNS y un extracto de la misma, en el Boletín Oficial del Estado”?

El artículo 23 de la [LGS](#) (título I capítulo II) no tiene carácter básico por lo que su contenido hace referencia únicamente a las subvenciones que se convocan en el sector público estatal. Esta es la razón por la que en este artículo se cita directamente el BOE. Sin embargo, en el artículo 20, que sí tiene carácter básico, las citas hacen referencia a los Diarios Oficiales, con carácter genérico. Véase la disposición final primera de la [LGS](#) que se acompaña. En consecuencia, cada Administración ha de publicar los extractos en el diario oficial que le corresponda. Las convocatorias han de publicarse en la BDNS.

¿Puedo ordenar la publicación del extracto de la convocatoria simultáneamente en dos Diarios Oficiales?

La publicación del extracto de una convocatoria se debe ordenar en el diario oficial en el que se publican los actos y resoluciones del órgano convocante.

La convocatoria o anuncios de ella también se pueden publicar en tantos medios como se quiera, al margen de la BDNS, entre ellos otro Diario Oficial, pero la publicación de este anuncio no determina la eficacia jurídica de la convocatoria y no está cubierto por la gratuidad de la publicación que impone la [Ley General de Subvenciones](#).

5.22 Gratuidad de la publicación del anuncio/extracto de la Convocatoria en Diario Oficial

Los anuncios de los extractos en los respectivos Diarios Oficiales ¿son gratuitos? La ordenanza reguladora de la tasa por inserción de anuncios establece una tarifa por tratarse de una publicación con contenido económico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.3.f la Ley 5/2002 reguladora de los Boletines Oficiales de la Provincia.

El artículo 20.8.a) de la [LGS](#) establece que la publicación por los Diarios Oficiales del extracto de las convocatorias que han sido trasladadas desde la BDNS tiene carácter gratuito. La citada previsión normativa fue introducida por la [Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa](#) que, en la disposición derogatoria, también prevé la derogación de cuantas disposiciones se opongan a las previsiones de esa Ley.

Por otro lado, el artículo 20 de la [LGS](#), que establece la publicación gratuita de los extractos de las convocatorias en los Diarios Oficiales, está contenido en el Título preliminar capítulo II y, por tanto, constituye legislación básica estatal, ya que así queda contemplado en su disposición final primera.

Por todo ello, el carácter gratuito establecido por **la LGS prevalece** sobre la dispuesto en esta materia por la [Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladoras de los Boletines Oficiales de la Provincia](#) que, en su artículo 11, establece

que la publicación de los textos en los citados Diarios Oficiales estará sujeta al pago previo de la tasa establecida en las ordenanzas reguladoras.

5.23 Tiempos de publicación de extractos de convocatorias en Diarios Oficiales

¿Cuánto tiempo tarda la BDNS en transferir a un Diario Oficial el extracto de una convocatoria? (para poder estimar la fecha de publicación en el Diario Oficial)

En el momento en que el órgano gestor ordena la publicación del extracto de la convocatoria que ha registrado en la BDNS y, siempre y cuando el sistema valide correctamente los datos, la BDNS traslada el extracto de la convocatoria al Diario Oficial y le envía un correo electrónico advirtiéndole que se ha puesto a su disposición el extracto. A partir de ahí, la latencia depende del Diario Oficial, y sus procedimientos de edición y publicación.

¿Se puede elegir un día determinado para que se publique el extracto en el Diario Oficial?

La BDNS no puede fijar el día de publicación, porque cada uno de los más de 67 Diarios Oficiales que operan en España tiene procedimientos distintos. En el caso del Boletín Oficial del Estado, esto se debe tratar con el Servicio de Anuncios del BOE contactando en la forma que indique en su sitio web.

5.24 Tiempos de publicación de la convocatoria en el portal del SNPSAP [Actualizada 2025]

Hemos registrado en la BDNS una convocatoria, sin errores, pero no aparece en el SNPSAP. ¿Qué ha podido suceder?

Cuando se registra una convocatoria en la BDNS y, en el caso de una convocatoria canónica, se ha cumplimentado el formulario del extracto de la convocatoria y ordenado su publicación en el diario oficial, la Base de Datos procede a su publicación en el [Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas](#).

Ahora bien, la BDNS y el [SNPSAP](#) no son sistemas perfectamente sincrónicos. Existe un pequeño desfase o gap entre ambos. El SNPSAP se actualiza dos veces al día con la nueva información registrada, modificada o eliminada en la BDNS. Estas actualizaciones están programadas a las 4:00 y 16:00. Dada la gran cantidad de datos a tratar, estas actualizaciones tardan entre 2 y 3 horas en ejecutarse.

Transcurridos los plazos de actualización del SNPSAP la convocatoria que hemos registrado en la BDNS sigue sin mostrarse en el SNPSAP ¿a qué puede ser debido?

Si la convocatoria canónica no se muestra en el SNPSAP tras la actualización de la información, compruebe que ha registrado el extracto de la convocatoria y ordenado su publicación en el diario oficial. Hasta que no se ordena la publicación del extracto de la convocatoria en el diario oficial la BDNS no procede la publicación de la convocatoria en el SNPSAP.

Hemos registrado en la BDNS una convocatoria, sin errores. Está publicada en el SNPSAP, pero no se visualiza el documento de texto de la convocatoria ¿Qué ha podido suceder?

Los documentos se gestionan informáticamente con un sistema "gestor documental". Debido al proceso de automatismo de la invocación del servicio web de este sistema, puede producirse un desfase de aproximadamente 5 minutos desde que se visualice la convocatoria en el [SNPSAP](#) hasta que se visualice el documento íntegro de la convocatoria.

5.25 Errores en convocatorias: Regiones, Instrumentos, Tipo de beneficiario, Sectores económicos

Al registrar una convocatoria aparece este mensaje de error indicando que debo seleccionar un valor en un campo, a pesar de que los campos citados han sido cumplimentados.

Si al registrar la convocatoria le aparece un error con el texto **"Debe seleccionar un valor en el campo:"** porque después de seleccionar un valor en el desplegable, no ha pulsado sobre el botón "Añadir" que se encuentra al lado derecho del campo. Este botón es el encargado de incorporar la información seleccionada en el campo.

En el [Manual de convocatorias](#) se explica cómo se debe registrar la información en la BDNS.

No encuentro la manera de asignar los sectores económicos elegibles en una convocatoria.

La BDNS muestra la lista de actividades económicas correspondiente a la Nomenclatura estadística de actividades económicas de la Comunidad Europea (NACE):

El usuario puede seleccionar uno o varios sectores económicos con el nivel de desagregación que considere oportuno (sección, división, grupo o clase).

La selección de los sectores se puede realizar de dos maneras:

- Buscando el sector o sectores a través de los filtros Valor y Descripción. Encontrado el sector deseado, el usuario debe seleccionarlo marcando la caja ☐ que acompaña al sector y ejecutar el comando "Validar" para terminar la selección.
- Seleccionando directamente los sectores, marcando la caja ☐ que acompaña al sector y validando la selección. La BDNS muestra los sectores agregados a nivel de sección. Si se desea un mayor nivel de desagregación se deberá seleccionar el icono del triángulo ▶ que figura en cada nivel de agregación.

5.26 Edición posterior de los datos de la Convocatoria

¿Qué pasa si después de registrar una convocatoria se detectan errores en la información suministrada?

La BDNS no es una base de datos estática. La información registrada en ella puede ser modificada.

Para saber cómo corregir el error registrado en la convocatoria hay que tener presente que en la BDNS la información de la convocatoria se desglosa en dos grandes bloques: por una parte, los denominados "datos estructurados" (coloquialmente campos) y por otra, los archivos-documentos que se adjuntan (texto de la convocatoria, modelo de solicitud, anexos, ...).

Si la modificación o corrección de errores solo afecta a los datos estructurados, se modificará como cualquier otra entidad de información.

Si el error afecta a un archivo previamente adjuntando habrá que eliminar el archivo inicial e incorporar un nuevo archivo que corrija al anterior.

Si el error afecta al contenido del extracto ya enviado al Diario Oficial pero aún no publicado el órgano convocante se deberá poner en contacto con el Diario Oficial para parar la publicación del extracto. En la BDNS deberá registrar un nuevo extracto y ordenar su publicación en el Diario Oficial.

Si el error afecta al contenido del extracto ya publicado en el Diario Oficial y publicado, se deberá hacer una nueva publicación de corrección de errores del extracto. Ver el [Manual BDNS de convocatorias](#).

Si la convocatoria es instrumental y no hay que publicar su extracto, una vez registrada ¿pueden realizarse modificaciones?

Sí. Los datos relativos a la convocatoria se pueden modificar en cualquier momento, antes de que se publique en el [SNPSAP](#) o después, siguiendo el procedimiento descrito en el [Manual BDNS de convocatorias](#).

¿Qué pasa si después de enviar a publicar un extracto al diario oficial se detectan errores en su contenido?

Lo aconsejable es paralizar la publicación del extracto erróneo de la convocatoria en el Diario Oficial.

No existe en BDNS una funcionalidad para tramitar automáticamente la solicitud de no publicación de un extracto que ya se ha enviado al diario oficial.

Ante esa situación, el órgano que ha ordenado la publicación del extracto debe ponerse en contacto con el Diario Oficial para que no publique ese extracto.

Resulta más eficaz no publicar un extracto que contiene errores, que publicarlo para posteriormente solicitar al Boletín Oficial, a través de la BDNS, la publicación de una corrección de errores. Pero no siempre es posible paralizar la publicación del extracto.

A continuación, se recoge el **procedimiento a seguir por el usuario del órgano convocante**, según la situación en la que se encuentre la publicación del extracto original:

Supuesto 1. El extracto todavía no se ha publicado en el DO, en este caso deberá:

- Ponerse en contacto con el DO y solicitar el rechazo de ese extracto.
- En el extracto erróneo registrar el rechazo del extracto. Ver Manual BDNS de convocatorias
- Crear un nuevo extracto correcto en la misma convocatoria y mandarlo a publicar. Ver Manual BDNS de convocatorias

Supuesto 2. El extracto original que contenía errores ya se ha publicado en el DO:

- En este caso tendrá que generar para esa misma convocatoria un nuevo extracto de corrección de errores del anterior y ordenar su publicación en el Diario Oficial. Ver [Manual BDNS de convocatorias](#).

5.27 Multilingüismo

Quisiera saber si, habiendo enviado el Ayuntamiento a la BDNS el extracto y texto de la convocatoria en español y en otra lengua cooficial, la BDNS las va a enviar al BOP en español, en otra lengua, o en las dos.

La BDNS pone a disposición del Diario Oficial el extracto siempre en los dos idiomas, español y cooficial. A partir de ahí, el Diario Oficial operará como tenga por costumbre o por ley.

Ver también la respuesta [1.9](#) de este FAQ.

5.28 Cogestión de convocatorias

¿Puede una convocatoria ser gestionada por varios órganos?

Sí. Aunque no es habitual, una misma convocatoria podría estar gestionada por más de un órgano obligado. En este caso suele haber un órgano "**convocante**" y uno o varios órganos "**concedentes**", bien por delegación o desconcentración de competencias.

Establecida esta habilitación, la BDNS está en disposición de recibir información de la gestión (concesiones, pagos,...) que efectúen los órganos obligados, asegurándose de que cada uno de ellos podrá gestionar exclusivamente la información de las concesiones que comunique.

La BDNS asocia la convocatoria al convocante, que adquiere la condición de órgano propietario. Además, asegura que la propiedad de la convocatoria se transmite a otro órgano obligado en caso de reorganización administrativa del primero. Esta "propiedad" implica, exclusivamente, que solo el propietario podría modificar la convocatoria de la BDNS.

¿Qué diferencia hay entre el órgano convocante y el concedente?

El registro de la convocatoria en la BDNS tiene que producirse por el órgano convocante. Hay casos en que el órgano que convoca es distinto del órgano en el que se delega la resolución de concesiones, éste último será el órgano concedente que además será el obligado a aportar los datos de la concesión, pago, etc.

Cuando el órgano convocante envíe la convocatoria, el extracto, y los datos estructurados, deberá designar el/los órgano/s concedente/s. El órgano convocante es, por derecho propio, concedente, así que no tiene que agregarse a sí mismo.

5.29 Múltiples líneas de subvención en una única convocatoria [Actualizada 2025]

Se tiene una convocatoria con distintas líneas, p.e.: 1/apoyo a la internacionalización, 2/reducción de costes logísticos, y 3/formación y capacitación profesional. Cada línea presenta sus propios requisitos para solicitud y plazo. ¿Se debe registrar una o varias convocatorias en BDNS?

En estos casos, aunque estas diferentes líneas se agrupen en un único acto administrativo de convocatoria, lo deseable, en aras de la transparencia y de la comodidad para el potencial beneficiario, es que se registren en BDNS como convocatorias diferenciadas. Así, en los resultados del Portal del [SNPSAP](#) será más fácil la búsqueda de información, aunque esto signifique un poco más de trabajo para el gestor.

Así, serían distintas "convocatorias BDNS", que contienen o se referencian al mismo documento texto de la convocatoria (resolución), que deberá incorporarse en todas ellas. Cada convocatoria BDNS dará origen a un "extracto" distinto a publicar en el Diario Oficial.

El artículo 20.8.a de la LGS ordena:

<<Cuando una convocatoria contemple la concesión de subvenciones o ayudas públicas con diferentes regímenes jurídicos, se publicarán separadamente en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas tantas convocatorias como regímenes jurídicos se hayan previsto>>

5.30 Revocación o anulación administrativa de una convocatoria

¿Es necesario publicar a través de la BDNS el acuerdo por el que se revoca o anula una convocatoria?

El acuerdo por el que se revoca o anula la convocatoria en un procedimiento de concesión de subvenciones o ayudas públicas constituye un acto administrativo por el que se pone fin al procedimiento convocado.

Al no ser un acto administrativo de modificación de la convocatoria de concesión de subvenciones, no está sujeto al sistema de publicidad de la convocatoria que establece el artículo 20.8 de la [LGS](#). Como acto administrativo integrado en un procedimiento de concurrencia competitiva, se debe publicar en el medio que establece la convocatoria para efectuar las sucesivas publicaciones.

Si la convocatoria identifica a la BDNS como medio de publicidad, se deberá adjuntar el acuerdo de revocación o anulación como un documento Anexo a la convocatoria. Dicha resolución se hará pública a través del [SNPSAP](#).

Si la convocatoria establece que los sucesivos actos se han de publicar en el diario oficial correspondiente, el órgano competente remitirá el acuerdo de anulación al diario oficial para su publicación, al margen de la BDNS.

En este supuesto, el acuerdo de anulación de la convocatoria también se registrará en la BDNS para dar transparencia a la gestión de subvenciones; así está expresamente establecido en el artículo 6.6 del [RD130/2019](#).

¿Cómo se registra en la BDNS el acuerdo por el que se revoca o anula una convocatoria?

En la BDNS existe una funcionalidad que permite marcar como anulada una convocatoria ya registrada. Ver el [manual de convocatorias](#).

5.31 Convocatorias plurianuales

¿Cómo deben registrarse en la BDNS?

Las convocatorias únicas pero plurianuales **sí deben registrarse en la BDNS**.

Es probable que en el momento de su registro sólo se conozca los créditos que van a financiar la primera anualidad, por lo que se registrará con el importe de la anualidad que conozca.

En el ejercicio siguiente, cuando conozca el importe al que ascienden los créditos que van a financiar esa segunda anualidad, debe buscar su convocatoria en la BDNS y modificar el importe de la misma, sumando a los créditos de la primera anualidad los correspondientes a la segunda anualidad. Así deberá actuar en los años sucesivos.

Para dar mayor transparencia a los créditos disponibles para financiar la actividad subvencionada, se puede registrar en la BDNS como un documento más de la convocatoria la disposición de créditos para cada anualidad.

5.32 Órganos con regímenes de publicidad propios

¿Hay algún órgano estatal que quede al margen del sistema de publicidad regulado por la LGS y pueda por tanto remitir directamente sus convocatorias al BOE?

No, no lo hay. El [Real Decreto 130/2019](#) establece que todos los órganos convocantes de la Administración General del Estado deben registrar la información de la convocatoria aprobada en la BDNS, y ésta pondrá el extracto de la convocatoria a disposición del BOE para su publicación.

Esta tramitación de la convocatoria es aplicable también a las entidades que integran el sector público estatal y a los órganos constitucionales y legislativos del Estado (art. 3.1 del [RD 130/2019 BDNS](#)).

5.33 Ayudas públicas no sujetas a la LGS (otros instrumentos de ayuda)

¿Cómo se registran las ayudas públicas no sujetas a la LGS en las que no hay técnicamente una “convocatoria”?

El [Real Decreto 130/2019 \(BDNS\)](#) ha extendido el ámbito subjetivo de la BDNS a todo tipo de ayudas públicas, más allá de las subvenciones y entregas dinerarias sin contraprestación: avales y demás garantías, préstamos, aportaciones de financiación de riesgo, anticipos reembolsables, beneficios fiscales y los beneficios en las cotizaciones a la Seguridad Social, subvenciones y demás ayudas a partidos políticos e incluso contribuciones a organismos, fondos, programas y entidades de carácter internacional

Algunas de estas ayudas públicas no están sujetas a la [LGS](#), por lo que no siempre el procedimiento de concesión lleva aparejado una convocatoria.

Para poder incorporar en la BDNS la información estructurada necesaria para dar cumplimiento de las obligaciones de publicidad de estas ayudas públicas concedidas, es preciso registrar una convocatoria instrumental. Esta convocatoria no sigue el régimen especial de publicidad de la convocatoria previsto en la LGS, por tanto, no hay extracto de la convocatoria que se publique en Diario Oficial.

¿Por qué se han incluido convocatorias de otras ayudas públicas distintas de subvención y entregas dinerarias sin contraprestación en la BDNS?

La inclusión de las ayudas públicas distintas de las subvenciones y entregas dinerarias sin contraprestación en la BDNS está prevista en el art 2 del [RD 130/2019](#), para materializar la previsión de la [Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno](#) de dar publicidad a las subvenciones y “ayudas públicas”.

Uno de los requisitos de la BDNS es satisfacer las exigencias de transparencia impuestas por las normativas nacional y europea, que se extienden a todas las ayudas públicas con independencia de la forma jurídica que las regule y de la figura económica en la que se materialicen.

Por esto la BDNS recoge los siguientes posibles instrumentos en los cuales se materializa una ayuda pública:

- Subvención (y entrega dineraria sin contraprestación). Para BDNS es lo mismo, aunque jurídicamente no sea así.
- Garantía.
- Préstamo.
- Ventaja fiscal.
- Aportación de financiación en riesgo.
- Otros instrumentos.

¿Existe alguna definición legal de Instrumento de ayuda?

La BDNS recoge información sobre subvenciones y entregas dinerarias sin contraprestación, y además información sobre otros instrumentos de ayuda, como avales y demás garantías, préstamos, aportación de financiación en riesgo, anticipos reembolsables y demás medidas de carácter financiero que supongan una ventaja económica a favor de sus beneficiarios, así como los beneficios fiscales y los beneficios en las cotizaciones a la Seguridad Social que tengan la consideración de Ayuda de Estado.

Ante esta heterogeneidad de figuras jurídicas es preciso identificar el instrumento de ayuda a través del cual se materializa la ventaja económica.

Los instrumentos de ayuda se deben interpretar en los términos de los Reglamentos UE. Así por ejemplo en el Reglamento [EU 651/2014](#) de la Comisión se puede encontrar:

«préstamo»: todo acuerdo en virtud del cual el prestamista pone a disposición del prestatario una suma de dinero convenida durante un período de tiempo convenido, y que obliga al prestatario a devolver dicha cantidad en el período convenido.

«garantía»: en el contexto de las secciones 1, 3 y 7 del Reglamento, todo compromiso escrito en virtud del cual se asume la responsabilidad de la totalidad o una parte de las operaciones de préstamo de un tercero, en forma de instrumentos de deuda, de arrendamiento o de instrumentos de cuasicapital, recientemente realizadas.

«inversión de financiación de riesgo»: las inversiones en forma de capital y cuasicapital y los préstamos, incluidos los arrendamientos financieros, las garantías y las combinaciones de estas modalidades, destinadas a empresas subvencionables, con el fin de realizar nuevas inversiones.

5.34 Agrupación de las subvenciones nominativas del año

¿Es posible registrar una sola convocatoria instrumental general para todas las subvenciones nominativas del año, que figuran en el presupuesto del Ayuntamiento, y a las que posteriormente, a medida que vayan solicitando el abono de estas se registre la concesión individual vinculada a esta convocatoria?

Sí, se puede. La información más relevante en este caso estará siempre en la concesión.

No obstante, en aras a la transparencia de la gestión de subvenciones en el caso de que se opte por esta opción es recomendable que se adjunten como otros documentos de la convocatoria los convenios o las resoluciones de concesión que soportan la concesión de cada una de las subvenciones nominativas.

Siendo posible la solución anterior, si la convocatoria se registra en el mes de abril y en esa fecha existen concesiones ya pagadas a algún beneficiario en el mes de enero o febrero, ¿se podría vincular esa concesión a la convocatoria tal cual o habría que marcar “a regularizar”?

Las subvenciones nominativas en las que no hay una convocatoria administrativa se registran en la BDNS a través de una convocatoria instrumental. Las convocatorias instrumentales no admiten la opción “a regularizar”. Las convocatorias “a regularizar” solo pueden ser convocatorias canónicas en las que se la publicación del extracto de la convocatoria en la Diario Oficial no se ha realizado a través de la BDNS y el órgano convocante no está adherido al sistema no intermediado.

En cualquier caso, se recomienda registrar la convocatoria instrumental lo antes posible, en el ejercicio económico, a fin de poder registrar las concesiones en su plazo legal.

5.35 Distinto número de convocatorias en el portal de SNPSAP y en la web app BDNS

He hecho una consulta en el portal www.infosubvenciones.es y el resultado da X convocatorias. Pero si hago la misma consulta en la aplicación web BDNS aparecen X+Y usando los mismo criterios y filtros. ¿Por qué ocurre esto?

Hay dos factores que explican la diferencia:

- El portal y la web app no son sincrónicos: Las convocatorias del portal se actualizan 2 veces al día, en momentos predeterminados. BDNS, en cambio, se actualiza continuamente. **Ver la respuesta 5.24 de este documento.**
- Las convocatorias “canónicas” registradas en BDNS no se muestran en el portal hasta que no se ordene la publicación del extracto en el Diario Oficial. **Ver la respuesta 5.24 de este documento.**
- El SNPSAP publica las convocatorias registradas en la BDNS desde el 01-01-2016, así como las convocatorias registradas en la BDNS al 01-01-2016, en la medida en que tengan registradas concesiones con fecha de concesión desde el 01-01-2016. En la BDNS no existe esta limitación temporal.

He hecho una consulta de convocatorias en la aplicación BDNS y obtengo x convocatorias. Pero si hago una extracción de datos mediante la utilidad “Informe Básico de Convocatorias”, con los mismos criterios de filtrado, obtengo X+Z convocatorias. ¿A qué se debe esto?

El informe básico de convocatorias (y todos los informes de convocatorias) duplican (o multiplican) los registros cuando hay uno o más órganos “concedentes” distintos de los “convocantes”. Es decir, cuando la Consejería X convoca, pero delega la concesión de las subvenciones en las Direcciones Generales Alfa y Beta, para una misma convocatoria tendríamos en el informe correspondiente 3 registros, uno por el convocante y dos por los concedentes. Esto se puede comprobar fácilmente en el informe extraído porque aparecerán códigos BDNS duplicados.

5.36 Convocatorias en cascada: El volcán de La Palma

Para paliar los efectos de la erupción del volcán en la isla de La Palma se han dictado el Real Decreto 820/2021, por el que se aprueba la concesión directa a la Comunidad Autónoma de Canarias de una subvención para financiar la adquisición de viviendas y enseres de primera necesidad

destinadas a las familias afectadas por la erupción volcánica, así como el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma. La cuestión es ¿esa adjudicación de viviendas se entiende comprendida en el concepto de ayuda otorgada por la Administración autonómica a un particular y, por tanto, sujeta a su publicidad en la BDNS, o no lo está?

Ambas tienen que ser registradas en BDNS. El art 3 del RD 130/2019 dice

"4. Cuando los mismos fondos sean objeto de varias convocatorias de subvenciones sucesivas, por otorgarse en primer lugar por una administración de forma acumulada a una o varias entidades para que a su vez se encarguen de la convocatoria de subvenciones para su distribución entre los beneficiarios, se registrarán en la BDNS las dos convocatorias y sus correspondientes concesiones."

5.37 Declaración de créditos disponible y distribución definitiva de créditos [Nueva 2025]

Si la convocatoria se publica en la BDNS, la resolución correspondiente a la "declaración de créditos disponible" y la "distribución definitiva de créditos" ¿debe publicarse solo en la BDNS?

El artículo 58.5 del [Reglamento de la Ley General de Subvenciones](#) exige publicar en el mismo medio que se publicó la convocatoria la declaración de créditos disponibles en aquellas convocatorias en las que se haya previsto una cuantía adicional o, en su caso, la distribución definitiva de créditos si la convocatoria atribuía el carácter estimativo a la distribución de la cuantía máxima.

De acuerdo con el artículo 20.8 de la [Ley General de Subvenciones](#), la Base de Datos Nacional de Subvenciones en su función de Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas es el medio en el que se publican las convocatorias. Por tanto, la declaración de créditos disponibles o, en su caso, la distribución definitiva de créditos debe publicarse en el SNPSAP.

En el registro de la convocatoria en la BDNS se adjunta el archivo PDF que contiene el texto completo de la convocatoria, tal y como ha sido aprobada por el órgano competente. Este archivo es publicado en el SNPSAP. La aprobación de créditos disponibles o la distribución de créditos se publica en el SNPSAP adjuntando un archivo PDF con el texto completo de la Orden o resolución de aprobación.

Ahora bien, el artículo 20.8.a de la [LGS](#) establece la obligación de publicar un extracto de la convocatoria en el Diario Oficial, con la intermediación de la BDNS. La finalidad de la publicación del extracto es ofrecer un resumen de la convocatoria remitiendo al SNPSAP para conocer el contenido íntegro la misma.

La guía de estilo para la cumplimentación del texto del extracto de la convocatoria acordada entre la IGAE y el BOE incluyó en el contenido del extracto la información relativa a la "cuantía": El importe total de la convocatoria, el importe individual, el número de beneficiarios máximos o, en definitiva, aquella información que permita al solicitante hacerse una idea de las probabilidades que tiene de acceder a la subvención y de la cuantía que podría obtener si resulta beneficiario.

Como se indica en el manual de registro de la convocatoria «Cualquier modificación de la convocatoria surgida con posterioridad a su registro en la BDNS deberá ser tramitada en los mismos términos previstos para las convocatorias. Si se modifica algún aspecto de la convocatoria que figure recogido en el extracto de la convocatoria publicado, deberá generarse en esa misma convocatoria un nuevo extracto relativo a la modificación de la convocatoria y ordenar su publicación en el diario oficial con la intermediación de la BDNS».

Por tanto, si el extracto de la convocatoria publicado en el Boletín Oficial con la intermediación de la BDNS recoge la información sobre la cuantías adicionales o distribución estimativa de los créditos, la "declaración de créditos disponible" o la "distribución definitiva de créditos" supone una modificación del extracto. En este caso

hay que generar en esa misma convocatoria un nuevo extracto relativo a la modificación de la convocatoria y ordenar su publicación en el diario oficial con la intermediación de la BDNS.

Si el extracto no hace mención a la cuantía máxima de la subvención o distribución estimativa de créditos bastará con adjuntar la orden o resolución de "declaración de créditos disponible" o la "distribución definitiva de créditos" que, podrá ser publicada en el Boletín Oficial al margen de la BDNS.

6. SOBRE LAS CONCESIONES, PAGOS, DEVOLUCIONES Y REINTEGROS.

6.1 Concepto de “Concesión”

Una concesión es un acto formal del órgano competente para resolver la asignación de subvenciones o ayudas públicas a beneficiarios. En la gestión presupuestaria la concesión conlleva el compromiso del gasto.

En la BDNS cada órgano concedente registrará una concesión distinta cuando sea diferente el contenido de cualquiera de los atributos que forman la identificación de la concesión (Órgano concedente, identificación de la convocatoria, beneficiario, discriminador o instrumento de ayuda).

Mediante el campo “Discriminador” se registrarán las concesiones individuales otorgadas a un mismo beneficiario en base a una misma convocatoria, porque la normativa reguladora de la misma contenga distintas líneas de ayudas (esquemas), o por cualquier otra razón.

Solo las concesiones de subvenciones y de entregas dinerarias sin contraprestación registran pagos en BDNS. No así los préstamos, avales, etc.

6.2 Concepto de “Devolución”

Se produce una “devolución” cuando un beneficiario de una subvención devuelve voluntariamente, sin que medie acto alguno de la administración (convocante, gestor o controlador), todo o parte del importe de una concesión de subvención previamente cobrada.

Por tanto, la devolución es la entrega voluntaria total o parcial de los fondos percibidos por el beneficiario. En caso de entregas parciales correspondientes a la misma identificación de concesión, debe diferenciarse cada una de ellas mediante la asignación de distinto discriminador de la devolución.

Las devoluciones se regulan en el artículo 90 del [RD 887/2006](#) y llevan devengados los intereses hasta el momento del ingreso. No hay que confundirlas con las devoluciones del artículo 36.4 de la [LGS](#), que sólo proceden cuando se declara la invalidez de la concesión (estas devoluciones no han sido contempladas en la BDNS).

6.3 Concepto de “Reintegro” *[Actualizada 2025]*

¿Qué es un reintegro?

Un reintegro es la restitución total o parcial del importe cobrado de una subvención efectuado por un beneficiario a resultas de una acción de la administración (convocante, gestor o controlador).

El órgano dicta una resolución de reintegro por la que acuerda reclamar al beneficiario cuando concurren las irregularidades que se relacionan en el artículo 37 de la [LGS](#). Estos reintegros llevan aparejados los intereses de demora que se devengan hasta la fecha de la resolución de reintegro, según lo indicado en el artículo 38 de la [LGS](#). Solo procede reintegro en los casos previstos expresamente en la LGS.

Si la resolución de reintegro es firme ¿se puede afirmar que el beneficiario no se encuentra al corriente de obligaciones por reintegro de subvenciones y, por tanto, no puede optar a una nueva subvención?

Si bien la [Ley General de Subvenciones](#) exige al beneficiario estar al corriente de obligaciones por reintegro de subvenciones para poder optar a una nueva subvención, el [Reglamento de esta Ley](#) (artículo 21) matiza que se considera estar al corriente de estas obligaciones de reintegro:

«1. A efectos de lo previsto en el artículo 13.2.g) de la Ley se considerará que los beneficiarios o las entidades colaboradoras se encuentran al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones cuando no tengan deudas con la Administración concedente por reintegros de subvenciones en periodo ejecutivo o, en el caso de beneficiarios o entidades colaboradoras contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario.

2. Se considerará que los beneficiarios o las entidades colaboradoras se encuentran al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro».

Por tanto, si la deuda por reintegro de subvenciones se encuentra en el periodo voluntario de recaudación o ha sido aplazada, fraccionada o suspendida por la impugnación de la resolución de reintegro, el beneficiario puede optar a nuevas subvenciones.

¿Se puede pagar una subvención a un beneficiario que no está al corriente de las obligaciones de reintegro?

Para evitar que la Administración pague una subvención a un beneficiario que no ha cumplido la obligación de reintegro de otras subvenciones, el artículo 34.5 de la [Ley General de Subvenciones](#) no permite realizar el pago de la subvención en tanto el beneficiario sea deudor de reintegro de subvenciones.

¿Cuándo se considera que el beneficiario ha cumplido con la obligación de reintegro?

Las cantidades a reintegrar por subvenciones tienen la consideración de ingresos de derecho público (artículo 38 de la [Ley General de Subvenciones](#)). Por tanto, en el ámbito de la Administración General del Estado, su gestión recaudatoria se rige por el [Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación](#).

De conformidad con el citado Reglamento, si el pago del reintegro se realiza a través de entidades de crédito u otras personas autorizadas, la entrega al deudor del justificante de ingreso liberará a este de su obligación desde la fecha que se consigne en el justificante y por el importe que figure en él. Si el pago se efectuara en metálico, el deudor se libera de la obligación de reintegro en el momento en que realiza el ingreso del importe en la caja habilitada al efecto.

6.4 Concepto de “Proyecto” [Actualizada 2025]

A efectos de la BDNS, ¿qué es un “proyecto”?

El concepto “Proyecto” responde a cada actividad o bloque de actividad de una concesión de subvención que define como tal la resolución de concesión. Son piezas importantes de la estructura de una concesión, conforman la dimensión de la ejecución material de la concesión.

La [LGS](#) prevé la posibilidad de que las subvenciones se dirijan a fomentar la realización de actividades concretas o “proyectos”, que pueden ser desarrollados por el propio beneficiario o por una agrupación de beneficiarios a los que llama participantes, partícipes o ejecutores.

¿Cómo se registra en la BDNS la concesión de una subvención a una agrupación de personas que carece de personalidad jurídica?

La BDNS, para dar cumplimiento a sus obligaciones de transparencia y colaboración en la lucha contra el fraude, debe contener la información de las subvenciones y ayudas públicas concedidas con identificación del beneficiario. En el caso de agrupaciones de personas sin personalidad jurídica, la BDNS requiere disponer de la información tanto de la agrupación como de cada uno de los miembros que han adquirido la condición de beneficiario, así como el importe de subvención concedido cada uno de ellos.

Para ello se ha desarrollado la entidad de información "Proyectos". La concesión de una subvención a una agrupación sin personalidad jurídica exige que en la BDNS se sigan los siguientes pasos:

- Registrar un Proyecto. Es una entidad de información que ofrece un resumen de la concesión de la subvención a la agrupación (descripción del proyecto, el representante o apoderado único de la agrupación, órgano que ha creado el proyecto y, en su caso, órganos autorizados para asociar concesiones al proyecto).
- Registrar la concesión de la subvención a cada miembro de la agrupación que tiene la condición de beneficiario. En la concesión se indicará el importe de la subvención que aplica al miembro de la agrupación.
- Asociar las concesiones de los miembros de la agrupación (beneficiarios) al Proyecto.

El pago de la subvención concedida a una agrupación sin personalidad jurídica se realiza a favor del representante de la agrupación. ¿Cómo se registra este pago en la BDNS?

En la BDNS los pagos siempre están vinculados a las concesiones y reflejan el cumplimiento de la Administración concedente de la obligación de entregar al beneficiario la suma dineraria concedida, el bien o servicio acordado (subvención en especie).

La Administración concedente de la subvención cumple con su obligación de pago al beneficiario tanto si la orden de pago se realiza a favor del representante de la agrupación, siendo él el responsable de su distribución entre cada uno de los miembros de la agrupación de acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión, como si el pago se ordena a favor de cada miembro de la agrupación.

Por tanto, el pago se debe registrar en la concesión de cada miembro de la agrupación. Si la resolución de concesión no establece cómo se reparten entre los beneficiarios los pagos, es el representante de la agrupación el que debe informar de cómo ha distribuido la suma dineraria recibida entre los miembros de la agrupación y, en caso de no disponer de esta información, se puede estimar que la distribución del pago se ha realizado proporcionalmente al importe de la subvención concedida a cada miembro.

6.5 Concepto de "Participante" o "Partícipe" en un Proyecto [Actualizada 2025]

¿Qué es un participante o partícipe?

Participante o partícipe es la persona distinta del representante o apoderado único de la agrupación que es responsable de la ejecución parcial de un proyecto incluido en una concesión de subvención o préstamo. En ocasiones también se habla de él como "ejecutor".

Estos partícipes, que también tienen la consideración de beneficiarios, son los miembros asociados a la agrupación que se contempla en el apartado 3 del artículo 11 de la [LGS](#). Se caracterizan porque en la solicitud de la subvención ya se identifica cada uno de ellos, así como el compromiso que asumen en la ejecución del proyecto. El compromiso asumido por cada partícipe también se recoge en la resolución de concesión.

No se debe confundir esta figura con un contratista, subcontratista o proveedor del beneficiario. Para más información consultar el [Manual de concesiones, pagos, devoluciones y reintegros](#). Ver también Concepto de "beneficiario".

En el caso de reintegro de una subvención concedida a una agrupación sin personalidad jurídica ¿qué responsabilidad asume cada uno de los partícipes?

La [Sentencia del Tribunal Supremo 391/2019 de 21 de marzo de 2019 \(recurso de casación 502/2018\)](#) declara que, conforme a los artículos 11 y 40 de la [Ley General de Subvenciones](#), en los supuestos en que la subvención sea concedida a una agrupación de personas físicas o jurídicas, de carácter privado o público, sin personalidad jurídica y carente de un patrimonio propio, la Administración concedente de la ayuda pública puede exigir la obligación de reintegro a la entidad coordinadora o al resto de entidades partícipes de forma solidaria, aún con carácter limitado, en proporción, respecto a éstas, a las cantidades asignadas a cada una, en consonancia con las actividades subvencionadas que se hubieren comprometido a efectuar.

6.6 Concepto de “Coste de la actividad”

Cuando se subvencionan los gastos de funcionamiento de una entidad, ¿qué tendría que registrarse como coste de la actividad? ¿todos los gastos de funcionamiento de la entidad?

El “coste de la actividad” refleja el coste total de la actividad subvencionada, con independencia de las fuentes de financiación (propias, mediante subvenciones, aportaciones de terceros, ...). Su finalidad es facilitar el control, para garantizar que el importe de las subvenciones concedidas, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones y ayudas, no supere el coste de la actividad subvencionada (art. 19.3 de la LGS).

Por ello, la BDNS tiene establecido un control interno que impide que se registre una concesión en la que el importe del coste financiable de la actividad sea inferior al importe de la ayuda equivalente. Únicamente cuando la subvención financia el 100% de la actividad hay coincidencia entre el importe del coste financiable de la actividad y el importe de la subvención concedida.

Es cierto que en muchas subvenciones el órgano gestor desconoce el coste financiable de la actividad subvencionada. Es el caso de determinados premios (de literatura, pintura...), de ayudas sociales, ayudas de emergencia social, de adquisición de libros y de transporte cuando no se financia en función del gasto justificado, becas de todo tipo, etc.

En estos casos carece de sentido consignar el coste real de la actividad subvencionada, por lo que se recomienda hacer coincidir el importe del coste financiable de la actividad con el importe de la subvención concedida.

6.7 Concepto de “Ayuda equivalente” [Actualizada 2025]

¿Qué es y cómo se calcula la Ayuda equivalente?

El **equivalente de subvención bruta, equivalente bruto de subvención o elemento de ayuda** (se pueden encontrar como mínimo estas tres traducciones en las normas europeas) representa la ventaja económica obtenida por el beneficiario al recibir una ayuda pública, antes de cualquier deducción fiscal u otras cargas, ventaja que no hubiera obtenido en condiciones normales de mercado.

La Comisión Europea, en aras de la transparencia, la igualdad de trato y la correcta aplicación de los artículos 107 y 108 del [Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea](#), exige a todos los Estados miembros que apliquen el mismo método de cálculo de determinar el equivalente de subvención bruta (ESB) o elemento de ayuda. La aplicación de métodos homogéneos de cálculo permite a la UE la comparación de las medidas de ayuda y las correspondientes intensidades de los diferentes Estados miembros.

¿Cómo se calcula el equivalente de subvención bruta de una subvención?

El equivalente de subvención bruta de una ayuda pública proporcionada en forma de subvención es el importe de la subvención concedida al beneficiario.

¿Cómo se calcula el equivalente de subvención bruta de un préstamo bonificado?

El equivalente de subvención bruta o elemento de una ayuda pública proporcionada en forma de préstamo con intereses bonificados representa la ventaja económica obtenida por el beneficiario al recibir el préstamo, ventaja que no hubiera obtenido en condiciones normales de mercado, antes de cualquier deducción fiscal u otras cargas.

Así, el ESB es la diferencia entre los intereses que hubiera pagado el beneficiario si el préstamo se hubiera concedido en condiciones de mercado y los intereses realmente pagados en el préstamo con intereses bonificados, actualizada a la fecha de concesión del préstamo.

En el marco del control comunitario de las ayudas estatales, la Comisión Europea utiliza unos tipos de referencia y actualización: Los tipos de referencia se aplican en sustitución del tipo de interés de mercado y el tipo de actualización se emplea para calcular el valor de la ventaja económica en el momento de la concesión.

La Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (2008/C 14/02) establece la metodología para la fijación de los tipos de referencia y actualización, aplicables para calcular el equivalente en subvención en los regímenes de préstamos bonificados.

- El tipo de referencia. Se obtiene a partir de un tipo de interés base, sumando un margen que se fija a partir del nivel garantías reales exigido y de la calificación de solvencia de la empresa.

$$\text{Tipo de interés de referencia} = \text{Tipo de interés base} + \text{Margen}$$

El tipo de interés base de referencia es el IBOR a 1 año y se actualiza cada año. Así, el tipo de base se calcula sobre la base del tipo IBOR a 1 año registrado en septiembre, octubre y noviembre del año anterior. El tipo de base fijado de este modo estará en vigor a partir del 1 de enero. Los tipos de base calculados con arreglo a la Comunicación de la Comisión sobre la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización se pueden consultar [aquí](#).

El Margen a aplicar al tipo de interés de referencia, atendiendo al nivel de garantías reales exigido y de la calificación de solvencia de la empresa, se establece en la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización:

Márgenes de préstamos en puntos básicos			
Categoría de calificación	Colateralización		
	Alta	Normal	Baja
Excelente (AAA-A)	60	75	100
Buena (BBB)	75	100	220
Satisfactoria (BB)	100	220	400
Deficiente (B)	220	400	650
Mala/Dificultades financieras (CCC e inferior)	400	650	1 000 (!)

El tipo de interés anual bonificado será la diferencia entre el tipo de interés de referencia y el tipo interés del préstamo.

Si las cuotas del préstamo tienen una periodicidad mensual (12 pagos anuales), es preciso calcular el tipo de interés efectivo, tanto para el interés del préstamo como el tipo de interés de referencia:

$$i_e = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{12} - 1$$

Donde i_e es el tipo de interés efectivo e i es el tipo de interés (del préstamo y de referencia).

En este caso, el tipo de interés anual bonificado efectivo (i_{be}) es la diferencia entre el tipo de interés efectivo de referencia (i_{re}) y el tipo interés efectivo del préstamo (i_{pe}), calculados a partir de la fórmula anterior.

$$i_{be} = i_{re} - i_{pe}$$

- El tipo de actualización. Es el tipo de referencia (tipo base IBOR a 1 año) incrementado en un margen fijo de 100 puntos básicos.

Una vez determinado el tipo de interés anual bonificado efectivo (i_{be}) y el tipo de actualización (i_a), y conociendo el valor nominal del préstamo, el periodo de carencia, el vencimiento del préstamo, el periodo de pago de las cuotas y la cuota de amortización, el equivalente de subvención bruta será la suma de los importes de bonificación actualizada en cada periodo de pago, donde el importe de bonificación actualizada **para cada periodo** (a) se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Importe de bonificación actualizada}_a = \frac{\text{Importe de los intereses bonificados efectivos}}{\left(1 + \frac{i_a}{12}\right)^a}$$

El importe de los intereses bonificados efectivos para cada periodo se obtiene a partir del capital pendiente a amortizar en ese periodo:

$$\text{Importe de interés bonificado efectivo}_a = \text{Capital pendiente de amortizar}_a \times \frac{i_{be}}{12}$$

Así, el equivalente de subvención bruta será (EBS):

$$EBS = \sum_{a=1}^n \text{Importe de interes bonificado efectivo}_a$$

En el supuesto de que el equivalente de subvención bruta de acuerdo con la fórmula anterior dé un resultado negativo o su valor sea 0, se entenderá que el préstamo no lleva implícita ninguna ventaja económica.

¿Cómo se calcula el equivalente de subvención bruta de un préstamo bonificado tipificado como ayuda de minimis?

En las ayudas *de minimis* consistentes en préstamos, el EBS se calcula sobre la base de los tipos de interés de mercado aplicables en el momento de la concesión de la ayuda (ver método de cálculo explicado en la respuesta anterior).

Ahora bien, para simplificar la tramitación de los préstamos de pequeña cuantía y corta duración, los Reglamentos (UE) de ayudas *de minimis* permiten calcular su equivalente de subvención bruta como una parte proporcional del límite máximo pertinente *de minimis*.

$$\text{Parte proporcional} = \frac{\text{Límite de ayudas de «minimis»}}{\text{Límite del préstamo subyacente}} \times 100$$

$$\text{Parte proporcional anual límite 5 años} = \frac{\text{Parte proporcional}}{5 \text{ años}}$$

$$\text{Parte proporcional límite 10 años} = \frac{\text{Parte proporcional}}{10 \text{ años}}$$

$$EBS = \text{Valor nominal del préstamo} \times \text{Parte proporcional anual} \times \text{duración del préstamo}$$

El método simplificado de cálculo del ESB se aplicará a los préstamos garantizados por una garantía que abarcan al menos el 50 % del mismo, cuando el valor nominal del préstamo sea inferior a las siguientes cuantías o/y tiene una duración inferior a cinco o diez años, respectivamente:

- Reglamento (UE) Nº 2023/2831 (el préstamo está garantizado por una garantía que abarque al menos el 50 % del mismo):

$$\text{Límite de ayudas de «minimis»} = 300\,000 \text{ EUR}$$

- 1 500 000 € a lo largo de 5 años

$$\text{Parte proporcional} = \frac{300\,000}{1\,500\,000} \times 100 = 20\%$$

- 750 000 € a lo largo de diez años.

$$\text{Parte proporcional} = \frac{300\,000}{750\,000} \times 100 = 40\%$$

- Reglamento (UE) Nº 1408/2013 (el préstamo está garantizado por una garantía que abarque al menos el 50 % del mismo):

Límite de ayudas de «minimis» = 50 000

- 250 000 € a lo largo de cinco años.

$$\text{Parte proporcional} = \frac{50\,000}{250\,000} \times 100 = 20\%$$

- 125 000 € a lo largo de diez años.

$$\text{Parte proporcional} = \frac{50\,000}{125\,000} \times 100 = 40\%$$

- Reglamento (UE) 717/2014 (el préstamo está garantizado por una garantía que abarque al menos el 50 % del mismo):

Límite de ayudas de «minimis» = 30 000³

- 150 000 € a lo largo de cinco años.

$$\text{Parte proporcional} = \frac{30\,000}{150\,000} \times 100 = 20\%$$

- 75 000 € a lo largo de 10 años.

$$\text{Parte proporcional} = \frac{30\,000}{75\,000} \times 100 = 40\%$$

¿Cómo se calcula el equivalente de subvención bruta de una garantía?

Para determinar el equivalente de subvención bruta de una garantía se contemplan 2 escenarios:

- Se concede una garantía con una comisión de garantía reducida. El elemento de la ayuda (ESB) se calcula sobre la base de las primas refugio tal como se define en la [Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía \(2008/C 155/02\)](#).

El cálculo matemático consiste en actualizar hasta la fecha en que se concede la garantía las diferencias anuales entre la comisión de garantía teórica/de mercado que se tendría que haber pagado y la comisión de garantía reducida realmente pagada durante el período transcurrido hasta el vencimiento del préstamo.

Para las garantías individuales en los préstamos individuales a pymes, la Comunicación sobre la garantía establece un cuadro sencillo para decidir si una garantía de préstamo implica o no elementos de ayuda. Si la prima de garantía aplicada se corresponde al valor fijado como mínimo para su categoría de calificación en el cuadro (prima refugio), se considerará que la garantía estatal no constituye ayuda.

Si la prima realmente aplicada al importe efectivamente garantizado por el Estado es inferior a la prima

³ 40 000 EUR si se dispone de Registro Central de Minimis ([Real Decreto 1139/2024, de 11 de noviembre, por el que se regulan el límite máximo de las ayudas de minimis en el sector agrícola y pesquero y el procedimiento para garantizar que no se sobrepasan los topes nacional y sectorial establecidos en la normativa europea](#)).

refugio, el ESB se calculará así:

$$ESB = \text{Suma grantizada pendiente} \times (\text{prima refugio} - \text{prima pagada})$$

Si la garantía se extiende más de un año, los déficits anuales se actualizarán el tipo de actualización resultante de aplicar la [Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización](#) (2008/C 14/02).

- Se concede una garantía con una comisión de garantía reducida. El elemento de ayuda (ESB) se calcula sobre la base de un método aprobado en una Decisión específica de la Comisión.

En estos casos, cuando el Estado miembro notifica a la Comisión un método de cálculo. Si la Comisión aprueba el método de cálculo, la fórmula específica para calcular el ESB formará parte de la decisión de la Comisión.

¿Cómo se calcula el equivalente de subvención bruta de una garantía tipificada como ayuda de minimis?

En las ayudas de *minimis* consistentes en garantías, el EBS se calcula aplicando los métodos de cálculo explicados en la respuesta anterior.

Ahora bien, para simplificar la tramitación de las garantías de corta duración, los Reglamentos (UE) de ayudas de *minimis* permiten calcular su equivalente de subvención bruta como una parte proporcional del límite máximo pertinente de *minimis*.

- Reglamento (UE) Nº 2023/2831 (la garantía no excede del 80% del préstamo subyacente, las pérdidas son asumidas proporcionalmente y en las mismas condiciones por el prestamista y al garante y los reembolsos netos que se generan por la recuperación del préstamo a partir del aval ofrecido por el prestatario reducen proporcionalmente las pérdidas a cargo del prestamista y del garante):

Límite de ayudas de «*minimis*» = 500 000

- 2 250 000 € y la duración de la garantía es de cinco años.

$$\text{Parte proporcional} = \frac{300\,000}{2\,250\,000} \times 100 = 13,33\%$$

- 1 125 000 € y la duración de la garantía es de diez años.

$$\text{Parte proporcional} = \frac{300\,000}{1\,125\,000} \times 100 = 26,66\%$$

- Reglamento (UE) Nº 1408/2013 (garantía no excede del 80% del préstamo subyacente):

Límite de ayudas de «*minimis*» = 50 000

- 375 000 € a lo largo de cinco años.

$$\text{Parte proporcional} = \frac{50\,000}{375\,000} \times 100 = 13,33\%$$

- 187 500 € a lo largo de diez años.

$$\text{Parte proporcional} = \frac{50\,000}{187\,500} \times 100 = 26,66\%$$

- Reglamento (UE) 717/2014 (garantía no excede del 80% del préstamo subyacente):

Límite de ayudas de «minimis» = 30 000⁴

- 225 000 EUR € a lo largo de cinco años.

$$\text{Parte proporcional} = \frac{30\,000}{225\,000} \times 100 = 13,33\%$$

- 112 500 € a lo largo de 10 años.

$$\text{Parte proporcional} = \frac{30\,000}{112\,500} \times 100 = 26,66\%$$

6.8 Concepto de “Código de concesión” [Nueva 2025]

¿Qué es el “Código de la concesión”?

Toda concesión tiene un código único identificativo, que se asigna automáticamente en el momento de su registro en BDNS y que permanecerá eternamente asociada a ella. Ese código se construye como XX#####, donde “X” son caracteres alfabéticos y “#” dígitos numéricos.

Los dos caracteres alfabéticos indican el instrumento de ayuda en la que se materializa la concesión. Así SB indica que es una subvención, PR un préstamo, GR una garantía o aval, VF una ventaja fiscal, FR financiación riesgo y OT otros.

No es necesario teclear el código completo. Por ejemplo, tecleando SB25303 se seleccionarán todas las concesiones de subvenciones (por “SB”) cuyo código comienza por SB25303, siendo cualesquiera los dígitos siguientes. Así por ejemplo SB25303010, SB25303011, SB25303012, etc.

Cuando registré la concesión en la BDNS no existía el campo “Código de la concesión” ¿Esa concesión tiene asignado un código? ¿Cómo puedo obtener el código?

El campo “Código de la concesión” se introdujo en la BDNS en mayo de 2024. Desde ese momento todas las concesiones registradas en la BDNS, tanto las registradas con anterioridad como con posterioridad a esa fecha, disponen de un código de concesión.

Puede disponer del código de concesión consultando en la BDNS la concesión registrada.

Igualmente, si se descarga cualquier informe de concesiones (informe básico de concesiones con detalle, informe básico de concesiones con acumulados, informe de concesiones AdE, informe de concesiones de minimis e informe de concesiones MRR-COFFEE) obtendrá el código de concesiones asociado a la concesión registrada.

⁴ Ver nota 3.

6.9 Concepto de “Discriminador”

¿Qué es el “discriminador” de la concesión?

Es la referencia propia del órgano concedente, de contenido libre, utilizado para discriminar cada concesión de subvención al mismo beneficiario en la misma convocatoria. Este discriminador cumple la función de posibilitar la existencia de más de una concesión, dentro de la misma convocatoria, al mismo beneficiario.

Además, posibilita la interoperabilidad entre la BDNS y los sistemas e información propios de los gestores, ya que en la BDNS no existe un código identificativo propio de la concesión (este se identifica por órgano/convocatoria/beneficiario).

¿Qué es el “discriminador” del pago, del proyecto de la devolución y del reintegro?

Conceptualmente el discriminador de estas entidades tiene la misma finalidad que el discriminador de la entidad concesión. Así, se utilizará para discriminar cada pago de una concesión, cada proyecto de una concesión, cada devolución de una concesión y cada reintegro de una concesión.

6.10 Registro de Concesiones plurianuales [Actualizada 2025]

¿Cómo se registran las concesiones plurianuales?

Una concesión de una subvención puede desarrollarse en sucesivas anualidades, que se mostrarán en el calendario de ejecución del proyecto que presente el beneficiario ante el órgano concedente, configurando así la dimensión de la ejecución presupuestaria.

Para registrar una concesión plurianual se anotará una única concesión. No se aportará el detalle de las anualidades.

En el campo **“Periodo de ejecución del programa, proyecto o actividad subvencionada”** se recogerá el periodo previsto en el que se ejecutará el proyecto, programa o actividad a la que se aplica la subvención o ayuda.

6.11 Pagos de garantías [Actualizada 2025]

¿Para qué instrumentos de ayuda hay que registrar los pagos en la BDNS?

Actualmente, la BDNS solo recoge información de los pagos en las ayudas instrumentadas mediante subvenciones.

¿Por qué la BDNS no recoge los pagos de garantías?

El [RD 130/2019](#) extiende el ámbito de la BDNS más allá de las subvenciones y entregas dinerarias sin contraprestación, para contemplar también otro tipo de ayudas públicas. Nótese que en este punto la BDNS trata de dar respuesta a los extremos exigidos por la normativa europea, que se refiere a ayudas de estado y respecto a éstas, a las que superen un determinado umbral. Pero el citado Real Decreto también viene a dar respuesta a la obligación de transparencia y publicidad impuesta por la regulación de la Ley de transparencia, que habla de “subvenciones y ayudas”, de modo que aspira a la inclusión de cualquier apoyo económico que suponga una ventaja para sus perceptores, entre ellos las garantías.

Ahora bien, la BDNS no es una aplicación de contabilidad, ni un sistema de gestión financiera de activos o productos financieros de entidades públicas. Las secuencias de pagos y cobros de las garantías no le interesan a la BDNS (al menos a fecha de hoy) a efectos de la transparencia y publicidad de las ayudas públicas. Por ese motivo, -teniendo en cuenta que todo pueda evolucionar en el futuro- se considera que la información solicitada en relación con las garantías es suficiente a los efectos de cumplir con los fines de la BDNS.

6.12 Prórrogas de becas

Estamos intentando registrar el pago de las becas de esta Unidad, pero tenemos la duda de si las prórrogas de becas se deben tratar como segunda concesión.

Sin profundizar en mayores detalles, se puede decir que, hará falta, *sine qua non*, que la posibilidad de prórroga de la ayuda esté cubierta en la convocatoria o en las BBRR. A partir de ahí:

- Si en el acto de concesión original se previó, no se dará de alta una nueva concesión, sino que se modificará la concesión ya informada y, en su caso, habrá que registrar los nuevos pagos.
- Si en la resolución de concesión no fue previsto, hará falta considerarla en BDNS como una nueva concesión, y registrarla como tal, junto con los nuevos pagos.

6.13 Publicidad de la resolución de concesión

La resolución de concesión ¿debe publicarse mediante un extracto a través de la BDNS como las convocatorias? o ¿cada órgano concedente publica directamente la resolución de concesión en el diario oficial que corresponda?

La respuesta a la primera pregunta es **no**. La resolución de concesión, en cuanto acto administrativo, no es objeto de registro en BDNS ni de publicación en [SNPSAP](#), salvo que en la convocatoria se indique expresamente que la publicación de la resolución de concesión se realizará a través del [SNPSAP](#).

El artículo 45.1.b de la [Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas](#), señalar que cuando el acto administrativo está integrado en un procedimiento de concurrencia competitiva, **la convocatoria** del procedimiento debería indicar el medios de comunicación donde se efectúen las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se llevasen a cabo en lugares distintos.

Por tanto, la resolución de concesión, como acto administrativo del procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, se debe publicar por el medio que figure indicado en la convocatoria.

En cualquier caso, y aun cuando la BDNS no opere como medio dónde se efectúen las sucesivas publicaciones de concesión, el órgano concedente, de estimarlo oportuno por razones de transparencia, puede adjuntar en la BDNS el documento de la Resolución de concesión como un documento más anexo a la convocatoria, siendo accesible de este modo para los ciudadanos a través del SNPSAP.

En este caso, para garantizar la protección de los datos personales de las personas físicas cuyos datos identificativos figuren en la resolución de concesión se recomendamos la lectura de la pregunta *La convocatoria establece que la resolución de concesión de las subvenciones se publicará en el SNPSAP. ¿Debo adoptar alguna medida con relación a la protección de datos personales?* de este documento.

Con la publicación de la resolución de concesión en la BDNS ¿se entiende practicada la notificación al interesado?

No. La publicación de la resolución de concesión en la BDNS es complementaria a la notificación de la resolución, pero no sustitutiva de esta.

La resolución del procedimiento de concesión de subvenciones se debe notificar a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la [Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas](#).

En los procedimientos de concurrencia competitiva, la publicación de la resolución de concesión surte los efectos de la notificación, siempre que se realice en el medio indicado en la convocatoria (art. 45.1.a) de la LPACAP.

Si bien las resoluciones de concesión de subvenciones se pueden publicar en el SNPSAP, la BDNS no tiene entre sus funciones actuar como medio electrónico de notificación y por ello, el SNPSAP no está diseñado para cumplir estas funciones.

6.14 Una concesión por cada instrumento de ayuda

¿Una convocatoria puede tener más de un “instrumento de ayuda”? Al registrar una concesión en BDNS solo reconoce uno de los instrumentos de ayuda.

Una **convocatoria** puede contener **varios instrumentos** de ayuda, por eso se puede registrar así.

Sin embargo, en la BDNS una **concesión** se refiere a un **único instrumento** de los contemplados en la convocatoria (está diseñado así por claridad conceptual y por requisitos del suministro de información a la Unión Europea). Si en el caso concreto de la pregunta, en el mismo acto administrativo, se reconoce una concesión de una ayuda con más de un instrumento a un mismo beneficiario, se deberá registrar en BDNS una concesión por cada instrumento.

Esto ocurre porque hay que desacoplar el concepto “Convocatoria” y “Concesión” del instrumento jurídico que les da soporte. Una Resolución de convocatoria puede contener varias “convocatorias” o líneas subvencionales. Una Resolución de concesión a un beneficiario puede contener varias concesiones de distintos instrumentos de ayuda. Esta consideración de la arquitectura de información es además plenamente coherente con las provisiones e instrucciones de la Comisión Europea.

6.15 Concesión de subvención por ejecución de sentencia judicial

¿Cómo se registra una concesión derivada de la ejecución de una sentencia dictada por un tribunal de justicia? ¿Es necesario dar de alta una “Convocatoria instrumental” para incorporar la concesión, o puede vincularse a su convocatoria antigua, aunque sea de otro año y ejercicio presupuestario?

Las concesiones que derivan de la resolución de un recurso administrativo o de una sentencia judicial deben registrarse en la convocatoria de origen.

La cuestión surge cuando se inicia el procedimiento para la concesión de subvenciones. Un solicitante no resulta beneficiario o la cuantía concedida no le parece la adecuada y presenta recurso o, en caso de que la resolución ponga fin a la vía administrativa, se dirige al contencioso administrativo. Tanto si la concesión viene de la estimación de un recurso o de una sentencia judicial, la realidad es que esa concesión corresponde al mismo procedimiento de concesión de subvenciones que las concesiones que figuran en la resolución de concesión: mismas bases reguladoras, mismos créditos presupuestarios, el mismo objeto, las mismas condiciones y finalidad de la subvención, ...

En cualquier caso, la entidad “Concesión” permite establecer un discriminador para identificar las concesiones que tienen su origen en la estimación de un recurso o en una sentencia judicial, y el campo “fecha de la resolución” permite incorporar la fecha de la resolución de estimación del recurso o la fecha de la sentencia, quedando así perfectamente documentada la naturaleza extraordinaria de la concesión.

6.16 Modificaciones que incrementan la cantidad inicial concedida

Como consecuencia de no haber agotado el crédito para una determinada subvención, existen remanentes, y se ha decidido que se dediquen a incrementar las cuantías de las subvenciones ya concedidas. ¿Cómo hay que proceder?

Sin profundizar en mayores detalles, se puede decir que, en primer lugar, hará falta, *sine qua non*, que la posibilidad de incrementar al beneficiario la ayuda inicialmente concedida esté cubierta en la convocatoria, en las BBRR o en la Resolución de concesión.

A partir de ahí:

- Si en el acto de concesión original se previó el incremento, no se registrará en la BDNS una nueva concesión, sino que se modificará la concesión ya registrada y, en su caso, habrá que generar y registrar los nuevos pagos.
- Si en la resolución de concesión no fue previsto, en la BDNS se considerará como una nueva concesión y como tal se debe registrar.

6.17 Pérdidas del derecho al cobro y renunciás **[Actualizada 2025]**

Las soluciones propuestas tratan de buscar un equilibrio entre la fidelidad al acto administrativo, la calidad de la transparencia y la minimización de cargas para el gestor de subvenciones. Se refieren a supuestos soportados por un acto administrativo en virtud del cual el pago efectivo total de la subvención concedida nunca llegará a realizarse por haber quedado condicionado al cumplimiento de unas condiciones impuestas al beneficiario en la propia resolución de concesión o en la normativa aplicable.

¿Qué se entiende por pérdida del derecho al cobro?

La [Ley General de Subvenciones](#) (art. 34) y su [Reglamento de desarrollo](#) (art. 89) establecen que la pérdida del derecho de cobro total o parcial de la subvención se produce ante la falta de justificación total o parcial o ante concurrencia de alguna de las causas de reintegro previstas en el artículo 37 de LGS. Así, en estos casos, procede el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas por el beneficiario.

Ahora bien, en muchos casos esta pérdida total o parcial del derecho de cobro se produce en subvenciones en las que el beneficiario aún no ha percibido el pago total de la subvención (subvenciones pospagables) por lo que el órgano concedente en lugar de iniciar el procedimiento de reintegro se limita a declarar la pérdida del derecho de cobro, revocando la resolución de concesión dictada, sin iniciar un procedimiento de reintegro.

¿Cómo registramos la pérdida total del derecho al cobro de una subvención?

El diseño actual de la BDNS permite registrar las pérdidas totales del derecho de cobro de una subvención reguladas en el artículo 89 del [Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones](#):

«Artículo 89. Pérdida del derecho al cobro de la subvención.

1. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

2. El procedimiento para declarar la procedencia de la pérdida del derecho de cobro de la subvención será el establecido en el artículo 42 de la Ley General de Subvenciones».

Para ello, en el registro de la concesión se ha habilitado la casilla de verificación **¿Pérdida del derecho a cobro (art. 89 RGS)?** Al marcar esta casilla se informa de que el beneficiario ha perdido la totalidad del derecho a cobrar la subvención.

Las concesiones que tienen marcada la casilla de verificación **¿Pérdida del derecho a cobro (art. 89 RGS)?** no se publican en el SNPSAP.

Si la pérdida total del derecho de cobro lleva aparejada la imposición de una sanción, esta sanción deberá ser registrada en la BDNS.

Y si la pérdida del derecho de cobro es parcial y no total ¿cómo se registra en la BDNS?

En aras a la transparencia de la gestión subvencional y al objeto de que no se publiciten en el [SNPSAP](#) concesiones de subvenciones que el beneficiario no llegará a cobrar en su totalidad, en la concesión registrada se debe minorar el importe concedido en la cuantía a la que asciende la pérdida del derecho de cobro.

Mi Ayuntamiento ha concedido una subvención que está registrada en la BDNS. El beneficiario sólo justifica parcialmente la subvención. Se realiza el pago parcial proporcional a la justificación realizada. Se ha dictado la resolución de revocación parcial de la subvención ¿Hay que anular el importe de la parte de subvención no justificada?

Estamos ante una pérdida parcial del derecho de cobro inicialmente concedido. En este caso, en la BDNS hay que modificar el importe de la subvención inicialmente registrado. El importe que debe figurar será la diferencia entre el importe de la subvención inicialmente concedida y el importe de la revocación parcial.

¿Qué se entiende por renuncia?

La renuncia es una modalidad de terminación anormal del procedimiento a voluntad del beneficiario, por medio de la cual se pone fin al procedimiento de concesión de la subvención.

El artículo 63.2 del [Reglamento de la Ley General de Subvenciones](#) establece que la renuncia se deberá acordar mediante resolución del órgano competente.

¿Cómo registramos la renuncia total a la subvención?

En el registro de la concesión se ha habilitado la casilla de verificación **¿Renuncia voluntaria a la concesión?** Al marcar esta casilla se informa de que el beneficiario ha perdido la totalidad del derecho a cobrar la subvención.

Las concesiones que tienen marcada la casilla de verificación **¿Renuncia voluntaria a la concesión?** no se publican en el SNPSAP.

Si el beneficiario ha cobrado alguna cantidad de la subvención, antes de solicitar la renuncia el órgano concedente debe solicitar el reintegro del principal cobrado más los intereses de demora correspondientes. El reintegro se registrará en la BDNS asociado a esta concesión.

Y si la renuncia a la subvención fuera parcial y no total ¿cómo se registra en la BDNS?

En aras a la transparencia de la gestión subvencional y al objeto de que no se publiciten en el [SNPSAP](#) concesiones de subvenciones que el beneficiario no llegará a cobrar, en la concesión registrada se debe minorar el importe concedido en la cuantía de la parte de la subvención que nunca se cobrará por haber perdido su derecho de cobro.

6.18 Cesiones de crédito de concesiones de subvenciones

La relación subvencional es una relación jurídica que se establece entre el órgano concedente y el beneficiario de una subvención, que se rige por los preceptos generales establecidos en la [LGS](#), por su Reglamento desarrollo y por las normas especiales reguladoras de cada línea de subvención en particular.

El beneficiario, es decir, la persona que realiza la actividad material que constituye el objeto de la subvención o que se encuentra en la situación que motiva su otorgamiento, es el destinatario de la "disposición dineraria", esto es, de los fondos que constituyen la subvención.

En la relación jurídica que se establece entre el órgano concedente y el beneficiario de una subvención, este último es sujeto de derechos y obligaciones que sólo le corresponden a él y que no son susceptibles de delegación o transferencia. Y ello se debe, como han señalado reiteradas veces tanto la doctrina como la jurisprudencia, a que la subvención no responde a una "causa donandi", sino a la finalidad de intervenir en la actuación del beneficiario a través de unos condicionamientos o de un "modus" libremente aceptado por aquel.

Por consiguiente, las cantidades otorgadas en concepto de subvención están vinculadas al cumplimiento de la actividad o la adopción del comportamiento en los términos fijados en su otorgamiento, hasta el punto de que su incumplimiento determina la obligación de devolver lo percibido, sin que sea precisa la revisión del acto de concesión.

Por ello, el beneficiario, que está sujeto a las obligaciones establecidas con carácter general en la [LGS](#) y con carácter especial en las bases reguladoras de cada línea de subvención, es también sujeto de derechos, siendo el principal de ellos el derecho al cobro de la subvención, y la posición que ocupa en la relación jurídica subvencional no es susceptible de ser trasladada a otros sujetos, con independencia de quién sea en última instancia quien se beneficie económicamente de los fondos que integran la subvención.

Por tanto, las repercusiones que un contrato de cesión de los derechos de cobro de una subvención tiene sobre el pago de las cantidades derivadas del otorgamiento de la subvención no pertenecen al ámbito de la concesión ni al procedimiento de gasto de las subvenciones, sino al de la transmisión de los derechos de cobro.

La transmisión de los derechos de crédito ha sido tradicionalmente objeto de regulación en el ámbito de la contratación administrativa y no en el de las subvenciones públicas. Pese a ello, es admitido por la doctrina en el ámbito subvencional siempre que la transmisión se haga con arreglo a las normas de derecho privado sobre transmisión de créditos, pues ninguna norma jurídico-pública lo impide. De hecho, el Reglamento de la LGS reconoce indirectamente la posibilidad de cesión de los derechos de cobro de una subvención cuando dice en su artículo 83 que se considerará efectivamente pagado el gasto *"... con la cesión del derecho de cobro de la subvención a favor de los acreedores por razón del gasto realizado"*.

El efecto fundamental que se produce para el deudor de un crédito que se transmite es el cambio de acreedor, de suerte que desde el momento en que se comunica la cesión sólo será liberatorio para el deudor el pago realizado al nuevo acreedor.

En consecuencia, el beneficiario de una subvención puede ceder sus derechos de cobro a un tercero, que será el perceptor de los sucesivos pagos que efectúe el Órgano que concedió la subvención.

No obstante, será el beneficiario y no el tercero al que le han sido cedidos los derechos de cobro, el que habrá de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y el que en su caso, responderá de la obligación de reintegro, así como en general, de todas las obligaciones exigibles a los beneficiarios de las subvenciones públicas por la normativa aplicable a las mismas, en tanto en cuanto éstas son obligaciones derivadas de su condición de beneficiario de la subvención, posición en la que en ningún caso podría subrogarse un tercero.

Asimismo, será el beneficiario el que aparezca identificado en los mecanismos de publicidad y transparencia del [SNPSAP](#).

En este caso, ¿cómo se registra en la BDNS el pago realizado al tercero?

En la BDNS se deberá registrar la información relativa al pago de la subvención como realizado a favor del beneficiario de la concesión con independencia de que el derecho de cobro haya sido cedido a un tercero y el pago material haya sido ordenador a favor del tercero.

6.19 Pago de subvenciones

¿Qué fechas de pago hay que registrar: la de ordenación del pago o la del pago material?

Teniendo en cuenta que la BDNS no es un sistema de información contable y que la inmensa mayoría de subvenciones tienen trascendencia tributaria, preferiblemente, siempre que se conozca y sea factible, se debe registrar la fecha de pago material.

6.20 Pagos en moneda extranjera

¿En el importe pagado se deben recoger las diferencias de cambio y comisiones?

No, al registrar el importe del pago en la BDNS no se debe incluir el importe de los gastos derivados de la gestión del pago (comisiones y/o diferencias de cambio).

6.21 Importe del reintegro que hay que registrar en BDNS

Emitimos la resolución de reintegro, pero puede que el dinero se reintegre o no. En caso negativo, puede tardar tiempo (si hay algún recurso) en resolverse, o que la cantidad a reintegrar sea menor. ¿Qué importe de reintegro y cuándo hay que registrarlo en BDNS?

Cuando se dicta una resolución de reintegro ésta no adquiere firmeza hasta que haya transcurrido el plazo previsto para recurrir sin que se haya interpuesto recurso alguno; o bien hasta que se haya resuelto el recurso que se pudiese haber formulado, emitiéndose otra resolución, que agota la vía administrativa.

Ante estas posibles situaciones, el reintegro se debe registrar en la BDNS cuando la resolución de este sea firme, y por el importe que figure en la misma, sin intereses de demora.

Los intereses de demora a reintegrar se registrarán en el campo habilitado al efecto.

6.22 Causas de reintegro previstas en la normativa específica

¿Cómo seleccionar la causa cuando el reintegro se rige por la normativa específica (BBRR) de la subvención y no por las de la LGS?

En la tabla del desplegable del campo **Causas de reintegro** hay un valor "**ART. 37.1.I) DEMÁS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA NORMATIVA REGULADORA**" que permite registrar todos aquellos reintegros cuyas causas no están contempladas expresamente en la [LGS](#).

Por ello, si la causa de incumplimiento que da lugar al reintegro es propia de la normativa específica de la subvención o ayuda pública se debe seleccionar ese valor.

6.23 Procedimientos de reintegro terminados por la devolución voluntaria [Nueva 2025]

Iniciado el procedimiento de reintegro ¿se pueden admitir devoluciones voluntarias del beneficiario?

En tanto el beneficiario no haya recibido la notificación de la resolución del procedimiento de reintegro, puede proceder al ingreso voluntario del remanente de la subvención. En este caso, la Administración concedente tendrá que calcular los intereses de demora devengados hasta el momento en que se produce la devolución y el beneficiario tendrá que ingresar estos intereses.

¿Cómo se registra en la BDNS esa circunstancia?

Si tras comunicar al beneficiario el inicio de las actuaciones de reintegro éste devuelve el principal de la subvención y los intereses de demora correspondientes antes de que le sea notificada la resolución de reintegro, cabe entender que lo que se ha producido es una DEVOLUCIÓN voluntaria, y como tal debe ser tratada en BDNS. La fecha de devolución será la fecha en la que haya efectuado el ingreso en el Tesoro o en la tesorería del órgano.

Los intereses de demora devengados por el principal devuelto, aunque aún no se hayan recaudado

¿se deben registrar?

Sí, los intereses de demora devengados por el importe de la subvención devuelto y que han sido exigidos al beneficiario se deben registrar en la BDNS, con independencia de que hayan sido pagados o no. La BDNS no tiene como objetivo recoger información recaudatoria ni de la situación deudora de los beneficiarios frente a las administraciones públicas.

Con carácter general, la Administración calcula los intereses de demora una vez que se produce la devolución efectiva por parte del beneficiario.

En estos casos, la Administración dispone hasta el último día del mes siguiente a la devolución efectiva para suministrar la información en la BDNS relativa a la devolución voluntaria de la subvención.

Es probable que en el momento de suministrar esta información a la BDNS ya se hayan calculado los intereses de demora y exigido al beneficiario. De ser así, se registrará en los campos habilitados al efecto tanto el importe del principal devuelto como el importe de los intereses devengados.

En el caso de que no aún no se haya exigido al beneficiario los intereses devengados se registrará únicamente el importe del principal devuelto. Cuando se reclame al beneficiario los intereses de demora se registrará esta información en la devolución inicialmente registrada.

6.24 Comprobación de ingresos de reintegros debidos *[Actualizada 2025]*

¿Puedo comprobar que los posibles beneficiarios están al corriente del pago de reintegros consultando la BDNS? ¿Dónde?

La BDNS no tiene como objetivo recoger información recaudatoria ni de la situación deudora de los beneficiarios u otros frente a las administraciones públicas.

Respecto a los reintegros de subvenciones, la única información que se pide es la relativa al hecho de que se haya dictado resolución exigiendo el reintegro por alguno de los motivos contemplados en la normativa, y la diferenciación de importes entre principal e intereses de demora. No se registra ningún dato de la recaudación de esos reintegros, que seguirán el curso administrativo que corresponda, y lógicamente no se informa (porque no se conoce) de la posición deudora de beneficiarios.

El [RD 130/2019](#) ha suprimido la última frase del artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones que establecía que la acreditación del cumplimiento de las obligaciones de reintegro de subvenciones se realizará mediante la declaración responsable del beneficiario o de la entidad colaboradora «sin perjuicio de los procedimientos que se desarrollen, en virtud de lo previsto en el artículo 20.4.a) de la Ley, para la cesión de los datos de la base de datos nacional de subvenciones».

Por tanto, la BDNS no puede ser un instrumento para acreditar el cumplimiento de las obligaciones de reintegro de subvenciones.

No obstante, a través de la Plataforma de Intermediación de Datos, la IGAE ofrece el servicio "Consulta de estar al corriente de pago y certificado para el reintegro de subvenciones" que permite conocer si el beneficiario está al corriente de las obligaciones de reintegros de subvenciones concedidas por la Administración General del Estado. **Tal servicio es independiente y no tiene ninguna relación con BDNS.**

6.25 Distinto número de concesiones en el portal de SNPSAP y en la aplicación BDNS

He hecho una consulta en el portal www.infosubvenciones.es y el resultado da X concesiones. Pero si hago la misma consulta en la aplicación web BDNS aparecen X+Y usando los mismo criterios y filtros. ¿Por qué ocurre esto?

Hay tres factores que explican la diferencia:

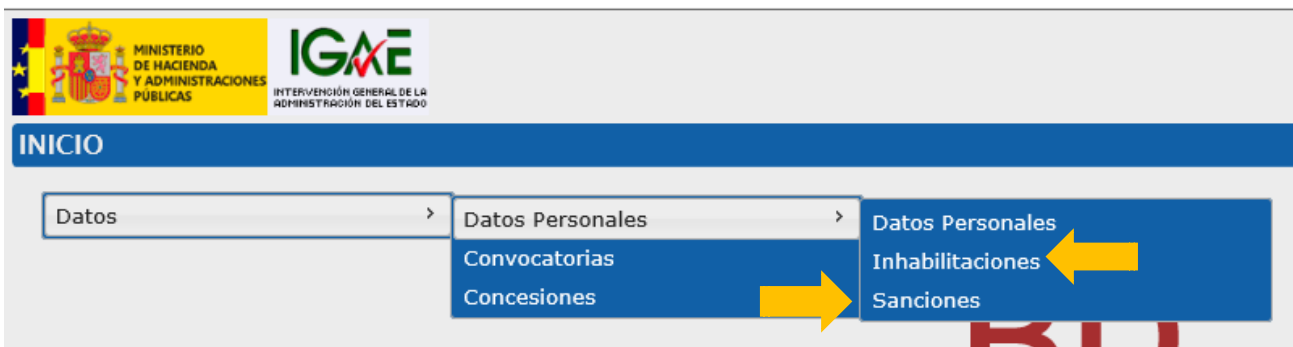
- a) El portal y la web app no son sincrónicos: Las concesiones del portal se actualizan en un proceso informático nocturno. BDNS, en cambio, se actualiza continuamente. **Ver la respuesta 5.24.**
- b) El artículo 20.8.b de la [LGS](#) establece que no serán publicadas las subvenciones concedidas cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, a la intimidad personal o familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982 y así haya sido previsto en su normativa reguladora. **Ver respuesta 1.4 de este documento.**
- c) El periodo de permanencia en el SNPSAP de la publicidad de las subvenciones dirigidas a persona físicas abarca el año de concesión y el año siguiente. Por su parte, la información sobre concesiones a personas jurídicas permanece publicada durante los cuatro años naturales siguientes al año en que se concedió la subvención.

7. SOBRE INFRACCIONES, SANCIONES E INHABILITACIONES

7.1 Concepto de Sanciones e Inhabilitaciones

No entiendo muy bien las diferencias entre sanciones e inhabilitaciones en la BDNS

La BDNS incorpora dos entidades diferenciadas de información, denominadas "Inhabilitaciones" y "Sanciones", y así aparecen en dos ítems de menú diferentes:



En la entidad "**Sanciones**" se recogen y editan las sanciones por infracciones administrativas recogidas en la [LGS](#), pecuniarias y no pecuniarias, incluyendo aquellas que conllevan la «Pérdida, durante un plazo de hasta xx años, de la posibilidad de obtener subvenciones...».

En la entidad "**Inhabilitaciones**" se recogen y editan las penas establecidas por sentencia judicial firme de «pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de xx a yy años», y además las sanciones administrativas equivalentes impuestas por ley distinta de la [LGS](#) (por ejemplo, la Ley de Contratos del SP).

Una explicación más completa se puede encontrar en el [Manual BDNS de datos personales, sanciones e inhabilitaciones](#).

7.2 Obligación de registro de sanciones e inhabilitaciones

¿Quién registra las sanciones en la BDNS?

De conformidad con el [RD 130/2019 \(BDNS\)](#), la información de las sanciones derivadas de infracciones en el ámbito subvencional debe ser suministrada por el órgano concedente de la subvención en la que se cometiera la infracción.

Cuando la sanción consista en la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas por aplicación de otras leyes distintas de la [LGS](#), la información será suministrada por la autoridad que impongan la sanción, siempre y cuando esté federado a la BDNS. En caso contrario, la información será registrada por el Equipo de Administración y Custodia de la BDNS a petición del órgano que ha impuesto la sanción.

¿Y si las sanciones derivan de una auditoría de control financiero de subvenciones?

La información relativa a la sanción tiene que registrarla el órgano gestor que concedió la subvención.

¿Quién registra las inhabilitaciones por sentencias judiciales?

En tanto el Ministerio de Justicia no disponga de un procedimiento para remitir a la BDNS la información referida a las penas y medidas de prohibición de acceso a subvenciones contenida en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes, la información relativa a

las inhabilitaciones derivadas de sentencia judicial será registrada por el Equipo de Administración y Custodia de la BDNS, una vez tenga conocimiento de la sentencia firme y la liquidación de la condena.

¿Qué hay que hacer si se conoce una inhabilitación por sentencia judicial, pero esta no está registrada en la BDNS?

Las administraciones públicas, así como las entidades públicas o privadas dependientes o vinculadas a éstas que tengan conocimiento de sentencias firmes que impongan la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas deberán trasladar dichas sentencias al Equipo de Administración y Custodia de la BDNS para su registro.

La comunicación podrá realizarse a través correo electrónico a la cuenta electrónica de correo bdns@igae.hacienda.gob.es, adjuntando el fichero de la sentencia firme y, si se dispone, de la liquidación de la condena.

7.3 Publicidad de inhabilitaciones y sanciones [Actualizada 2025]

¿Puedo consultar las inhabilitaciones por sentencia judicial o por sanción administrativa?

Por supuesto. No solo puede, sino que debe consultar antes de conceder una subvención, por si el beneficiario estuviera inhabilitado. También debe consultar las sanciones, porque hay sanciones de la [LGS](#) que implican la pérdida del derecho de acceso a subvenciones y ayudas (artículos 62.2.a y 63.2.a).

Para facilitar la consulta de las personas que han perdido la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas, ya sea por sentencia judicial o por sanción, la plataforma de intermediación pone a disposición de los organismos públicos el Servicio de Consulta de Inhabilitaciones para percibir subvenciones o ayudas de la BDNS.

Este servicio permite consultar si la persona objeto de consulta está condenada o sancionada con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas, pudiendo acotar la consulta por periodos temporales mediante el uso de filtros de fechas.

Los usuarios (aplicaciones Externas) pueden acceder a este servicio a través de los Web Services expuestos por la Plataforma de Intermediación de Datos.

Para acceder a este servicio de consulta, los órganos obligados a suministrar información a la BDNS deberán solicitar autorización para acceder al servicio. En la página web del Portal de la Administración Electrónica se pueden descargar Catálogo de Servicios e Información de la Plataforma de Intermediación, así como los formularios y procedimientos de autorización ([Servicio de Verificación y Consulta de Datos: Plataforma de Intermediación](#)).

Por otra parte, la BDNS ofrece la posibilidad de descargar un informe básico de inhabilitaciones en distintos formatos (Excel, PDF, CSV, XML...) que recoge información sobre la inhabilitaciones registradas en la BDNS, tanto las derivadas de sanciones administrativas impuestas en virtud de la LGS, de sanciones impuestas por otras leyes o por sentencia judicial. Esta funcionalidad se encuentra en la sección de Informes de la BDNS.

Finalmente, se puede utilizar la *applet* “**Verificador de inhabilitaciones**”, que permite controlar este aspecto automáticamente, y se puede descargar libremente en <https://bit.ly/3DfG1d3>

¿Son públicas, a través del SNPSAP, las sanciones registradas en la BDNS?

Únicamente las sanciones por infracciones muy graves serán publicadas en el [SNPSAP](#) siempre que el órgano competente para imponer la sanción lo recoja expresamente en la resolución de sanción firme impuesta por infracción muy grave, y sólo durante el tiempo que así se establezca en la propia resolución sancionadora.

8. SOBRE BENEFICIARIOS Y SUS DATOS PERSONALES

8.1 Registro de datos personales de beneficiarios y otros

¿Cómo se registran los datos de beneficiarios, participantes, sancionados e inhabilitados?

Cada órgano concedente, aún en el caso de que pertenezcan a un mismo remitente (es decir, "bajo el paraguas" de una Intervención General), debe dar de alta a sus terceros una sola vez en la BDNS.

La identificación de los beneficiarios en la BDNS se construye con el código país que emite el documento de identidad más el identificador personal que contiene ese documento.

La primera vez que se registra un tercero, si éste posee un documento de identidad expedido por una autoridad nacional competente (DNI, NIE, NIF) se valida su existencia e identificación con los servicios de la Dirección General de la Policía o con los de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, según corresponda. En los sucesivos registros del tercero por otros órganos, este trámite ya no se realiza.

En las sucesivas remisiones de datos del tercero por el mismo órgano, la BDNS actualiza los datos existentes. Así, la BDNS guarda la última versión de los datos comunicados (nombre y apellidos o denominación social, domicilio, sector de actividad, etc.).

Entonces ¿cada órgano tiene unos datos distintos de la misma persona?

Pudiera ser. La primera vez que se registra a un tercero en BDNS se valida su identificador. Si la validación es afirmativa, se registran los demás datos personales aportados por el órgano registrante (nombre y apellidos, denominación social, domicilio, sector...).

Si posteriormente otro órgano quiere registrar a ese mismo tercero, al estar validado su identificador (DNI, NIE o NIF), no se produce una nueva validación, de manera que el este órgano registra los datos personales que a él le constan. Al consultar al tercero en la BDNS, ésta ofrecerá tantos registros del tercero como órganos lo hayan registrado. El país emisor e identificador del tercero será siempre el mismo para todos los registros. Los datos personales (nombre y apellidos, denominación social, domicilio, sector de actividad...) de cada registro serán los comunicados por el órgano registrante, pudiendo diferir:

NIF/CIF	Nombre	Domicilio	Órgano comunicante
A000001H	EmpresaFicticia SA	C/ del Pez 24.	D.G. de Subvenciones
A000001H	Empresa Ficticia SA	Avda. de Ottokar II, 57	CCAA de Syldavia
A000001H	Empresa Ficticia S.A.	Plaza de Pleksy-Glatz 3	Ayuntamiento de Borduria
A000001H	Ficticia SA	Polígono Empresarial Sur, parcela H22	D.G. de Innovación
A000001H	EmpresaFicticia	Calle del Pez 24, 3B, 28777	Ayuntamiento de Freedonia

Todas las entidades de información (concesiones, pagos, etc.) se referencian sobre el país emisor e identificador validados. El resto de los elementos son atributos específicos aportados por los distintos órganos.

¿Cuándo se efectúa la verificación (validación) de los datos personales en la BDNS?

La verificación de los beneficiarios se efectuará en el primer momento de la carga del registro de la persona física o jurídica, de tal forma que si no se valida la existencia real del beneficiario, no se podrá registrar su información en la BDNS. **Ver epígrafe 8.11 "Comprobación del NIF de los beneficiarios" de este capítulo.**

¿Se puede dar de alta a una persona sin asociarle concesiones o sanciones?

Sí. Al ser el registro de beneficiarios previo a la concesión, sanción o inhabilitación se puede registrar la persona sin asociarle a ninguna entidad de información adicional.

¿Es necesario el consentimiento del interesado para la cesión (registro) de datos de las personas físicas a la BDNS?

La cesión o registro de información de los beneficiarios de subvenciones o ayudas públicas en la BDNS, está amparada en el artículo 6.1.e) del [RGPD](#) que establece que el tratamiento será lícito si es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

A su vez, el art 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales [LOPDGDD](#), establece que.... «*El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma de rango de Ley*».

La propia [LGS](#) establece en el apartado 4 de su artículo 20 relativo a la BDNS que «*La cesión de datos de carácter personal que, en virtud de los párrafos precedentes, debe efectuarse a la Intervención General de la Administración del Estado no requerirá el consentimiento del afectado*».

En consecuencia, no es necesario obtener el consentimiento de los beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas para poder llevar a cabo la cesión de los datos personales a la BDNS.

¿Y si un beneficiario de una subvención lo es en su condición de persona física y en otra subvención en la de empresario individual?

El hecho de que en la BDNS se identifique si una persona física recibe una subvención o ayuda pública por su condición de ciudadano o por desarrollar una actividad económica (empresario o profesional) responde a una exigencia de la UE por razón de transparencia.

Por tanto, si una persona física recibe una subvención o ayuda pública por su condición de ciudadano y también se le concede una subvención por su condición de persona que desarrolla actividad económica el órgano que le concede la subvención por su condición de ciudadano lo tiene que tipificar en la BDNS como "Personas físicas que no desarrollan actividad económica" en el campo "Tipo de beneficiario". El órgano que le concede la subvención por su actividad económica lo tipificará como "PYME y personas físicas que desarrollan actividad económica". Si ambas subvenciones son concedidas por el mismo órgano, este tipificará al beneficiario bajo la opción de "PYME y personas físicas que desarrollan actividad económica".

En este caso, si el beneficiario estuviera tipificado como "Personas físicas que no desarrollan actividad económica", la subvención o ayuda pública recibida por su condición de empresario o profesional que tenga la condición de ayuda de Estado nunca se publicaría en la sección de Ayudas de Estado, lo que supondría un incumplimiento de la obligación de transparencia impuesta por la UE, con sus efectos negativos.

Además, esta tipificación no induce a error, porque el simple hecho de que una persona física desarrolle una actividad económica no le imposibilita a concurrir en un procedimiento de concesión de subvenciones en su condición de ciudadano.

8.2 Identificación de personas en la BDNS

En la BDNS la regla general es que los terceros se identifiquen con el número asignado por la autoridad nacional competente, número de identificación fiscal por la AEAT o el DNI o NIE por el Ministerio del Interior.

El [Real Decreto 1065/2007](#), de 27 de julio, en vigor desde el 1 de enero de 2008, que aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (en adelante RGAT), establece, en su artículo 18, que las personas físicas y jurídicas, así como los obligados tributarios a que se refiere el artículo 35.4 de la [Ley 58/2003 General Tributaria](#), tendrán un número de identificación fiscal para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria. A estos efectos, el número de identificación fiscal puede acreditarse mediante el

documento expedido para su constancia por la Administración tributaria, el documento nacional de identidad (DNI) o del documento oficial en que se asigne el número personal de identificación de extranjero (NIE).

En los casos excepcionales de personas físicas extranjeras para las que, de acuerdo a la normativa nacional vigente, no fuera obligatorio disponer de un número de identificación fiscal, la identificación se hará con el código único identificativo de la persona asignado por el país correspondiente.

En el proceso de registro del alta en la BDNS del tercero, se indicará el código del "País" que emite el documento identificativo del tercero. Este código determinará si la identificación personal se tiene que corresponder con una de las asignadas por una autoridad nacional española (País=ES), en cuyo caso el identificador será el NIF, DNI o NIE, o si el documento de identificación personal y, por tanto, su identificador, se corresponde a un código propio asignado por el país correspondiente (País≠ES).

En el registro por primera vez de un tercero con código "País=ES" la BDNS, con objeto de asegurar la calidad de la información registrada, va a validar la existencia del identificador conectándose con los sistemas de los Órganos emisores de la identificación, Dirección General de la Policía, AEAT o a ambos, según los casos, recuperando algunos datos de identificación que constan en sus sistemas.

¿Cómo se Identifican las personas físicas españolas en la BDNS?

Con carácter general, el número de identificación fiscal de las personas físicas de nacionalidad española es el número de su documento nacional de identidad (DNI) seguido por el código o carácter de verificación constituido por una letra mayúscula. Obedece al formato de nueve caracteres: ocho dígitos (teniendo en cuenta que los primeros pueden ser ceros) más una letra mayúscula de control.

Según la normativa aplicable ([RD 1553/2005, de 23 de diciembre](#), por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica.), el DNI es obligatorio para los españoles mayores de catorce años residentes en España y para los de igual edad que, residiendo en el extranjero se trasladen a España por un tiempo no inferior a seis meses.

Por lo tanto, hay dos supuestos en los que no es obligatorio para los ciudadanos españoles disponer del DNI: menores de catorce años y mayores de dicha edad residentes en el extranjero y que se trasladan a España por un tiempo inferior a seis meses.

Sin embargo, en ambos casos, según artículo 19.2 del [RGAT](#), si se realiza una operación de naturaleza o con trascendencia tributaria es preciso disponer de un NIF propio, siendo posible:

- Bien obtener el DNI de forma voluntaria,
- O bien, solicitar de la Administración tributaria la asignación de un NIF. Este NIF estará integrado por nueve caracteres: una letra inicial destinada a indicar la naturaleza de este número, "L" para los españoles (mayores o menores de edad) residentes en el extranjero y "K" para los españoles menores de 14 años que residan en España, seguido de siete caracteres alfanuméricos y un carácter de verificación.

El artículo 21.1 del [RGAT](#) señala que estos NIF asignados por la AEAT (K y L) tendrán validez en tanto su titular no obtenga el DNI. A su vez, el art 21.3 del [RGAT](#) establece que en el caso de que se detecte que una persona física dispone simultáneamente de un NIF asignado por la AEAT y de un DNI, prevalecerá este último.

Se adjunta a continuación un cuadro resumen de los tipos de identificación de las personas físicas españolas y el órgano que lo asigna:

NIF DE PERSONAS FÍSICAS ESPAÑOLAS			
NACIONALIDAD	SUPUESTOS	TIPO NIF	ORGANO COMPETENTE ASIGNACIÓN
Españoles	General	DNI	Ministerio del Interior
	Menores de 14 años residentes en España	NIF K	Administración Tributaria
	Residentes en el extranjero	NIF L	Administración Tributaria

¿Cómo se identifican en la BDNS las personas físicas de nacionalidad extranjera que residen en España?

Para las personas físicas que carecen de la nacionalidad española, el NIF es, con carácter general, el número de identidad de extranjero (NIE).

De acuerdo con el artículo 206 del [Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero](#), el NIE se asigna a los extranjeros en los siguientes casos:

- Cuando obtengan un documento que les habilite para permanecer en territorio español.
- Cuando se les incoe un expediente administrativo en virtud de la normativa sobre extranjería.
- Cuando por sus intereses económicos, profesionales o sociales, se relacionen con España.

El NIE es otorgado por la Dirección General de la Policía si bien en los dos primeros casos se otorga de oficio y en el tercer caso, supuesto en el que se encuentra la realización de operaciones con transcendencia tributaria, es el extranjero quién deberá solicitarlo.

Desde la publicación de la ORDEN INT/2058/2008 y con anterioridad por el acuerdo entre la AEAT y el Ministerio del Interior de 1997, el NIE que figura en las tarjetas acreditativas estará integrado, como ocurre con el NIF, por nueve caracteres: una letra inicial "X", siete dígitos numéricos y un carácter de verificación. Una vez agotada la serie numérica de la letra inicial "X" se seguirá por orden alfabético con la "Y" y la "Z".

Sin embargo, las personas físicas que carezcan de nacionalidad española y no dispongan de NIE bien de forma transitoria por estar obligado a tenerlo o bien de forma definitiva al no estar obligado a tenerlo, cuando vayan a realizar operaciones de naturaleza o con transcendencia tributaria deberán solicitar a la Administración tributaria la asignación de un número de identificación fiscal. En este caso el NIF vuelve a tener 9 caracteres: la letra inicial "M" (tanto si es menor como mayor de 18 años), siete caracteres alfanuméricos y un carácter alfabético de verificación. Si no lo solicitase la AEAT podrá asignárselo de oficio (artículo 20.2 del [RGAT](#)).

El artículo 21.1 del [RGAT](#) señala que estos NIF asignados por la AEAT (M) tendrá validez en tanto su titular no obtenga el NIE. A su vez el art 21.3 del RGAT establece que en el caso de que se detecte que una persona física dispone simultáneamente de un NIF asignado por la AEAT y de un NIE, prevalecerá este último.

Se adjunta a continuación un cuadro resumen de los tipos de identificación de las personas físicas extranjeras y el órgano que lo asigna:

NIF DE PERSONAS FÍSICAS EXTRANJERAS			
NACIONALIDAD	SUPUESTOS	TIPO NIF	ÓRGANO COMPETENTE ASIGNACIÓN
Extranjeros	General	NIE	Ministerio del Interior
	No dispone de NIE	NIF M	Administración Tributaria

¿Qué es la TIE? ¿Qué relación tiene con el NIE?

Hasta el año 2020 coexistían en España distintos tipos de documentación de extranjeros, por ejemplo:

- Tarjeta de residencia y trabajo
- Permiso de residencia
- Certificado de registro de ciudadanos de la Unión Europea.

En 2020 se crea la nueva Tarjeta de Identidad de Extranjero que es el documento único y exclusivo destinado a dotar de documentación a los extranjeros en situación de permanencia legal en España.

Dicha Tarjeta acredita la permanencia legal de los extranjeros en España, su identificación y que se ha concedido, de acuerdo con la normativa vigente, la autorización o reconocido el derecho para permanecer en territorio español por un tiempo superior a seis meses. Así, la TIE es una tarjeta de identidad en soporte físico.

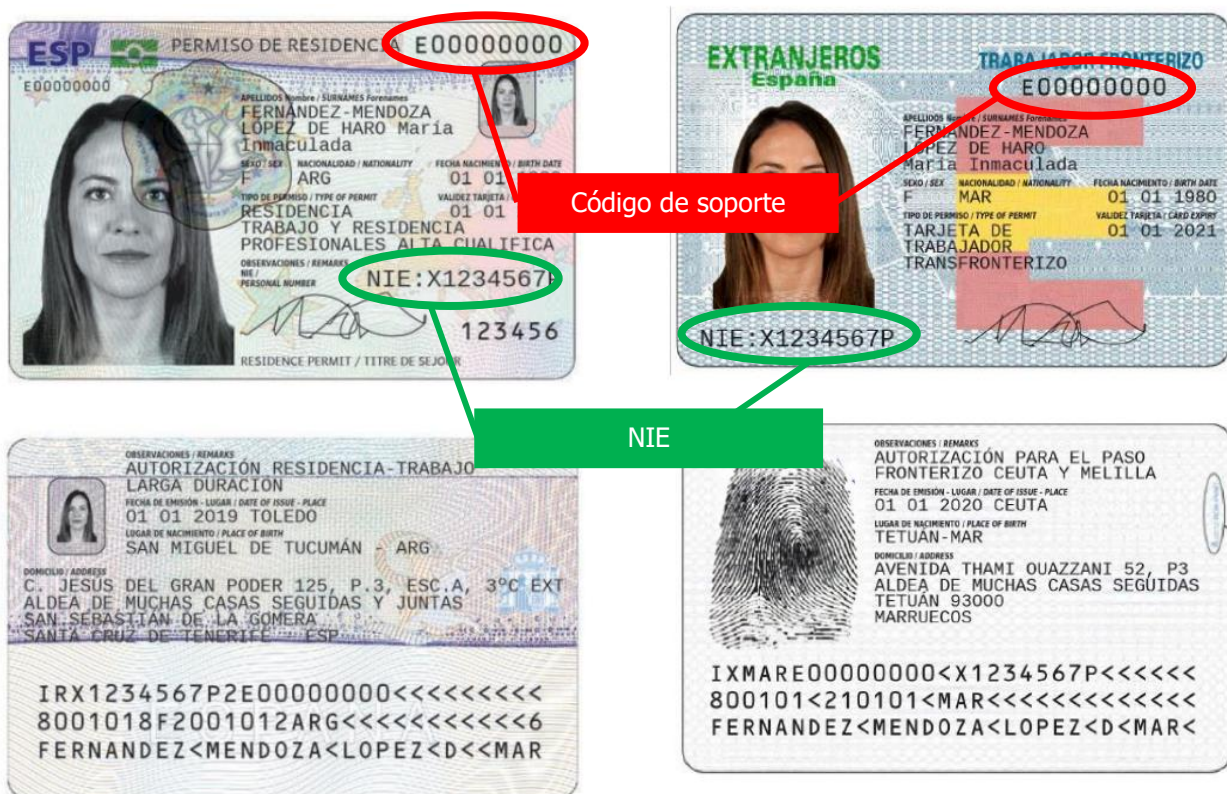
Los ciudadanos extranjeros se identifican en la BDNS por el NIE. El NIE es el número personal, único y exclusivo, que identifica al extranjero y que debe figurar en todos los documentos que se le expidan o tramiten, así como las diligencias que se estampen en su tarjeta de identidad o pasaporte.

La TIE contiene el NIE (como se ve en las siguientes imágenes), y contiene también un código de soporte, que identifica unívocamente al soporte (tarjeta). La TIE tiene una fecha de caducidad, y a su renovación se expide una nueva TIE, que tendrá otro código de soporte distinto, pero mantendrá el NIE del extranjero.

Puede suceder también que una persona disponga de más de uno de estos documentos anteriores a 2020 o posteriores; y puede suceder, por los procesos de latinización de lenguas africanas, asiáticas, cirílicas, etc, que el nombre con el que figure una persona sea distinto en los distintos documentos, aun teniendo el mismo NIE.

Según las normas de la DGP, la identificación completa de un extranjero se compone de NIE + código de soporte TIE.

Aunque cada vez más administraciones y sistemas exigen ambos códigos, no todas las administraciones disponen de información sobre ambos códigos, por lo que a día de hoy (2025) la BDNS solo exige el código NIE.



¿Cómo se identifican las personas jurídicas en la BDNS?

Las personas jurídicas se identifican en la BDNS por el número de identificación fiscal (NIF).

El NIF de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica es asignado en todos los casos por la AEAT y es invariable salvo que cambien su forma jurídica o su nacionalidad (artículo 22 del [RGAT](#)).

El desarrollo de los términos de la composición del NIF se ha realizado por la [Orden EHA/451/2008](#). Así, el NIF está compuesto por:

- Una letra, que informará sobre la forma jurídica, si se trata de una entidad española, o, en su caso, el carácter de entidad extranjera o de establecimiento permanente de una entidad no residente en España.
- Un número aleatorio de siete dígitos.
- Un carácter de control.

En el caso de los establecimientos permanentes en territorio español de entidades no residentes la normativa vigente obliga a disponer de NIF propio distinto del asignado, en su caso, a la entidad no residente, si realizan actividades claramente diferenciables y la gestión se lleva de modo separada.

En la BDNS es obligatorio que las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica queden registrados mediante su NIF, de acuerdo con la normativa de la [AEAT](#). La naturaleza jurídica será determinada por la primera letra del NIF, según el siguiente cuadro:

NIF DE PERSONAS JURÍDICAS Y ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA		ÓRGANO COMPETENTE ASIGNACIÓN
CLAVE DE FORMA JURÍDICA O CLASE DE ENTIDAD		
A	Sociedades anónimas	Administración Tributaria en todos los casos
B	Sociedades de responsabilidad limitada	
C	Sociedades colectivas	
D	Sociedades comanditarias	
E	Comunidades de bienes, herencias yacentes y demás entidades carentes de personalidad jurídica no incluidas expresamente en otras claves	
F	Sociedades cooperativas	
G	Asociaciones	
H	Comunidades propietarios en régimen de propiedad horizontal	
J	Sociedades civiles	
N	Entidades extranjeras	
P	Corporaciones Locales	
Q	Organismos públicos	
R	Congregaciones e Instituciones religiosas	
S	Órganos de la Administración del Estado y Comunidades. Autónomas	
U	Uniones Temporales de Empresas	
V	Otros tipos no definidos en el resto de claves	
W	Establecimientos permanentes de entidades no residentes en España	

¿Cómo se identifican los menores de 14 años que carecen de DNI en la BDNS?

Con la normativa anterior, artículos 3 y 7 del Real Decreto 338/1990, derogado por el [Real Decreto 1065/2007](#) (RGAT) los menores sólo estaban obligados a disponer de un NIF propio si eran empresarios o profesionales. Si no lo eran y no tenían DNI podían bien solicitar el DNI al Ministerio del Interior, bien solicitar un NIF a la Administración tributaria, o bien utilizar el NIF de su representante legal.

La opción de utilizar el NIF del representante legal generaba algunos inconvenientes en la práctica para la AEAT puesto que asociado a un mismo NIF podía haber información correspondiente a varias personas: el titular y sus representados.

La entrada en vigor del nuevo [RGAT](#) obliga a los menores de edad que realicen alguna operación con trascendencia tributaria a disponer de un NIF propio si no disponen del documento nacional de identidad (art 19.3 del [RGAT](#)). Por tanto, en la BDNS se identificarán a estos beneficiarios menores de 14 años con su propio NIF.

Debido al proceso de validación al que se someten las identificaciones asignadas por la AEAT, cuando se registra por primera vez un beneficiario en la BDNS, para las identificaciones de menores de 14 años que disponen de NIF que empieza por K, es preciso indicar los dos apellidos en el campo "Primer apellido", si no el servicio de la AEAT devuelve el mensaje "Titular no identificado".

Para aquellos casos en los que el beneficiario de la subvención o ayuda pública sea menor de 14 y no disponga de DNI ni de NIF propio por no estar obligado a ello, en la BDNS registrará como beneficiario de la subvención o ayuda a su tutor o representante legal.

¿Cómo se identifican los beneficiarios "apátridas"?

Los apátridas que viven en España disponen de un documento identificativo expedido por las autoridades nacionales; la cédula de inscripción. Este documento es el que permitirá a la BDNS su identificación. El país que hay que registrar es "España", al ser el país que le ha facilitado el documento identificativo.

El procedimiento para la obtención de la documentación identificativa por parte de estas personas, mediante la cédula de inscripción, y su inscripción en una sección especial del Registro Central de Extranjeros, está regulado el artículo 211 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que desarrolla el artículo 34 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, relativo a residencia de apátridas, indocumentados y refugiados.

Se puede consultar más información en:

- http://www.policia.es/documentacion/apatridas/ap_normativa.html
- https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/extranjeria/pr_doc_iden_refu_apat.html

¿Cómo se identifican en la BDNS los centros educativos públicos que no disponen de NIF?

Lo esperado es que dispongan de NIF propio. De hecho, en la mayoría de las CCAA los centros educativos públicos disponen de él, pero a veces se produce esa excepción. Si no disponen de NIF es imposible registrarlos como beneficiarios propios, y deben usar el NIF de la Consejería/Departamento etc., y será este último el que aparezca como beneficiario en el [SNPSAP](#).

Recomendamos que, en estos casos, se haga mención del nombre del colegio al que se da la subvención en el campo "Discriminador de la subvención".

¿Y si la persona física española dispone de NIF pero no supera la validación realizada con los sistemas de la D.G. de la Policía?

Recientemente se ha desarrollado en la BDNS una modificación para poder admitir los NIF que la DGP rechaza pero que sí admite la AEAT. Para ello, cuando la DGP lo rechace, la BDNS preguntará también a la AEAT, y si lo da por bueno se admite. La modificación se ha realizado tanto en los servicios web, en la utilidad de carga masiva así como en el formulario de alta de datos personales.

En el supuesto muy excepcional de que el tercero sólo disponga de un DNI que por la antigüedad de su vigencia no incluya letra (no renovados desde el año 1986), se optará, a criterio del Órgano obligado, por registrar a esas personas como si el documento identificativo hubiera sido expedido por otro país que no sea "ES" o por no registrar la información.

A la hora de intentar registrar en BDNS a un beneficiario menor de edad con obligaciones tributarias, y habiendo solicitado NIF en la AEAT, la BDNS señala que ese NIF es incorrecto. ¿No se pueden comunicar NIF dados por la AEAT a menores de edad?

Para validar el NIF (comienza con K, no es DNI) es preciso indicar los dos apellidos en el campo "Primer apellido". Si se identifica solo el primer apellido, el servicio de la AEAT devuelve el mensaje "Titular no identificado".

Por tanto, para registrar a un menor cuyo NIF empieza por K hay que cumplimentar en el campo "Primer apellido" el primer y segundo apellido.

Este es un caso excepcional y no representa ni el 0,01% de los registros de beneficiarios en la BDNS.

8.3 Concepto de "Beneficiario" [Actualizada 2025]

En una convocatoria donde las ayudas no se pagan directamente a los solicitantes, sino que es a través del pago de facturas de alimentos, alquiler, etc. (son ayudas sociales), ¿quiénes son los beneficiarios: los proveedores que reciben el pago o el interesado que la solicita aun recibiendo esta de manera indirecta?

El artículo 11 de la [LGS](#) define al beneficiario de una subvención como «...la persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión».

Así pues, son beneficiarios las personas que hayan solicitado la ayuda, cumplan las condiciones y sean identificados como tales en la resolución de concesión de la subvención. En consecuencia, el beneficiario no es el proveedor del bien o servicio, sino el que realmente recibe la ayuda.

En cuanto a la fecha de pago, lo correcto es considerar la fecha en que el órgano concedente abona las facturas. Hay que tener en cuenta que la fecha de pago de una subvención no se identifica con la fecha de realización de las actividades, ni con la fecha de devengo, ni siquiera en las subvenciones puras, sino que la fecha de pago es la fecha real en que la Administración abona el importe de la subvención.

¿Quién es el verdadero beneficiario de una subvención?

En algunas líneas de subvención se pueden plantear dudas a la hora de identificar quién es el beneficiario, debido a la presencia de otros “beneficiados” por la actividad llevada a cabo por el beneficiario de la subvención.

Un ejemplo puede ser subvenciones que se conceden a un ayuntamiento para la contratación de desempleados, subvenciones que se conceden a organizaciones para que impartan cursos de formación, etc.

La persona que ostenta la **condición legal de beneficiario** de la subvención será (artículo 11.1 de la Ley 38/2003, [LGS](#)) «quien haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión».

En cualquier caso, será la normativa de la subvención quien identifique la persona que ostenta dicha condición, ya que a su favor se resolverá la concesión, y será quien deba aplicar los fondos recibidos a la finalidad prevista o a quien se reclamará su reintegro en caso contrario.

Será el órgano gestor de la subvención el que decidirá quién ostenta tal condición, bien directamente a la vista de la normativa aplicable o mediante asistencia de sus órganos asesores.

El Ayuntamiento ha aprobado una línea de subvenciones para la dinamización del comercio local del municipio mediante bonos de descuento directo para el cliente en comercios adheridos al programa. El Ayuntamiento paga las subvenciones al comercio previa justificación de uso del bono por los clientes en su establecimiento. ¿Quiénes son los beneficiarios de estas ayudas: los comercios o los clientes que hacen uso del bono?

El artículo 11 de la [Ley General de Subvenciones](#) define al beneficiario de subvenciones como aquella persona que realiza la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentra en la situación que legitima su concesión.

En el procedimiento de concesión consultado la actividad subvencionada es la compra en determinados comercios del municipio adheridos al programa de dinamización del comercio local. El objetivo de estas subvenciones es dinamizar el comercio local y es innegable que la concesión de estas ayudas tiene un efecto directo en los comercios locales que se han adherido al programa. Sin embargo, la [Ley General de Subvenciones](#) no regula las ventajas indirectas. Por tanto, de conformidad con el artículo 11 de la [LGS](#), el beneficiario de la subvención es el cliente que compra en el comercio, tal y como establecen las bases reguladoras de la subvención.

Ahora bien, el ordenamiento jurídico de ayudas estatales sí regula las ventajas indirectas.

La [Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea \(2016/C 262/01\)](#) orienta sobre la ventaja indirecta en su apartado 4.3. Evidentemente, existen casos en que una o varias empresas pueden resultar beneficiadas por la acción pública sin ser necesariamente los beneficiarios directos de la ayuda. Esta situación se puede producir cuando el beneficiario directo de la ayuda es una persona física.

El Ayuntamiento subvenciona las compras que se realizan en el comercio local. Los clientes que realizan estas compras no ejercen actividades económicas, ni operan en el mercado interior, por lo que la subvención que

reciben, en este primer nivel, no puede considerarse ayuda de Estado. Pero si la subvención se otorga para la adquisición de bienes en determinados comercios, excluyendo a otros, indirectamente se puede estar confiriendo una ventaja económica a una o varias empresas concretas.

Como especifica la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal en su párrafo 115, «...*existe ventaja indirecta si la medida está ideada de forma que canalice sus efectos secundarios hacia empresas o grupos de empresas identificables*», por ejemplo, si la ayuda recibida directamente por quienes no tienen la consideración de empresas está condicionada a la adquisición de bienes o servicios producidos o vendidos únicamente por determinadas empresas.

Si es así, estaríamos ante un procedimiento de concesión de subvenciones dónde los beneficiarios finales son los clientes y ante una ayuda de Estado dónde los beneficiarios indirectos son los comercios locales adheridos al programa.

En el Programa escolar de frutas, hortalizas y leche del año escolar ¿quién es el beneficiario? ¿el centro escolar que reparte los alimentos o los alumnos que los reciben?

La Unión Europea financia el Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche en las Escuelas según lo estipulado en el [Reglamento \(UE\) 2016/791](#), el [Reglamento \(UE\) 2016/795](#), el [Reglamento Delegado \(UE\) 2017/40](#) y el [Reglamento de Ejecución \(UE\) 2017/39](#).

De acuerdo con el derecho de la Unión Europea, los solicitantes de la ayuda son las autoridades competentes que, conforme a la disposición adicional quinta de la [Ley General de Subvenciones](#), realizan a título gratuito el suministro de los productos, las medidas educativas y/o servicios relativos a los programas en los centros escolares, previa contratación pública o por encargo a medios propios personificados.

En el marco del derecho nacional, hay que acudir al [Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea en relación con el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche](#) para determinar quién es beneficiario de estas ayudas.

El [Real Decreto 511/2017](#) contempla dos posibles modalidades para gestionar este programa escolar:

- Procedimientos de concesión de subvenciones. La comunidad autónoma lleva a cabo un procedimiento de concesión de subvención para financiar el suministro y la distribución de productos, así como la realización de las medidas de acompañamiento. Los **centros escolares son los responsables de realizar estas actividades**.

En esta modalidad, los centros escolares tienen la consideración de beneficiarios de la ayuda. (5 del artículo 9.3 del [Real Decreto 511/2017](#)). Por tanto, en la BDNS se tiene que registrar la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas, así como las subvenciones concedidas a los centros escolares.

- Procedimientos de contratación pública. Esta modalidad se emplea cuando la distribución de los productos, las medidas educativas de acompañamiento y/o los costes de publicidad, de seguimiento y de evaluación del programa escolar se lleva a cabo mediante procedimientos de contratación pública, o mediante encargo a medios propios personalizados. Así, **las autoridades competentes llevan a cabo la actividad directamente o a través del proveedor o proveedores** que hayan resultado adjudicatarios del contrato o del encargo.

En esta modalidad, los centros escolares que se adhieran al programa recibirán las frutas, hortalizas y leche y están obligados a cumplir con una serie de compromisos:

- Que los productos suministrados no se van a ofrecer en el marco de las comidas escolares,
- Que los productos suministrados y/o las medidas de acompañamiento van a dirigirse al alumnado seleccionado
- Que cumplen las obligaciones de publicidad exigidas por la autoridad competente.
- Otros compromisos que la Comunidad Autónoma, como autoridad competente, exija.

La Comunidad Autónoma aprueba una convocatoria dirigida a los centros escolares interesados en participar en el Programa. Se trata de una convocatoria para adherirse al Programa, pero no es una convocatoria propia de un procedimiento de concesión de subvenciones. Los destinatarios de los productos que adquiere la Comunidad Autónoma son los alumnos del centro escolar, no el centro. El centro escolar es una mera entidad colaboradora que participa en la distribución de la ayuda entre los destinatarios finales: los alumnos.

Los beneficiarios de la ayuda en especie (frutas, hortalizas y leche adquiridas por la autoridad competente para entregársela al destinatario último) son los alumnos que asisten regularmente a un centro escolar administrado o reconocido en las categorías previstas al efecto. Dada la dificultad de identificar a cada alumno que recibe el producto subvencionado y cuantificar el importe de la ayuda percibida, y ante el escaso importe de las ayudas individuales, es razonable que esta información no se registre en la BDNS.

El no registro de los alumnos beneficiarios del reparto de fruta, hortaliza y leche en los centros escolares se puede justificar en aplicación del artículo 4.a) del Real Decreto 130/2009:

«No obstante, no será obligatorio suministrar información de las resoluciones de concesión, y de las correspondientes fases posteriores, cuando el importe anual otorgado por el mismo órgano o entidad a un mismo beneficiario no supere la cantidad total de 100 euros».

Mi municipio asigna una aportación económica a los grupos políticos, abonando la ayuda a los concejales electos. A efectos de la BDNS ¿quién es el beneficiario de estas ayudas: el concejal o el grupo político?

Las aportaciones económicas a los grupos políticos de las Administraciones Locales están reguladas en el artículo 73.3 [Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local](#), que prevé que el Pleno asigne a los grupos políticos una dotación económica para su funcionamiento compuesta de un tanto fijo, común para todos los grupos, y una cantidad variable en función del número de miembros que lo forman.

Se trata de asignaciones finalistas, que deben destinarse a financiar el funcionamiento del grupo, con la prohibición legal de ser destinadas a retribuir personal de cualquier tipo al servicio de la corporación, o adquirir bienes de carácter patrimonial.

Con independencia de que el pago material de esta aportación se realice a favor del concejal electo, la asignación se realiza al grupo político por lo que en la BDNS debe figurar como beneficiario el grupo político y no el concejal.

8.4 Sucesión de beneficiarios [Actualizada 2025]

La relación subvencional es una relación jurídica que se establece entre el órgano concedente y el beneficiario de una subvención, que se rige por los preceptos generales establecidos en la LGS, por su Reglamento desarrollo y por las normas especiales reguladoras de cada línea de subvención en particular.

En la relación jurídica que se establece entre el órgano concedente y el beneficiario de una subvención, este último es sujeto de derechos y obligaciones que sólo le corresponden a él y que no son susceptibles de delegación o transferencia. Y ello se debe, como han señalado reiteradas veces tanto la doctrina como la jurisprudencia, a que la subvención no responde a una "causa donandi", sino a la finalidad de intervenir en la actuación del beneficiario a través de unos condicionamientos o de un "modus" libremente aceptado por aquel. Por tanto, el ordenamiento jurídico permite la cesión del derecho de cobro, pero no la cesión de la condición de beneficiario.

Es el órgano concedente de la subvención el que debe determinar si permite la cesión de la condición de beneficiario.

Se tiene una subvención plurianual. La primera anualidad se ha pagado a su beneficiario según la resolución de concesión. Ese beneficiario ha sido absorbido por otra empresa, que le ha sucedido en todos sus derechos y obligaciones (incluidos los derivados de esa concesión de subvención). El beneficiario original ya no existe.

El supuesto de "sucesión de beneficiarios", que puede darse en casos como el descrito y en otros similares, tendrá un tratamiento específico en BDNS en su momento, pero aún no ha sido finalizado su desarrollo. De momento la única manera de tratar estos casos, de cara a maximizar la transparencia sería la siguiente estrategia:

1. En la concesión registrada al beneficiario inicial, de la que se ha registrado un pago, se deben reajustar los importes de los campos **Coste de Actividad**, **Subvención** y **Ayuda equivalente** para hacerlos coincidir con el importe **total** pagado al beneficiario inicial. Así, figurará registrada la concesión al beneficiario inicial, lo que permitirá mantener el registro de los pagos que se le han efectuado.
2. Respecto al beneficiario sucesor, se debe registrar una nueva concesión a su favor, siendo aconsejable que figure como fecha de resolución de concesión la fecha del acto administrativo por el que este beneficiario sucede al beneficiario inicial en los derechos y obligaciones derivados de la subvención. En el campo **Discriminador** se deberá reflejar el discriminador de la concesión del beneficiario inicial e indicación de la sucesión de beneficiarios. En esta concesión se deberán registrar los importes de las anualidades cuyos pagos se va a efectuar a favor del sucesor.

Esta solución permite registrar los pagos realizados a cada uno de los beneficiarios así como relacionar, a través del discriminador, la primera concesión con la segunda concesión reflejando que la relación está motivada por la sucesión de beneficiarios, logrando los efectos de transparencia previstos en la Ley.

En una medida de ayuda de "PERTE" son beneficiarias las empresas integradas en una agrupación. A través de la subrogación, una empresa inicialmente beneficiaria es sustituida por otra empresa ¿Cómo se debe registrar esta casuística en la BDNS?

La Base de Datos Nacional de Subvenciones no es una base de datos estática, es una base de datos dinámica que muestra la información relativa a las subvenciones concedidas actualizada al momento de la consulta.

Como los datos que contiene la BDNS son susceptibles de variar en el tiempo, se permite la edición, actualización y, en su caso, borrado de aquellos datos que han sufrido variaciones con el fin de reflejar la realidad de la gestión de la subvenciones y ayudas públicas registradas.

Los datos relativos al beneficiario o beneficiarios de la ayuda pública son susceptibles de variar a lo largo de la ejecución del proyecto subvencionado como consecuencia del cambio de titularidad de la ayuda. Cuando el órgano competente aprueba la solicitud de subrogación de la posición del beneficiario de una subvención, asumiendo los derechos y obligaciones que emanan de la concesión, es preciso actualizar la información en la BDNS.

Si la concesión al beneficiario está registrada en la BDNS y no se han realizado pagos de esta subvención, la manera de proceder será la siguiente:

- En la concesión al beneficiario inicial se marcará la casilla de verificación **¿Renuncia voluntaria a la concesión?** Esta marca informará que el beneficiario inicial ha renunciado a los derechos y obligaciones que emanan de la subvención concedida.
- Se registrará en la BDNS una nueva concesión de la subvención a favor del beneficiario subrogado. Los pagos posteriores y, en su caso, devoluciones o reintegros se asociarán a esta concesión. Es recomendable que en el campo **Discriminador** se refleje el discriminador de la concesión del beneficiario inicial e indicación de la subrogación de la subvención para establecer una trazabilidad.

Si la concesión al beneficiario está registrada en la BDNS y se han realizado pagos parciales de esta subvención, la manera de proceder será la siguiente:

- En la concesión al beneficiario inicial se ajustarán los importes de los campos **Coste de Actividad**, **Subvención/Importe nominal** y **Ayuda equivalente** para hacerlos coincidir con el importe total pagado al beneficiario inicial. Así, figurará registrada la concesión al beneficiario inicial, lo que permitirá mantener el registro de los pagos que se le han efectuado.
- Respecto al beneficiario subrogado, se debe registrar una nueva concesión a su favor, siendo aconsejable que figure como fecha de resolución de concesión la fecha del acto administrativo por el que se autoriza la subrogación. Es recomendable que en el campo **Discriminador** se refleje el discriminador de la concesión del beneficiario inicial e indicación de la subrogación de la subvención. En esta concesión se deberán registrar los importes de las anualidades cuyos pagos se van a efectuar a favor del sucesor.

Nuestro Instituto ha concedido una subvención a Fundación X. Con posterioridad a la concesión de la subvención, la Fundación X ha firmado un convenio con la Fundación Y por el que le cede las actividades y proyectos que estaba desarrollando, entre ellas la actividad subvencionada ¿Cómo se debe registrar esta circunstancia en la BDNS?

La cesión de la actividad subvencionada altera significativamente las condiciones tenidas en cuenta por el Instituto para la concesión de la subvención.

Ante esta situación, el Instituto puede anular la concesión de la subvención a la Fundación X y, en el caso de haber realizado pagos anticipados, iniciar un procedimiento de reintegro por incurrir la Fundación X en incumplimiento de la actividad subvencionada. Pero también puede admitir la cesión de la condición de beneficiario. En este caso se modificará la resolución de concesión inicialmente concedida (art. 19.4 de la [LGS](#)) y se dictará una nueva concesión de subvención a favor de la Fundación Y.

Si el Instituto admite la cesión de la condición de beneficiario, deberá modificar la concesión registrada a favor de la Fundación X en los términos que establezca la modificación de la concesión y registrar la nueva concesión a favor de la Fundación Y.

8.5 Fallecimiento del beneficiario [Nueva 2025]

A lo largo del procedimiento de concesión de la subvención puede ocurrir que el solicitante de la subvención o, en su caso, el beneficiario de la subvención fallezca. Cómo actuar en estos casos depende de si la subvención se concede para realizar un proyecto o actividad, por adoptar un comportamiento singular o por la concurrencia de una situación. Además, el procedimiento a seguir estará condicionado también por el momento procedimental en el que se produzca el fallecimiento y lo que establezca al respecto las bases reguladoras de la subvención.

En el supuesto de que la subvención se conceda para financiar la realización de una actividad, atendiendo al momento en el que se produce el fallecimiento se pueden distinguir los siguientes casos:

- El fallecimiento se produce con posterioridad a la presentación de la solicitud por parte del fallecido, pero con anterioridad a que recaiga la resolución definitiva de concesión de la subvención a favor del fallecido.

En este caso, los herederos podrán subrogarse en la subvención solicitada.

Para poder obtener esta subrogación en la solicitud de la subvención, los herederos deberán acreditar su condición de interesados y cumplir los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario que establecen las bases reguladoras y aportar la misma documentación requerida.

Este procedimiento puede iniciarse a solicitud de los derecho habientes o de oficio por el órgano concedente en caso de ser conocedor del fallecimiento del solicitante. En cualquier caso, se debe iniciar antes de que recaiga la resolución definitiva.

A la vista de la solicitud de subrogación presentada, el órgano competente debe decidir si concede o no la subvención a los herederos. En caso de conceder la subvención, se registrará la información en la BDNS. En este caso no hay duda de que el beneficiario de la subvención es el/los heredero/s porque así consta en la resolución de concesión.

- El fallecimiento produce una vez dictada la resolución de concesión a favor del beneficiario, pero la actividad subvencionada no está realizada.

En este caso, los herederos pueden estar interesados en subrogarse en la concesión de la subvención. Para ello deberán solicitar la subrogación y reunir los requisitos exigidos para adquirir la condición de beneficiario de la subvención. Si el órgano convocante admite la subrogación, dictará la correspondiente resolución de concesión declarando a los herederos titulares de los derechos y obligaciones derivados de la concesión de la subvención.

En este caso, se deberá eliminar de la BDNS la concesión de la subvención registrada a favor del beneficiario fallecido y registrar la concesión de la subvención a favor de los herederos.

En el caso de que los herederos no estén interesados en el procedimiento podrán renunciar a la subvención. En la BDNS se registrará la renuncia total de la subvención.

Si la subvención concedida al fallecido ya fue pagada total o parcialmente (subvención prepagable), al no haberse realizado la actividad subvencionada o, en su caso, haberse realizado parcialmente, procederá el inicio de un procedimiento de reintegro. En ese caso se mantendrá la concesión y el pago de la subvención al fallecido y se registrará en la BDNS la resolución de reintegro asociada a la concesión del beneficiario fallecido.

- El fallecimiento se produce una vez realizada la actividad subvencionada.

En este caso, el beneficiario fallecido ha cumplido con sus obligaciones y, a lo sumo, solo falta por presentar la cuenta justificativa. Por tanto, se mantendrá en la BDNS el registro de la concesión del beneficiario fallecido y, en su caso, el registro de los pagos realizados.

Si la cuenta justificativa es correcta y la subvención no ha sido pagada en su totalidad se procederá al pago de la subvención. Si los herederos solicitan el cobro de la subvención, el órgano concedente deberá solicitar, entre otra, la siguiente documentación acreditativa de su condición de herederos:

- Certificado de defunción de la persona beneficiaria de la subvención.
- Certificado del Registro de Actos de Última Voluntad de la persona fallecida y copia autorizada del último testamento.
- Si el beneficiario falleció sin otorgar heredero, la declaración de herederos ab intestato.

Para facilitar el pago de la subvención en el caso de que haya más de un heredero lo más sencillo es solicitar una declaración firmada por todos ellos, en la cual se indicará el nombre y apellidos, así como el D.N.I. de la persona designada para el cobro de la ayuda.

También se puede solicitar un certificado de la titularidad de la cuenta bancaria en la que se ingresará la subvención o el documento que generalmente solicite el órgano concedente.

En la BDNS se registrará el pago de la subvención asociada a la concesión del beneficiario fallecido. El pago de la subvención liquida el derecho de cobro del beneficiario, aunque el pago material se realice a favor de los herederos.

Si revisada la cuenta justificativa procede el reintegro, se iniciará el procedimiento de reintegro y la deuda se derivará a los herederos. En la BDNS se registrará el reintegro asociado a la concesión del beneficiario fallecido.

8.6 Registro de beneficiarios extranjeros con un único apellido que adquieren la nacionalidad española

¿Cómo se registran estos españoles de un único apellido en la BDNS?

El ordenamiento jurídico nacional establece que los españoles se identifican mediante el nombre y los apellidos que le correspondan según su filiación (primer apellido y segundo apellido). Por eso, en la BDNS, al registrar la identidad de una persona con nacionalidad española es obligatorio la cumplimentación tanto del campo "Primer apellido" como del campo "Segundo apellido".

Ahora bien, determinados extranjeros que adquieren la nacionalidad española no disponen de un segundo apellido. Son casos excepcionales, porque la Dirección General de los Registros y del Notariado en su Instrucción de 23 de mayo de 2007, sobre apellidos de los extranjeros nacionalizados españoles y su consignación en el Registro Civil español, fijó los siguientes criterios y directrices sobre la determinación de los apellidos de extranjeros que adquieren la nacionalidad española, criterios a los que debe ajustarse la práctica registral:

"1.º Para el extranjero con filiación determinada que adquiere la nacionalidad española han de consignarse, en principio, en su inscripción de nacimiento en el Registro Civil español los apellidos fijados por tal filiación, según las leyes españolas, que se sobreponen a los usados de hecho (cfr. art. 213, regla 1.ª, R.R.C.). Por esto ha de reflejarse en la inscripción de nacimiento dichos apellidos, primero del padre y primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera (cfr. art. 194 R.R.C.), según resulten de la certificación extranjera de nacimiento acompañada. En caso de que la filiación no determine otros apellidos, o cuando resulte imposible acreditar la identidad de los progenitores del interesado, se mantendrán los apellidos que viniere usando. En ambos casos, si el interesado sólo ostentaba o usaba un apellido, éste se duplicará a fin de cumplir la exigencia legal de duplicidad de apellidos (cfr. art. 55-V L.R.C.)."

No obstante, hay una excepción a este régimen, que tiene su origen en la jurisprudencia europea (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 octubre 2003) y que impide que se aplique sistemáticamente el artículo 9.9 del [Código Civil](#), que impone al doble nacional hispano-comunitario los apellidos correspondientes según la Ley española. En virtud a dicha sentencia a los dobles nacionales comunitarios se da «libertad» para elegir la Ley estatal que desean que rija en sus nombres y apellidos, incluso cuando dicha elección tenga como resultado que el interesado pase a ostentar un único apellido.

La BDNS mantiene el control de los dos apellidos de los nacionales. Para registrar en la BDNS a estos españoles que tienen un único apellido (binacionales españoles-comunitarios que han optado por un único apellido), se deberá duplicar en el campo "Segundo apellido" el primer apellido del beneficiario de la ayuda o subvención.

8.7 Cambio de nombre o apellidos de una persona física española que ya tiene registradas concesiones

¿Cómo se registra en la BDNS esa circunstancia?

El nombre y apellidos se configura como un elemento de identidad del nacido derivado del derecho de la personalidad y como tal se incorpora a la inscripción de nacimiento. Pero el ordenamiento jurídico español contempla la posibilidad de cambio de nombre (artículo 52 de la [Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil](#) y la [Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas](#)).

El cambio de nombre obliga a quien lo hubiere obtenido a solicitar la emisión de un nuevo documento nacional de identidad ajustado a la inscripción registral rectificada. Sin embargo, **conserva el mismo número del documento nacional de identidad**.

Para poder mantener la trazabilidad de las concesiones de subvenciones ante cambios de nombre y/o apellidos de los beneficiarios, la BDNS identifica a las personas físicas con nacionalidad española a través del DNI. Este aspecto es muy importante, pues el DNI tiene el valor suficiente para acreditar, por sí solo, la identidad de las personas ([Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana](#)).

Así, aunque el Registro Civil modifique el nombre y/o apellidos del beneficiario, su número de DNI se mantiene. En estos casos, el número de DNI actúa como nexo de unión entre las subvenciones concedidas al beneficiario, que anteriormente se identificaba con un nombre, con las subvenciones concedidas tras el cambio de nombre.

Por otra parte, como la información relativa a las concesiones de subvenciones se publica en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (www.infosubvenciones.es), es recomendable mostrar la identidad actual del beneficiario: Nombres y apellidos actuales y número de DNI.

Por ello, para reflejar la identidad actual del beneficiario es preciso modificar en la BDNS su nombre y/o apellidos, sustituyéndolo por el actual, a pesar de que ello suponga que en el momento que le concedieron subvenciones tuviese un nombre y/o apellidos distintos.

8.8. Publicidad de datos personales en ayudas agrícolas [Actualizada 2025]

El art. 98 del Reglamento (UE) 2021/2116 establece que para los fondos FEAGA y FEADER los Estados miembros no publicarán el nombre de los beneficiarios cuando la cuantía de la ayuda recibida en un año por parte del beneficiario sea igual o inferior a 1.250 euros. ¿Tiene en cuenta esta limitación la BDNS para no publicar los nombres de estos beneficiarios?

En ocasiones, la normativa europea establece unos umbrales mínimos de importe para la publicidad. El artículo 98 del [Reglamento \(UE\) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento \(UE\) 1306/2013](#) establece que los Estados miembros no publicarán la información relativa a la concesión de la ayuda cuando la cuantía recibida en un año por el beneficiario sea igual o inferior a 1 250 EUR.

En el caso planteado, el FEAGA publica la información tal y como se señala en la normativa europea sobre la PAC, que exige contenidos especiales por transparencia de su propia política.

Pero la BDNS es una base de información general, para todas las ayudas españolas, con sus propios criterios y umbrales de publicidad. En concreto, el umbral mínimo de registro de información en la BDNS es de 100 euros, que opera de forma optativa para la administración concedente.

En cuanto a la anonimización del beneficiario (requisito exigido en el citado apartado 57.3 del citado Reglamento), la solución en la BDNS es la promovida por la AEPD (ocultación parcial del DNI del beneficiario). A título de curiosidad, esta solución fue presentada por España ante la UE y acogida como ejemplo a seguir por los demás Estados miembros.

Entonces en este caso, ¿el FEAGA no publica, pero BDNS sí?

Las reglas que rigen la publicación en el FEAGA no son las mismas que las que rigen en la BDNS y por eso el mismo beneficiario puede aparecer sin nombre en el FEAGA y con nombre en la BDNS.

La UE está en un proceso de homogeneización de criterios para la publicación de ayudas agrícolas y de ayudas de otros sectores.

En el caso de la BDNS no tendría sentido ocultar el nombre de un beneficiario en una ayuda y mostrarlo para las demás ayudas que igualmente perciba. Además, nuestra normativa exige la publicación "del beneficiario" para conocimiento general, y precisamente por su orientación al público en general, la identificación del beneficiario se facilita con el nombre y los apellidos, protegiendo el resto de los datos personales (el DNI).

Y ¿por qué la publicación de las ayudas de minimis del sector agrario no tiene límites en función del importe concedido?

Porque prevalece el interés general a conocer cómo se están gestionando los fondos públicos frente al interés particular del beneficiario.

Así se recoge en el considerando 9 del [Reglamento \(UE\) 2024/3118 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2024, por el que se modifica el Reglamento \(UE\) 1408/2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola](#):

«Las normas en materia de transparencia tienen por objeto asegurar un mejor cumplimiento, una mayor rendición de cuentas, una revisión por pares y, en última instancia, un gasto público más eficaz. La publicación en un registro central del nombre del beneficiario de la ayuda sirve al interés legítimo de la transparencia al facilitar información al público sobre el uso al que se destinan los fondos de los Estados miembros. No supone una interferencia indebida en el derecho de los beneficiarios a la protección de sus datos personales, siempre que en la publicación de datos personales en el registro central se cumplan las normas de la Unión en materia de protección de datos ».

8.9 NIF revocado por la AEAT

Tengo un NIF perfectamente legal pero BDNS no me deja registrar concesiones en él. ¿Por qué?

Esta situación puede corresponder a "empresas zombie". El [Real Decreto 249/2023, de 4 de abril, por el que se modifican el Reglamento General de Desarrollo de la Ley General Tributaria](#) regula el régimen de la revocación del número de identificación fiscal (NIF) que no se limita las actuaciones de comprobación censal, pudiendo efectuarse en otras actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos. El citado Real Decreto reconoce una nueva causa de revocación de dicho número: el incumplimiento durante cuatro ejercicios consecutivos de la obligación de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil que solo se podría rehabilitar si se constata su subsanación.

Si se revoca el NIF, la sociedad afectada no puede inscribir ningún bien ni ningún acuerdo en los Registros de la Propiedad o Mercantiles, ni interactuar con entidades de crédito, ni obtener certificados y causa baja en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI), exportadores y otros operadores económicos. Este cierre registral equivale a una **pérdida transitoria de la capacidad civil**, que únicamente puede solucionarse con el expediente que tramita la AEAT para rehabilitar el NIF.

Si el NIF está revocado, la empresa u organización NO PUEDE recibir subvenciones ni ayudas públicas, hasta que este no se rehabilite.

8.10 Cumplimiento de los plazos de pago en las operaciones comerciales del beneficiario [Actualizada 2025]

El apartado 3 bis al artículo 13 de la [Ley General de Subvenciones](#) añade un nuevo requisito para las subvenciones de importe superior a 30.000 euros: el beneficiario debe cumplir los plazos de pago en las operaciones comerciales previstos en la [Ley 3/2004, de 29 de diciembre](#), por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El cumplimiento de este requisito por parte de los potenciales beneficiarios o entidades colaboradoras debe ser acreditado con carácter previo a la concesión de la subvención o ayuda.

Así, la [Ley General de Subvenciones](#) condiciona la concesión de la ayuda al cumplimiento del plazo de pago de las operaciones comerciales, pero el pago de la subvención no está condicionado a este cumplimiento. La morosidad sobrevenida del beneficiario de la subvención no obsta para que, tras comprobar la justificación de la subvención, el órgano concedente proceda al pago.

Ahora bien, la [LGS](#) permite controlar situaciones de morosidad sobrevenida del beneficiario al estipular en el apartado 2 párrafo segundo de su artículo 31, que para que los gastos en los que haya incurrido una empresa

beneficiaria de ayudas sean considerados gastos subvencionables, será preceptivo que hayan sido abonados en los plazos establecidos por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

A los efectos del art. 13.3.bis de la LGS ¿una sociedad mercantil de capital mayoritaria o totalmente público puede considerarse entidad de derecho público pese a regirse por el ordenamiento privado? Y una sociedad mercantil con capital íntegramente público que, según sus estatutos, se dedica a la prestación y gestión del servicio público de fomento y promoción de la comunicación local ¿estaría excluida de la aplicación del artículo 13.3.bis?

La [Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas](#) (Ley crea y crece), que entró en vigor el 19 de octubre de 2022, modificó la [Ley General de Subvenciones](#) incorporando el precepto 13.3.bis que estableció un requisito adicional a cumplir por los solicitante de subvenciones, a saber:

«3 bis. Para subvenciones de importe superior a 30.000 euros, cuando los solicitantes sean únicamente sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, no podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las empresas que incumplan los plazos de pago previstos en la citada ley».

El [Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea](#), modificó la redacción del citado artículo 13.3.bis de la [Ley General de Subvenciones](#) en los siguientes términos:

«3 bis. Para subvenciones de importe superior a 30.000 euros, las personas físicas y jurídicas, distintas de las entidades de derecho público, con ánimo de lucro sujetas a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, deberán acreditar cumplir, en los términos dispuestos en este apartado, los plazos de pago que se establecen en la citada Ley para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora».

Tal y como se explica en el preámbulo del [Real Decreto-ley 5/2023](#), una de las razones de la modificación de este precepto fue «...minimizar la incertidumbre generada por la aplicación del artículo 13.3.bis a la verificación del requisito exigido para optar a subvenciones de importe superior a 30.000 euros, cuando los solicitantes sean únicamente sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales».

Por consiguiente, no quedan sujetas a esta exigencia las entidades de derecho público ni las organizaciones sin ánimo de lucro.

Las entidades públicas empresariales, de acuerdo con el artículo 103 de la [Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público](#), son entidades de derecho público porque además de actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación ejercen potestades administrativas. Por tanto, a las entidades públicas empresariales no se les exige el requisito establecido en el artículo 13.3.bis de la [Ley General de Subvenciones](#) para ser beneficiarias de subvenciones de importe superior a 30.000 euros.

Sin embargo, las sociedades mercantiles públicas no ejercen potestades administrativas, por tanto, no son entidades de derecho público, debiendo cumplir los plazos de pago para poder optar a la condición de beneficiario de subvenciones de importe superior a 30.000 €.

Además, las sociedades mercantiles no tienen la consideración de "organizaciones sin ánimo de lucro". El ánimo de lucro, entendido como voluntad de obtener beneficios partibles entre los socios es un elemento esencial de las sociedades que tiene su origen en el carácter oneroso del contrato de sociedad, tal y como se deduce de diversas disposiciones normativas (artículos 1665 del [Código Civil](#), 116 del [Código de Comercio](#) y 61, 83.2, 99,

127, 253, 275 o 348 bis de la [Ley de Sociedades de Capital](#)). Por la propia configuración estructural de una sociedad de capital resulta contradictorio que carezca de ánimo de lucro.

En este sentido se pronuncia la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en su [Resolución de 17 de diciembre del 2020](#) que aborda la cuestión del ánimo de lucro de las sociedades al resolver sobre la solicitud de inscripción de ciertas cláusulas estatutarias que excluían expresamente el ánimo de lucro de una sociedad de responsabilidad limitada.

8.11 Comprobación del NIF de los beneficiarios *[Nueva 2025]*

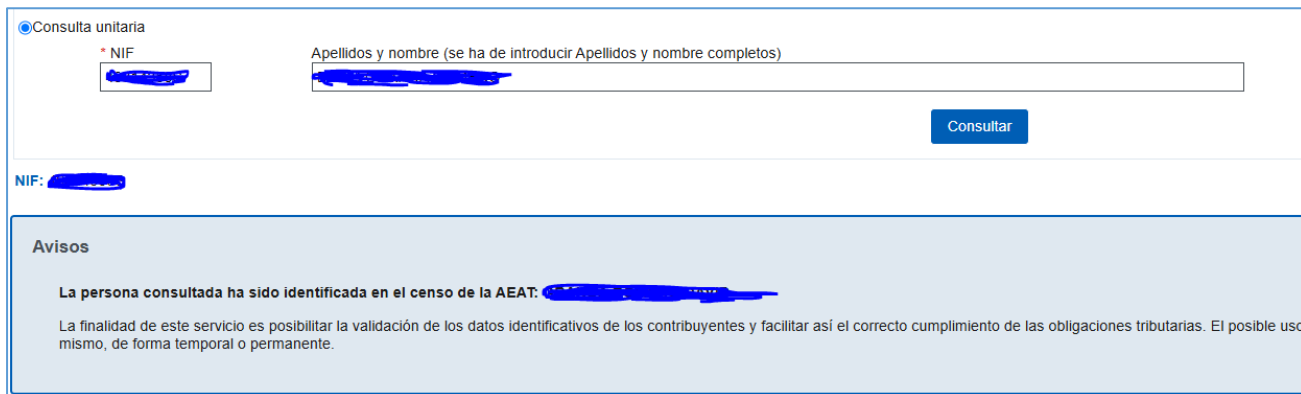
¿Hay alguna manera de comprobar la validez de los NIF de beneficiarios antes de registrar los datos en la BDNS?

Sí. Y además es muy conveniente hacerlo, especialmente en el propio procedimiento administrativo de gestión o concesión de ayudas.

La AEAT ofrece un servicio, al que se debe acceder de manera autenticada (certificado electrónico, cl@ve, etc.), de **Comprobación de un NIF de terceros a efectos censales** en la URL siguiente: (<https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/BUGC-JDIT/Cnec>), donde se puede verificar la existencia de los NIF **tanto de personas físicas como jurídicas**, con tres alternativas:

- A. Consulta múltiple por pantalla
- B. Consulta múltiple por archivo CSV
- C. Consulta individual

Un ejemplo de la pantalla de consulta individual y respuesta recibida es la siguiente:



The screenshot shows the 'Consulta unitaria' (Individual query) interface. It includes a radio button for 'Consulta unitaria', a text input for 'NIF' with a red asterisk, and a larger text input for 'Apellidos y nombre (se ha de introducir Apellidos y nombre completos)'. A blue 'Consultar' button is positioned to the right. Below the inputs, the NIF is displayed as 'NIF: [redacted]'. A light blue 'Avisos' (Warnings) box contains the message: 'La persona consultada ha sido identificada en el censo de la AEAT: [redacted]'. A footer note states: 'La finalidad de este servicio es posibilitar la validación de los datos identificativos de los contribuyentes y facilitar así el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. El posible uso mismo, de forma temporal o permanente.'

El servicio es de uso sencillo y conveniente, que redundará en una mayor calidad de datos y eficacia en la gestión pública.

El propio sitio web de la AEAT ofrece una breve guía de operación de este servicio en <https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/consultas-informaticas/presentacion-declaraciones-ayuda-tecnica/modelo-030/comprobacion-nif-terceros-efectos-censales.html>

9. SOBRE LOS ÓRGANOS Y LOS USUARIOS DE LA BDNS

9.1 ¿Qué debo hacer para pedir el acceso a la BDNS?

Escríbenos a bdns@igae.hacienda.gob.es. Te enviaremos una guía detallada de qué tienes que hacer.

9.2 ¿Qué es un Administrador Institucional? *[Actualizada 2025]*

Es una persona física, funcionario del órgano remitente u órgano cesionario de información, que por nombramiento del titular del órgano, ejerce las funciones de administrador de BDNS en ese órgano. El Administrador Institucional es el enlace principal entre el órgano y el Equipo de Administración y Custodia para todo tipo de asuntos relacionados con la BDNS.

Sus funciones están en la [Resolución de 7/12/2015 de la IGAE](#) sobre el proceso de registro y acreditación en la BDNS, y en el art. 10.1 del [RD 130/2019](#). Más información en el [Manual del Administrador Institucional](#).

¿Y quién desempeña ese rol en los Grupos de Acción Local, Cámaras de comercio, Colegios profesionales, Federaciones deportivas u otras organizaciones similares?

En los Grupos de Acción Local (GAL) así como en aquellas entidades de naturaleza privada el Administrador Institucional no tiene por qué ser necesariamente un empleado público. En todo caso, el AI designado debe tener la autoridad y el posicionamiento jerárquico suficiente para poder ejercer todas sus funciones con la adecuada diligencia profesional. Encontrarás más información en el [Manual del Administrador Institucional](#).

¿Cómo se comunica a la BDNS el cambio del Administrador Institucional?

Para que se modifique el Administrador Institucional en la BDNS el órgano se debe poner en contacto con el Equipo de Administración y Custodia de la BDNS (BDNS@igae.hacienda.gob.es). El equipo facilitará el formulario de actuaciones previas a través del cual se solicitará el cambio de Administrador Institucional.

9.3 Derechos de consulta a la BDNS

¿A qué datos pueden acceder/consultar los órganos convocantes?

El cumplimiento de los fines y objetivos de la BDNS permite que los usuarios debidamente registrados de órganos convocantes, gestores y responsables puedan acceder a todos los datos existentes en la BDNS sin restricción alguna, a través de las funcionalidades de consulta y análisis que se provean.

¿A qué datos pueden acceder/consultar los órganos de control?

Los órganos de control interno o externo, cesionarios de la información habilitados legalmente, tienen la misma capacidad de acceso a la información de los órganos convocantes o gestores, sin ninguna restricción, para el cumplimiento de sus objetivos y los fines de la BDNS.

9.4 Límite de usuarios en BDNS

¿Hay algún límite para la solicitud de usuarios registrados en la BDNS, o al hacerlo vía Web Services no es necesario el registro de usuarios?

El número de usuarios de la BDNS para los que un Administrador Institucional de un órgano o de una Intervención General de CCAA o EELL puede dar acceso no está limitado.

En el caso de los *Web Service* será el propio órgano del Estado, CCAA o Entidad Local el que tenga establecidos los sistemas de seguridad y los repartos de responsabilidades internos de cada uno de los agentes, que garanticen el correcto funcionamiento y adecuado control del propio servicio. El Administrador Institucional tiene marcadas unas responsabilidades en la [Resolución de 7/12/2015 de la IGAE sobre el proceso de registro y acreditación en la BDNS](#), para garantizar la autorización, autenticación y trazabilidad de la edición de información en BDNS.

10. SOBRE LAS AYUDAS DE ESTADO Y DE MINIMIS

NOTA: Las preguntas y respuestas relativas a las medidas de ayuda dispuestas con motivo de la crisis pandémica del coronavirus, se recogen en el capítulo 11.

10.1 Concepto de “ayuda de Estado” (AdE) [Actualizada 2025]

¿Cómo se sabe si una subvención es una ayuda de Estado?

Para saber si una subvención es o no una ayuda de Estado (AdE) y, por lo tanto, si está sujeta o no a las obligaciones adicionales de suministro de información a la BDNS, el convocante debe estar a lo dispuesto en la normativa europea en materia de ayudas de Estado, recogida fundamentalmente en los artículos 107, 108 y 109 del [Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea](#).

El artículo 107, apartado 1, del Tratado define las ayudas de Estado como «...las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones». Por tanto, una ayuda será considerada ayuda de Estado si reúne todos y cada uno de los siguientes requisitos:

- Que el beneficiario de la ayuda ejerza actividad económica (“empresa” según el concepto establecido por la jurisprudencia del TJUE).
- Que conceda una ventaja a sus beneficiarios.
- Que selectivamente favorezca a determinadas empresas o producciones.
- Que sea otorgada por un Estado Miembro o con recursos públicos.
- Que afecte a la competencia y/o a los intercambios entre Estados.

Para aclarar los conceptos clave relativos al concepto de ayuda estatal, la Comisión Europea aprobó la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ([Comunicación 2016/C 262/01](#)).

¿Qué tipo de medidas de ayuda reciben la calificación de AdE?

La Comisión Europea acoge bajo el concepto de AdE no solamente aquellas medidas que responden en nuestro ordenamiento jurídico nacional al concepto de subvenciones sino también otras formas de ayudas como bonificaciones fiscales, préstamos blandos, garantías, participaciones de financiación riesgo en sociedades, etc.

El concepto de ayuda de Estado no se limita a la concesión de ventajas económicas positivas. La liberación de cargas económicas puede constituir una ventaja y, por tanto, ser una ayuda de Estado.

Así, una norma fiscal que tenga como consecuencia una reducción en la carga impositiva de una empresa (beneficio fiscal, deducciones, exenciones o bonificaciones) puede ser constitutiva de Ayuda de Estado y, por tanto, estar sujeta al artículo 107.1 del TFUE.

En estos términos se ha pronunciado el TJUE al establecer que «una medida mediante la cual las autoridades públicas conceden a determinadas empresas una exención tributaria que, aunque no implique una transferencia de fondos estatales, coloque a los beneficiarios en una situación financiera más favorable a que a los restantes contribuyente, constituye ayuda de Estado».

En su compromiso de elaborar unas directrices relativas a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas, la Comisión ha aprobado la Comunicación relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas ([Comunicación 98/C 384/037](#)).

10.2 AdE exentas de notificación (autorización) previa **[Actualizada 2025]**

¿Qué AdE están exentas de notificación previa a la Comisión Europea?

El control de las ayudas de Estado, inicialmente, se basaba en un sistema de autorización previa que exigía a los Estados miembros informar ("notificación previa") a la Comisión de cualquier proyecto dirigido a conceder o modificar ayudas, de manera que el Estado Miembro no podía ejecutar las medidas proyectadas antes que la Comisión hubiera decidido sobre la compatibilidad de la ayuda con el mercado.

Para simplificar la labor administrativa sin debilitar el control de la Comisión, el Consejo adoptó [el Reglamento \(CE\) nº 994/98, de 7 de mayo de 1998](#), que permite a la Comisión adoptar los denominados "reglamentos de exención por categorías". Mediante estos Reglamentos, la Comisión puede declarar que determinadas categorías de ayudas que cumplen ciertas condiciones son compatibles y, por tanto, están excluidas del requisito de notificación previa y autorización por la Comisión Europea. Asimismo, permite a la Comisión adoptar los denominados "reglamentos *de minimis*" por los cuales se declaran que determinadas ayudas no cumplen todos los criterios señalados en el apartado 1 del artículo 107 del Tratado y quedan, por tanto, excluidas del procedimiento de notificación contemplado en el apartado 3 del artículo 108 del Tratado, siempre que la ayuda concedida a una misma empresa durante un período dado no supere un determinado importe fijo.

Actualmente están exentas de la obligación de notificación/autorización a la Comisión:

- Las ayudas individuales o los regímenes de ayudas que reúnan todas las condiciones establecidas en algún Reglamento de Exención por Categorías:
 - [Reglamento \(UE\) 651/2014](#) de la Comisión (GENERAL).
 - [Reglamento \(UE\) 2022/2472](#) de la Comisión (AGRÍCOLA Y FORESTAL)
 - [Reglamento \(UE\) 2022/2473](#) de la Comisión (PESCA Y ACUICULTURA)
- Las ayudas individuales y los regímenes de ayudas que estén sujetas a un Reglamento de exención por importe (*de minimis*)
 - [Reglamento \(UE\) 2023/2831](#) de la Comisión (GENERAL).
 - [Reglamento \(UE\) 1408/2013](#) de la Comisión (AGRÍCOLA Y FORESTAL).
 - [Reglamento \(UE\) 717/2014](#) de la Comisión (PESCA Y ACUICULTURA)
 - [Reglamento \(UE\) 2023/2832](#) de la Comisión (SIEG).

¿Cómo deben registrarse las AdE exentas de notificación en la BDNS?

A efectos de la BDNS son ayudas de Estado exentas de notificación las sujetas a reglamentos de exención por categorías y las sujetas a reglamentos *de minimis*.

Los reglamentos de exención por categorías contienen unos Anexos (Anexos II y III) que especifican los datos que deben comunicarse a la Comisión Europea.

La información sobre la medida recogida en el Anexo II se comunica directamente a través del sistema SANI2 en el plazo de 20 días hábiles a partir de su entrada en vigor de la medida. La Comisión asigna un número de referencia (SA Number) a la medida aprobada por el órgano convocante/concedente.

Al registrar la convocatoria de la medida en la BDNS hay que indicar el reglamento de exención de categoría al que está sujeta la medida, así como el SA Number asignado por la Comisión.

En cuanto al registro de las concesiones en BDNS, el órgano concedente debe registrar tanto la información señalada en el Anexo III como el resto de información requerida por la LGS (nombre del beneficiario; tipo de empresa; sector de actividad; objetivo de la ayuda; etc....).

El portal del [SNPSAP](#) publica en la pestaña de "Ayudas de Estado" la información sobre cada ayuda concedida establecida en el Anexo III así como el enlace a la consulta de la información del Anexo II en el [sitio web de la DGCOMP](#).

Por lo que respecta a las ayudas *de minimis*, los nuevos reglamentos *de minimis* exigen a los Estados que la información sobre las ayudas *de minimis* se consigne en un registro central a escala nacional o de la Unión con acceso público a la información. La BDNS actúa como registro central nacional de minimis y el acceso de los ciudadanos a su información se realiza a través del portal SNPSAP.

Para dar cumplimiento a esta obligación hay que registrar en la BDNS todas las medidas (convocatorias) sujetas a Reglamentos *de minimis* que se convoquen, así como las ayudas *de minimis* que de ellas deriven (concesiones). Al registrar la convocatoria se deberá indicar el Reglamento *de minimis* al que está sujeto la medida.

En el momento de registrar la convocatoria sujeta a un reglamento de exención de categoría aún no se dispone del SA Number de la medida de ayuda, pero la BDNS exige que se cumplimente ese campo. ¿Cómo solventar esta incidencia?

El SA Number de la medida de la ayuda es uno de los elementos que deben publicarse en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (www.infosubvenciones.es) para dar cumplimiento a las obligaciones de publicación e información de las ayudas de Estado sujetas a un reglamento de exención de categoría. Por esta razón, es un campo obligatorio en el registro de la convocatoria en la BDNS.

El SA Number es proporcionado por la Comisión una vez recibida, a través del sistema SANI2, la información sobre la medida de ayuda recogida en el Anexo II.

Como la comunicación de esta información a la Comisión se realiza en un plazo de 20 días a partir de la entrada en vigor de la medida de ayuda y el registro de la convocatoria en la BDNS es previo a esta comunicación, el órgano convocante no dispone del SA Number de la medida.

Si no se dispone del SA Number, porque aún no se ha comunicado la medida a la Comisión Europea o porque el sistema de notificación electrónica aún no ha asignado la referencia, se debe cumplimentar el campo en la BDNS con el siguiente contenido "000000". Cuando se conozca el SA Number asignado a la medida, se deberá acudir a la convocatoria registrada en la BDNS y corregir ese campo.

Recuerda que es NECESARIO ACTUALIZAR el SA Number en cuanto se conozca.

10.3 Las ayudas de minimis, ¿son calificadas como "Ayudas de Estado" en la BDNS? ***[Actualizada 2025]***

Sin entrar en consideraciones jurídicas ni doctrinales, y exclusivamente a los efectos de su relación con la BDNS, una convocatoria es "marcada" como ayuda de Estado o *de minimis* cuando:

- A. Está sujeta al procedimiento general de notificación/autorización a la Comisión durante el diseño de la medida, y la Comisión le asigna un SA Number, o
- B. Está exenta de notificación por aplicación de alguno de los siguientes Reglamentos y la Comisión le asigna un SA Number:
 - [Reglamento \(EU\) 651/2014](#) de la Comisión (GENERAL)
 - [Reglamento \(EU\) 2022/2472](#) de la Comisión (AGRÍCOLA Y FORESTAL)
 - [Reglamento \(EU\) 2022/2473](#) de la Comisión (PESCA Y ACUICULTURA)
 - [Reglamento \(EU\) 702/2014](#) de la Comisión (AGRÍCOLA Y FORESTAL, vigente hasta el 31 de diciembre de 2022).
 - [Reglamento \(EU\) 1388/2014](#) de la Comisión (PESCA Y ACUICULTURA vigente hasta el 31 de diciembre de 2022).
- C. Está sujeta a algún reglamento *de minimis*:
 - [Reglamento \(UE\) 2023/2831](#) de la Comisión (GENERAL).
 - [Reglamento \(EU\) 1408/2013](#) de la Comisión (AGRÍCOLA Y FORESTAL).
 - [Reglamento \(EU\) 717/2014](#) de la Comisión (PESCA Y ACUICULTURA).

- [Reglamento \(UE\) 2023/2832](#) de la Comisión (SIEG)
 - [Reglamento \(EU\) 1407/2013](#) de la Comisión (GENERAL, vigente hasta el 31 de diciembre de 2023)
 - [Reglamento \(EU\) 360/2012](#) de la Comisión (SIEG, vigente hasta el 31 de diciembre de 2023),
o
- D. Las ayudas compatibles en virtud del [Reglamento \(UE\) 1370/2007](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera o de la [Decisión de Comisión, de 20 de diciembre de 2011](#), relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del [Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea](#) a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general.

10.4 Notificación/autorización previa de una medida de AdE **[Actualizada 2025]**

En el caso de ayudas públicas que deban ser “notificadas” a la Comisión Europea y que se otorguen por convocatoria pública, ¿en qué momento hay que proceder a la “notificación” (solicitud de autorización): antes de la aprobación de las bases reguladoras; después de la aprobación de estas, pero antes de la convocatoria; después de la convocatoria, pero antes de la resolución?

La “notificación” es el proceso de solicitud de la autorización. Es una mala traducción, porque realmente es una “autorización”, pero como en tantas cosas de Bruselas, los traductores fuerzan excesivamente la literalidad.

El artículo 108 del [TFUE](#) exige a los Estados miembros de la UE que notifiquen a la Comisión todos los **proyectos** de medidas de ayudas de estado y que **obten gan su aprobación antes** de ejecutar las medidas proyectadas, salvo las medidas que la Comisión haya exonerado de la obligación de notificación (Reglamentos UE de exención por categoría).

La UE no establece en qué momento procesal se debe notificar la medida, pero sí exige que sea en la fase de proyecto y **no se ejecute la medida proyectada antes** de obtener la aprobación.

Se debe entender que la ejecución de la medida se realiza con el acto administrativo de concesión de la ayuda, que reconoce el derecho del beneficiario a percibir una ayuda (que de no obtener autorización puede ser declarada ilegal por la Comisión Europea). Por tanto, la Administración concedente de la ayuda debe planificarse adecuadamente para que la medida esté autorizada con anterioridad a la ejecución de las ayudas.

Ahora bien, la Intervención General de la Administración del Estado sostiene que la notificación de la medida de ayuda debe realizarse antes de aprobar las correspondientes bases reguladoras, debiendo constar acreditado este extremo en el expediente. Así, las bases reguladoras deberán hacer mención expresa al número de identificación de la ayuda de estado otorgado por la Comisión Europea (SA Number) o, en el caso de no haber obtenido aún la correspondiente autorización, deberán incluir una salvaguarda advirtiendo de esta circunstancia, y exonerando a la Administración de realizar ningún pago en tanto dicha medida no sea autorizada expresa o tácitamente por la Comisión Europea ([Instrucción 1/2023 de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se regula el informe de las bases reguladoras establecido en el artículo 17 de la Ley General de Subvenciones](#)).

Modificadas las condiciones de concesión de las subvenciones, la Comisión Europea ha otorgado un nuevo SA Number a la medida de ayuda. ¿Cómo se debe registrar esta modificación en la BDNS?

Si la Comisión Europea ha asignado un nuevo código SA Number a una medida de ayudas públicas ya existente es porque el procedimiento de concesión de las ayudas ha sufrido cambios cuya naturaleza excede de la puramente formal o administrativa, y estos cambios tienen repercusiones para la evaluación de la compatibilidad de la medida de ayuda con el mercado común. Así, por ejemplo, un aumento de más de un 20% del presupuesto inicial del régimen de ayuda supone una modificación que requiere autorización de la Comisión Europea.

Para la Comisión Europea estas modificaciones de los regímenes de ayudas ya existentes son nuevas medidas de ayuda y bajo esta premisa está realizando los controles de cumplimiento de transparencia.

Como las obligaciones de transparencia y publicidad de las ayudas de Estado exigen publicar para cada ayuda individual concedida la referencia de la medida de ayuda asignada por la Comisión, la forma más transparente de suministrar la información es registrar una nueva convocatoria (instrumental) para las nuevas medidas de ayuda autorizadas, haciendo constar el nuevo SA Number asignado y asociar a ella las ayudas concedidas en virtud de los cambios realizados en la medida inicial. A modo de ejemplo, si la modificación de la medida se ha debido a un incremento del crédito inicial disponible, las ayudas concedidas hasta agotar el crédito inicial se registrarán en la primera convocatoria. Las ayudas concedidas como consecuencia de la ampliación del crédito inicial se registrarán en la segunda convocatoria.

10.5 Registro de AdE que no son subvenciones en BDNS [Actualizada 2025]

¿Por qué tienen que registrarse en la BDNS las ayudas de Estado que no gozan de la naturaleza jurídica de subvenciones?

El [RD 130/2019](#) configura a la BDNS como Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas siendo el sitio web que, con carácter exhaustivo, publica las ayudas de Estado y ayudas *de minimis* a nivel nacional en cumplimiento de lo previsto en la normativa europea.

Por ello, cualquier ayuda que a efectos del Derecho de la Unión Europea sea considerada como ayuda de Estado de acuerdo con lo previsto en el artículo 107.1 del [Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea](#) y las normas que lo desarrollen debe ser registrada en la BDNS.

Ahora bien, el [RD 130/2019](#) limita el registro de los beneficios fiscales y los beneficios en las cotizaciones a la Seguridad Social que tengan la consideración de ayuda de estado por implicar una ventaja económica de carácter selectivo, a aquellos que superen los umbrales mínimos de transparencia exigidos por las normas europeas.

La entidad pública va a ceder a una sociedad dependiente una infraestructura y equipamiento tecnológico para instalar unos platós de producción audiovisual que esa sociedad pondrá a disposición de las empresas a cambio de una retribución a precios de mercado. Esta cesión ha sido declarada medida compatible por la Comisión Europea, asignándole un SA.Number. Si no es una subvención ¿por qué hay que registrarla en la BDNS?

El artículo 7.1 del [Real Decreto 130/2019](#) establece que la Base de Datos Nacional de Subvenciones opera como Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas y es el sitio web que, con carácter exhaustivo, publica las ayudas de Estado.

Por tanto, todas las ayudas de Estado se deben registrar en la BDNS con independencia del instrumento jurídico en que se materialice (subvención, préstamo, garantía, beneficio fiscal, financiación riesgo, ...)

La cesión de la infraestructura y equipamiento tecnológico a la que hace referencia su correo, al estar tipificada como ayuda de estado, debe registrarse en la BDNS a pesar de no tener la naturaleza de subvención.

10.6 Comprobación del cumplimiento del límite máximo de ayudas de minimis [Actualizada 2025]

¿Se puede considerar actualmente a la Base de Datos Nacional de Subvenciones como el registro central de ayudas de minimis recogido en los reglamentos (UE) de referencia, de tal forma que se pueda comprobar de oficio si un solicitante cumple el requisito de no sobrepasar el límite de obtención de ayudas?

Los nuevos reglamentos (UE) *de minimis*⁵ exigen a los Estados miembros, a partir de 1 de enero de 2026, que consignen en un registro central a escala nacional o de la Unión la información sobre las ayudas *de minimis* concedidas.

Por su parte, el [Reglamento \(EU\) 717/2014](#) de la Comisión (PESCA Y ACUICULTURA) regula la posibilidad de que los Estados miembros creen un registro central con información completa sobre las ayudas *de minimis* otorgadas que les permita comprobar que cualquier nueva concesión de ayuda no rebasa el límite máximo correspondiente.

Para que el registro central *de minimis* pueda garantizar que el importe total de las ayudas *de minimis* concedidas a una única empresa no supere el límite máximo total admisible es preciso que la información consignada abarque un período de tres años.

El 7.1 de [RD 130/2019 \(BDNS\)](#) configura a la BDNS como el sitio web que, con carácter exhaustivo, publicará las ayudas *de minimis* a nivel nacional.

Por ello, la [Resolución 15 de junio de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado](#), por la que se regula el proceso de registro y publicación de convocatorias en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas establece que el régimen de registro de convocatorias de ayudas *de minimis* será de aplicación desde el 1 de enero de 2020.

La información de ayudas *de minimis* concedidas por las autoridades españolas que recoge la BDNS ya abarca el período de tres ejercicios fiscales, lo que permite utilizar la BDNS como registro central de las ayudas *de minimis* a efectos de controlar la ayuda concedida para garantizar que no se sobrepasan los límites máximos aplicables y que se respetan las reglas en materia de acumulación.

¿Es necesario consultar la BDNS antes de otorgar una ayuda de minimis, o es suficiente la declaración jurada del beneficiario?

No solo es necesario, sino que es una obligación. Los Estados miembros deben controlar la ayuda *de minimis* concedida para garantizar que no se sobrepasa el límite máximo establecido en el reglamento *de minimis* de aplicación y que se respetan las reglas en materia de acumulación.

Para cumplir esta obligación, los nuevos reglamentos *de minimis* exigen a los Estados miembros, a partir de 1 de enero de 2026, que consignen en un registro central a escala nacional o de la Unión la información sobre las ayudas *de minimis* concedidas. A través del registro central *de minimis* se comprobará que cualquier nueva concesión de ayuda no sobrepase el límite máximo establecido en el reglamento de minimis

Por tanto, antes de conceder una ayuda sujeta a un reglamento *de minimis* **se debe consultar en la BDNS las ayudas de minimis percibidas por el solicitante**. Esta práctica permite dar cumplimiento a la obligación impuesta por la UE de conceder solo nuevas ayudas *de minimis* tras haber comprobado que ello no dará lugar a que el importe total sobrepase el límite máximo pertinente y que se respetan las normas de acumulación.

A partir del momento en que el registro central (BDNS) dispone de información de un período de tres años sucesivos, las empresas ya no están obligadas a hacer un seguimiento y declarar cualquier otra ayuda *de minimis* recibida una vez que los datos del registro central abarquen un período de tres años.

Por tanto, la consulta a la BDNS no puede sustituir la declaración de ayudas que se le pide al solicitante.

A efectos del control del límite máximo de ayudas de estado y de la acumulación, el órgano concedente dispone del informe denominado "Rastreo individual *de minimis*" que ofrece información sobre el importe acumulado de las ayudas *de minimis* percibidas por la persona consultada durante períodos de tiempo deslizantes (períodos de 3 ejercicios fiscales) y sujetas a un mismo Reglamento (UE) *de minimis*. Esta información también está disponible a través de la Plataforma de Intermediación de Datos.

⁵ Reglamento (UE) 2023/2831 (GENERAL), Reglamento (UE) 2023/2832 (SIEG) y Reglamento (UE) 2024/3118 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2024, por el que se modifica el Reglamento (UE) 1408/2013 (AGRICOLA Y FORESTAL).

Asimismo, en la documentación de la BDNS puede encontrar un *applet* que permite comprobar las ayudas *de minimis* percibidas en los últimos tres años por los beneficiarios que se desean consultar. Este *applet* totaliza las ayudas *de minimis* percibidas por el consultado atendiendo al reglamento *de minimis* en virtud del cual se concedió la ayuda. Esta totalización permite verificar si la concesión de una nueva ayuda sobrepasa o no los límites máximos de ayudas percibidas en cualquier periodo de tres años establecido en los artículos 6.4 de los Reglamentos (UE) [2023/2831](#), [2023/2832](#) y [1408/2013](#) enmendado. El *applet* también descarga las concesiones del [Reglamento \(UE\) 717/2014](#) (*minimis* de pesca y acuicultura) aunque la totalización la realiza por ayudas percibidas en los tres últimos años en lugar de los tres últimos ejercicios fiscales que señala este Reglamento (UE) *de minimis*.

Este *applet*, denominado Inspector de *minimis*, y otros que pueden ser de mucha utilidad para el control, se pueden descargar libremente de <https://bit.ly/3DfG1d3>. Asimismo, se puede encontrar un video sobre su uso en <https://youtu.be/sUaOTzeDFEA?si=I0Vz4JKWN2vpE2bk>.

El órgano convocante ¿ya no puede exigir a la empresa que aporte la declaración de las demás ayudas de minimis recibidas?

Así es. El [Reglamento \(UE\) 2023/2831](#) de la Comisión, en su considerando 24 establece:

«...El registro central contribuirá a reducir la carga administrativa a las empresas. En virtud del presente Reglamento, las empresas ya no se verán obligadas a hacer un seguimiento y declarar cualquier otra ayuda de minimis recibida una vez que los datos del registro central abarquen un período de tres años. A efectos del presente Reglamento, el control del cumplimiento del límite máximo establecido en el mismo se basará, en principio, en la información recogida en el registro central».

En virtud de esta consideración, el artículo 7 de disposiciones transitorias de este Reglamento (UE) establece en su apartado 4 que:

« 4. Hasta que se cree el registro central y este abarque un período de tres años ... Antes de conceder la ayuda, el Estado miembro obtendrá de la empresa de que se trate una declaración, escrita o por medios electrónicos, referente a cualesquiera otras ayudas de minimis recibidas durante cualquier período de tres años y que estén sujetas al presente Reglamento o a otros reglamentos de minimis».

En los mismos términos se expresa el [Reglamento \(UE\) 2023/2832](#) en su considerando 29 y la disposición transitoria regulada en el artículo 7.4 y [el Reglamento \(UE\) 2024/3118](#) de la Comisión, de 10 de diciembre de 2024, por el que se modifica el [Reglamento \(UE\) 1408/2013](#) en su considerando 5 y al añadir el apartado 5 al artículo 7 del Reglamento (UE) 1408/2013.

De conformidad con los citados reglamentos *de minimis*, las empresas no están obligadas a declarar las ayudas *de minimis* recibidas desde el momento en que el registro central *de minimis* abarca un período de 3 años.

Asimismo, en el proceso de concesión de ayudas, a la empresa solicitante le asiste el derecho a no aportar el certificado de ayudas de *minimis* expedido por la IGAE, en virtud del artículo 28.2 de la [Ley 39/2015](#).

Una empresa interesada en solicitar una ayuda de minimis ¿dónde puede obtener la información sobre las ayudas de minimis que ya ha percibido?

La empresa interesada en solicitar una ayuda *de minimis*, puede obtener la información de las ayudas de *minimis* recibidas durante los tres años anteriores de las siguientes fuentes:

- Las resoluciones de concesión de subvenciones y/o ayudas públicas que le han sido concedidas.

Cuando un Administración pública concede una subvención o ayuda sujeta a la regulación *de minimis*, informa de ello al beneficiario, indicando el importe previsto de la ayuda (expresado como su equivalente de subvención bruta) y de su carácter *de minimis*, haciendo referencia expresa al Reglamento y citando su título y la referencia de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

- En el Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSAP).

La información que ofrece el SNPSAP en relación a las ayudas *de minimis* concedidas a una "empresa", es la información que proporcionan las administraciones públicas y las entidades integrantes del sector público institucional a la BDNS en cumplimiento de la obligación de suministro de información prevista en el artículo 20 de la [Ley General de Subvenciones](#).

La integridad de esta información está condicionada por el grado de cumplimiento de la obligación de suministro de información a la BDNS y por los plazos establecidos para ello.

- Certificado de ayudas *de minimis*.

La Intervención General de la Administración del Estado ha puesto en funcionamiento un servicio electrónico de expedición del certificado de las ayudas *de minimis* que ha recibido un beneficiario (NIF) según constan registradas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. **Ver Respuesta 10.9.**

Este servicio electrónico es accesible a través de la siguiente dirección:

<https://webpub2.igae.hacienda.gob.es/accesoremoto/frmExecAPP.aspx?code=BDNSCRT&ta=ANO>

10.7 Concepto "única empresa" [Nueva 2025]

¿Cómo opera el concepto "única empresa" en la acumulación de ayudas de minimis?

Los límites máximos que establecen los Reglamento (UE) *de minimis* representan los importes de la ayuda *de minimis* que una "única empresa" puede recibir por Estado miembro a lo largo de un período de tres años. Estos límites máximos garantizan que ninguna de las medidas sujetas a estos reglamentos *de minimis* pueda considerarse que tiene efectos sobre el comercio entre los Estados miembros o efectos de falseamiento efectivo o potencial de la competencia.

En aras de la seguridad jurídica y con el fin de reducir la carga administrativa, cada Reglamento *de minimis* establece una lista de criterios exhaustiva y clara para determinar cuándo dos o más empresas deben ser consideradas una "única empresa".

Así, dos o más empresas se consideran "única empresa" cuando entre ellas existe alguna de las siguientes relaciones:

- una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
- una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección o control de otra empresa;
- una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa;
- una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios de la segunda empresa, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas o socios.

Las empresas que mantengan cualquiera de estas relaciones a través de otra u otras empresas también se considerarán una única empresa.

Por tanto, para que una empresa pueda optar a una ayuda *de minimis* la suma de las ayudas *de minimis* percibidas por la empresa solicitante y las ayudas *de minimis* percibidas por las empresas con las que mantiene

alguna relación que, de acuerdo con la Comisión, determina que son una “única empresa” no puede superar el límite máximo *de minimis*.

La BDNS no dispone de la información necesaria para determinar si dos o más beneficiarios están vinculados a efectos de acumular sus ayudas bajo el concepto de “única empresa”. Corresponde al órgano concedente de la ayuda analizar las posibles vinculaciones entre empresas.

¿El concepto “única empresa” es el mismo que el concepto “grupo de empresa”?

No. En el ordenamiento jurídico nacional el concepto jurídico de grupo de empresas está regulado en el artículo 42.1 del [Código de Comercio](#) que establece que existe un grupo de empresas «cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras», presumiendo que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna de las siguientes situaciones:

- Posea la mayoría de los derechos de voto.
- Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.
- Pueda disponer, en virtud de acuerdos con terceros, de la mayoría de los derechos de voto.
- Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido nombrados, está vinculada a otra en alguno de los casos previstos en los dos primeros supuestos antes citados.

Aun cuando la nota característica común de los conceptos «única empresa» y «grupo de empresa» es la toma de control de una empresa sobre otra u otras empresas, los criterios determinantes de «única empresa» son más amplios que los criterios de «grupo de empresa» y son los que hay que aplicar a efectos de cumplir las normas sobre ayudas de minimis.

10.8 Normas de acumulación de las ayudas de minimis [Nueva 2025]

¿Cómo opera la acumulación de ayudas de minimis cuando una empresa percibe ayudas de diferentes reglamentos de minimis, de reglamentos de exención por categoría o ayudas notificadas?

Si una empresa opera tanto en el sector agrícola como en el sector de la pesca y de la acuicultura y/o realiza otras actividades propias del ámbito de aplicación del [Reglamento \(UE\) 2023/2831](#) de la Comisión (GENERAL) es posible que perciba ayudas sujetas a distintos reglamentos (UE) *de minimis* e incluso ayudas sujetas a un reglamento de exención de categoría o una ayuda de Estado sujeta a notificación previa.

En este caso, el órgano concedente no solo tiene que respetar el límite máximo de ayudas percibidas establecido en el reglamento *de minimis* de aplicación, también tiene que respetar las reglas en materia de acumulación establecida en los reglamentos *de minimis* que a continuación se detallan:

- Las ayudas *de minimis* concedidas con arreglo al Reglamento general pueden acumularse con las ayudas *de minimis* concedidas con arreglo al Reglamento de SIEG.

$$\begin{array}{ccccc}
 \text{Minimis general} & + & \text{Minimis SIEG} & \leq & 1\,050\,000 \text{ EUR} \\
 \leq & & \leq & & \\
 300\,000 \text{ EUR} & & 750\,000 \text{ EUR} & &
 \end{array}$$

- Las ayudas *de minimis* concedidas con arreglo al Reglamento general pueden acumularse con las ayudas *de minimis* concedidas con arreglo al Reglamento de agrícola o al Reglamento de pesca y acuicultura siempre que la suma de las todas ayudas *de minimis* percibidas por la empresa en cualquier periodo de tres años no exceda de 300 000 EUR.

Esta acumulación solo es posible si se garantiza que las actividades de producción primaria de productos agrícolas y las actividades de pesca y ganadería no se beneficien de las ayudas de minimis general percibidas por la empresa.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Minimis general} & + & \text{Minimis agrícola} \\
 \leq & & \leq \\
 300\,000 \text{ EUR} & & 50\,000 \text{ EUR} \\
 \hline
 \text{Minimis general} & + & \text{Minimis pesca} \\
 \leq & & \leq \\
 300\,000 \text{ EUR} & & 40\,000 \text{ EUR}
 \end{array}
 \leq 300\,000 \text{ EUR}$$

- Las ayudas *de minimis* concedidas con arreglo al Reglamento de agrícola pueden acumularse con las ayudas *de minimis* concedidas con arreglo al Reglamento de pesca y acuicultura siempre que la suma de las todas ayudas *de minimis* percibidas por la empresa en cualquier periodo de tres años no exceda del límite más elevado fijado en cualquiera de ambos reglamentos. Actualmente, el límite más alto lo fija el reglamento *de minimis* de agricultura (50 000 EUR).

Esta acumulación solo es posible si las actividades de la producción primaria de productos agrícolas no se benefician de las ayudas *de minimis* de pesca y acuicultura.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Minimis agrícola} & + & \text{Minimis pesca} \\
 \leq & & \leq \\
 50\,000 \text{ EUR} & & 40\,000 \text{ EUR}
 \end{array}
 \leq 50\,000 \text{ EUR}$$

- Las ayudas *de minimis* concedidas con arreglo al Reglamento de SIEG pueden acumularse con las ayudas *de minimis* concedidas con arreglo al Reglamento de agrícola o al Reglamento de pesca.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Minimis agrícola} & + & \text{Minimis SIEG} \\
 \leq & & \leq \\
 50\,000 \text{ EUR} & & 750\,000 \text{ EUR} \\
 \hline
 \text{Minimis pesca} & + & \text{Minimis SIEG} \\
 \leq & & \leq \\
 40\,000 \text{ EUR} & & 750\,000 \text{ EUR}
 \end{array}
 \leq 800\,000 \text{ EUR}$$

- Las ayudas *de minimis* concedidas con arreglo al reglamento general, al reglamento de agrícola o al reglamento de pesca y acuicultura se pueden acumular con una ayuda de Estado sujeta a

un reglamento de exención de categoría o con una ayuda de Estado autorizada por la Comisión aun cuando las ayudas financien los mismos gastos subvencionables o la misma medida de financiación de riesgo siempre que la acumulación de estas ayudas no exceda de la intensidad de ayuda o del importe de ayuda más elevado establecido en el reglamento de exención por categorías o en la Decisión adoptados por la Comisión.

- Las ayudas *de minimis* concedidas con arreglo al reglamento general, al reglamento de agrícola o al reglamento de pesca y acuicultura que no se concedan para costes subvencionables específicos ni puedan atribuirse a costes subvencionables específicos se pueden acumular con una ayuda de Estado sujeta a un reglamento de exención de categoría o a una ayuda de Estado notificada.

10.9 Certificado de minimis [Actualizada 2024]

¿Qué es el certificado de ayudas de minimis y quién puede obtenerlo?

La Intervención General de la Administración del Estado ha puesto en funcionamiento un servicio electrónico de expedición del certificado de las ayudas *de minimis* que ha recibido un beneficiario (NIF) según constan registradas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

El servicio electrónico de ayudas *de minimis* es accesible a través de la siguiente dirección:

<https://webpub2.igae.hacienda.gob.es/accesoremoto/frmExecAPP.aspx?code=BDNSCRT&ta=ANO>

El certificado, que puede ser solicitado por el interesado o por su representante legal acreditado, refleja las ayudas *de minimis* registradas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones en la fecha de su expedición. Pero hay que tener en cuenta que esa información puede verse alterada por la anotación de nuevas ayudas aún pendientes de ser registradas por los órganos concedentes, incluso para el mismo plazo de referencia.

Por otra parte, la presentación de este certificado por parte del solicitante no exime a la Administración concedente de la ayuda comprobar que cualquier nueva concesión de ayuda no rebasa el límite máximo correspondiente.

Se puede encontrar más información sobre estos certificados en:

- **¿Qué son las ayudas de minimis?** <https://youtu.be/5BqCtMgWitY>
- **¿Cómo obtener el Certificado de minimis?** <https://youtu.be/YP CZx08PLcA>
- **¿Cómo interpretar tu Certificado de minimis?** <https://youtu.be/WW1GIMn-Hlg>

¿Qué certificado electrónico preciso para pedir un certificado de minimis en el servicio correspondiente?

Existen diversas posibilidades.

Si lo que buscas es una certificación de las ayudas que has recibido como persona física, puedes usar cualquier certificado electrónico admitido. Ver <https://valide.redsara.es/valide/>

También puedes usar la autenticación CI@ve: [https://clave.gob.es/clave Home/clave.html](https://clave.gob.es/clave/Home/clave.html)

Si quieres acceder a la información de otra persona física distinta de ti, necesitas estar apoderado por ella. debes registrar tu apoderamiento **ELECTRONICO** en:

<https://sede.administracion.gob.es/apodera/clave.htm>

Recuerda que los apoderamientos electrónicos tienen un periodo de vigencia. Debe consultar si el suyo está vigente o caducado, en:

<https://sede.administracion.gob.es/apodera/consultaApoderamientos.htm>

La normativa sobre caducidad de apoderamientos la puede consultar en:

https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoDeApoderamientos.html

Si lo que deseas es un certificado de minimis de una persona jurídica, hay también varias posibilidades:

- A. Puedes acceder por apoderamiento, como en el caso anterior.
- B. Puedes acceder con el certificado electrónico de representante de persona jurídica:
<https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica>
- C. Puedes acceder con el certificado electrónico de la persona jurídica.

Los importes consignados en el Certificado de minimis que expide la IGAE ¿corresponden a ayudas concedidas o a ayudas liquidadas?

El concepto de “pago” que recoge la BDNS (se entienda por pago de la ayuda la “ayuda liquidada”) no existe en la normativa europea de ayudas de Estado y *de minimis*. La BDNS recoge la entidad de información “Pago” por imperativo legal ([RD 130/2019](#)), al tener potencialmente relevancia fiscal.

Por **ejecución** de la ayuda se entiende **el pago** de la misma, e incluso la *mera habilitación para concederla* sin ulteriores trámites (vid. sentencia de 11 de diciembre de 1973 en el asunto 120/73, Lorenz vs Alemania; sentencia de 15 de julio de 1964 en el asunto 6/64, Costa vs ENEL, o sentencia de 21 de mayo de 1977 en los asuntos 31 y 53/77, Comisión vs Reino Unido).

Encajar las normas españolas y europeas en materia de ayudas y subvenciones no siempre es fácil.

El certificado *de minimis* se emite para satisfacer demandas de las empresas interesadas en solicitar ayudas *de minimis*. Estas empresas necesitan conocer las ayudas *de minimis* que ya han recibido para determinar si puede optar por nuevas ayudas *de minimis*. En este contexto debe entenderse el certificado *de minimis*.

El certificado contiene concesiones y en su caso devoluciones y reintegros en firme, medidos en términos de “equivalente de subvención bruto” que no es más que una métrica de la intensidad de la ayuda calculada con las reglas de la UE. No se hace en el certificado *de minimis* ninguna consideración sobre la gestión de tesorería (pago e ingresos efectivos de devoluciones o reintegros).

Para ver el contenido del certificado emitido, puede ser de ayuda visualizar el video <https://youtu.be/WW1GIMn-Hlg>. En él se habla de “ayuda concedida”, no de “ayuda pagada”. De hecho, hay ayudas en las que no se realiza ningún desembolso (por ejemplo, las ventajas fiscales).

En el certificado de minimis aparece la razón social anterior y no la actual. ¿Cómo podemos subsanar este error?

La razón social que se muestra en el certificado *de minimis* obtenido por la empresa no se puede modificar. El órgano concedente de la subvención concedió a la ayuda a la empresa, que en el momento de la concesión tenía la razón social que figura en el certificado. La concesión fue registrada en la BDNS con los datos que de resolución de concesión. Por tanto, la información suministrada por el órgano concedente es correcta.

El cambio de denominación de la sociedad, lógicamente, es un cambio de uno de los elementos de la personalidad, pero no significa que dicho elemento sea la personalidad propiamente.

El nombre de la empresa no es titular de derechos y obligaciones, sino la persona propietaria de la denominación. Ella es a quién puede exigir sus derechos y a ella es a la que se debe exigir el cumplimiento de sus obligaciones.

Por tanto, el cambio en la denominación no implica la creación de un nuevo sujeto de derechos y obligaciones, como sí lo haría una transformación, fusión o escisión.

En conclusión, el único efecto jurídico visible y concreto en un cambio de denominación de una sociedad es la actualización del nombre como atributo de la persona jurídica, sin que se transmitan, modifiquen o extingan

los derechos y obligaciones contraídos por la empresa de que se trata, ni tampoco la pérdida o transmisión del patrimonio o algún otro atributo de la personalidad.

¿Dispone la BDNS de funcionarios habilitados para asistir en el uso de este servicio electrónico a los interesados que no disponen de certificado electrónico (artículo 12.2 de la Ley 39/2015)?

Las Administraciones Públicas están obligadas a prestar asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados que lo soliciten siempre y cuando estos interesados no estén obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración.

Las ayudas *de minimis* son ayudas percibidas por beneficiarios que, a efectos del derecho de la Unión Europea, tienen la calificación de «empresa». A estos efectos se entiende por empresa cualquier persona, física o jurídica, que ejerce actividad económica, con independencia de su estatuto jurídico, de su modo de financiación y de si persigue o no ánimo de lucro.

Por tanto, los beneficiarios de las ayudas *de minimis*, son personas obligadas a relacionarse con la Administración Pública electrónicamente de acuerdo los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la [Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas](#). Por tanto, no existe la obligación de poner funcionarios a disposición de los interesados en el uso de este servicio.

10.10 Ayudas a Servicios de Interés Económico General (SIEG) [Actualizada 2025]

¿La compensación a un servicio de interés económico general se debe registrar en la BDNS?

El término de SIEG aparece en los artículos 14 y 106, apartado 2, del TFUE, y en el [Protocolo nº 26 anejo al TFUE](#) dedicado a los servicios de interés general (SIG). Pero ni el TFUE ni el Derecho derivado lo definen.

La Comisión ha aclarado en su marco de calidad que los servicios de interés económico general (SIEG) son actividades económicas que producen resultados en aras del bien público general y que el mercado no realizaría (o lo haría en condiciones distintas por lo que respecta a la calidad objetiva, seguridad, asequibilidad, igualdad de trato y acceso universal) sin una intervención pública.

Algunos servicios de interés económico general pueden prestarlos empresas públicas o privadas sin una aportación financiera específica de las autoridades de los Estados miembros. Otros, solo pueden prestarse si la autoridad competente ofrece una compensación financiera al prestatario por la prestación del servicio público.

En la [sentencia Altmark, de 2003](#), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) mantiene que una compensación por servicio público no es constitutiva de ayuda de Estado con arreglo al artículo 107 del TFUE siempre que se cumplan cuatro condiciones simultáneas:

- la empresa beneficiaria debe tener las obligaciones de servicio público claramente definidas;
- los parámetros para el cálculo de la compensación deben establecerse previamente de forma objetiva y transparente;
- la compensación no debe superar los gastos ocasionados y un beneficio razonable, es decir sin compensación excesiva; y
- la elección de la empresa encargada se realizará mediante un procedimiento de contratación pública o el nivel de la compensación debe calcularse sobre la base de una empresa media, «bien gestionada» y adecuadamente equipada con los medios pertinentes.

En estos casos anteriores y solo en estos casos, la compensación por servicio público, al no constituir ayuda de Estado, no se registra en la BDNS salvo que la compensación se regule como una subvención en virtud de la Ley de contratos del Sector Público.

Cuando uno o más de los criterios de la sentencia Altmark no se cumplan, y sí se cumplen las condiciones generales contempladas en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, la compensación por servicio público constituye ayuda de Estado, y **sí debe registrarse** en la BDNS.

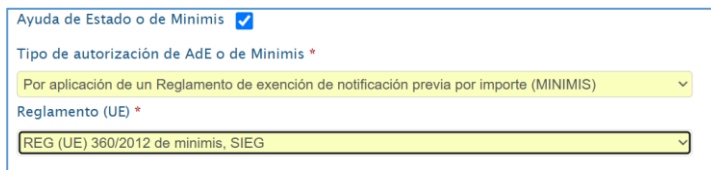
Actualmente, la normativa europea sobre ayudas estatales para los SIEG (Paquete SIEG) consta de cuatro instrumentos aplicables a todas las autoridades que concedan compensaciones por la prestación de SIEG:

- La Comunicación aclara la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las compensaciones por servicio público.
- El Reglamento SIEG de minimis dispone que la compensación por SIEG que no supere los 750 000 EUR durante cualquier período de tres años no entra en el control de las ayudas estatales.
- La Decisión especifica las condiciones en las cuales la compensación a empresas por la prestación de servicios públicos es compatible con las normas sobre ayudas estatales de la UE y no debe ser notificada previamente a la Comisión.
- El Marco especifica las condiciones en las cuales la compensación por servicio público es compatible con las normas sobre ayudas estatales de la UE. Esta compensación tendrá que ser notificada a la Comisión debido al mayor riesgo de falseamiento de la competencia, para que la Comisión pueda realizar una evaluación pormenorizada y decidir si la medida en cuestión es compatible con el mercado interior.

¿Cómo se registran en la BDNS las ayudas para los SIEG?

A/ Compensación exenta de ayuda en virtud de los Reglamentos de minimis: La compensación por SIEG que no supera los 750 000 EUR durante cualquier periodo de tres años.

En el registro de la convocatoria se seleccionará la casilla de verificación Ayuda de Estado o de *minimis*. En la tabla desplegable del campo Tipo de autorización de AdE o de *minimis* se seleccionará la opción "Por aplicación de un Reglamento de exención de notificación previa por importe (MINIMIS)". Se seleccionará el [Reglamento \(UE\) 2023/2832 DE LA COMISIÓN de 13 de diciembre de 2023 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general](#).



Ayuda de Estado o de Minimis ☒

Tipo de autorización de AdE o de Minimis *

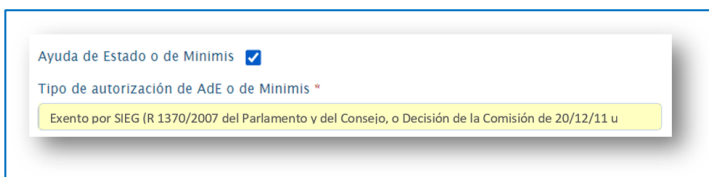
Por aplicación de un Reglamento de exención de notificación previa por importe (MINIMIS) ▼

Reglamento (UE) *

REG (UE) 360/2012 de minimis, SIEG ▼

B/ Compensación con arreglo a la Decisión SIEG: la compensación por la prestación de servicios públicos es compatible con las normas sobre ayudas de Estado de la UE y no debe ser notificada previamente a la Comisión.

En el registro de la convocatoria se seleccionará la casilla de verificación Ayuda de Estado o de minimis. En la tabla desplegable del campo Tipo de autorización de AdE o de Minimis se seleccionará la opción "Exento por SIEG (R 1370/2007 del Parlamento y del Consejo, o Decisión de la Comisión de 20/11/11 u otros".



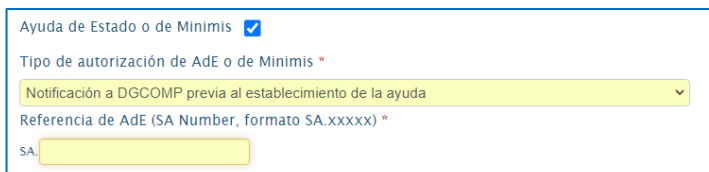
Ayuda de Estado o de Minimis ☒

Tipo de autorización de AdE o de Minimis *

Exento por SIEG (R 1370/2007 del Parlamento y del Consejo, o Decisión de la Comisión de 20/12/11 u ▼

C/ Compensación con arreglo al Marco SIEG: la compensación por servicio público es compatible con las normas sobre ayudas estatales de la UE, habiendo sido notificada previamente a la Comisión.

En el registro de la convocatoria se seleccionará la casilla de verificación Ayuda de Estado o de Minimis. En la tabla desplegable del campo Tipo de autorización de AdE o de *minimis* se seleccionará la opción "Notificación a DGCOMP previa al establecimiento de la ayuda". Se cumplimentará en el campo Referencia de AdE la referencia de la medida asignada por la Comisión Europea.



Ayuda de Estado o de Minimis ☒

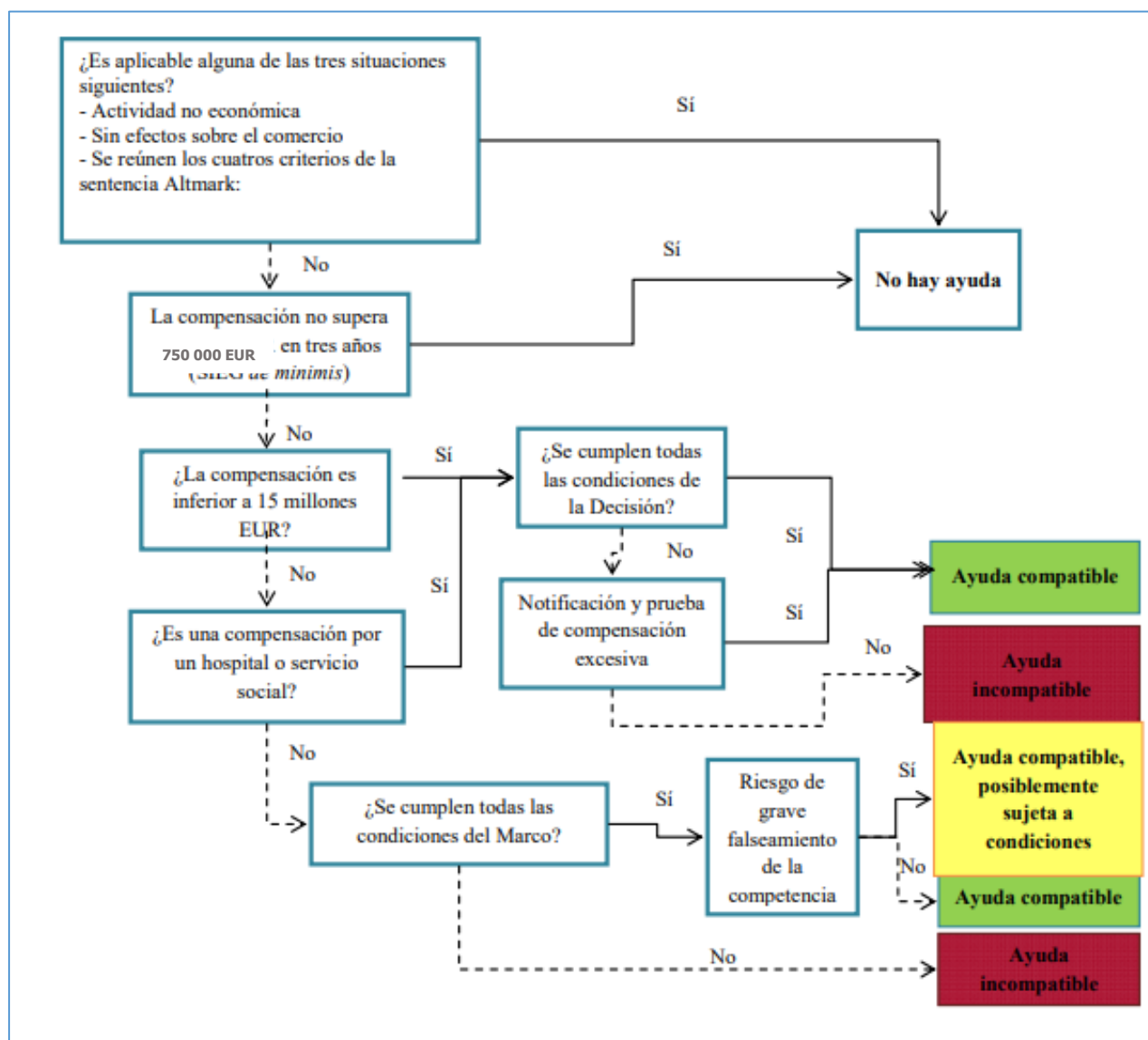
Tipo de autorización de AdE o de Minimis *

Notificación a DGCOMP previa al establecimiento de la ayuda ▼

Referencia de AdE (SA Number, formato SA.xxxxx) *

SA:

El siguiente gráfico expone los pasos principales para determinar qué instrumento del Paquete SIEG puede aplicarse a las compensaciones por servicio público. Atendiendo al instrumento del Paquete SIEG que aplica a las compensaciones por servicio público, difiere el registro en la BDNS:



Fuente: Guía para la aplicación de las normas de la Unión Europea sobre ayudas estatales, contratación pública y el mercado interior a los servicios de interés económico general y, en particular, a los servicios sociales de interés general

10.11 Publicidad y transparencia de AdE a través de la BDNS [Actualizada 2025]

¿Cómo se publican las ayudas de Estado en el portal del SNPSAP?

La BDNS, a través del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones ([SNPSAP](#)), se configura en España como el sitio web exhaustivo sobre Ayudas de Estado a nivel nacional que contiene información resumida relativa a cada de ayuda individual de Estado concedida.

Así, a través de la pestaña "Ayudas de Estado" del SNPSAP se publica:

- El texto completo de cada una de las medidas de ayudas y sus posteriores modificaciones, con indicación de si está sujeta a un reglamento de exención por categoría o si ha sido objeto de notificación previa a la Comisión

- Un enlace a la información resumida de la medida de ayuda facilitada por España a la Comisión mediante la aplicación informática habilitada al efecto por la misma.
- La siguiente información relativa a cada ayuda individual concedida:
 - o La referencia del número de identificación de la ayuda.
 - o El nombre del beneficiario.
 - o El tipo de empresa (PYME o gran empresa) en el momento de concesión de la ayuda.
 - o La región en la que esté establecido el beneficiario, a nivel NUTS 2.
 - o El sector de actividad a nivel de grupo de la NACE.
 - o El elemento de ayuda, expresado en valores enteros en moneda nacional (ayuda equivalente en aquellos instrumentos distintos de subvención).
 - o El instrumento de ayuda (subvención/bonificación de intereses, préstamo/anticipos reembolsables/subvención reembolsable, garantía, ventaja o exención fiscal, financiación de riesgo y otros).
 - o La fecha de concesión de la ayuda.
 - o El objetivo de la ayuda.
 - o La autoridad que concede la ayuda.

Actualmente, se publican todas las ayudas de Estado concedidas con independencia de su importe.

Por lo que respecta a la fecha de concesión, se publican:

- Las concesiones de ayudas reguladas por el Reglamento general (GBER) o el Reglamento de agrícola y forestal (ABER) cuya fecha de concesión sea igual o posterior a 01/07/2016.
- Las concesiones de ayudas sujetas al Reglamento de pesca y acuicultura (FBER) cuya fecha de concesión es igual o posterior a 01/01/2017.
- Las concesiones de ayudas de estado sujetas a la obligación de notificación previa prevista en el artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dictadas a partir del 1/7/2016.

La publicidad en el [SNPSAP](#) de estas ayudas individuales se mantiene durante los 10 años siguientes a la fecha de concesión de la ayuda.

¿Qué consecuencias tiene la falta de publicación de estas ayudas?

Dado que la doctrina de la Comisión Europea, Considerando 27, 32 y 24 del Reglamento (UE) [EU 651/2014](#), establece que **la transparencia es un requisito para la compatibilidad de las ayudas**, cualquier concesión de ayuda que incumpla estas obligaciones de transparencia quedará automáticamente expuesta a los procedimientos de declaración de incompatibilidad con el mercado interior y a sus consecuencias derivadas.

Por su parte, el artículo 10.4 del [RD 130/2019 \(BDNS\)](#) prevé que los órganos obligados al suministro de la información a la BDNS asumirán las responsabilidades derivadas por ese incumplimiento si por ello el Reino de España fuera sancionado por las instituciones europeas, estableciendo:

«Si como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de suministro de información a la BDNS derivadas de normas del derecho de la Unión Europea, el Reino de España fuera sancionado por las instituciones europeas, o condenado por tribunales internacionales o por órganos arbitrales, las Administraciones públicas y demás entidades obligadas asumirán las responsabilidades que se deriven de tal incumplimiento, en los términos previstos en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimientos del Derecho de la Unión Europea, dictado en desarrollo de la disposición adicional segunda de la citada ley».

¿Es suficiente con publicar en BDNS para cumplir las obligaciones de transparencia?

Téngase en cuenta que los requisitos de transparencia no se cumplen con el mero registro de las concesiones de ayuda en BDNS y su publicidad en el portal del SNPSAP, sino que debe complementarse con la notificación de los gastos en SARI2.

A este respecto, SARI2 (State Aid Reporting Interactive 2), es una herramienta informática que apoya el subproceso posterior a la decisión y de seguimiento (información y seguimiento de los gastos) del proceso de gestión de las ayudas de Estado, mediante la cual los Estados miembros presentan a la Comisión sus informes anuales sobre el gasto en ayudas. Incluye todas las medidas de ayuda existentes sobre las que los Estados miembros deben informar de los gastos.

También es importante distinguir esta herramienta de otra, de notificación/autorización mencionada con frecuencia: SANI2 (State Aid Notifications Interactive 2), que es la plataforma es utilizada por los Estados miembros para pre-notificar/notificar cada nueva medida y régimen de ayuda individual pertinente y, por lo tanto, no se utiliza para la notificación/autorización de casos.

10.12 Calificación de AdE de una convocatoria después de registrar en ella concesiones

Registramos una convocatoria y sus concesiones. Ahora nos hemos dado cuenta de que es una ayuda de Estado. ¿Tenemos que anularla y hacer un nuevo procedimiento de registro?

No hay que anularla. Se **debe modificar la convocatoria correspondiente**. Pero hay que ser consciente que al hacer esto necesitará también actualizar otros elementos de datos de la propia convocatoria, de las concesiones que se hayan asociado a la convocatoria y, quizás, también de los beneficiarios, para poder mantener la debida coherencia entre los elementos de información.

Conviene que contacte con el Equipo de Administración y Custodia de la BDNS para asegurar que todo se hace con la debida coherencia.

10.13 Ayudas declaradas incompatibles y reintegros

¿Qué se mostrará en el portal www.infosubvenciones.es en el caso de ayudas declaradas incompatibles con el mercado interior por una Decisión negativa de la Comisión Europea y los reembolsos?

En la BDNS deben registrarse en este caso:

- La convocatoria (que si es ad hoc será una convocatoria "instrumental").
- La concesión.
- El reintegro (Decisión de recuperación de la Comisión Europea).

Las informaciones sobre reintegros no se muestran en el [SNPSAP](http://www.infosubvenciones.es) (puesto que a ello no obliga la [LGS](#)), aunque estén registradas en la BDNS. Si por transparencia es necesario dar publicidad a este extremo, se puede adjuntar copia de la decisión de recuperación como un documento más de la convocatoria, y entonces ese documento estará accesible al público, junto al resto de informaciones de la convocatoria.

La sentencia del TJUE de 5 de marzo de 2019, en el asunto C 349/17 (Eesti Pagar AS), estableció que la autoridad nacional debe **recuperar por su propia iniciativa** una ayuda concedida bajo un Reglamento cuando constate posteriormente que no se cumplían los requisitos para su concesión.

10.14 Lista Deggendorf

He visto la publicación de la Lista Deggendorf en el sitio web italiano sobre ayudas de Estado. ¿Hay alguna razón por la que no se publique esta lista para el caso español?

El denominado “principio Deggendorf” básicamente consiste en suspender la concesión de una nueva ayuda a una empresa hasta que ésta restituya otra anterior que esté pendiente de recuperación. Este principio también se aplica a las empresas que forman una misma “única empresa” en términos de ayudas de Estado.

Además, la [Ley General de Subvenciones](#), en su artículo 13.1.g) recoge como causa que impide obtener la condición de beneficiario o de entidad colaboradora de las subvenciones el no hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen, siendo una de las causas de reintegro previstas en el artículo 37.1.h), la adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del [Tratado de la Unión Europea](#) (actuales art. 107 a 109), de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

Así, se prohíbe el acceso a nuevas subvenciones, sean o no ayudas *de minimis* o ayudas de Estado, a los beneficiarios de ayudas declaradas ilícitas por la UE cuando la empresa no ha restituido la ayuda ilegal percibida.

Nos obstante, en la sentencia del TJUE de 15 de mayo de 1997, el Tribunal de Justicia sostuvo que la Comisión podía declarar la ayuda a una empresa compatible con el mercado interior a condición de que la empresa devolviese una anterior ayuda incompatible, habida cuenta del efecto acumulativo de las ayudas en cuestión.

¿Por qué no se publica la lista Deggendorf en España? o, al menos, ¿por qué la BDNS no recoge esta información de modo similar a como recoge la información de las inhabilitaciones para obtener la condición de beneficiarios por sanciones o sentencias firmes? No podemos ofrecer ninguna respuesta a esta pregunta. Es una decisión que no depende de la BDNS.

10.15 Ayudas de las “Directrices sobre ayudas de protección del medio ambiente y energía 2014-2020”

Tenemos una convocatoria de ayudas incluidas en las Directrices sobre ayudas de Estado en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020 (2014/C 200/01). ¿Cómo se debe registrar en la BDNS?

Esta norma es de carácter transversal, afecta tanto a ayudas de Estado y como a otras medidas que no son tales (medidas políticas).

Si bien estas Directrices definen las condiciones en las que las ayudas a la energía y el medio ambiente podrán ser consideradas compatibles con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE (ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades que no alteran las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común), estas ayudas pueden otorgarse sobre la base de un régimen de ayudas notificado/autorizado en virtud del artículo 108, apartado 3, del Tratado, un régimen de ayudas sujeto a un reglamento de exención por categoría o un régimen de ayudas sujeto a un marco temporal, al artículo 107.2 del TFUE, etc.

Al ser una norma transversal, su clasificación a efectos de BDNS **no supone una categoría diferenciada**.

10.16 Principio de “confianza legítima” en ayudas de Estado

La Sentencia del TJUE de 2019 en el asunto C 349/17, establece que “la autoridad nacional, al conceder una ayuda erróneamente, no puede generar confianza legítima en la regularidad de dicha ayuda en el beneficiario de ésta”. ¿Qué implicaciones tiene esto?

El principio de la **confianza legítima** tiene su origen en el Derecho Administrativo alemán que limita la potestad discrecional de la Administración Pública de anular y revocar actos administrativos (sentencia de la viuda de Berlín del Tribunal Contencioso- Administrativo de Berlín, el 14 de noviembre de 1956 confirmada en sentencia del Tribunal Federal Contencioso-Administrativo). La confianza legítima fue acuñada posteriormente por el Tribunal de Justicia de la UE, configurándose como un principio general del Derecho Comunitario. España incorporó este principio de manera jurisprudencial a principios de los 90, y luego en legislación positiva.

Así, el artículo 3.1.e) de la [Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público](#) establece que las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones el principio de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.

Por tanto, el principio de confianza legítima es un principio rector de la actuación de las Administraciones Públicas consistente en la confianza de los ciudadanos en que la actuación de las Administraciones Públicas no puede ser alterada arbitrariamente. La confianza legítima protege a los individuos y las empresas contra cambios bruscos e imprevisibles de criterio de la Administración que produzcan resultados lesivos, cuando ha sido la Administración la que ha avalado o impulsado su conducta mediante su propio comportamiento.

Ejemplo: una empresa que recibe una subvención de una Administración Pública para realizar un proyecto. Realiza el proyecto subvencionado, incurriendo en una serie de gastos que son financiados total o parcialmente por la subvención. Con posterioridad a la realización del proyecto, la Comisión Europea declara la ayuda **ilegal** porque la ayuda no ha sido objeto de notificación previa y aprueba la Decisión mediante la cual ordena a España recuperar la ayuda. Eso supone que la empresa debe devolver la subvención percibida.

¿Se podría **alegar el principio de confianza legítima para no ejecutar la orden de recuperación** de la Comisión? La empresa ha confiado en la Administración Pública, que ha dictado una resolución de concesión de subvenciones, ha realizado el proyecto observando todas las condiciones impuestas en las bases reguladoras y ha justificado correctamente la subvención. Pero por un error de la Administración debe devolverla.

La respuesta es NO. El TJUE ha sostenido reiteradamente que, en principio, **el beneficiario de una ayuda concedida ilegalmente no puede alegar el principio de confianza legítima contra una orden de recuperación de la Comisión.** Sostiene que un agente económico diligente tiene que comprobar si la ayuda que recibe ha sido objeto de notificación a la Comisión Europea y autorización.

Para justificar que el órgano jurisdiccional nacional no ha ordenado la recuperación debe haber existido un hecho específico y concreto que haya generado la confianza legítima del beneficiario. Por ejemplo, que la Comisión ofrezca garantías concretas de que la medida en cuestión no constituye ayuda de Estado o que no está sujeta a la obligación de suspensión.

Admitir el principio de confianza legítima para eludir las Decisiones de recuperación de la Comisión **vulneraría el principio de libre competencia**, porque la empresa perceptora de la ayuda ilegal se encuentra en una posición más ventajosa que el resto de sus competidores. Además, sería abrir una vía para que los Estados Miembros concedieran ayudas ilegales, eludiendo el artículo 107 del TFUE, justificando su actuación en un error administrativo.

¿Y la empresa “perjudicada” tiene derecho a indemnización?

El eventual reconocimiento de la responsabilidad patrimonial puede llegar a interferir claramente con la efectividad del restablecimiento de las condiciones de competencia, fin que persigue la Decisión de recuperación adoptada por la Comisión Europea.

Obtener, vía daños y perjuicios, el importe de la ayuda que se ha devuelto por ser ilegal e incompatible con el mercado supondría que la empresa volvería a situarse en una situación más ventajosa que sus competidores, por lo que **se podría considerar esta indemnización a su vez una ayuda de Estado.**

Al respecto mencionar la [Sentencia del Tribunal Supremo 1361/2018, de 5 de septiembre](#), resuelve un recurso relativo a las llamadas “vacaciones fiscales vascas”, que fueron declaradas por la Comisión Europea contrarias al derecho de la Unión Europea. La empresa beneficiaria de la ayuda y obligada a devolver la ayuda percibida pretendió una indemnización por responsabilidad patrimonial alegando el principio de confianza legítima. El

Tribunal Supremo considera la «...devolución de los importes a que se vio obligada la recurrente, no constituyen un daño que la misma no tuviera el deber de soportar, sino el mecanismo de regreso a la situación de la equidad empresarial y competencial, que no debió ser alterada por la Diputación demandada, y que, por ello, la Comisión Europea y los Tribunales de la Unión, procedieron a la declaración de tales ayudas como contrarias al mercado común; así pues, tal devolución de lo indebidamente percibido, no puede ser calificado, en modo alguno, de daño antijurídico, resultando, pues, inviable -también desde esta perspectiva- la responsabilidad patrimonial pretendida...».

10.17 Ayudas que recaen en más de un beneficiario

En los casos en que una ayuda individual se otorga a más de un beneficiario (por ejemplo, una garantía concedida a un préstamo con varios prestatarios) ¿cómo se registran en la BDNS estas ayudas? ¿Se declara el importe total para cada uno de los beneficiarios, o cómo se distribuye?

Lo lógico es que, si el préstamo se divide entre varios, la propia regulación de ese préstamo o del contrato de aval establezca las condiciones y reparto pertinentes.

En cuanto al registro en la BDNS, hay que ver en qué condiciones se otorga la ayuda en cada caso. La BDNS está diseñada para registrar al beneficiario y a los partícipes cuando cada uno de ellos se compromete a realizar una parte de la actividad subvencionada. Para ello, una vez registrada la concesión de la ayuda al beneficiario la BDNS permite detallar el proyecto, identificando a cada uno de los partícipes.

En caso de que se apreciara que no se cumple alguna de las condiciones para la concesión de las ayudas y fuera necesario solicitar a los beneficiarios su devolución, ¿cuál sería el régimen que se aplicaría entre los beneficiarios? ¿Responden todos los beneficiarios solidariamente de la obligación de devolver la ayuda?

En caso de que la ayuda se otorgara "por mitades" se podría registrar cada mitad a un beneficiario, pero eso no altera el régimen jurídico que finalmente imperará en caso de tener que exigir el reintegro (art. 3.5 [RD 130/2019](#)).

La normativa comunitaria sobre ayudas de Estado no interviene aquí. Salvo que se esté pensando en una Decisión negativa de incompatibilidad, con la consiguiente obligación de reembolso. En tal caso, queda obligado el beneficiario (que la Administración concedente identifica) a devolver la ayuda incompatible que efectivamente recibió en su día, con intereses.

En cuanto a la responsabilidad en caso de reintegro, la normativa propia de cada ayuda ha ido estableciendo su régimen. Para el caso general rige el artículo 40 de la [LGS](#). A este respecto, resulta muy ilustrativa la sentencia [STS 963/2019](#) que reconoce que la Administración concedente de la ayuda pública puede exigir la obligación de reintegro a la entidad coordinadora del proyecto o «al resto de entidades partícipes de forma solidaria, aun con carácter limitado, en proporción, respecto a éstas, a las cantidades concedidas a cada una en consonancia con las actividades subvencionadas que se hubieren comprometido a efectuar».

10.18 Efecto incentivador de las ayudas

Si el efecto incentivador es un principio fundamental de las ayudas públicas para ser compatibles con el mercado interior, ¿implica esto la prohibición de conceder ayudas al funcionamiento?

El efecto incentivador es uno de los criterios tenidos en consideración para determinar si una medida de ayuda es compatible con el artículo 107 apartado 3 del [Tratado de Funcionamiento de la UE](#).

Existe efecto incentivador si la ayuda modifica el comportamiento de las empresas afectadas de tal forma que emprendan una actividad adicional o complementaria que no desarrollarían sin la ayuda, o que emprenderían de una forma restringida, limitada, diferente o, en los casos de ayudas regionales, en otro lugar.

Un ejemplo claro de efecto incentivador se ve en las ayudas a la extensión de la banda ancha, que tienen por finalidad extender el despliegue de las redes de banda ancha de alta velocidad a las zonas rurales y de menor densidad de población. Con estas ayudas se pretende incentivar a los operadores de mercado a invertir en la instalación de banda ancha en zonas rurales, que en condiciones normales de mercado no invertiría por no resultar rentable.

Pero si en lugar de dar una ayuda a la inversión a los operadores de mercado se les concediera una ayuda al funcionamiento, subvencionando los costes corrientes de su actividad normal, ¿invertirían estas empresas en la instalación de banda ancha en las zonas rurales? Seguramente no, porque la inversión seguiría sin ser rentable. En este caso, la ayuda al funcionamiento no tendría efecto incentivador.

Con carácter general, las ayudas al funcionamiento no tienen efecto incentivador. Pero el marco normativo de las ayudas de Estado es muy complejo y siempre hay particularidades, excepciones y matices.

A modo de ejemplo, en las ayudas de finalidad regional se permiten las ayudas de funcionamiento, considerándolas compatibles si se demuestra que son necesarias para el desarrollo de la zona (es decir, tienen por objeto reducir determinadas dificultades específicas a las que se enfrentan las PYMES en las zonas más desfavorecidas), si compensan los costes adicionales ocasionados por el ejercicio de la actividad económica en regiones ultraperiféricas (elevado gasto de transporte de mercancías a las islas) o si impiden o reducen la despoblación en zonas poco pobladas.

Así, si a las empresas que se constituyen en Canarias se les concede ayudas de funcionamiento para compensar los gastos de transporte de mercancías con destino u origen las islas, sin duda estás incentivando la localización de las empresas en la isla. Esta medida sí tiene un efecto incentivador.

¿Y en el caso de las ayudas al funcionamiento para instalaciones de producción de energía eléctrica renovable?

En el caso de “ayudas al funcionamiento para instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de energía renovable”, hay que acudir al [Reglamento \(UE\) 651/2014](#). El citado Reglamento (UE) reconoce la exención por categoría y, por tanto, la compatibilidad de las ayudas de funcionamiento para instalaciones de pequeña escala que producen energía renovable siempre y cuando reúnan las condiciones establecidas en su artículo 43. Por lo que respecta a las ayudas de funcionamiento para instalaciones a mayor escala quedan cubiertas por la exención por categoría cuando el falseamiento de la competencia es limitado (cumplen las condiciones del artículo 42).

Por tanto, si bien con carácter general las ayudas de funcionamiento no tienen carácter incentivador, la Comisión Europea ha admitido que en determinadas medidas de ayudas al funcionamiento existe un efecto incentivador y, por tanto, son compatibles.

10.19 Operadores económicos de ámbito estrictamente local

¿Es de aplicación la normativa de ayudas de Estado cuando las ayudas son dirigidas a operadores económicos de un ámbito estrictamente local y que difícilmente pueden amenazar a la libre competencia? (p.e. una línea de subvención para renovación de flota para taxis).

El hecho de que la ayuda vaya dirigido a empresas de ámbito local y que no realicen intercambios comerciales fuera de ese ámbito no implica que esa ayuda no pueda ser considerada ayuda de Estado.

La Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda de Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del [Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea](#), en la que se aclaran conceptos clave relativos al concepto de ayuda de Estado es importante en este sentido.

Así, la Comisión señala que *"Puede considerarse que el apoyo público es capaz de tener efectos sobre los intercambios comerciales entre Estados miembros aun cuando el beneficiario no participe directamente en intercambios comerciales transfronterizos. Por ejemplo, la subvención puede hacer más difícil que los operadores de otros Estados miembros entren en el mercado, manteniendo o aumentando la oferta local. (Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de enero de 2015, Eventech/The Parking Adjudicator, C 518/13, ECLI:EU:C:2015:9, apartado 67; sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de mayo de 2013, Libert y otros, asuntos acumulados C-197/11 y C-203/11, ECLI:EU: C:2013:288, apartado 78; sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, apartado 78.)"*

Respecto al tamaño de las empresas beneficiarias o el reducido importe de las ayudas concedidas, la Comisión recuerda que: *"La cuantía relativamente reducida de una ayuda o el tamaño relativamente modesto de la empresa beneficiaria no excluyen a priori la posibilidad de que se vean afectados los intercambios entre Estados miembros (Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de enero de 2015, Eventech/The Parking Adjudicator, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, apartado 68.). Una subvención pública concedida a una empresa que presta únicamente servicios locales o regionales y que no presta servicios fuera de su Estado de origen puede, a pesar de ello, tener una incidencia en los intercambios entre los Estados miembros cuando empresas de otros Estados miembros podrían prestar esos servicios (también mediante el derecho de establecimiento) y esa posibilidad no es solo hipotética. Por ejemplo, cuando un Estado miembro concede una subvención pública a una empresa para la prestación de servicios de transporte, la prestación de esos servicios, debido a la subvención, puede mantenerse o aumentar, disminuyendo con ello las posibilidades de las empresas establecidas en otros Estados miembros de prestar sus servicios de transporte en el mercado de dicho Estado miembro (Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, apartados 77 y 78.). No obstante, ese efecto es menos probable cuando el ámbito de la actividad económica es muy pequeño, como puede poner de manifiesto, por ejemplo, un volumen de negocios muy bajo".*

10.20 Contratos públicos como ayuda de Estado

¿La adjudicación de un contrato de una campaña institucional sin licitación es ayuda de Estado? ¿Y si se trata de un contrato menor?

Este es un tema ha sido objeto de un arduo debate doctrinal y amplia jurisprudencia del TJ de la UE.

El artículo 107 del [TFUE](#) señala que son incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estado miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen con falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

Si se interpreta literalmente este precepto, la adjudicación de un contrato (p.e. contratos sometidos a regulación armonizada en los que se presume un interés transfronterizo) puede ser un ayuda de Estado incompatible en la medida en que se trata de una medida selectiva que otorga una ventaja económica al contratista adjudicatario y esa ventaja se financia con fondos públicos.

Sin embargo, la Comisión Europea presume que el cumplimiento de la normativa de contratación pública en el procedimiento de adjudicación de un contrato público excluye, en principio, la existencia de ayudas de Estado.

Esta presunción encuentra su fundamento en que la normativa en materia de contratación pública limita la discrecionalidad de la Administración pública en el procedimiento de selección de candidatos: la salvaguarda de la libertad de competencia y la selección de la oferta más ventajosa económicamente evitan el carácter selectivo de la medida, así como la concesión de cualquier posible ventaja económica a favor del adjudicatario.

Por tanto, la adjudicación de un contrato sin observar la normativa de contratación pública podrá ser considerado ayuda de Estado si reúne los elementos definitorios establecidos en el art. 107 del [TFUE](#).

Respecto a los contratos menores, al estar regulados en la Ley de Contratos del Sector Público (art. 118), en principio también se excluyen del concepto de ayuda de Estado.

Puede ser conveniente la lectura del [Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE](#), en el que la Comisión reconoce que incrementar la discrecionalidad de la Administración Pública en la contratación pública aumenta el riesgo de selectividad de la medida, así como la posible existencia de una ventaja económica. Por ello, exige una mayor coherencia entre la legislación de la contratación pública y el control de ayudas de Estado.

10.21 Novación de condiciones en instrumentos de ayuda **[Actualizada 2025]**

¿Cómo se debe considerar la novación en las condiciones de un préstamo otorgado inicialmente, por ejemplo, con una carencia de 2 años, y calculada su ayuda equivalente, que es posteriormente novado ampliándose estas condiciones a 5 años? ¿Hay que calcular de nuevo la ayuda equivalente, y corregir el registro de la ayuda en BDNS?

El criterio de la Comisión Europea en estas situaciones es que **se produce una nueva medida** de ayuda de Estado, es decir, habrá que registrar una nueva concesión (de préstamo o garantía).

El beneficiario de una ayuda de una bonificación del tipo de interés aplicable a un préstamo ha cancelado anticipadamente el préstamo. ¿Cómo debo reflejar esta situación en la BDNS?

A efectos de la obligación de transparencia de las ayudas de Estado, el documento *Encoding information in the Transparency Award Module for State aid* establece que la obligación de transparencia tiene por objeto recoger información sobre las ayudas concedidas **en el momento de su concesión** y no pretende hacer un seguimiento de la evolución de los proyectos y los gastos no siendo necesario realizar revisiones del importe de las ayudas inicialmente concedidas salvo que estas revisiones supongan superar el umbral de publicación o corregir un error de registro.

Esto es así, porque la publicidad de las ayudas de Estado a través del correspondiente Registro Nacional una herramienta utilizada para supervisar y proporcionar información en beneficio de todas las partes interesadas sobre el comportamiento de concesión de las autoridades nacionales, pero no es una herramienta para verificar y controlar el gasto.

Ahora bien, el registro de la información de las subvenciones y ayudas públicas en la BDNS no sólo da cumplimiento a las obligaciones de transparencia impuesta por la Unión Europea, también es un instrumento para dar publicidad a las subvenciones y ayudas públicas concedidas bajo las normas de transparencia nacionales (artículo 8.1.c de la [Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno](#)) y para la lucha contra el fraude y artículo 20 de la [Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones](#)).

Por ese motivo, si un préstamo con intereses bonificados se cancela anticipadamente lo correcto es modificar en la BDNS el importe del EBS. Esta revisión del EBS inicialmente concedido permitirá reflejar la realidad de la ayuda concedida que redundará en la transparencia de la gestión de las ayudas. Asimismo, reflejar el importe del EBS realmente percibido por el beneficiario permitirá garantizar que no se superen los umbrales de las ayudas de *minimis* o, en su caso, los umbrales de notificación e intensidad de la ayuda.

10.22 Ayudas a concesionarios de servicios públicos

Si no hay ayuda de Estado cuando las entidades públicas actúan en calidad de administración pública, ¿se puede entender que la ayuda a una empresa privada concesionaria de un servicio público tampoco es AdE?

[Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público](#), considera posible que en el contrato de concesión de servicios la Administración contratante acuerde conceder aportaciones, ayudas o subvenciones a

la explotación del servicio con el fin de garantizar su viabilidad económica, pero manteniendo la asunción del riesgo por el concesionario.

Por tanto, la Administración pública contratante puede otorgar subvenciones al concesionario para compensar el importe deficitario de las tarifas o precios públicos que abonan los usuarios, y que son fijadas por el órgano de contratación.

En la sentencia Altmark, de 2003, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) mantiene que una compensación por servicio público no es constitutiva de ayuda estatal con arreglo al artículo 107 del [TFUE](#) siempre que se cumplan cuatro condiciones simultáneas:

- la empresa beneficiaria debe tener las obligaciones de servicio público claramente definidas;
- los parámetros para el cálculo de la compensación deben establecerse previamente de forma objetiva y transparente;
- la compensación no debe superar los gastos ocasionados y un beneficio razonable, es decir sin compensación excesiva; y
- la elección de la empresa encargada se realizará mediante un procedimiento de contratación pública o el nivel de la compensación debe calcularse sobre la base de una empresa media, «bien gestionada» y adecuadamente equipada con los medios pertinentes.

Cuando uno o más de los criterios de la sentencia Altmark no se cumplan, y sí se cumplen las condiciones generales contempladas en el artículo 107, apartado 1, del [TFUE](#), la compensación por servicio público constituye ayuda de Estado.

Ver pregunta 10.10 Ayudas a Servicios de Interés Económico General (SIEG).

10.23 Ayudas de Estado y vigencia de Reglamentos de exención de categoría [Nueva 2025]

Como los Reglamentos (UE) se enmiendan, y la vida administrativa/presupuestaria de las convocatorias en España puede ser muy azarosa, ¿qué versión de un Reglamento hay que aplicar?

Veamos un sencillo ejemplo:

- El 01/01/2024 entra en vigor un nuevo Reglamento AdE, para ayudas de Estado a viajes espaciales.
- El 06/06/2024 la Agencia Espacial Española registra en SANI2 la medida SA.XXXXXX acogándose a ese Reglamento.
- El 01/01/2025 entra en vigor una enmienda del anterior Reglamento, con modificación de varios artículos y se añaden otros (Reglamento enmendado 1).
- El 07/07/2025 se registra y publica en BDNS una convocatoria de ayudas de la Agencia Espacial Española acogida al Reglamento de ayudas a viajes espaciales.
- El 01/01/2026 entra en vigor otra enmienda del anterior Reglamento, con modificación otra vez de varios artículos y se añaden otros (reglamento enmendado 2).
- El 08/08/2026 se resuelven las concesiones de ayudas de la convocatoria de ayudas de la AEE.

¿Qué régimen jurídico se aplica en este flujo? ¿El original, el enmendado 1, o el enmendado 2?

El régimen jurídico a aplicar es el del Reglamento original, que es bajo el que se comunicó el régimen a la DGCOMP, siempre que en la comunicación constara que el régimen estaría en vigor varios años. En caso contrario, la comunicación ya no valdría.

Las enmiendas, a estos efectos, funcionarían como nuevos Reglamentos.

¿Y si son ayudas de Estado “notificadas”?

En las ayudas de Estado notificadas es distinto. Se autorizan, previa negociación de un proyecto, con una Decisión de la Comisión, norma que incluye un período de concesión de las ayudas (el pago puede ser posterior).

Algo así: “el régimen estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023”. Desde la fecha de la Decisión y hasta ese momento se pueden conceder ayudas.

La fecha de inicio del expediente administrativo sería irrelevante. Lo importante es la fecha de “notificación”, para que la ayuda sea legal. Además, debe ser compatible, cosa que se dice en la Decisión.

Recordamos que concesión es el momento en que la ayuda se pone a disposición del beneficiario.

Además, normalmente la propia norma (Convocatoria, Orden de Bases, RD...) indica el Reglamento o Decisión que está aplicando.

10.24 Régimen transitorio de los Reglamentos de minimis [Nueva 2025]

El 13 de diciembre de 2023 se aprobó el nuevo Reglamento (UE) 2023/2831 (MINIMIS GENERAL) que sustituye al anterior Reglamento (UE) 1407/2013.

El Reglamento (UE) 2023/2831 establece las condiciones con arreglo a las cuales se considera que las medidas incluidas en su ámbito de aplicación no afectan al comercio entre Estados miembros y no falsean ni amenazan la competencia. Entre estas condiciones está la de no sobrepasar el límite máximo de ayudas de minimis concedidas a una empresa en un determinado periodo. El citado Reglamento aumenta el límite máximo de ayudas de minimis, pasando de 200 000 a 300 000 euros (art. 3.2).

Con el objetivo de favorecer a la empresa, el citado Reglamento recoge la siguiente disposición transitoria (artículo 7.1):

«1. El presente Reglamento se aplicará a las ayudas concedidas antes de su entrada en vigor si tales ayudas reúnen todas las condiciones establecidas en él».

Por tanto, las ayudas concedidas entre el 13 de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023 pueden estar sujetas al límite de 300 000 euros siempre que reúnan las condiciones establecidas en el nuevo Reglamento.

A partir de 1 de enero de 2024 el Reglamento (UE) 2023/2831 es de aplicación directa.

Ahora bien, el Reglamento (UE) 1407/2013 contiene la siguiente disposición transitoria (art. 7.4):

«4. Al término del período de validez del presente Reglamento, cualquier régimen de ayudas de minimis que cumpla las condiciones establecidas en él seguirá cubierto por el mismo durante un período suplementario de seis meses».

La existencia de este período transitorio, como alternativa a la aplicación inmediata del nuevo Reglamento, permite conceder nuevas ayudas de minimis hasta el 30 de junio de 2024 en la medida en que cumplan los requisitos establecidos en Reglamento (UE) 1407/2013, lo que significa que las ayudas de minimis pueden concederse hasta 200 000 EUR durante un período de 3 ejercicios fiscales (el ejercicio fiscal del momento de la concesión y los dos ejercicios fiscales anteriores).

En el período comprendido entre el 13 y 31 de diciembre de 2023 se ha denegado la concesión de una nueva ayuda de minimis a una empresa por haber superado el límite de 200 000 euros en los tres ejercicios fiscales. Sin embargo, si la empresa cumplía el límite máximo de ayudas de minimis del nuevo Reglamento (300 000 euros) y la ayuda reúne las condiciones establecidas en el nuevo Reglamento ¿se podrían revisar la resolución de denegación?

Así es. Ahora bien, el Reglamento de minimis no concede ningún derecho a las empresas a recibir ayudas ni cuestiona la decisión de los Estados miembros de no conceder ayudas antes de su fecha de entrada en vigor.

10.25 Sobre el cómputo de los tres años en los Reglamentos de minimis [Nueva 2025]

¿Cómo se computan los periodos de tres años en los nuevos Reglamentos de minimis (UE) 2023/2831, 2023/2832 y 1048/2013 enmendado?

El cómputo del período trienal se hace de fecha a fecha, teniendo en cuenta la fecha de concesión. Según el Considerando 11 del [Reglamento UE 2023/2831](#), el período de 3 años debe evaluarse de forma continua.

De ello se deduce que, a partir del 1 de enero de 2024, cualquier ayuda *de minimis* puede otorgarse siempre que no se superen los 300.000 € a lo largo de un período de los 3 años anteriores a la fecha de concesión.

No obstante, hay un periodo transitorio de seis meses donde se pueden otorgar ayudas de acuerdo con el antiguo [Reglamento \(UE\) 1407/2013](#), 200 000€ en tres ejercicios fiscales.

Respecto al cómputo de los periodos, hay que estar a lo previsto en el [Reglamento EEC-Euratom 1182/71](#), que dice que «*un plazo expresado en semanas, meses o años comenzará al inicio de la primera hora del primer día del plazo y terminará al final de la última hora del día de la última semana, del último mes o del último año que sea el mismo día de la semana o caiga en la misma fecha que el día a partir del cual comienza el plazo. Si, en un plazo expresado en meses o en años, el día en que deba expirar no cae en el último mes, el plazo terminará al expirar la última hora del último día de dicho mes*».

Es decir que el periodo de tres años, según estos Reglamentos de se computa, por ejemplo, del 23 de febrero de 2022 hasta el 23 de febrero de 2025.

A los efectos de esta pregunta puede ser interesante consultar el video **Los nuevos Reglamentos de minimis 2024** https://youtu.be/PucQCRvzwgE?si=6PLFq_aFHsQ2hxpN

El mismo sistema de cómputo de los tres años se establece en el [Reglamento 1408/2013](#) enmendado por el [Reglamento 2024/3118](#).

10.26 Concesión de ayudas de Estado sujetas al Reglamento (UE) 651/2014 a empresas en crisis [Nueva 2025]

Una empresa que pasó a estar en crisis en el periodo 2020 a 2021 y continúa estando en crisis en 2023 ¿puede recibir ayudas al amparo del RGEC?

El apartado c del artículo 1.4, del Reglamento (UE) 651/2014 establece que este Reglamento no se aplicará a «*las ayudas a empresas en crisis, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los daños causados por determinados desastres naturales, los regímenes de ayudas para la creación de empresas, los regímenes de ayudas regionales de funcionamiento, los regímenes de ayudas contemplados en el artículo 19 ter, las ayudas a pymes en virtud del artículo 56 septies y las ayudas a intermediarios financieros en virtud de los artículos 16, 21, 22 y 39, así como de la sección 16 del capítulo III, siempre que las empresas en crisis no reciban un trato más favorable que las demás empresas. No obstante, el presente Reglamento será aplicable, como excepción, a las empresas que no se encontraban en crisis el 31 de diciembre de 2019, pero pasaron a ser empresas en crisis durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021*».

Este precepto fue adaptado por el [Reglamento \(UE\) 2021/1237](#), de la Comisión, de 23 de julio de 2021 en cuyo considerando segundo establece:

«*A la vista de las consecuencias económicas y financieras de la pandemia de COVID-19 en las empresas y a fin de garantizar la coherencia con la respuesta política general adoptada por la Comisión, especialmente en el período 2020-2021, el Reglamento (UE) n° 651/2014 debe adaptarse. Las empresas que pasaron a ser empresas en crisis como consecuencia de la pandemia de COVID-19 deben poder seguir optando a las ayudas con arreglo al Reglamento (UE) n° 651/2014 durante un período limitado, a saber, del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.*»

Por tanto, las empresas que no encontrándose en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019 pasaron a estar en crisis, solo pudieron ser beneficiarias de ayudas sujetas al Reglamento 651/2014 durante el periodo 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2021. Con posterioridad a dicho periodo, si la empresa sigue estando en situación de crisis no puede optar a ayudas del [Reglamento \(UE\) 651/2014](#) salvo que sean ayudas de regímenes excepcionados (ayudas destinadas a reparar los daños causados por desastres naturales, ayudas para la creación de empresas, ayudas regionales de funcionamiento,...) y la empresa en crisis no reciba un trato más favorable que el recibido por las restantes empresas.

Las ayudas concedidas a empresas creadas con posterioridad a 31 de diciembre de 2019 que en el momento de la concesión se encontraban en situación de crisis ¿pueden estar sujetas a la excepción contemplada en el artículo 1.4.c) del Reglamento (UE) 651/2014?

Con carácter general, el [Reglamento \(UE\) 651/2014](#) no es de aplicación a las ayudas recibidas por empresas en crisis salvo que se traten de ayudas destinadas a reparar los daños causados por determinados desastres naturales, ayudas para la creación de empresas, ayudas regionales de funcionamiento, ayudas a las pymes que se benefician de proyectos de desarrollo local participativo y ayudas incluidas en productos financieros de carácter comercial a través de intermediarios apoyados por el Fondo InvestEU. Entendemos que las ayudas concedidas objeto de consulta no tienen cabida en ninguna de estas excepciones, porque de lo contrario estaríamos ante ayudas sujetas al [Reglamento \(UE\) 651/2014](#).

Ahora bien, el [Reglamento \(UE\) 2021/1237](#) de la Comisión de 23 de julio de 2021 modificó el [Reglamento \(UE\) 651/2014](#) a fin de garantizar la coherencia con la respuesta política general adoptada por la Comisión ante la pandemia de la COVID- 19, de manera que las empresas que pasaron a ser empresas en crisis como consecuencia de la pandemia de COVID-19, han podido optar a las ayudas con arreglo al Reglamento (UE) 651/2014 durante el periodo limitado del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021

El requisito impuesto para aplicar esta excepción es que las empresas no se encontraran en crisis el 31 de diciembre de 2019, pero como consecuencia del COVID-19 pasasen a ser consideradas en crisis durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.

La duda que se plantea es si esta excepción es aplicable a las empresas creadas con posterioridad a 31 de diciembre y que en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y 31 de diciembre de 2021 estaban en crisis.

La cuestión de fondo es determinar si una empresa creada en 2020 o 2021 puede ser considerada empresa en crisis según el artículo 2.18 del [Reglamento \(UE\) 651/2014](#) que define qué es una empresa en crisis a efectos del este Reglamento (UE). Así se entiende por empresa en crisis:

- Artículo 2.18.a) «*si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (distinta de una pyme con menos de tres años de antigüedad...*»

Si la empresa se creó con posterioridad a 31 de diciembre de 2019 y la ayuda se concedió en el periodo transitorio comprendido entre el 1 de enero de 2020 y 31 de diciembre de 2021, no es posible que la empresa tenga una antigüedad de más de tres años, por tanto, no puede ser considerada empresa en crisis según el artículo 2.18.a.

- Artículo 2.18.b) «*si se trata de una sociedad en la que al menos algunos de sus socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad (distinta de una pyme con menos de tres años de antigüedad...*»

Si la empresa se creó con posterioridad a 31 de diciembre de 2019 y la ayuda se concedió en el periodo transitoria comprendido entre el 1 de enero de 2020 y 31 de diciembre de 2021, no es posible que la empresa tenga una antigüedad de más de tres años, por tanto, no puede ser considerada empresa en crisis según el artículo 2.18.b.

- Artículo 2.18.c) «cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o insolvencia o reúna los criterios establecidos en su Derecho nacional para ser sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia a petición de sus acreedores»

La declaración de concurso procede en caso de insolvencia del deudor, entendiendo por insolvencia que el deudor no puede cumplir **regularmente** sus obligaciones exigibles. También procede la declaración de concurso cuando el deudor se encuentra en un estado de insolvencia inminente, es decir, que dentro de los tres meses siguientes no podrá cumplir **regular y puntualmente** sus obligaciones.

Para que un acreedor pueda solicitar la de declaración de concurso, de conformidad con el [Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal](#), es preciso que fundamente su solicitud en alguno de los siguientes hechos externos reveladores del estado de insolvencia:

- o La existencia de una previa declaración judicial o administrativa de insolvencia del deudor, siempre que sea firme.
- o La existencia de un título por el cual se haya despachado mandamiento de ejecución o apremio sin que del embargo hubieran resultado bienes libres conocidos bastantes para el pago.
- o La existencia de embargos por ejecuciones en curso que afecten de una manera general al patrimonio del deudor.
- o El sobreseimiento generalizado en el pago corriente de las obligaciones del deudor.
- o El sobreseimiento generalizado en el pago de las obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; el de las cuotas de la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período, o el de los salarios e indemnizaciones a los trabajadores y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.
- o El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor.

Teniendo en cuenta los tiempos procedimentales y judiciales, difícilmente un acreedor puede justificar su solicitud en alguno de estos hechos. La empresa beneficiaria tiene una vida inferior a 2 años y durante el periodo de excepción, los plazos de los procedimientos estuvieron suspendidos, por lo que las posibilidades de disponer de una declaración judicial que avale uno de estos hechos es improbable.

Por tanto, es muy improbable que se pueda considerar a la nueva empresa en crisis en virtud de este precepto. Solo si se tiene constancia de que la empresa se encontraba en el momento de concesión de la ayuda en esta situación, no se aplicaría el Reglamento (UE) 651/2014.

- Artículo 2.18.d) «cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o haya recibido ayuda de reestructuración y esté todavía sujeta a un plan de reestructuración;»

Las propias Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis establecen que las empresas de nueva creación no pueden acogerse a estas, aunque su situación financiera inicial sea precaria. Por tanto, la empresa no puede ser considerada como empresa en crisis en virtud del artículo 2.18.d) del [Reglamento \(UE\) 651/2014](#).

- Artículo 2.18.e) «si se trata de una empresa distinta de una PYME, cuando durante los dos ejercicios anteriores:... »

Para ser considerada empresa en crisis en virtud de este precepto, es preciso que la empresa tenga al menos 3 años de antigüedad, el año en curso y los dos años anteriores. La empresa consultada no tiene esta antigüedad, por tanto, no puede ser considerada empresa en crisis.

Por lo expuesto, salvo que en el momento de la concesión de las ayudas la empresa se encontrase incurso en un procedimiento concursal o reuniese los criterios establecidos en el TR de la Ley concursal para que un acreedor solicitase la declaración concursal, las empresas de nueva creación que han recibido las ayudas objeto de consulta no son empresas en crisis en los términos que establece el artículo 2.18 [del Reglamento \(UE\) 651/2014](#) y pueden optar a las ayudas reguladas en este Reglamento (UE).

Esta interpretación está en línea tanto con el Reglamento (UE) 651/2014 como con las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis:

- El [Reglamento \(UE\) 651/2014](#) como otros reglamentos (UE) y comunicaciones de ayudas estatales prohíben que las empresas en crisis reciban ayudas. Ahora bien, las PYME con menos de tres años de antigüedad no se consideran empresa en crisis salvo que la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o insolvencia o reúna los criterios establecidos en su Derecho nacional para ser sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia a petición de sus acreedores. Así se recoge en las Directrices de ayudas estatales de salvamento y de reestructuración.
- Las Directrices de salvamento establecen que una empresa es de nueva creación durante los tres primeros años siguientes al inicio de sus operaciones en el correspondiente sector de actividad y solo después de transcurrido dicho período pueden obtener ayuda de salvamento y de reestructuración. Durante ese periodo, no puede recibir ayudas de salvamento ni de reestructuración.

10.27 Beneficiarios públicos de ayudas de minimis o ayudas de Estado [Nueva 2025]

¿Puede un Ayuntamiento ser perceptor de una ayuda de minimis o una ayuda de Estado?

Son beneficiarios de las ayudas *de minimis* o ayudas de Estado las personas físicas o jurídicas que desarrollan actividad económica ("empresa"). Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una empresa es una entidad que ejerce una actividad económica, con independencia de su estatuto jurídico y de su modo de financiación. El hecho de que el beneficiario forme parte de la Administración Públicas no implica que esas ayudas se excluyan de la aplicación del artículo 107.1 del [Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea](#). El único criterio que se debe aplicar es si es si el beneficiario ejerce una actividad económica.

En este sentido, la [Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea](#) establece que "el artículo 107, apartado 1, del Tratado no se aplica cuando el Estado actúa «ejerciendo la autoridad pública» o cuando las entidades públicas actúan «en calidad de Administraciones públicas» (14). Puede considerarse que una entidad actúa ejerciendo la autoridad pública cuando la actividad en cuestión forma parte de las funciones esenciales del Estado o está relacionada con dichas funciones por su naturaleza, por su objeto y por las normas a las que está sujeta. En términos generales, salvo que el Estado miembro en cuestión haya decidido introducir mecanismos de mercado, las actividades que forman parte intrínseca de las prerrogativas de la autoridad oficial y que son desempeñadas por el Estado no constituyen actividades económicas".

10.28 Verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia [Nueva 2025]

¿Qué es el "compliance check" de ayudas de Estado?

Aumentar la transparencia del gasto público es un objetivo prioritario de la Comisión Europea. Las disposiciones sobre transparencia introducidas en el proceso de Modernización de las Ayudas Estatales (SAM) abordan esta preocupación exigiendo a los Estados miembros que publiquen información detallada sobre todas las ayudas individuales concedidas por encima de determinados umbrales, dependiendo de la base jurídica de la medida de ayuda y del sector de actividad de la empresa.

Las disposiciones de Transparencia, introducidas por el proceso de Modernización (SAM), exigen publicar información detallada sobre todas las ayudas individuales que superen determinados umbrales, **en función de la base jurídica de la medida de ayuda y del sector de actividad de la empresa**. En este contexto, la Comisión comprueba periódicamente la exhaustividad y exactitud de la información publicada con arreglo a los

requisitos de transparencia mediante controles de conformidad (Ejercicio periódico de Verificación – Transparencia).

Estos ejercicios de verificación se hacen habitualmente bastantes meses después de concluido en ejercicio correspondiente, y aproximadamente en julio del ejercicio $x+2$ se comunican a los Estados miembros. Así en 2024 investigó el cumplimiento de las normas de transparencia de las ayudas concedidas en 2022.

El análisis sigue un enfoque de datos integrados que combina información procedente de tres fuentes de datos sobre ayudas estatales:

- (i) gasto en ayudas estatales (SARI2),
- (ii) aplicaciones de gestión de casos (Case@EC) y
- (iii) registros nacionales de transparencia.

La información de Case@EC se utiliza para identificar las medidas de ayuda estatal sujetas a transparencia, así como el número previsto de beneficiarios de cada medida de ayuda estatal. Una vez identificadas las medidas, se utiliza la información de SARI2 para verificar qué medidas activas han gastado más del umbral para la publicación en el periodo considerado en el análisis. Utilizando el número previsto de beneficiarios de Case@EC y el importe anual gastado en una medida determinada de SARI2, se calcula el importe estimado gastado por beneficiario. Por último, se buscan las mismas medidas y ayudas relacionadas en los registros nacionales de transparencia, donde el análisis permite clasificar los problemas de cumplimiento. El resultado de este proceso son los problemas de cumplimiento con respecto a la obligación de publicación.

En el proceso se iteran dos comunicaciones, una primera aproximadamente en Julio, con los resultados de las investigaciones de la Comisión, dando oportunidad a los EM a clarificar los distintos asuntos, y una segunda, posterior, aproximadamente a fines del año $x+2$.

¿Qué aspectos se comprueban por la Comisión Europea?

Incrementalmente la Comisión ha ido incorporando más aspectos a su control. En el último ejercicio, llevado a cabo en 2024 sobre las concesiones de 2022, se han verificado los siguientes puntos:

- A. Concesiones con observaciones de incumplimiento directo (*direct compliance issues*).
- B. Concesiones con observaciones de incumplimiento directo (*direct compliance issues*).
- C. Incumplimiento de los plazos de publicación.
- D. Incumplimientos de identificación de los beneficiarios.
- E. Errores en el código SA. Number.

¿Qué es un incumplimiento directo (*direct compliance issue*)?

Los problemas de incumplimiento directo surgen cuando un Estado miembro no publica una concesión de ayuda (es decir, no hay entradas o entradas con el importe registrado igual a cero en el registro nacional) respecto a una medida para la que el importe estimado gastado por beneficiario es igual o superior a unos determinados umbrales establecidos por la Comisión.

Al calcular el importe estimado gastado por beneficiario, la Comisión distingue entre las medidas de ayuda de Estado clasificadas como "Ayuda individual dentro de un régimen" o "casos *ad hoc*" y los "régimenes". En los primeros casos, el importe gastado por beneficiario corresponde automáticamente al importe gastado en virtud de la medida. En el segundo caso, la presencia de problemas de conformidad sólo puede establecerse para los casos en los que el número estimado de beneficiarios se conoce *ex ante* (normalmente se expresa en intervalos, por lo que no es preciso) y puede calcularse un importe medio gastado por beneficiario.

La mayoría de los casos en los que se atribuye este incumplimiento son sencillamente problemas de ausencia del registro de las concesiones otorgadas.

¿Qué es un posible incumplimiento?

La Comisión considera que también pueden plantearse problemas de cumplimiento cuando se da alguna de las siguientes condiciones

- a. El importe medio calculado concedido por beneficiario es igual o superior a unos umbrales establecidos, mientras que menos del 25% del importe gastado para la medida en un año específico está registrada en el registro nacional.
- b. El importe medio calculado concedido por beneficiario es inferior a los umbrales citados, mientras que no hay entradas correspondientes o entradas con el importe registrado igual a cero en los registros nacionales.
- c. El importe medio calculado concedido por beneficiario está por debajo de los umbrales, mientras que menos del 25% del importe gastado para la medida en un año específico está registrado.
- d. Se desconoce el número de beneficiarios, y:

d1: el gasto total de ayuda en SARI2 está por encima del percentil 75 de la distribución del gasto de ayuda en la submuestra de casos para los que se desconoce el número de beneficiarios.

d2: el gasto total en ayuda en SARI2 está por debajo del percentil 75 de la distribución del gasto en ayuda en la submuestra de casos para los que se desconoce el número de beneficiarios Y no hay entradas correspondientes en los registros nacionales.

En la experiencia de España, la mayoría de los “posibles incumplimiento” detectados por la Comisión Europea se deben a incoherencias entre las informaciones existentes en las distintas fuentes: BDNS, SARI2, SANI2 y Case@EC.

10.29 Topes nacionales de ayudas de minimis [Nueva 2025]

¿Qué son los topes nacionales de minimis? ¿Cómo me afectan?

El artículo 3.3 del [Reglamento EU 1408/2013](#) prescribe: <<El importe acumulado de las ayudas de minimis concedidas por Estado miembro a empresas activas en la producción primaria de productos agrícolas durante cualquier período de tres años no excederá del tope nacional que figura en el anexo.>>

El límite actual es de 1 220 060 000€, según el citado anexo actualizado a 2025.

Estos límites afectan a todos los beneficiarios de ayudas sujetas a ese Reglamento ya que según su artículo 6.4 <<Un Estado miembro solo concederá nuevas ayudas de minimis de conformidad con el presente Reglamento tras haber comprobado que las mismas no darán lugar a que el importe total de las ayudas de minimis concedidas a la empresa de que se trate sobrepase los límites máximos establecidos en el artículo 3, apartados 2 y 3, y que se cumplen todas las condiciones establecidas en el mismo.>>

En idénticos términos se expresa el [Reglamento EU 717/2014](#): <<Un Estado miembro solo concederá nuevas ayudas de minimis de conformidad con el presente Reglamento tras haber comprobado que las mismas no darán lugar a que el importe total de las ayudas de minimis concedidas a la empresa de que se trate sobrepase los límites máximos establecidos en el artículo 3, apartados 2 y 3, y que se cumplen todas las condiciones establecidas en el mismo.>>

En este caso del Reglamento de pesca el límite nacional es actualmente 66 336 000€, y tiene las mismas implicaciones que el Reglamento agrícola.

Consultar también el [Real Decreto 1139/2024, de 11 de noviembre, por el que se regulan el límite máximo de las ayudas de minimis en el sector agrícola y pesquero y el procedimiento para garantizar que no se sobrepasan los topes nacional y sectorial establecidos en la normativa europea.](#)

11. AYUDAS Y SUBVENCIONES RELACIONADAS CON EL COVID 19

11.1 Avaless de una SGR a PYMES financiados por convenio por la administración autonómica

¿Tienen que registrarse en la BDNS?

Para abordar si la concesión de estos avales a las PYMES y autónomos deben registrarse en la BDNS debemos acudir al [RD 130/2019](#). El citado Real Decreto, determina el contenido de la BDNS partiendo del mandato de la [Ley 19/2013](#) de hacer públicas las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.

La [LGS](#) define en su artículo 2.2. el concepto de "subvención" pero no existe en el ordenamiento jurídico español una Ley que contenga la definición de "ayuda pública".

Por este motivo, [RD 130/2019](#) toma como referencia la normativa europea, especialmente el régimen de ayudas de estado, para enumerar aquellas figuras económicas que entran dentro del ámbito de ayudas públicas y deben registrarse en la BDNS. Así, en el apartado 1 letra c) del artículo 1 establece que la BDNS contendrá información de las ayudas públicas concedidas en forma de "avales y demás garantías, préstamos, aportaciones de financiación de riesgo, anticipos reembolsables y demás medidas de carácter financiero que supongan una ventaja económica a favor de sus beneficiarios, salvo cuando vayan dirigidos a las Administraciones públicas contempladas en el artículo 3.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre".

Puede plantearse la duda de si la información relativa a estos avales debe figurar en la BDNS teniendo presente que la gestión de los mismos es realizada por una Sociedad de Garantía Recíproca, que es una entidad financiera sin ánimo de lucro que no forma parte del Sector Público Institucional.

A este respecto, el apartado 3 del artículo 3 del citado Real Decreto establece la obligación de suministrar la información aun cuando las ayudas no sean tramitadas por la Administración pública financiadora:

"La obligación de suministro de información establecida en el artículo 20.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, resulta igualmente exigible aunque las subvenciones y demás ayudas públicas sean tramitadas a través de entidades colaboradoras, ya se trate de Administraciones públicas, entidades financieras, federaciones representativas de algún sector económico o grupo de interés, fundaciones públicas o cualquier entidad pública o privada sea cual sea su naturaleza jurídica".

Por tanto, los avales financiados con fondos públicos concedidos por una Sociedad de Garantía Recíproca están incluidos en el ámbito de la BDNS. Debe registrarse la información relativa al régimen jurídico de concesión y así como la concesión de estos avales.

En el caso concreto de los avales que conceda la Sociedad de Garantía Recíproca a PYMES y autónomos con motivo del Convenio firmado con la comunidad autónoma ¿quién registra la información en la BDNS, la SGR o la Comunidad Autónoma?

El artículo 20.4 de la Ley General de Subvenciones, establece que:

«4. Estarán obligados a suministrar información las administraciones, organismos y entidades contemplados en el artículo 3; los consorcios, mancomunidades u otras personificaciones públicas creadas por varias Administraciones Públicas regulados en el artículo 5; las entidades que según esta u otras leyes deban suministrar información a la base de datos y los organismos que reglamentariamente se determinen en relación a la gestión de fondos de la Unión Europea y otras ayudas públicas.

Serán responsables de suministrar la información de forma exacta, completa, en plazo y respetando el modo de envío establecido:

- a) En el sector público estatal, los titulares de los órganos, organismos y demás entidades que concedan las subvenciones y ayudas contempladas en la Base de Datos.
- b) En las Comunidades Autónomas, la Intervención General de la Comunidad Autónoma u órgano que designe la propia Comunidad Autónoma.
- c) En las Entidades Locales, la Intervención u órgano que designe la propia Entidad Local.»

En virtud de este precepto, la obligación de suministrar la información de los avales individuales concedidos corresponde a la Comunidad Autónoma.

Ahora bien, el artículo 3.5 del Real Decreto 130/2019 permite a la IGAE establecer un régimen de suministro de información excepcional para alcanzar sus fines:

«5. En otros casos, la Intervención General de la Administración del Estado podrá establecer el régimen de cumplimentación que contribuya de la mejor manera posible a los fines de la BDNS. En ningún caso tal cumplimentación alterará la posición jurídica de cada entidad según el régimen que se haya configurado en la subvención correspondiente.»

Siendo conocedores de que son las sociedades de garantía recíproca las que disponen del detalle de la relación de avales formalizados acogidos a cada línea de subvención receptora de la subvención otorgada por las Administraciones públicas, se puede hacer uso de la prerrogativa recogida en el artículo 3.5 del citado Real Decreto y que sean las Sociedades de Garantía Recíproca las que registren en la BDNS una convocatoria instrumental y los avales concedidos.

Ahora bien, para que la sociedad de garantía recíproca pueda registrar la información de los avales individuales en la BDNS es preciso que se adhiera a la BDNS. Para ello, precisa disponer de un código DIR3, debiendo solicitar un usuario proveedor en DIR3 mediante el procedimiento de alta DIR3 establecido al efecto.

El hecho de que la SGR registre la información en la BDNS no exime a la Comunidad Autónoma de la obligación de suministrar la información a la BDNS, por lo que debe establecer las garantías y controles necesarios para asegurar que ese suministro de información sea íntegro y se lleva a cabo en los plazos establecidos.

Si la SGR no está adherida a la BDNS, será la Comunidad Autónoma la que registre en la BDNS la información de los avales individuales concedidos, en el cumplimiento de su obligación de suministrar la información (régimen ordinario de cumplimentación).

11.2 Ayudas del Marco Nacional Temporal

¿Las ayudas, sujetas al Marco Nacional Temporal, consistentes en subvencionar el coste financiero del aval y la bonificación de un % de los intereses del mismo préstamo son compatibles o no?

Cuando se inició la pandemia, y antes de que se decretaran los confinamientos la UE, a la vista de las graves repercusiones que la pandemia podía tener en las economías europeas, se aprobó la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Banco Europeo de Inversiones y al Eurogrupo (13/03/2020). En esta Comunicación se relacionaban las opciones que disponían los Estados miembros, al margen del ámbito de aplicación de control de las ayudas estatales de la UE, para paliar los efectos negativos de la COVID:

- Subsidios salariales y suspensión del pago del impuesto de sociedades y del IVA o de las cotizaciones sociales.
- Apoyo financiero directamente a los consumidores.
- Regímenes de ayudas que fueron considerados compatibles con el mercado interior por la Comisión Europea (ya autorizados).
- Reglamentos de exención por categoría.
- Reglamentos de minimis.

- Artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE permite a los Estados miembros, con la aprobación de la Comisión, compensar a las empresas por el daño sufrido en circunstancias excepcionales, como son las causadas por el brote de COVID-19.
- Artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE permiten a los Estados miembros, con la aprobación de la Comisión, responder a necesidades agudas de liquidez y apoyar a empresas amenazadas de quiebra por el brote de COVID-19.

El artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE (grave perturbación de la economía) permitió a la Comisión aprobar medidas adicionales de apoyo nacional para poner remedio a una grave perturbación en la economía de Italia. Pero a los pocos días, la UE se dio cuenta de que estas medidas eran insuficientes, por lo que aprobó el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 (19/03/2020).

Este Marco establece medidas temporales adicionales de ayuda estatal que considera compatibles con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra b) del TFUE (grave perturbación de la economía).

Ahora bien, los Estados miembros que decidiesen adoptar estas medidas de ayuda estatal debían notificarlas individualmente a la Comisión para su aprobación, acreditando que era necesarias, adecuadas y proporcionadas para poner remedio a la perturbación económica.

España, amparándose en este Marco Temporal, solicitó a la Comisión Europea la aprobación del Marco Nacional Temporal para las ayudas estatales en forma de subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales o de pago, garantías sobre préstamos y tipos de interés subvencionados para préstamos destinados a apoyar la economía en el actual brote de COVID-19 (2/4/2020).

¿Por qué un Marco nacional temporal?

El Marco nacional temporal actúa como un "marco paraguas" de forma que las ayudas otorgadas por las distintas Administraciones conforme a dicho "marco paraguas" se consideran conformes con la normativa comunitaria y no es necesario proceder a una notificación individual de dichas medidas a la Comisión Europea.

El Marco Nacional Temporal se supedita a su conformidad con lo previsto en el Marco Temporal Europeo y a sus modificaciones.

¿Qué modificaciones ha habido en el Marco Temporal Europeo?

El Marco Temporal Europeo ha sido objeto de 6 modificaciones:

- Decisión CE aprobación MTE 19/03/2020
- 1ª Modificación. Decisión CE 03/04/2020
- 2ª Modificación. Decisión CE 08/05/2020
- 3ª Modificación. Decisión CE 29/06/2020
- 4ª Modificación. Decisión CE 13/10/2020
- 5ª Modificación. Decisión CE 28/01/2021
- 6ª Modificación. Decisión CE 18/11/2021

¿Y en el Marco Nacional Temporal?

Por su parte, el Maco Nacional Temporal ha sido objeto de 7 modificaciones:

- Decisión CE aprobación MNT 02/04/2020 (SA.56851)
- 1ª Modificación. Decisión CE 24/04/2020 (SA.57019)
- 2ª Modificación. Decisión CE 22/10/2020 (SA.58778)
- 3ª Modificación. Decisión CE 11/12/2020 (SA.59196)
- 4ª Modificación. Decisión CE 23/02/2020 (SA.60136)
- 5ª Modificación. Decisión CE 19/02/2021 (SA.59723)
- 6ª Modificación. Decisión CE 23/03/2021 (SA.61875)
- 7ª Modificación. Decisión CE 18/05/2021 (SA.62838)

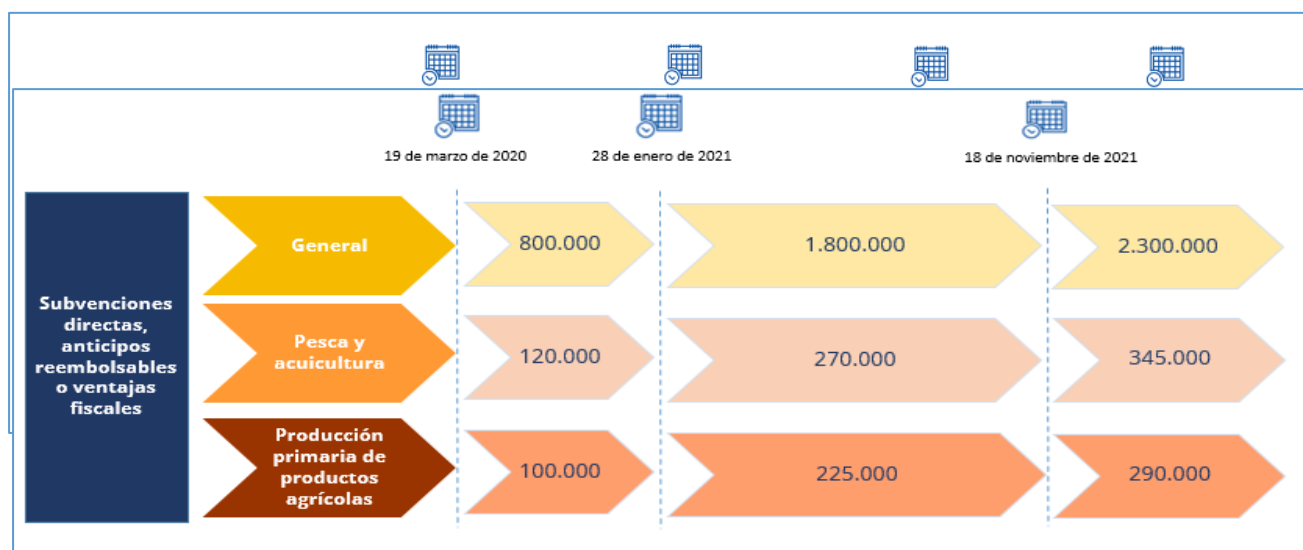
¿En qué sección del Marco Temporal Europeo tienen cabida las ayudas otorgadas a las empresas para financiar los costes financieros del aval y las bonificaciones de los intereses respecto a un único préstamo?

La **sección 3.1** del Marco Temporal Europeo recoge las ayudas que se conceden en forma de subvenciones directas, anticipos reembolsables o ventajas fiscales.

Las ayudas en forma de subvención directa son las aportaciones dinerarias sin contraprestación y el anticipo reembolsable es el otorgamiento inicial, por el órgano concedente, de un préstamo al cero por ciento de interés, que será amortizado de oficio con cargo a la ayuda una vez justificada la realización del proyecto, actividad o comportamiento objeto de ayuda.

La financiación de los costes financieros de un aval es una ayuda en forma de garantía de préstamos (**sección 3.2**) y la concesión de un préstamo con tipos de interés subvencionados es una ayuda en forma de bonificación de los tipos de interés de los préstamos (**sección 3.3**). Ninguna de estas ayudas se instrumenta mediante subvenciones directas o anticipos reembolsables.

¿Cómo se han prorrogado las medidas de ayuda?



¿Cuáles son los límites máximos de los importes de ayuda?

11.3 Cálculo del límite de acumulación de minimis y ayudas del Marco Temporal Covid-19

En las ayudas en la forma de garantía, el límite de minimis está marcado en términos de EBS con carácter general. Pero en el 3.1 del Marco Temporal el límite se marca en importe nominal avalado: ¿Cómo se debe hacer el cálculo a efectos de límite de acumulación?

Se puede ver el punto 16 y el 18 del Reglamento *de minimis* 1407/2013, menciona el cálculo del ESB para no superar el límite *de minimis*. El artículo 4.3.b) se refiere al cálculo del ESB en las garantías (para que sean transparentes y se pueda garantizar un ESB inferior a 200.000€).

Las ayudas *de minimis* se pueden acumular con ayudas del Marco Temporal, llegando a situarse, de forma acumulada, por encima de los importes nominales establecidos en el Marco Temporal. Por ejemplo, podría otorgarse una ayuda del MT de hasta 800.000 euros (se respeta el límite del MT) y una ayuda *de minimis* de hasta 200.000 euros por empresa (se respetaría el límite de ayudas *de minimis*), llegando la empresa a recibir un importe total de 1.000.000 euros.

En el caso de las ayudas en forma de préstamos y garantías, se debe controlar el importe nominal máximo [que se sitúe por debajo de los nominales indicados en los puntos 25 y 27 del Marco Temporal] y que las primas o tipos de interés sean, como mínimo, los establecidos en los mismos puntos [o en la Decisión aplicable]. Siempre y cuando se respeten estos parámetros, la ayuda ya sería compatible y no sería necesario hacer el cálculo del Equivalente de Subvención Bruto.

En el caso de préstamos distintos, es posible acumular garantías, (por ejemplo, garantías ICO COVID, Decisión SA.56803) con otras del MT (por ejemplo, sección 2.7.2 del Marco nacional) siempre que los nominales acumulados respeten los máximos del MT.

En el caso de circulante, no se considera “coste subvencionable específico”.

Las garantías para circulante sujetas a *minimis* (por ejemplo, ICO COVID) pueden ser acumuladas, pues son compatibles con base en el Reglamento *de minimis*.

Así, una empresa que ya haya formalizado un préstamo para circulante con garantía ICO COVID sujeta a *minimis* y ya ha recibido el máximo de ayuda *de minimis* permitida (como un préstamo con garantía de 1.500.000 euros) podría recibir una nueva ayuda en forma de garantía sujeta al MT (sección 2.7.2 del MT nacional) si todavía no ha llegado al importe nominal máximo fijado en el Marco Temporal comunitario. Se permitiría acumular ayudas *de minimis* con ayudas del MT aunque se superen los límites de ayudas *de minimis*, pero se respeten los límites del Marco Temporal comunitario.

Si las ayudas son *por el mismo gasto subvencionable* pueden acumularse hasta llegar al importe nominal máximo fijado. Si no, se podrían acumular superando dichos límites. Siempre que se trate de gastos subvencionables diferentes, o la ayuda *de minimis* no se haya concedido para costes subvencionables específicos, se pueden superar esos umbrales (importes nominales máximos).

11.4 Caducidad avales COVID

Se nos plantea en la duda, con respecto a la Avales COVID, de cómo actualizar la información en la BDNS con respecto a las operaciones de estos avales ya vencidas. ¿Debemos dar de baja los registros de concesiones asociados? ¿Deben permanecer en la BDNS?

Con independencia de que las operaciones de los avales que hayan vencido, la información relativa a las concesiones de los mismos debe permanecer registrada en la BDNS, y no se contempla en ningún caso su eliminación.

En cuanto a su visualización en el sitio web de la BDNS (SNPSAP), de acuerdo con el artículo 7.8 del RD 130/2019, la información sobre concesiones permanecerá visible durante los 4 años siguientes al año en que se concedió, si los beneficiarios son personas jurídicas, y en caso en que fueran personas físicas, la publicidad se reduce al año de su concesión y el siguiente.

Si esos avales tienen categoría de ayudas de Estado o *de minimis*, los periodos de visualización impuestos por los Reglamentos europeos son de 10 años.

*****02042025